

COLECCIÓN GRUPOS DE TRABAJO



Serie Teoría social crítica

LA IZQUIERDA EN MOVIMIENTO

CLASE TRABAJADORA Y LUCHAS POPULARES EN AMÉRICA LATINA (SIGLOS XX Y XXI)

Viviana Bravo Vargas
Mariana Mastrángelo
[coords.]

 **CLACSO**

LA IZQUIERDA EN MOVIMIENTO

La izquierda en movimiento: clase trabajadora y luchas populares en América Latina: siglos XX y XXI / Alejandra Pisani... [et al.]; coordinación general de Viviana Bravo Vargas; Mariana Mastrángelo. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2022.

Libro digital, PDF - (Colección Grupos de Trabajo)

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-813-271-6

1. Izquierda Política. 2. Neoliberalismo. 3. Trabajo de Mujeres. I. Pisani, Alejandra. II. Bravo Vargas, Viviana, coord. III. Mastrángelo, Mariana, coord. CDD 320.513

Otros descriptores asignados por CLACSO:

Izquierda / Comunismo / Clase trabajadora / Luchas populares / Movimientos sociales / Peronismo / Neoliberalismo / Feminismo / Sindicalismo / América Latina

Los trabajos que integran este libro fueron sometidos a una evaluación por pares.

LA IZQUIERDA EN MOVIMIENTO
CLASE TRABAJADORA Y LUCHAS POPULARES
EN AMÉRICA LATINA (SIGLOS XX Y XXI)

Viviana Bravo Vargas
Mariana Mastrángelo
(Coords.)

Grupo de Trabajo de Izquierdas: Praxis y Transformación Social





CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Colección Grupos de Trabajo

Pablo Vommaro - Director

CLACSO - Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Directora Ejecutiva

María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones

Pablo Vommaro - Director de Investigación

CLACSO - Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory y Marcela Alemandi - Gestión Editorial

Área de investigación

Natalia Gianatelli - Coordinadora de Investigación

Cecilia Gofman, Marta Paredes, Rodolfo Gómez, Sofía Torres, Teresa Arteaga y Ulises Rubinschik -
Equipo de Gestión Académica



LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana

1ª edición: *La izquierda en movimiento: Clase trabajadora y luchas populares en América Latina (siglos XX - XX)* (Buenos Aires: CLACSO, agosto de 2022).

ISBN 978-987-813-271-6



CC BY-NC-ND 4.0

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723. La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | clacso@clacsoinst.edu.ar | www.clacso.org



Este material/producción ha sido financiado por la Patrocinado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi. La responsabilidad del contenido recae enteramente sobre el creador. Asdi no comparte necesariamente las opiniones e interpretaciones expresadas.

ÍNDICE

Viviana Bravo Vargas y Mariana Mastrángelo

Introducción | 9

PARTE I: IZQUIERDA Y CLASE TRABAJADORA EN AMÉRICA LATINA EN LOS SIGLOS XX Y XXI

Caridad Massón Sena

La clase obrera en los debates de las tres conferencias comunistas latinoamericanas (1929, 1930 y 1934) | 25

Mariana Mastrángelo y Pablo Pozzi

“Yo no me hice peronista porque... la verdad tenía mucha desconfianza de Perón”. El Peronismo desde la mirada de militantes de izquierda, Argentina, 1946-1955 | 53

Ana Jemio

Los trabajadores de Norwinco: del Operativo Tucumán al Operativo Independencia | 73

Emerson César de Campos

Arte, cidade, política e humor no cotidiano brasileiro: reflexões a partir da obra do artista e historiador marxista Sérgio Luiz de Castro Bonson (1974-2005) | 95

Alejandra Pisani

Neoliberalismo y clase obrera. Reflexiones en torno a las transformaciones en las estrategias de gobierno de la lucha de clases en Argentina | 123

PARTE II: CLASE TRABAJADORA Y LUCHAS POPULARES EN AMÉRICA LATINA EN LOS SIGLOS XX Y XXI

Viviana Bravo Vargas

¡Ni fiesta ni congoja! El 1° de mayo en tiempos de la ley maldita, Chile, 1948-1958 | 151

Kimberly Seguel Villagrán

Frente de mujeres trabajadoras: un camino hacia políticas de emancipación femenina, Chile, 1950 | 189

Gerardo Necochea Gracia

De lo justo y la injusticia en las huelgas de la insurgencia obrera en México, 1965-1983 | 213

Reinaldo Lindolfo Lohn, Victor Emmanuel Farias Gomes, Geovanni Rocha Junior

Entre acuerdos de cúpulas e a classe trabalhadora: socialdemocracia, trabalhistas, trotskistas e cristãos na reorganização das forças de esquerda no Brasil (1974-1985) | 239

Magdalena Cajías de la Vega

Bases de sustentación, desarrollo y crisis del “sindicalismo revolucionario” minero boliviano, y características de su relacionamiento con los partidos de izquierda | 263

Sobre las autoras y los autores | 293

INTRODUCCIÓN

Viviana Bravo Vargas y Mariana Mastrángelo

EL PRESENTE LIBRO *La izquierda en movimiento. Clase trabajadora y luchas populares en América Latina: siglos XX y XXI* es el resultado del trabajo colectivo del Grupo de Trabajo de CLACSO “Izquierdas: Praxis y Transformación Social”, coordinado por Viviana Bravo Vargas y Mariana Mastrángelo. Este trabajo comenzó a ser pensado en el último encuentro presencial que sostuvo el GT en el año 2019 en la Ciudad de México. En ese momento, nada hacía suponer que nos atravesaría una pandemia a nivel mundial que pondría nuestras vidas “patas para arriba”. Más de dos años tomó readecuarnos a este nuevo contexto, donde nuestros encuentros para debatir el libro se volvieron virtuales, y los tiempos se extendieron más allá de lo previsto. En el camino perdimos a nuestro querido Luiz Felipe Falcão, sin embargo, sumamos otros colegas que nos nutren con nuevas experiencias y discusiones.

Dos temas son los protagonistas de este trabajo: la clase trabajadora, por un lado, y por el otro, su vínculo con la izquierda. El contexto es América Latina en los siglos XX y XXI. La temática refiere a los distintos momentos que hemos atravesado como grupo de trabajo (desde sus inicios en el año 2013) y que han tenido como eje central la discusión en torno a “qué es ser de izquierda en Latinoamérica”, qué

relaciones se establecen entre ésta y la clase obrera, los movimientos sociales y políticos.

Partimos de la premisa que la propia definición de “izquierda” es un terreno de disputa, donde las interpretaciones siempre tienden a excluir o a limitar el universo. La distinción entre izquierda y derecha no es ontológica, tiene un origen topográfico y cambia en mutua relación con su antagonista. Por lo tanto, es una noción relacional y conflictiva. En ese sentido se puede entender que es cultural, como lo define Raymond Williams (2003), pero que históricamente ha adherido a los valores de igualdad y libertad, aunque no siempre en la misma dosis (Archila Neira, 2006).

Por otra parte, algo que define a nuestro GT y se plasma en este libro es el acento que queremos poner en la praxis, entendida como ha señalado Sánchez Vásquez (2003), como práctica política transformadora de la realidad, en tanto que inspira nuevas posibilidades analíticas para pensar la historia y el presente latinoamericano. En este sentido, nos interesa articular en el análisis, tanto el debate de ideas, proyectos y programas de la lucha ideológica que asume la izquierda, como las formas, medios y métodos de lucha concretos que despliega el carácter práctico de la actividad política.

Recuperamos, por tanto, la categoría de clase trabajadora, tan desechada por los fuegos artificiales del posmodernismo, y que nos permite resituar el conflicto o, más precisamente, la lucha de clases como eje constitutivo de la experiencia histórica. Retomando el planteamiento de E. P. Thompson (1979), la propuesta es ubicarnos en conflictos determinados, no a partir de identidades pre-constituidas o definidas simplemente por elementos estructurales o culturales, sino mostrar cómo grupos heterogéneos lograron convertirse en un verdadero sujeto político a partir de su acción, lucha y organización, de sus sentimientos y experiencias. De esta manera, encontraremos en estas páginas, diversos momentos, espacios, territorios nacionales y coyunturas, en que partidos políticos, organizaciones sindicales y populares se han manifestado e intervenido en el espacio público levantándose, desde una experiencia y memoria compartida, en contra del desarrollo del capitalismo en nuestro continente. En especial, esperamos contribuir a la reconstrucción histórica de la clase trabajadora latinoamericana que con su praxis movilizadora lograron defender, conquistar y configurar espacios que masificaron la política, erosionaron el consenso en torno a las diversas transformaciones y ciclos del capital y contribuyeron —con alto y bajos, retrocesos y avances, triunfos y derrotas— a conformar un proceso de democratización social dirigido a cambiar las relaciones económicas, políticas y sociales imperantes.

Para el análisis de la clase obrera y de la izquierda latinoamericana consideramos útil su estudio desde distintos tipos de fuentes, que hacen énfasis en soportes bibliohemerográficos, iconográficos (imagen fija y móvil), publicaciones representativas de distintas corrientes de izquierda y expresiones de la cultura popular que fueron retomadas para la creación artística. Así también, consideramos esenciales los aportes de la historia oral y de la oralidad para adentrarnos en la subjetividad de nuestro objeto de estudio, metodología que ha sido relevante en nuestra trayectoria como GT.

Bajo estas orientaciones, el libro se articula a partir de la discusión de dos ejes temáticos. El primero, “Izquierda y clase trabajadora en América Latina en los siglos XX y XXI”, reúne artículos que discuten la compleja y dinámica relación que se estableció entre la izquierda y los trabajadores, artistas e intelectuales a lo largo de los siglos XX y XXI en el escenario latinoamericano. La definición de “izquierda” en los siguientes trabajos se entiende en un sentido polisémico, que incorpora otras dimensiones, como la cultural. Asimismo, desde la superestructura (Estado y empresarios) se resignifica esta noción, planteando nuevas estrategias de asimilación y represión en relación con la izquierda y los trabajadores. En este sentido, se abren nuevas posibilidades para interpretar y reflexionar sobre este fenómeno.

El eje inicia con el artículo “La clase obrera en los debates de las tres conferencias comunistas latinoamericanas (1929, 1930 y 1934)” de Caridad Massón Sena. La autora propone discutir la concepción marxista clásica que define al proletariado como la clase trabajadora que consigue “sus medios de subsistencia exclusivamente de la venta de su trabajo”. Siguiendo a Marx y Engels que consideraban que la sociedad capitalista se simplificaba al dividirse en dos grandes grupos: burgueses y proletarios, a la par que estos últimos se convertían en los sujetos sociales más importantes de la revolución anticapitalista y la única clase verdaderamente revolucionaria. En este contexto el Partido Comunista se convertía en el representante y defensor de los trabajadores y de los explotados en general, independientemente de su nacionalidad. Esta concepción clásica, plantea la autora, es un paradigma occidentalista y eurocéntrico. Mientras en Europa los procesos revolucionarios fracasaban y los países coloniales y semicoloniales emprendían movimientos de rebeldía contra las metrópolis y sus oligarquías internas, la *Comintern* advertía sobre la necesidad de prestar más atención a lo que ocurría en la periferia.

De esta manera, América Latina fue considerada como un espacio vital al cual debía prestarse no solo ayuda teórica sino también práctica. Por esta razón, en el Sexto Congreso de la Internacional celebrado en 1928 comenzaron a introducirse en los debates temas sobre

la realidad latinoamericana. En un lapso de seis años se convocaron tres conferencias, donde participaron referentes europeos, como también latinoamericanos. En los distintos encuentros que comenzaron en el año 1929, se discutieron temas de carácter regional como, por ejemplo, quién sería el sujeto revolucionario latinoamericano en las décadas de 1920 y 1930. También se debatió sobre el entramado social y las posibles alianzas que podían realizarse para lograr la “revolución socialista”. Massón realiza a lo largo de su trabajo una exhaustiva descripción de los distintos encuentros. La autora advierte una serie de problemas que no se resolvieron en estas conferencias. Parte de la cuestión acerca de que los debates que se generaron en esa época fueron el resultado de la política que la Internacional Comunista impuso en América Latina, caracterizados por criterios derivados de la *bolchevización* y de la táctica *clase contra clase*, que se adoptaron en Europa. Sin embargo, en la realidad latinoamericana significaron la adopción de posiciones ajenas a la cultura y tradiciones locales, lo que redujo las posibilidades de alianzas con otras clases. Asimismo, hubo confrontaciones para definir el carácter de la revolución latinoamericana y, aunque algunos dirigentes locales alertaron sobre las diferencias entre países, apoyaron la idea de realizar directamente la revolución socialista, donde se impuso el criterio de que primero era preciso pasar por una etapa democrático-burguesa, agraria y antimperialista, para luego ir a la de carácter socialista.

Además, aunque se planteó la necesidad de un frente unitario de los trabajadores y de ganar la hegemonía del proletariado, a los PC se los instó a evitar acuerdos con las dirigencias de los partidos nacionalistas, buscando apoyo en el campesinado. Lo que remarca la autora como un avance importante fue la política llevada a cabo con los pueblos originarios y los afrodescendientes para que lucharan por alcanzar su autonomía. Sin embargo, esta política los desvió, nos dice Massón Sena, de los caminos más acertados para alcanzar los propósitos libertarios que esos estamentos sociales necesitaban. La autora concluye que la “historia ha demostrado que la clase obrera latinoamericana, si bien puede jugar un rol protagónico en las luchas revolucionarias de este continente, requiere del apoyo y la concertación con otras fuerzas sociales para alcanzar el triunfo definitivo sobre las oligarquías locales y los intereses imperialistas extranjeros”.

Continuamos con el trabajo colectivo de Mariana Mastrángelo y Pablo Pozzi “Yo no me hice peronista porque...la verdad tenía mucha desconfianza de Perón’. El Peronismo desde la mirada de militantes de izquierda, Argentina, 1946-1955”, que parte de discutir el tema del peronismo y su vínculo con la izquierda. En particular, el estudio se adentra en la percepción que tuvo el militante de base en relación

con el nuevo fenómeno. Para ello se aleja de los clásicos trabajos que ahondan en el papel que jugaron y la postura que adoptaron las agrupaciones de izquierda más representativas de la época, como fueron el Partido Socialista (PS), el Partido Comunista (PC) y el trotskismo, frente al advenimiento del peronismo. En su mayoría, estos análisis se sirven de los documentos oficiales de los respectivos partidos, o bien de la prensa partidaria, donde se desdibuja a los sujetos. La “línea oficial del partido” es la que prevalece sobre la de sus militantes de base. En la práctica, y a partir de la técnica de Historia Oral, los autores rescatan una serie de subjetividades y matices que son analizados a partir de entrevistas orales a militantes socialistas y comunistas que forman parte del acervo documental del Archivo del Programa de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Los autores parten de las siguientes preguntas: ¿Qué le arrebató Perón a la izquierda? ¿Cómo habían caracterizado los partidos de izquierda a Perón desde su llegada al poder con el Golpe del año 1943? ¿Qué significaba que este “movimiento tumultuario” —como lo definió el diario *La Vanguardia* (19 de marzo de 1946)— irrumpiera en la arena política?

Los autores sostienen que la mayoría de los analistas sobre el tema consideran que la izquierda era la representante “natural” de los trabajadores y que tenía una fuerte inserción en la clase obrera de la década de 1940. De los testimonios orales que se analizan en este trabajo, lo que se evidencia es que el problema planteado es más complejo que esa relación mecánica entre trabajadores e izquierda. Los autores sostienen que Perón se apropió y resignificó toda una tradición selectiva (en este caso de izquierda), al decir de Raymond Williams. Siguiendo al autor inglés, definen que una tradición selectiva comienza su selección dentro del mismo período, de toda la masa de actividades se seleccionan ciertas cosas, se las valora y se hace hincapié en ellas. Por ello argumentan que Perón desde el año 1943 usó y se apropió de un lenguaje de izquierda para dirigirse a los trabajadores. Él mismo lo expresaba en el siguiente discurso al decir: “Yo les hablaba un poco de comunismo. ¿Por qué? Porque si les hubiera hablado otro idioma en el primer discurso me hubieran tirado el primer naranjazo [...] Porque ellos eran hombres que llegaban de tener cuarenta años de marxismo y con dirigentes comunistas”. Aquí los autores se preguntan si Perón se dirigía al activismo o bien, a una cultura forjada en cuarenta años de marxismo. Tomando en cuenta que éste logró desplazar a muchos dirigentes dentro del Partido Socialista y del Partido Comunista, es factible pensar que su discurso interpeló a las bases. Más allá de la línea, existía una cultura de izquierda que Perón logró articular con una narrativa de fuertes resonancias con el

pasado y, haciéndose cargo de sus reivindicaciones, logró interpelar y convertirlo en lo que luego sería el sentido común peronista. Por ello los autores sostienen que Perón encontró la manera de acercarse al movimiento obrero apelando, por un lado, a esa cultura y tradición de izquierda. Por otro lado, Perón llevó a cabo una serie de reivindicaciones que los trabajadores venían bregando durante años, donde el papel de la izquierda fue fundamental en la organización y en la lucha. Siguiendo el planteamiento de Marcelo Raymundo, caracterizan al peronismo como una “revolución pasiva” que buscó generar un nuevo arreglo entre las clases para salir de una crisis orgánica. Esto implicaría que necesariamente se debían liberar fuerzas sociales que posteriormente podían tomar un rumbo autónomo (aunque Perón trató de “sujetar” a la clase obrera para que no se saliera del cauce). Para los trabajadores esto significó un mayor poder en los lugares de trabajo, aunque era un poder que había que defender, y en muchos casos, a pesar de la dirigencia sindical. En este contexto, analizar el rol de la izquierda a partir de testimonios orales frente al fenómeno del peronismo es fundamental, plantean los autores, para repensar y comprender este proceso.

El libro continúa con el estudio “Los trabajadores de Norwinco: del Operativo Tucumán al Operativo Independencia” de Ana Jemio. Éste forma parte de una investigación que comenzó con su tesis doctoral y que continúa hasta el presente en un proyecto que dirige sobre el estudio de las víctimas del genocidio en Tucumán. La autora se hace las siguientes preguntas: ¿quiénes fueron las víctimas del genocidio en Tucumán? ¿Por qué fueron perseguidas? Tras su investigación, se cuestiona sobre si las víctimas del genocidio tucumano pueden encuadrarse dentro de categorías como “militantes” o “personas comprometidas”. Para Jemio, la dinámica represiva no se organizó solo a partir de la individualización de los sujetos, sino que se complementó con un criterio territorial que identificó y clasificó a los militantes para exterminarlos. Al revisar la categoría de militante, no ya como un individuo que forma parte de un colectivo sino como el resultado de un contexto determinado por un tiempo y un lugar, la autora propone que las víctimas formaban parte de una territorialidad social. Esto significaría que se organizó como una red de redes, construida por vínculos al interior de determinados grupos, como así también entre grupos. En este sentido, las políticas represivas desplegadas durante el genocidio tucumano tuvieron por objetivo la desarticulación de esas territorialidades sociales. Esto significó la destrucción no solo del campo popular y su red de vínculos, sino también de una cultura contestataria que tenía una tradición de lucha en Tucumán.

En este trabajo y siguiendo este marco conceptual, Jemio aborda estudios de caso sobre grupos de víctimas de la clase trabajadora, sobre los cuales busca reconstruir y caracterizar: a) la trama comunitaria de la que las víctimas formaban parte; b) el entramado productivo en el que se ubicaban y los vínculos que permitió forjar con otros núcleos obreros; c) la organización sindical y política en esos espacios de trabajo y los vínculos que se forjaron con otros ámbitos sociales; y d) la trama represiva de la cual resultó ese grupo de víctimas. Para ello, analiza Norwinco, una fábrica que se instaló a fines de 1971 en Bella Vista, localidad al sur de Tucumán. La planta —dedicada a la producción de pasacasetes, motores, grupos electrógenos y motosierras— es estudiada en el sistema productivo, pero, sobre todo hace hincapié en el proceso de organización de las/os operarias/os que crearon un cuerpo de delegados y desafiaron a la conducción histórica de la Unión Obrera Metalúrgica y la represión de la que fueron objeto.

Por su parte, el trabajo “Arte, Cidade, Política e Humor no cotidiano brasileiro: reflexões a partir da obra do artista e historiador Sérgio Luiz de Castro Bonson (1974-2005)” de Emerson César de Campos analiza la historia de vida de Sérgio Bonson, artista, periodista e historiador de izquierda. Este trabajo forma parte de una investigación más amplia que lleva adelante el autor sobre temas relacionados con el humor, la ciudad y los cómics, donde aparece la figura de Bonson como central. En el 2020, De Campos retomó la obra del artista, y partir de su experiencia de vida y de su arte, pone el foco en la relación que tuvo el artista con la clase obrera y la ciudad de Santa Catarina y cómo éste lo expresó a través de las caricaturas que publicaba en la prensa brasilera. El autor analiza las publicaciones gráficas de Bonson en los periódicos *O Estado* y *Folha de São Paulo*, como también en la prensa alternativa de izquierda, durante las décadas de 1970, 1980 y 1990. A partir de un arte comprometido, De Campos destaca que, si bien Bonson no tuvo un vínculo partidario “orgánico”, su arte sí fue comprometido y contestatario. A través del humor, Bonson expresó y difundió gran parte de la vida cotidiana brasileña, de la clase obrera, de personajes políticos y de los cambios que la ciudad fue teniendo a lo largo de los años. De Campos rescata en esta investigación la obra gráfica producida por Sérgio Bonson no solo desde los sentidos del lenguaje artístico utilizado por el artista, que quedaron plasmados en sus caricaturas, sino también a partir de entrevistas que De Campos hizo a personas allegadas al artista, como su compañera de vida Zenir María Koch y su editor Nelson Rolim. En este trabajo, De campos realiza un interesante cruce entre arte, humor y política, que quedaron plasmados en la obra de Bonson. En este sentido, la obra del artista es la puerta de entrada o, como plantea De Campos, “abre ventanas”

para recorrer los cambios socioculturales, políticos y urbanísticos de las últimas décadas del siglo XX de la ciudad de Santa Catarina, Florianópolis.

Cierra este primer eje el estudio “Neoliberalismo y clase obrera. Reflexiones en torno a las transformaciones en las estrategias de gobierno de la lucha de clases en Argentina” de Alejandra Pisani. La autora parte de discutir la categoría política de izquierda y cómo ésta ha sido tema de debate en el escenario latinoamericano. En particular Pisani plantea que uno de los blancos de estas estrategias es la neutralización del potencial disruptivo de las resistencias obreras y de las trabas que la lucha de clase implica para la reproducción de las relaciones sociales capitalistas. Desde esa mirada se analizan algunos aspectos del concepto de clase social en los textos de Marx, en particular en lo que refiere a su potencial para la comprensión de la implementación de estrategias neoliberales y de resistencia de los trabajadores que se dieron en la Argentina.

La autora realiza un interesante recorrido sobre la genealogía del término “neoliberalismo”. Para ello parte del Coloquio Walter Lippmann llevado a cabo en el año 1938 que tuvo como objetivo fundar una organización que contribuyera a la restauración del liberalismo en el contexto del ascenso del fascismo y del nacionalsocialismo, la guerra civil española, la presencia amenazadora de la Unión Soviética y el *New Deal* en los Estados Unidos. Estos acontecimientos plantean, según la autora, una amenaza para el desarrollo del capitalismo en tanto implicaba una mayor intervención del Estado, la politización de los mercados y una planificación de la economía. Dos posturas fueron las que resaltaron de este coloquio: la primera, era necesario un Estado fuerte, que interviniera para proteger y garantizar el funcionamiento del mercado; y la segunda, los derechos económicos debían tener prioridad sobre los derechos políticos. Estos cambios conceptuales se dieron en la Argentina en la década de 1960, primero con la incorporación del país al Fondo Monetario Internacional durante la presidencia de facto de Pedro Aramburu, y luego en el gobierno de Frondizi, que llevó a cabo una serie de medidas neoliberales que continuaron y se profundizaron en las décadas siguientes.

La característica del período fue la combinación de conflicto social en respuesta a las medidas que se iban implementando y la alternancia de gobiernos de facto y democráticos que usaron la represión para desactivar huelgas obreras, estudiantiles y una sociedad movilizada. Pisani analiza exhaustivamente estos cambios, donde resalta la organización en base a valores contestatarios basados en la solidaridad. Estos valores, remarca la autora, radican en que los mismos han permitido que las condiciones materiales de explotación fueran

percibidas como no naturales, injustas y, por esa vía, dieran lugar a una acción colectiva transformadora. Asimismo, Pisani destaca que fue la última dictadura cívico-militar del período 1976-1983 la que marcó un punto de inflexión en la implementación del neoliberalismo y que, si bien ya se venían implementando estrategias de gobierno en este sentido, eran obstaculizadas en gran medida por las luchas y resistencias de los trabajadores. La importancia de estas luchas plantea un quiebre que no sólo está relacionado a las nuevas necesidades del capital surgidas de la Tercera Revolución Industrial, en el marco del cambio en el patrón de acumulación a escala global, sino también, y en el mismo movimiento, a la necesidad de desarrollar nuevas estrategias de gobierno de la lucha de clases.

El segundo eje “Clase trabajadora y luchas populares en América Latina en los siglos XX y XXI”, articula los aportes que dan cuenta de la relación entre las propuestas de organizaciones políticas de clase y las diversas formas de lucha —en especial huelgas y protestas— que han levantado los y las trabajadoras organizados/as en contra de las diversas transformaciones que ha sufrido el capitalismo en nuestro continente y que han removido sus condiciones de trabajo y vida.

El apartado abre con el texto “¡Ni fiesta ni congoja! El 1° de mayo en tiempos de la Ley Maldita, Santiago de Chile, 1948-1958” de Viviana Bravo Vargas. Se trata de un trabajo que contribuye a la reconstrucción de la historia de la clase trabajadora chilena a través del análisis de los 1° de mayo en los años en que estuvo vigente la ley de Defensa de la Democracia (LDD). Retomando la propuesta analítica del historiador Eric Hobsbawm, en su reconocido texto “El nacimiento de una fiesta”, la autora da cuenta de las transformaciones, despliegues urbanos y plataformas de lucha que cobraron protagonismo en el periodo marcado por la crisis del desarrollismo y demuestra que en Chile, hasta fines de la década de 1950, el 1° de mayo fue un día de protesta.

Con este fin, en una primera parte de su trabajo, Bravo da cuenta del despliegue urbano de cada jornada, de la apropiación y resignificación del espacio público, la defensa de las calles, plazas y esquinas que marcaron la trayectoria de la movilización y de los diversos modos en que la clase trabajadora se hizo parte, más o menos masivamente, más o menos unitariamente, año a año. En la segunda y tercera parte del trabajo, reconstruye cada conmemoración, desde el giro conservador de Gabriel González Videla en 1947 hasta la derogación de la LDD al finalizar el período de Carlos Ibáñez del Campo, dando cuenta de los procesos de organización sindical, las apuestas por la movilización, las plataformas de lucha y la conflictiva relación estatal que caracterizó el período.

A partir de ello, Viviana Bravo sostiene que, ante los intentos del Estado y de la Iglesia Católica por despolitizarlo y transformarlo “en la Fiesta del Trabajo”, los y las trabajadores/as debieron defender su sentido de lucha. Defender el derecho a manifestarse en el espacio público y las trayectorias propuestas, de individuos y organizaciones. En ese sentido, el 1° de mayo fue parte integrante de la trayectoria obrera y popular que se construyó a contrapelo de las disposiciones del poder, bajo una plataforma de lucha que condenó la carestía de la vida, exigiendo: detener las alzas constantes y un reajuste digno de sueldos y salarios; la derogación de las leyes represivas que limitaban o imposibilitaban el ejercicio de las libertades públicas; y propuestas estructurales, que fueran en beneficio de las grandes mayorías, como la reforma agraria que transformaría el régimen de propiedad de la tierra y la nacionalización de los recursos naturales, en especial, la minería del cobre. Por tanto, concluye la autora: se trata de un proceso de movilización y defensa de una plataforma programática que contribuyó a conformar un proceso de democratización social y ascenso del movimiento popular que aportaría al recorrido histórico de la llamada vía chilena al socialismo en 1970.

Continuando con las luchas de los y las trabajadores/as durante el desarrollismo chileno, Kimberly Seguel Villagrán nos aporta el texto “Frentes feministas de mujeres trabajadoras, un camino hacia políticas de emancipación, Chile, década de 1950”. En este trabajo, la autora se propone aportar a la reconstrucción del movimiento de mujeres y feminista en años escasamente atendidos por la historiografía chilena en general, y por la investigación feminista en particular. A contrapelo del desdén de una mirada historiográfica que ha descrito al período como de una “ciudadanización equivocada”, donde supuestamente la participación política de las mujeres se mantuvo sólo en las capas altas de la sociedad, no logrando incorporar a las de sectores medios y populares, y de otras investigaciones que acusan que el movimiento de mujeres sufrió la pérdida de un objetivo común, provocando un debilitamiento y una disminución de su radicalidad, la autora defiende la tesis de que se trata de un período “caracterizado por una militancia compuesta mayoritariamente por trabajadoras obreras y populares y por una orientación de sus luchas hacia la superación de sus condiciones de explotación, precarización y desigualdad a través de políticas emancipadoras”.

Para desarrollar su tesis central, la autora nos propone comprender la historia del movimiento de la década 1950, no sólo bajo el prisma donde el feminismo se establece como un elemento identitario o reivindicativo, sino capturando el carácter inherentemente político del movimiento feminista, reflejado en sus demandas y propuestas

emancipadoras, manifiestas dentro y fuera de la institucionalidad, que buscaron mejorar las condiciones materiales de las mujeres, pero también la superación de sus condiciones de opresión por medio de la “desestabilización” del poder patriarcal. Para ello, a través de fuentes documentales y testimonios de mujeres protagonistas de la época, analiza tres dimensiones que dan cuenta del complejo entramado de la participación activa de las mujeres trabajadoras en colectivos y organizaciones de clase, siguiendo las principales demandas y propuestas políticas, y reconstruyendo los hitos políticos que considera relevantes durante la década. El texto de Seguel concluye que la historia del movimiento feminista en la década de 1950 está lejos de constituir un período de *silencio* político y nos permite afirmar que, como en otros periodos de su historia, el movimiento estuvo sostenido por una gran variedad de organizaciones de mujeres donde no todas se declaraban abiertamente feministas, pero que dieron cuenta de una participación política activa y un movimiento feminista tensionado por continuidades y nuevos comienzos.

El trabajo que sigue a continuación es de Gerardo Necochea Gracia, titulado “De lo justo y la injusticia en las huelgas de la insurgencia obrera en México, 1965-1983”, que reconstruye un periodo de alza en la huelga obrera, desde mediados de la década de 1960 hasta los años marcados por la crisis inflacionaria y económica en México. Según nos dice Necochea, si los años que recorren 1971 a 1983 reciben la caracterización de “insurgencia sindical” debido a las nutridas movilizaciones desarrolladas en los sitios de trabajo y en las calles, junto a la difusión de una ideología obrerista, no han revestido mayor atención por parte de la historiografía a la hora de analizar y explicar las motivaciones y dinámicas de la huelga y los huelguistas. En esa ausencia se instala este trabajo. Ahora bien, teniendo en cuenta la coyuntura y las demandas económicas de los/las trabajadores/as mexicanos/as durante el período, a la hora de ponderar las motivaciones de la movilización Necochea nos propone cruzar otros elementos analíticos que dan cuenta del mundo de las ideas y valores que movilizan a los sujetos. En este sentido, la noción y percepción de lo que es justo e injusto es un importante resorte propulsor en las luchas del período.

En definitiva, la hipótesis que articula el texto nos propone que: “Sin negar el efecto de la economía, mal haríamos en pensar que los trabajadores meramente reaccionaron a ese estímulo externo. La siguiente discusión parte de la idea de que las acciones de los trabajadores no fueron reacción instintiva dictada por el modelo del hombre económico, sino que obedecieron a ideas y sentimientos arraigados acerca de cómo era y cómo les gustaría que fuera el mundo”. Para ello, premunido de datos y diversas fuentes, el trabajo de Gerardo Ne-

coechea se apoya en una revisión cuantitativa y cualitativa en torno a los principales hitos de la huelga en diferentes zonas del país, intentando indagar en sus motivaciones, plataformas de lucha y dinámicas de negociación y conflicto que se desarrollan en el contexto de importantes transformaciones en la sociedad mexicana, marcadas por la crisis internacional del petróleo de mediados de los setenta y el deterioro del pacto estatal configurado décadas antes por Cuauhtémoc Cárdenas. En ese proceso de movilización, según concluye Gerardo Necochea, fue la percepción de agravio respecto de lo justo y la justicia social la que impulsó mucho de las protestas, bajo un sentimiento de clase que disputó la hegemonía cultural ejercida por nociones de unidad nacional, a partir de experiencias comunes de explotación.

El siguiente texto es el trabajo colectivo “Entre acuerdos de cúpulas e a classe trabalhadora: socialdemocracia, trabalhistas, trotskistas e cristãos na reorganização das forças de esquerda no Brasil (1974-1985)”, escrito por Reinaldo Lindolfo Lohn, Victor Emmanuel Farias Gomes y Geovanni Rocha Junior. Se trata de un relevante aporte a las discusiones en torno a las prácticas y relaciones sociales iniciadas por sectores de izquierda durante la transición política que supuso el fin de la dictadura militar brasileña. En ese sentido, se propone reflexionar en torno a las diferentes concepciones políticas que entrañó la transición política brasileña, desde los debates y planteamientos elaborados por socialdemócratas, socialistas y trotskistas, pasando por la participación de los cristianos comprometidos de izquierda y su compromiso con la reconstrucción del tejido social en sus territorios, hasta la interacción de la izquierda con el nuevo movimiento obrero que estaba surgiendo.

Los autores sostienen que las relaciones entre el movimiento sindical, las organizaciones populares articuladas en torno a las perspectivas de un socialismo de inspiración cristiana, las conexiones internacionales de los grupos socialdemócratas y laborales, y los socialistas inspirados en perspectivas insurreccionales, permiten un enfoque más complejo de un tema que, desde su perspectiva, mayoritariamente se limita a la descripción de las negociaciones parlamentarias e institucionales. De esta manera, a través de diversas fuentes, como registros de prensa, textos de organizaciones políticas o informes producidos por el aparato represivo del régimen bajo la coordinación del Servicio Nacional de Información (SNI), los autores constatan el papel que jugaron las organizaciones sindicales o el llamado “nuevo sindicalismo”, tanto en contra de las repercusiones inflacionarias del período y la política salarial del régimen, encabezando un intenso proceso de huelgas, como también en la participación efectiva en la lucha contra el régimen, entregando un impulso decisivo a los nuevos actores que

participaron en la reorganización partidaria de la izquierda en Brasil. Este proceso de reactivación involucró especialmente a personajes políticos y partidos cuyas trayectorias habían sido interrumpidas o modificadas por el golpe cívico-militar de 1964 y que, desde la primera mitad de la década de 1980, tensionaron el resultado de una supuesta transición “lenta, gradual y segura” negociada desde arriba y promovida por el régimen.

Un lugar importante a observar, según destaca este trabajo, fueron las cumbres partidarias y las articulaciones políticas constituidas por el clero progresista, así como la circulación de una retórica social que se movilizó a través de las Comunidades Eclesiales de Base y que consistió en politizar problemas materiales cotidianos, como los altos precios de los alimentos, el hambre, el acceso a la vivienda, el derecho a la tierra y la lucha contra el desempleo. Tal como señalan Lohn, Farias y Rocha, este discurso se retroalimentó y, al mismo tiempo, influyó en las experiencias de los sectores populares y de las clases trabajadoras, confirmando la relevancia que tuvo el cristianismo de liberación en el proceso de reorganización de la izquierda y de interacción con la clase trabajadora. El trabajo concluye que, los diferentes grupos vinculados a la izquierda discutieron la necesidad de reconstruir los vínculos con el mundo del trabajo y el movimiento obrero, explorando la defensa de los derechos humanos y denunciando la concentración de ingresos y la contracción salarial que afectaba a las clases trabajadoras, proponiendo caminos alternativos en torno a la llamada transición democrática.

Este libro cierra con la contribución de Magdalena Cajías de la Vega, en el texto titulado “Bases de sustentación, desarrollo y crisis del ‘sindicalismo revolucionario’ minero boliviano y características de su relacionamiento con los partidos de izquierda”. Aquí la autora revisita la trayectoria del movimiento obrero boliviano desde su fase formativa en las primeras décadas del siglo XX hasta la reconfiguración estructural y política del siglo XXI, poniendo especial énfasis en su constitución y declive como vanguardia de los grupos subalternos en Bolivia, y su compleja relación con los partidos de izquierda. En su análisis, el texto de Cajías de la Vega desarrolla las bases objetivas y subjetivas que sustentaron la experiencia de una “colectividad minera” orgullosa de sí misma y construida sobre su propio recorrido histórico y memoria colectiva; junto con las principales características que adquirió la conflictividad social del proletariado minero con sus adversarios de clase; así como la experiencia de la Revolución de 1952 y el deterioro de la alianza entre el movimiento minero y el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), donde los trabajadores de las minas tuvieron un papel central que marcaría un momento fundador en

la convicción de poseer un poder político y social, y una relación de constante tensión con el MNR que algunos autores han caracterizado como emergencia de “poder dual”.

Un eje fundamental es el análisis en torno a la conformación de la Asamblea Popular en 1971 bajo la “Tesis Socialista”, que demuestra la compleja relación del movimiento minero con los partidos de izquierda. En este sentido, según la autora, la experiencia demuestra que, aunque los partidos jugaron un rol importante en las centrales sindicales, donde la radicalización del discurso y la irradiación del socialismo como proyecto de clase fue fruto de la influencia de las diversas tendencias de los partidos de izquierda en su seno, el partido no pudo anteponerse al sindicato. Para argumentarlo, la autora desarrolla lo que denomina *las bases de sustentación* del “sindicalismo revolucionario” en tanto que “sintetizó la acumulación de las experiencias históricas (memoria), las concepciones globales sobre sí mismo (colectividad minera total) y el proyecto social de clase (bajo orientaciones ideológicas y políticas ‘inherentes’ y ‘derivadas’), y permitió que el movimiento minero afianzase su identidad y conciencia de clase positivas”.

Años más tarde, recalca Magdalena Cajías, cuando a raíz de la transformación neoliberal de la sociedad boliviana las bases de sustentación del “sindicalismo revolucionario” comenzaron a desmoronarse bajo la desestructuración que implicó la pérdida de centralidad económica del sector minero y la pérdida del rol de vanguardia en las luchas sociales, fue en gran medida la memoria histórica, lo que después de un primer momento de desbande y desorganización, les permitió a los mineros de inicios de la década del ochenta —que salían expulsados de las minas y se dirigían a otros espacios del país—, trasladar colectivamente a estos nuevos espacios sus acumulaciones y experiencias históricas, sus formas organizativas, sus características contestatarias, y adaptarlas a las nuevas circunstancias y las nuevas realidades históricas.

BIBLIOGRAFÍA

Archila Neira, Mauricio (2006). *Seminario Marx Vive*. Ponencia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Sánchez Vázquez, Adolfo (2003). *Filosofía de la praxis*. México: Siglo XXI.

Thompson, E. P. (1979). *Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial*. Barcelona: Crítica.

Williams, Raymond (2003). *La larga revolución*. Buenos Aires: Nueva Visión.

PARTE I

**IZQUIERDA Y CLASE
TRABAJADORA EN
AMÉRICA LATINA EN LOS
SIGLOS XX Y XXI**

LA CLASE OBRERA EN LOS DEBATES DE LAS TRES CONFERENCIAS COMUNISTAS LATINOAMERICANAS (1929, 1930 Y 1934)

Caridad Massón Sena

INTRODUCCIÓN

La concepción marxista clásica considera al proletariado como la clase trabajadora que consigue “sus medios de subsistencia exclusivamente de la venta de su trabajo”. Marx y Engels afirmaron que la sociedad capitalista se simplificaba al dividirse en dos grandes grupos: burgueses y proletarios, a la par que estos últimos se convertían en los sujetos sociales más importantes de la revolución anticapitalista y la única clase verdaderamente revolucionaria. Los Partidos Comunistas serían los defensores de dicha clase, y de los explotados en general, independientemente de su nacionalidad.

La Revolución Rusa fue la *primera* experiencia a nivel nacional en la que los poderosos fueron desalojados violentamente del poder por las *masas oprimidas, encabezadas por obreros, campesinos, soldados y marinos, dirigidos por una organización comunista. Una sacudida social que estremeció al mundo y alentó las luchas proletarias. Para poder destronar al régimen burgués* era preciso globalizar la doctrina y las acciones comunistas, así surgió la Tercera Internacional en 1919.

Pero ese marxismo —al decir del ensayista argentino Néstor Kohan (2003)— estuvo mediado “por *un enfoque que lo colonizaba de antemano*, reduciéndolo y subordinándolo a un paradigma marcada-

mente occidentalista y eurocéntrico”, que consideraba la historia europea como “la esencia universal convertida en ley, las experiencias revolucionarias latinoamericanas serían tan sólo accidentes excepcionales, fortuitos y aleatorios” (p. 230). Sin embargo, a medida que los procesos revolucionarios europeos fracasaban y los países coloniales y semicoloniales emprendían movimientos de rebeldía contra las metrópolis y sus oligarquías internas, la *Comintern* fue tomando conciencia de la necesidad de prestar más atención a lo que ocurría en la periferia. Hubo delegados *cominternistas* que llamaron la atención sobre la urgencia de proporcionar más ayuda teórica y práctica a América Latina, pero fue en el Sexto Congreso de la Internacional, celebrado en 1928, donde su liderazgo dijo haber “descubierto” a este continente.

Durante sus sesiones los temas latinoamericanos incentivaron encendidos debates. Los principales contendientes de los mismos fueron, por la ortodoxia *cominternista*, Nicolai I. Bujarin, Otto Kuusinen y Jules Humbert-Droz y, en la defensa de la especificidad de esta región, Ricardo Paredes Romero y Serguei I. Gusev, *Travine*¹.

En su informe inaugural, Bujarin explicó que el capitalismo había comenzado a transitar por un “tercer período”, la estabilización había culminado, se producía un crecimiento de las fuerzas opositoras, los conflictos inter-imperialistas, los ataques a la URSS y las guerras de liberación nacional. En síntesis, se agudizaba la lucha de clases y era inminente el inicio de una situación revolucionaria. Unidad, disciplina e incondicionalidad fueron principios fundamentales enarbolados para llevar a cabo un reforzamiento de la *bolchevización*² y la táctica *clase contra clase*³. También señaló que existían tres conjuntos de países a los cuales correspondían diversas formas de transición revolu-

1 Por razones de seguridad, los comunistas usaban seudónimos. En este caso, dichos sobrenombres aparecerán siempre en cursiva.

2 La *bolchevización* pretendía una reforma interna en cada sección de la Internacional Comunista (IC) siguiendo los principios y experiencias del Partido Comunista (PC) de la Unión Soviética. En cada país debía existir un solo partido, caracterizado por una estricta disciplina y gran centralización, estructurado en células creadas en los centros de producción que impulsarían la labor de los sindicatos y priorizarían el trabajo con el campesinado, mientras se producía un clima de rechazo y desconfianza hacia los intelectuales.

3 La táctica *clase contra clase* tuvo un sentido sectario e izquierdista, señalaba a la socialdemocracia como el ala izquierda del fascismo y la tendencia más peligrosa, con la cual no podrían concertarse alianzas; excluía la posibilidad de trabajar dentro de los sindicatos reformistas y en los parlamentos burgueses. El frente único solo se podría realizar con elementos de la base de las organizaciones sindicales y partidistas.

cionaria: los capitalistas más desarrollados, los de desarrollo medio y los coloniales y semicoloniales.

Sin embargo, el ecuatoriano Paredes discrepó. Se debía establecer una distinción entre los semicoloniales y aquellos que podrían ser llamados “dependientes”, para definir mejor la situación de las fuerzas proletarias y campesinas en cada uno. En ese nuevo grupo estarían los “penetrados económicamente por el imperialismo”, pero que conservaban “una independencia política bastante grande”, como Argentina, Brasil y Ecuador. En ellos, la burguesía nacional sabía bien que era muy peligroso tener como aliado en la lucha antimperialista a un proletariado con un programa revolucionario, mientras los terratenientes estaban íntimamente ligados a la burguesía formando una sola capa: los plutócratas. Por eso se preguntaba ¿cómo expropiar solamente los capitales imperialistas y las tierras de los feudales, sin embargar al capital nacional? En esas condiciones, la consigna de la revolución agraria democrático-burguesa era confusa e inadecuada (Paredes Romero, 2011).

Por su parte, Gusev declaraba que las repúblicas latinoamericanas constituían un grupo particular de países semicoloniales, en los cuales existía una burguesía nacional muy débil tanto en la esfera industrial como en la agraria, diferente a la India y China. Los campesinos subsistían en condiciones de explotación semifeudal y bajo el control de los grandes latifundistas. El proletariado ecuso y de origen reciente, se encontraba muy influenciado por el anarcosindicalismo y el reformismo. Ante el poder del conjunto de propietarios agrícolas feudales y capitalistas extranjeros reaccionarios, había que crear un bloque revolucionario antimperialista y anti-terrateniente compuesto por obreros urbanos y rurales, campesinos pobres y proletarizados. Él suponía imposible la revolución democrático-burguesa, pues no existían sectores capaces de conducirla. Debía hacerse una revolución socialista para liberar a los explotados y repartir las tierras. Consideraba que los puntos de vista socialistas estaban muy difundidos entre los movimientos de liberación nacional seguidos por fuertes vestigios del comunismo agrario primitivo (Travine, 19 de julio de 1928, citado en Ulianova y Riquelme Segovia, 2005).

Sin dudas a partir de este momento, la *Comintern* hizo serios esfuerzos por entender y atender la realidad latinoamericana. Para ello convocó a tres conferencias en un lapso de seis años.

PRIMERA CONFERENCIA COMUNISTA LATINOAMERICANA

En abril de 1929 se realizó una Conferencia Sindical Latinoamericana en Moscú, la cual eligió un secretariado provisional encargado de la organización de un congreso regional. El mismo tuvo lugar en Mon-

tevideo del 18 al 26 de mayo y dejó constituida la Confederación Sindical Latinoamericana (CSLA). Un grupo de comunistas participantes en dicho encuentro cruzó la frontera hacia Argentina a fin de tomar parte de la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana que se efectuó entre el 1 y el 12 de junio.

Estuvieron presentes en la importante reunión por el Secretariado Latinoamericano del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista (CEIC) el suizo Jules Humbert-Droz, *Luis*; por la Internacional Juvenil Comunista (IJC), Zacharij M. Ravinovich, *Pierre, Peters*; por la fracción comunista de la Internacional Sindical Roja (ISR), *Meyer*; por el Secretariado Sudamericano (SSA), los italianos Egidio Gennari, *Rossi*, y Ennio Gnudi, *Orestes*, así como el italoargentino Vittorio Codovilla, *Medina*, el uruguayo Eugenio Gómez, *Artigas*, y el argentino, Héctor Pablo Agosti; por el Secretariado Sudamericano de la Internacional Juvenil el italoargentino José N. Cosme Caggiano, *Eduardo Ruiz, Navarro*, el uruguayo Gilberto Chiappapietra y el argentino Orestes T. Ghioldi, *Edmundo Ghiton*; por la CSLA el argentino Miguel Contreras, *Vargas*, y el mexicano Elías Barrios. En representación de las organizaciones comunistas de cada país asistieron, por Argentina: Leopoldo Pelufo; Paulino González Alberdi, *Flores, Ramón*; Jan Jolles, *Alonso, Macario*; Florindo Antonio Moretti o Morelli, *Sarmiento*; Francisco Muñoz Diez, *Rafael Pereira*; Jorge Paz, *Armando Guerra, Echeverri*; y Pedro Romo. Por Brasil: João da Costa Pimenta, *George*; Leoncio Basbaum; Mario Grazini, *Gubinelli*; y Danton Jobim. Por Bolivia: José Antonio Arce y Arce; Carlos Mendoza Mamani y Mamani, *Francisco Blanco*; Alfredo Suazo; y Alfredo Mendizábal. Por Colombia: Moisés Prieto, Raúl Eduardo Mahecha Caicedo y Heraclio Matallana Neira. Por Cuba: Sandalio Junco, *Juárez*; Alejandro Barreiro, *López, Braceas*; y José Rego, *Ramiro Ramírez*. Por Ecuador: Alberto Araújo, *Araña*; y *Padilla*. Por El Salvador: Luis Díaz, *Diéquez*; José León Flores; y Serafino G. Martínez, *Márquez*. Por Guatemala: Alfredo Toledo Sosa, *Marcelo Sosa*; y Luis Villagrán García, *Villalba, Taboada*. Por México: David A. Siqueiros, *Suárez*; y Manuel Rodríguez Serrillo, *Rosáenz*. Por Panamá: J. Chacón Castreñon y Eugenio L. Cossani. Por Paraguay: Martín Baez, *Dellepiane*. Por Perú: Hugo Pesce, *Saco*; y Julio Portocarrero, *Raymundo, Zamora*. Por Uruguay: Leopoldo E. Sala y Félix Ramírez. Finalmente, por Venezuela: Ricardo Martínez. Además, fueron invitados un delegado de Estados Unidos: William Simons o *Hayman Levin, Martín Paley, Hunter*; y otro de Francia: Octave Rabaté, *Austine* (Jeifets y Jeifets, 2017).

Los principales temas de discusión estuvieron referidos a las características que debía tener la revolución, las fuerzas sociales propuloras de la misma y las posibles alianzas a concertarse.

En la ponencia de apertura, Codovilla, dirigente del SSA, señaló:

[...] la verdadera lucha por la independencia nacional debe realizarse contra la gran burguesía nacional y el imperialismo, de lo que se desprende el carácter de la revolución en América latina, es el de una revolución democrático-burguesa. Pero, las conquistas de esa revolución podrán llevarse a cabo, únicamente si se tiene en cuenta que las masas obreras y campesinas serán la fuerza motriz de la misma y bajo la hegemonía del proletariado.

Esa revolución deberá poner en primer plano: la lucha contra los grandes terratenientes; por la entrega de la tierra a quienes la trabajan; lucha contra los gobiernos nacionales, agentes del imperialismo; lucha contra el imperialismo y por el gobierno obrero y campesino.

Sería un error grave el sobreestimar el rol de la pequeña burguesía y de la burguesía industrial naciente, como posible aliada de la revolución anti-imperialista. En algunos casos podrán ser aliados momentáneos; pero la fuerza motriz de la revolución deben ser los obreros y campesinos [...]. (Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista [SSA de la IC], 1929, p. 21)

A criterio de Codovilla, en los países latinoamericanos existían condiciones objetivas para esa revolución, pero se necesitaba crear las vanguardias que le dieran perspectiva al movimiento, de lo contrario la influencia pequeño-burguesa y de los aventureros políticos sin escrúpulos los conduciría al nacional-fascismo.

El dirigente del Secretariado Latinoamericano de la *Comintern*, Humbert-Droz, *Luis*, se refirió al término de la estabilización, al “tercer período” y a la crisis general del capitalismo y cómo se habían agravado sus contradicciones más profundas e insolubles. Los países latinoamericanos poseían una burguesía nacional parasitaria, que habitaba las grandes ciudades, cuyo papel era succionar las riquezas y las fuerzas de trabajo locales. Ciudades sin grandes industrias, urbes de comercios, bancos, burocracia, donde la gran masa vivía no del trabajo creador de riquezas, sino de la explotación ajena. Argentina era un ejemplo de ello. La clase obrera de esas urbes desempeñaba profesiones secundarias y, sin embargo, estaba colocada en una situación económica y social privilegiada con respecto a los obreros del campo, de las minas y grandes empresas imperialistas. Los obreros urbanos formaban la base de los sindicatos y del reformismo. Era preciso organizar las masas proletarias menos remuneradas, víctimas de la doble explotación del imperialismo y de la burguesía nacional parasitaria. Esa sería la verdadera base de los Partidos Comunistas, la gran reserva de la lucha contra los anarquistas y reformistas. Para el suizo:

No hay otro camino para las masas obreras y campesinas explotadas de América latina que el de la insurrección, de la acción revolucionaria de las masas para vencer al imperialismo a la vez que a la burguesía nacional parasitaria, y a los grandes terratenientes; ningún otro camino que la formación de repúblicas obreras y campesinas sobre la base de los soviets. (SSA de la IC, 1929, p. 46)

Al analizar la estructura económica, Droz resaltaba el predominio de la agricultura, dominada por la gran propiedad, el gran latifundio feudal patrimonio de los terratenientes que arrebataron la tierra a los indios o en forma de plantaciones racionalizadas en manos de los *trusts* foráneos. Los pequeños propietarios de México, Argentina y otras naciones estaban bajo la autoridad de los monopolios y las grandes empresas exportadoras de implementos agrícolas y abonos. Las formas agrarias eran muy variadas: tribus sin contacto con la civilización; comunidades indígenas agrarias más avanzadas; habitantes de zonas montañosas que intercambian sus productos en el mercado interno; y el régimen de propiedad más o menos feudal. La industria estaba desarrollada de manera desigual. Las más modernas solo en las esferas extractivas y la explotación de riquezas naturales como materia prima. No existía industria pesada. La de artículos de primera necesidad estaba controlada por burgueses nacionales, sometidos a bancos extranjeros. En general, transporte, navegación, ferrocarril, electricidad, telefonía se encontraba bajo el control de los capitales foráneos. Se exportaban las riquezas naturales e importaban los productos elaborados. Los intermediarios comerciales, agiotistas y usureros pululan por doquier.

En cuanto a la ordenación social, el suizo revela la presencia de grandes masas de obreros agrícolas —que no son campesinos—, trabajadores del suelo que recibían un salario de una u otra forma y eran mayoría; diversas formas intermedias entre el obrero agrícola y el arrendatario; el campesino sin tierra y el aldeano pobre. Los proletarios industriales aparecen divididos en categorías. Los obreros de las grandes empresas imperialistas mineras y frigoríficas, en condiciones de trabajo miserables y largas jornadas, concentrados y sin organización para la lucha. Estos y los agrícolas, a su modo de ver, eran la verdadera masa proletaria de América Latina. Los obreros industriales de la ciudad estaban mejor pagados, habían creado sindicatos, muchas veces, con una ideología pequeñoburguesa, anarquista o reformista. A ellos se unían los campesinos pobres, arrendatarios e indígenas contratados por tiempo definido en las plantaciones o las minas.

Por otro lado, la pequeña burguesía rural y urbana no era una clase homogénea, sino una mezcla de grupos residuales. Una amal-

gama clasista soñando con un régimen liberal a la europea. En la mayoría de los casos estudiantes y jóvenes intelectuales no ligados aún a los intereses explotadores. El proletariado joven y desorganizado, carecía de una ideología, de conciencia clasista propia. La burguesía nacional relativamente débil, parasitaria no tenía un programa de desarrollo capitalista independiente; y la pequeña burguesía desempeñaba un papel político e ideológico “desproporcionado” si se tiene en cuenta su importancia económica y social (SSA de la IC, 1929, p. 84). Los usurpadores de las riquezas y la mano de obra barata eran la burguesía nacional y extranjera, los grandes terratenientes feudales, los comerciantes ricos exportadores e importadores, los banqueros y los industriales de ramas secundarias ligados a los monopolios. La clase política dominante, al carecer de fuerza real, propiciaba gran inestabilidad, golpes de estado y “revoluciones”, acompañadas de vastos movimientos populares. Existía pues una situación objetivamente revolucionaria.

Las clases netamente revolucionarias [afirma Humbert-Droz] son los proletarios agrícolas y los campesinos despojados y explotados. El motor de la revolución en América Latina es la cuestión de la tierra, la lucha por la tierra contra los grandes terratenientes feudales y las grandes compañías extranjeras [...] Esta lucha por la tierra no es solamente la lucha del campesino para poseerla: es realmente, en la mayoría de los casos, la lucha de los indígenas para arrancarla a los terratenientes y cultivarla en común, bajo la forma de comunidades agrarias.

El proletariado de las grandes empresas imperialistas, minas, yacimientos petrolíferos, frigoríficos, es también uno de los elementos más activos del movimiento revolucionario para abolir las condiciones del trabajo semif feudales y mejorar su salario y su nivel de vida (SSA de la IC, 1929, p. 85).

Los obreros influenciados por el reformismo y la ideología pequeño-burguesa debían ser atraídos tomando en cuenta sus debilidades. De la pequeña burguesía había que desconfiar y no verla como una clase revolucionaria. Algunas de sus capas proletarizadas y amenazadas por el imperialismo podían ser socios momentáneos. En tanto, la burguesía nacional parasitaria era una fuerza contrarrevolucionaria, sin energía para transformar el régimen feudal en capitalismo independiente. La misión económica de la revolución democrático-burguesa era quebrar la dominación del feudalismo, del imperialismo, de la Iglesia y de los grandes terratenientes; liberar a los países de las empresas imperialistas, solucionar la cuestión agraria, entregar la tierra a los que la trabajan en forma de repartos individual o devolviéndola a las comunidades agrícolas para formar cooperativas de producción.

Se debía nacionalizar también el subsuelo, el transporte y las grandes empresas imperialistas; anular las deudas del Estado, crear un gobierno obrero y campesino sobre la base de los soviets, suprimir el ejército y sustituirlo por la milicia obrera y campesina, mejorar las condiciones de vida de los asalariados con la jornada de ocho horas, seguros sociales, etc. (SSA de la IC, 1929, p. 90).

La revolución proletaria, explicó Droz, era un largo proceso donde se mezclaban revoluciones de diferente tipo y algunas de ellas no socialistas, como ocurría en China, Nicaragua y México. Por tanto, las posiciones de los comunistas estarían condicionadas a ese doble carácter. La tarea fundamental sería defender a esos movimientos del imperialismo y trabajar en su seno para orientarlo a ir más allá. ¿Cuál debía ser la actitud más adecuada? Participar en toda faena en defensa de las posiciones ya conquistadas. Tomar parte en las acciones revolucionarias como fuerza independiente, con un programa definido y, si era útil, crear alianzas temporales de tipo militar con la pequeña burguesía, pero sin abandonar las consignas propias.

Sobre Cuba alertó acerca de los peligros que implicaba la concertación de ciertos acuerdos con la burguesía liberal, la cual tenía un apreciable influjo entre las masas. Al Partido no le convenía abandonar su independencia, ni aceptar un programa mínimo común si con ello se paralizaba la defensa de un proyecto propio. El cubano Sandalio Junco pidió consejos al respecto, pues existía con una fracción de la pequeña burguesía opuesta a la dictadura de Machado, nucleada alrededor de la asociación Unión Nacionalista. Al final llegaron a la conclusión que, de ocurrir un levantamiento, el Partido Comunista de Cuba (PCC) asumiría una posición soberana y no marcharía a remolque de los acontecimientos, ya que ese sector estaba dividido. Un grupo pedía apoyo al gobierno estadounidense para derrocar al tirano, mientras que otro abogaba por la revolución o el golpe de Estado sin injerencias extranjeras.

Uno de los aspectos más controversiales de la conferencia fueron los planteamientos de la delegación peruana a partir de las apreciaciones de José Carlos Mariátegui, leídas por su compatriota Julio Portocarrero, *Zamora*. El texto atacaba las ideas *apristas* y el proyecto político de Víctor Raúl Haya de la Torre. Señalaba que ni la burguesía ni la pequeña burguesía en el poder harían una política antimperialista, como ocurrió en México. Solo la revolución socialista levantaría una valla definitiva contra imperialismo. Hacía distinción entre los países sudamericanos y los centroamericanos, donde la intervención armada de los yanquis provocaba una reacción patriótica en una parte de la burguesía y la pequeña burguesía. En los países del sur, el factor clasista era más decisivo, más desarrollado. Había que evitar fórmu-

las populistas como la de los *apristas*. El imperialismo se sentía más seguro si el poder iba a las manos de una clase más numerosa y en mejores condiciones que la vieja clase feudal. Incluso la creación de la pequeña propiedad, la expropiación de los latifundios y de los privilegios feudales no eran contrarios a los intereses imperialistas. Por su parte, la pequeña burguesía era la clase más sensible al prestigio de los mitos nacionalistas, pero existía un hecho económico que la favorecía: recibir mejores salarios trabajando en una empresa yanqui. Eso actuaba como una fuerza decisiva en su conciencia. “En conclusión, [afirmaba Mariátegui] somos antimperialistas, porque somos marxistas, porque somos revolucionarios, porque oponemos al capitalismo el socialismo como sistema antagónico llamado a sucederlo, porque en la lucha contra los imperialismos extranjeros, cumplimos nuestros deberes de solidaridad con las masas revolucionarias de Europa”. Y concluía: “[...] las directivas que para nuestros países imparta el Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista, tienen que ser diferentes, porque diferentes son las condiciones de cada región” (SSA de la IC, 1929, pp. 152-153).

El representante de la IJC, Zacharij M. Ravinovich, *Peters*, acudió a las palabras de Lenin para explicar mejor la confusa relación. La revolución proletaria, dijo, es un proceso todo, toda una época, que comprende revueltas en los países más avanzados y luchas en los coloniales y semicoloniales. “No hay revoluciones puras”. En cuanto a la estructura de la clase obrera señaló que esta tenía dos capas: una que trabaja en las ramas fundamentales (agricultura, minas, frigoríficos) y otra en las secundarias (dentro de las ciudades parasitarias), que esta última estaba en mejores condiciones y era objeto de la política obrerista de los partidos, de la demagogia y la corrupción. Los Partidos Comunistas debían orientar su trabajo hacia la primera capa, cosa que no era fácil. La situación se hacía cada vez más revolucionaria; sus reservas objetivas, enormes; pero las insuficiencias de las condiciones subjetivas no se correspondían con lo que se requería (SSA de la IC, 1929, p. 161).

El tema relacionado con la cuestión sindical estuvo a cargo de Eugenio Gómez, quien abordó la situación de los trabajadores y cómo la burguesía y el imperialismo trataban de romper sus organizaciones a través del movimiento reformista de Ámsterdam y de la Confederación Obrera Panamericana. Otro peligro, alertó, eran los anarquistas. Había que intensificar el trabajo con los obreros no sindicalizados y los desocupados; llevar a las discusiones sindicales el tema la situación internacional y la defensa contra el imperialismo; lograr la unidad de los sindicatos de industrias, incluso, atravesando fronteras; mejorar sus dirigencias ocupadas por intelectuales y no temer a los

trabajadores analfabetos. Estos se podían educar. En los sindicatos debían caber todos los trabajadores sin distinción de ideas políticas, religiosas, etc. y dentro de ellos crear una fracción comunista. Era ineludible impedir que los intelectuales se adueñaran de los Partidos Comunistas, lo cual no quería decir que los honestos no fueran aprovechados en las luchas y buscar un justo medio. Lenin había sido un intelectual con mentalidad proletaria.

El problema de las razas fue incorporado a la discusión con las palabras del peruano Hugo Pesce, *Saco*, quien venía apertrechado de las doctrinas de Mariátegui. Sus planteamientos reconocían que la importante proporción de indígenas y negros convertía el factor raza en un elemento revolucionario. Era imprescindible darle un carácter de lucha de clases, para que ellos tuvieran la certidumbre de que solo un gobierno de obreros y campesinos los emanciparía. La mayoría de esta población era doblemente explotada por su raza y por su condición clasista, por eso se enfrentaría a la burguesía y al imperialismo. En el Sexto Congreso de la Internacional Comunista (IC) se planteó que para pueblos de economía rudimentaria existía la posibilidad de iniciar una organización económica colectiva, sin sufrir la larga evolución por la que habían atravesado otros pueblos. Creía que la población incaica reunía condiciones favorables para que su comunismo agrario se transformara bajo la hegemonía del proletariado en una base sólida de la sociedad colectivista comunista. Solo la lucha de los indios proletarios y campesinos en estrecha ligazón con obreros mestizos y blancos contra el régimen feudal y capitalista permitiría el libre desenvolvimiento de las características indígenas (de sus instituciones colectivistas) y relacionarse con sus similares de otros países.

Peters aclaró que se estaba confundiendo la cuestión racial con la nacional. Había naciones constituidas por diferentes razas y naciones diferentes con una misma raza. Los compañeros de Bolivia veían el carácter de clase de las luchas de los indios, pero habían caído en el otro extremo: negar el carácter nacional. Ambas se complementaban. Según Lenin, la cuestión nacional era en un 90 %, una cuestión agraria. En los pueblos de producción agrícola, las luchas contra las metrópolis se convertían en un problema nacional. Al lado de las reivindicaciones de clase proclamarían el derecho de los pueblos a su autodeterminación. La revolución borraría las fronteras para crear una federación de repúblicas obreras y campesinas y no podía excluirse la existencia de una república indígena. Era la primera vez se abordaba este problema en una conferencia de la IC.

El informe sobre cuestiones organizativas de Orestes Ghioldi, *Ghitor*, señaló que los partidos debían tener una base celular a nivel de empresas y barrios. La organización debía extenderse por pueblos,

ciudades, provincias y a todas las naciones. Lograr una reorganización sin perder afiliados, o sea, no ser mecánicos, no abandonar a las masas, basarse en el centralismo democrático y construir una dirección fuerte, homogénea, respetada en la base, disciplinada, autocrítica y flexible.

En las conclusiones de la conferencia, el brasileño Mario Grazi-
ni, *Gabrinetti*, se mostró satisfecho. Se había realizado un estudio de la situación objetiva de los países, que les había permitido aclararse sobre el carácter de las revoluciones y sus planes de acción, la necesidad de la hegemonía del proletariado y su vanguardia los Partidos Comunistas, el problema de la guerra y la defensa de la URSS. Ahora todos debían poner en práctica la línea política orientada (SSA de la IC, 1929, p. 381).

SEGUNDA CONFERENCIA COMUNISTA LATINOAMERICANA

Después de concluida la Primera Conferencia, los debates continuaron, sobre todo, a partir del estallido en octubre de 1929 de la crisis económica mundial. Esta provocó la caída de los precios de las exportaciones, fundamentalmente de productos agrícolas y materias primas, por la falta de demanda de los países más industrializados. Desempleo, ruina y hambre afectaron a las masas populares y ello se tradujo en una gran inestabilidad política. Entonces la *Comintern* creó el 11 de enero de 1930 una comisión para estudiar los efectos de la misma, la cual estuvo dirigida por el italiano Ruggiero Grieco, *Garlandi*, entonces jefe del Secretariado Latinoamericano (SLA), quien opinaba que, ante estas nuevas circunstancias, los trabajadores reclamaban una mayor participación en la vida política y por eso los partidos debían intensificar sus actividades y preparar a las fuerzas proletarias para la lucha.

Meses después, el búlgaro Stoyan Minev, *Stepanov*, propuso la teoría de que la revolución en América Latina sería proletaria por sus métodos, pero no socialista en la etapa inicial. Creía que la revolución mexicana había terminado en 1917 y resuelto parcialmente la cuestión agraria; la burguesía nacional se había afianzado en el poder, aunque su posición aún no estaba consolidada y se había sometido al imperialismo. México debía enfrentar una nueva revolución, cuya fuerza motriz sería el proletariado, el cual llevaría a cabo las tareas incumplidas de la revolución democrático-burguesa. “En la futura revolución mexicana, en sentido figurado, habrá una salida de la revolución democrático-burguesa y una entrada a la revolución socialista” (citado en Yanchuk, 2005, pp. 88-89). Por esas ideas, *Stepanov* fue acusado de “revisar” las principales decisiones de la *Comintern*, centrar su atención solo en la naturaleza futura de la revolución y

hacer planteamientos abstractos e incomprensibles para los trabajadores y la militancia comunista. Para sus oponentes, la revolución democrático-burguesa estaba realizándose, la cuestión agraria no estaba resuelta y el país se encontraba dominado por las empresas yanquis. Su tesis subestimaba el rol del campesinado y el carácter agrario de la revolución, colocando sobre los hombros de los obreros la implementación de las demandas económicas de los labriegos, por un lado, y por otro sobrestimaba la fuerza, unidad y madurez de los asalariados industriales. La transición hacia la dictadura del proletariado sólo era posible después de varias etapas transitorias de carácter democrático-burgués (Yanchuk, 2005, pp. 90-92).

También se produjo una fuerte controversia a partir de las opiniones Humbert-Droz. Un conjunto de estudiantes latinoamericanos de la Escuela Leninista Internacional (ELI), rebatieron sus criterios acerca del parasitismo de las grandes ciudades del subcontinente, que incluía a todos los obreros que vivían en ellas, la catalogación de campesinos dada a todos los trabajadores del campo y su afirmación de que las clases netamente revolucionarias serían los obreros agrícolas y los campesinos despojados de sus tierras, utilizando como aliados a los obreros de las empresas imperialistas.

En ese período, *Garlandi* fue destituido de su cargo en el CEIC y de la jefatura del SLA; Minev, *Stepanov*, pasó a dirigir esa instancia y Kuusinen, con un grupo de camaradas, dirigió los preparativos de la Segunda Conferencia Comunista Latinoamericana que se efectuó del 2 al 10 de octubre de 1930 en Moscú y que fue publicitada como si hubiera tenido lugar en Montevideo. Para la misma aprovecharon la presencia de varios dirigentes proletarios y comunistas en el V Congreso de la ISR, que se realizó en agosto, y en la Tercera Conferencia Sindical Latinoamericana de septiembre. A los delegados se les pidió que redactaran un informe conteniendo diez aspectos de interés sobre las condiciones de cada país.

La lista preliminar de los participantes es la siguiente. Por el CEIC: el ucraniano Dimitri Manuilski, el finlandés Otto Kuusinen y el ruso Boris Vasiliev. Por el SLA: el búlgaro Stoyan Minev, *Stepanov*; el suizo Jules Humbert-Droz; el suizo Edgar Woog, *Stirner*; y el italiano Vittorio Vidali, *Contreras*. Varios alumnos de la Escuela Internacional Lenin: los mexicanos Xavier Guerrero, *Pérez*, y Manuel Antonio Romero, *Gastón Lafarga*, y el uruguayo Gilberto Chiappapietra, *Aguilar*. En representación de las organizaciones comunistas de cada país estuvieron, por Argentina: Luis Víctor Sommi, *Moreno*; por Honduras: Felipe Armando Amaya, *Ruiz Valdés*; por Perú: *Blanco* y Nicolás Terreros López, *Santibañez*; por Colombia: Antonio Casas; por Brasil: Mario Grazini, *Gubinelli*, y Heitor Ferreira Lima, *Mario*

Silva; por El Salvador: Miguel Mármol, *Guerrero*; por Chile: *Ramírez* y *Aguilar*; por Guatemala: *Rosales*; por Bolivia: S. Saavedra Morales, *Morales*; por Uruguay: Jorge Suárez y Julio Baccino, *Martínez*; por Venezuela: Ricardo Martínez; por Haití: *Hakopo*; por México: Manuel Díaz Ramírez y Valentín Campa, *Rojo*; por Panamá: Eliseo Echevez, *Molinar*; por Ecuador: Ermel Quevedo; por Cuba: Sandalio Junco, *Hernández*; y por Estados Unidos: William Dunne (Jeifets y Jeifets, 2017; Yanchuk, 2005).

Poco se conoce de los informes presentados y las discusiones caecidas, pues sus actas no han sido publicadas. Sin embargo, hemos podido consultar el artículo del estudioso ruso I. I. Yanchuk (2005), “La Segunda Conferencia de los Partidos Comunistas de América Latina, Moscú, 2-10 de octubre de 1930”, y la disertación del brasileño Érick Fiszuk de Oliveira (2017), “Revolução, guinadas e antifascismo: A Comintern e o PCB rumo ás ‘Frentes Populares’ (1928-1935)”, que nos han brindado información suficiente para hacernos un juicio sobre las cuestiones más importantes debatidas. Ambos tuvieron acceso a los documentos del Archivo Estatal Ruso de Historia Sociopolítica (RGASPI, por sus siglas originales).

En el discurso de apertura, *Stepanov* criticó a Gusev por su “estudio fantasmagórico del movimiento revolucionario latinoamericano”, en el cual defendía la idea de que revolución mexicana era de tipo socialista, proletaria elemental, mientras que la mayoría consideraba que las revoluciones latinoamericanas serían democrático-burguesas y antiimperialistas, aunque todos no comprendieran bien lo que eso significaba. A su juicio, la revolución democrático-burguesa no era aquella en la que se involucraban la burguesía y los demócratas pequeño-burgueses para arrebatar el poder a los grandes terratenientes conservadores, sino la que era capaz de acabar con el dominio del feudalismo, del imperialismo, de la iglesia, de los grandes terratenientes y liberar a América Latina de las empresas imperialistas. Que resolvería la cuestión agraria transfiriendo la tierra a quienes la cultivaban, entregándolas de forma individual o como transferencia colectiva a las comunidades para fundar cooperativas de producción o empresas productivas. Sus objetivos esenciales eran la nacionalización de la tierra, los recursos minerales, el transporte y las grandes compañías imperialistas; la abolición de la deuda estatal; la creación un gobierno de obreros y campesinos sobre la base de los soviets; la destrucción del ejército para reemplazarlo por una milicia de trabajadores; el mejoramiento de las condiciones de vida de la clase obrera; la implantación de la jornada laboral de ocho horas, etc. Para los círculos pequeño-burgueses y liberales, un movimiento democrático-burgués estaba basado en el golpe militar, la conspiración de oficiales y políti-

cos, utilizando a las masas para ganar el poder. Para los comunistas era un movimiento de combate de los campesinos por la tierra y los trabajadores contra los empresarios imperialistas a través de huelgas masivas, transformaciones políticas y levantamientos, alianzas entre el campesinado y los trabajadores industriales y agrícolas, con el apoyo de soldados y marineros. La organización de los partidos comunistas con una base, una ideología y una dirección proletarias era tarea primordial, sin la cual cualquier táctica sería inútil (Yanchuk, 2005, pp. 116-117).

La transformación de la revolución democrático-burguesa en proletaria era un proceso largo y difícil, afirmó. Había que lograr la unidad y preparar ideológicamente a los obreros y campesinos; participar en los movimientos democrático-burgueses, pero como fuerza independiente, con un programa propio de acción inmediata. Criticó la formación de destacamentos campesinos armados en Veracruz para apoyar al gobierno, sin exigir ninguna de las demandas inmediatas de los trabajadores; a los comunistas de Bolivia, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador por organizar partidos socialistas y laboristas con una doble estructura en la cual predominaban elementos pequeño-burgueses y la creación de los Bloques de Obreros y Campesinos en Brasil y México de los cuales se apoderaron dichos elementos para utilizarlos en las elecciones.

El representante de Brasil, Mario Grazini, *Gubinelli*, recriminó a la dirección de su partido, acusándola de pasividad, porque esperó las instrucciones de la *Comintern* y del *Profintern* para emprender la manifestación contra la guerra del primero de agosto. Existiendo una situación revolucionaria, no organizó los combates proletarios como fuerza independiente y pretendía aprovechar el movimiento dirigido por Luis Carlos Prestes para realizar la revolución proletaria a su sombra (Yanchuk, 2005, pp. 98-99). En su apoyo vino Manuilsky, para señalar que el Partido Comunista de Brasil (PCB) no debía pedir a los trabajadores que formaran parte de un ejército de aventureros como el de Prestes, mientras el brasileño José Lago Molares, *Gonsalves*, explicó que entre sus camaradas existía confusión sobre a quién representaba Prestes, si a los campesinos o a la pequeña burguesía. Él consideraba que no debían desperdiciar fuerzas en ganar a los militares. Debían destronar al líder *tenentista* y conquistar a las masas (Yanchuk, 2005, p. 127).

Como ejemplo de las vacilaciones de la pequeña burguesía fue tratado el caso de Augusto César Sandino, por parte de Valentín Campa, *Rojo*, delegado mexicano. Sin embargo, el hondureño Gálvez no estuvo de acuerdo. Los trabajadores de su país veían en al nicaragüense a un verdadero combatiente antimperialista. Los representantes del

CEIC, Manuilsky, Stepanov, Kuusinen y Humbert-Droz evitaron hacer reflexiones sobre el tema, pues en junio el SLA había reconocido que Sandino tenía una posición declaradamente antimperialista al regresar a la lucha guerrillera.

Manuilsky se refirió a la necesidad de aprovechar la crisis y crear partidos comunistas de masas. Con el acercamiento de una situación revolucionaria ideal de carácter antimperialista, podrían emprenderse al mismo tiempo la revolución de la liberación nacional y la anticapitalista, en países con gran inestabilidad económica y política. A diferencia de Europa, se abría una gran oportunidad para América Latina. Era más fácil lograr la hegemonía sobre amplios estratos del campesinado, cuando existía un proletariado agrario, que servía de puente entre el proletariado industrial de las ciudades y los campesinos. Veía la perspectiva de una rápida transformación en revolución proletaria, aunque había obstáculos importantes que vencer, como la acción del imperialismo norteamericano y la ausencia de partidos comunistas realmente bolcheviques, capaces de ganar la hegemonía del proletariado, los campesinos y la pequeña burguesía de las ciudades.

El representante estadounidense William Dunne se solidarizó con la opinión de Manuilsky y reconoció que el Partido Comunista de Estados Unidos tenía una responsabilidad especial en la promoción de la revolución latinoamericana, sin embargo, la dirección de Jay Lovestone y Bertram Wolfe, expulsados recientemente, no le prestó suficiente atención. Dunne sugirió utilizar la experiencia de los chinos, pero la mayoría de los delegados evitaron proyectarse al respecto.

Humbert-Droz hizo una amplia explicación para alertar a los partidos contra las explicaciones simplificadas de los cataclismos políticos de la lucha, la tendencia a calificar como *fascista* a cualquier dictadura y las apresuradas declaraciones sobre la inminencia de una revolución socialista. La revolución democrático-burguesa era sólo el primer paso hacia una revolución socialista, y aunque el proletariado llegara a hegemonizar la lucha, los partidos comunistas no estaban en condiciones de dirigir a esas multitudes proletarias. Impugnó las ideas de Mariátegui, recién fallecido, sobre la nacionalización de la tierra y una transición directa a su uso socialista con la creación de fincas colectivas. La división de los latifundios entre los campesinos era considerada por Mariátegui como un pensamiento liberal. Sin embargo, Droz señalaba que debían proteger y apoyar a las comunidades de indios, cuyo sueño milenario era la devolución de las parcelas usurpadas por los latifundistas. Esa debía ser la consigna principal de la revolución agraria, apoyada no solo por los campesinos, sino también por arrendatarios, aparceros y la mayoría de trabajadores agrícolas. Reconoció además que no se debía calificar a todas las ciudades de

América Latina como parásitas y que el proletariado era promotor de la revolución agraria (Yanchuk, 2005, pp. 136-137).

Bien conocedor de la realidad mexicana, Edgar Woog, *Stirner*, hizo referencias a la lucha sindical, señalando que igual que los partidos comunistas, sus sindicatos eran pequeños. La consigna para ambos sería ganar a las simpatías de la generalidad de los trabajadores. Muchos comunistas subestimaban a sus enemigos y por eso agentes del gobierno, elementos fascistas, reformistas se habían apoderado de las principales agrupaciones sindicales. Ejemplos de ello: Argentina, México y Brasil, que no desarrollaban seriamente la táctica del frente único.

En opinión del investigador ruso Yanchuk, el informe partidista más completo e interesante presentado en la conferencia fue el del PCC, elaborado por Rubén Martínez Villena, *Viángel*, Sandalio Junco, *Hernández*, y Alejandro Barreiro, *López*. El primero era el delegado oficial, pero no pudo asistir al evento, pues se encontraba gravemente enfermo. El texto censuró fuertemente a la *Comintern* y también fue muy autocrítico. Calificó de “calumnia” el planteamiento de la Primera Conferencia de Buenos Aires que señalaba que el PCC en su lucha contra la dictadura fascista de Machado estaba bloqueado y seguía haciendo alianzas con los nacionalistas. De sus 250 miembros, el 95% eran proletarios y nunca había estado bajo la influencia de reformistas, ni revolucionarios pequeño-burgueses. Lamentaba que la *Comintern* no comprendiera la situación socioeconómica en Cuba, considerando al país solo como una nación agrícola semicolonial, cuando era el segundo país más industrializado del Caribe después de México. También objetaba la tesis sobre la ausencia de una burguesía nacional. En la Isla existía en una industria ligera importante y una significativa producción azucarera controlada en más del 20% por la burguesía local. La Internacional se equivocaba al incluir a Cuba en la misma categoría de naciones que Bolivia y Paraguay (Yanchuk, 2005, pp. 93-94).

Según Villena, inspirador del informe, el Programa de la IC, a propósito de los países coloniales y semicoloniales, señalaba que el tránsito a la dictadura del proletariado era posible, como *regla general*, a través de una serie de etapas preparatorias, como resultado de todo un período de transformación de la revolución democrático-burguesa en revolución socialista. Pero fuera de esa regla general, podía ser viable que no existieran etapas preparatorias, ni fuera necesario un período de transformación de una etapa a la otra. Es decir, ambos períodos se podían confundir, mezclar y plantear en conjunto (simultánea y paralelamente), sobre todo, en países de un nivel medio de desarrollo de las fuerzas capitalistas; un tipo de revolución proletaria

con un gran contingente de objetivos democrático-burgueses. En este caso se encontraba Cuba. En carta a su esposa Asela Jiménez, le explicaba sus puntos de vista:

Solo que los que hablan del carácter de la rev[olución] en los países coloniales, aplican para todos los casos estrictamente la regla general y creen que fatalmente en todo país colonial o semicolonial es preciso realizar la rev[olución] dem[ocrático-]burguesa y después la rev[olución] proletaria, como una transformación de aquella, gracias a la hegemonía del proletariado. Yo creo que hay países coloniales o semicoloniales en que no ocurrirá así; y que Cuba es uno de estos países. Mi propia opinión supe que tenía [Jorge] Vivó, cuando llegué a N[ueva] Y[ork] y después he sabido que es la del c[amarada] [Earl] Browder, del P[artido] Americano. Algunos elementos del P[artido] de México (como Ramírez y Campa) tienen en el fondo la misma opinión, pero ellos —que han sido conducidos a esa conclusión por la realidad económico-social de México— no saben expresarla y dicen, por ejemplo, que “la Revolución en México será rev[olución] dem[ocrático-]burguesa en el campo y socialista en las ciudades”. (Citado en Reig Romero, 2015, pp. 147-148)

Por eso los cubanos defendieron la idea de una revolución proletaria, socialista, en la Isla. No lucharían por la causa de la burguesía que ya estaba en el poder, reprimiendo a la clase obrera y a los comunistas. Así le habían explicado al delegado estadounidense Harrison George, *Williamson*, cuando estuvo en La Habana. El documento leído por Junco señalaba que, para colmo de la desinformación, la *Comintern* no sabía, en 1929, que la sección cubana estaba fundada desde 1925, y había tenido relaciones con un partido apócrifo de elementos reclutados por el gobierno de Machado. Sin embargo, el Partido había dirigido en marzo de 1930 una poderosa huelga contra el desempleo que fue ampliamente conocida en América Latina. Los representantes de la Internacional, viajaban como turistas o meteoritos a otros países, principalmente a México, y solo recientemente llegó un representante de los Estados Unidos a la Isla y les brindó asistencia financiera. Resaltando la importancia estratégica de la región del Caribe, propusieron que se acabara de ejecutar la decisión del Sexto Congreso de la *Comintern* relacionada con la creación de un organismo especial que coordinara el trabajo de los partidos comunistas de esa región. Los resultados de la conducción de la huelga del 20 de marzo y las manifestaciones del 1 de mayo y del 1 de agosto, en las cuales lograron movilizar más de 200 mil trabajadores, fueron resaltados por Martínez, Stepanov, Droz, Manuilsky y Kuusinen. Sin embargo, reprocharon al PCC no haberse constituido en una organización de masas, el predominio de los intelectuales en la dirección del mismo,

así como el descuido de los métodos de trabajo clandestinos que permitió que sus archivos fueran incautados por la policía y la dirección partidista, arrestada.

Sandalio Junco reaccionó con especial dureza ante las críticas del venezolano Martínez, y señaló que ahora el Comité Central del PCC era uno de los más proletarizados del continente. Rechazó su comentario acerca de que Rubén era el único encargado de la organización. El Comité Central era un cuerpo colectivo y la Confederación Nacional Obrera estaba dirigida por un zapatero que había sido capaz de organizar mítines y manifestaciones populares. Ni *Viángel* ni nadie más, podía llevar solo el control sobre el movimiento revolucionario. Efectivamente habían experimentado problemas, el partido había sido decapitado y junto a los dirigentes de la federación sindical, terminaron en las cárceles o tuvieron que huir del país. Ciertamente necesitaban ayuda. Desde Estados Unidos llegó un camarada para estudiar el escenario, pero después hizo un reporte con información errada. Luego de este incidente, enviaron a Cuba a un compañero exiliado con instrucciones para ocupar la secretaría general. Este camarada fue incapaz de realizar sus funciones y nuevamente la organización fue reprimida por el régimen (Yanchuk, 2005, pp. 104-105).

El ruso Boris Vasiliev ahondó sobre los métodos de trabajo ilegal y de las organizaciones auxiliares partidistas. Señaló que los Partidos Comunistas, a veces, incluían elementos burgueses que influían en la falta de unidad de acción y la naturaleza no vinculante de la disciplina. Había desconexión con el pueblo y con el proletariado industrial de las grandes fábricas. En organismos tan fuertes como el argentino y el brasileño, los comités centrales estaban compuestos por intelectuales, abogados y escritores, incapaces de liderar la revolución. Los trabajadores, aunque estuvieran menos desarrollados política y culturalmente, eran los llamados a regir el proceso con éxito. La ausencia de trabajo en equipo perjudicaba su sistematicidad y en las condiciones de persecución debían prestar atención a las tácticas de lucha clandestina (Yanchuk, 2005, pp. 104-105).

El último día de la conferencia, Kuusinen esbozó las posiciones de la IC sobre la cuestión nacional y la atención a las minorías oprimidas de indios y negros. Ningún partido latinoamericano tenía una política nacional adecuada y varios desconocían la situación de la población aborígen. No existía un solo indio militando en esos partidos. A su modo de ver el tema debía tener en cuenta tres puntos principales: 1) la confiscación de tierras de grandes terratenientes; 2) la creación de autonomías nacionales donde puedan vivir indios y negros; 3) el derecho a la autodeterminación de las minorías hasta la rama estatal.

Y lo importante, preconizar la completa equiparación de derechos de todas las nacionalidades (Yanchuk, 2005, p. 107).

En síntesis, la temática relacionada con el carácter de la revolución y las experiencias y errores cometidos fueron los más analizados. La mayoría concordó en la necesidad de estrechar lazos con las masas, mantener una política independiente y cuidarse muy bien de las posibles alianzas con partidos y organizaciones pequeño-burguesas. Kuusinen creía que la etapa de liberación nacional y democrático-burguesa en América Latina estaba completamente descrita por las tesis aprobadas por el Sexto Congreso de la Comintern. Manuisky ratificó que la tarea principal era conquistar la hegemonía de todo el movimiento revolucionario incluyendo a obreros, campesinos y pequeña burguesía urbana. Una vez logrado eso, el establecimiento de la dictadura del proletariado sería en corto tiempo. Si la pequeña burguesía lograba el predominio, la revolución terminaría en un colapso, y podría ocurrir una transformación fascista de la revolución. El dirigente prometió preparar de manera urgente directivas basadas en los materiales de la conferencia, enviar instructores, aumentar la oferta de literatura y ayudar a crear una oficina de la *Comintern* en el Caribe. Esta comenzó a funcionar a principios de 1931 con sede en Nueva York y bajo la tutela del PC de Estados Unidos (Yanchuk, 2005, p. 109).

TERCERA CONFERENCIA DE PARTIDOS COMUNISTAS DE AMÉRICA DEL SUR Y DEL CARIBE

Pasaron cuatro años de la celebración de la Segunda Conferencia para que se desarrollara la Tercera. En marzo de 1934, en la capital moscovita, se creó la Comisión Permanente de América del Sur y del Caribe, compuesta por altos funcionarios de la IC: Dmitri Manuisky; Solomon Lozovsky; Wilhelm Knorin, *Tischler*; Boris Vasiliev; Abram Y. Jeifets, *August Guralsky*; Gueorgui Skalov, *Sinani*, entre otros. La misma realizó varias reuniones. En algunas de ellas, *Sinani*, jefe del SLA y su vice, *Guralsky*, defendieron las tesis del “tercer período”, vigentes desde 1928, y declararon que grandes batallas revolucionarias conmovían al continente: había que transformar la crisis en revolución y, siguiendo la consigna *clase contra clase* que presentaba a la social-democracia como el principal responsable del triunfo del fascismo, respaldaron la necesidad de combatir las tendencias nacional-reformistas en este continente.

Sin embargo, el panorama mundial había cambiado y las consecuencias de la llegada al poder del nazismo en Alemania comenzaron a provocar cambios en la línea política *cominternista*. Jorge Dimitrov contribuyó a ello. El búlgaro había entrado al secretariado de la IC en

abril, aprovechó para acercarse a Stalin y plantearles sus ideas respecto a posibles alianzas con la socialdemocracia con el propósito de forjar frentes antifascistas.

En agosto de 1934 Hitler se autodenominó presidente, hecho que dio impulso a la ideología nazi, a la desarticulación de los movimientos sindical y comunista, a la eliminación física de sus oponentes y al rearme de Alemania para potenciar sus intereses expansionistas. En estas circunstancias, las propuestas de Dimitrov comenzaron a sumar adeptos entre los comunistas europeos y a partir de las nuevas experiencias de entendimiento con los socialdemócratas, el SLA recomendó a los Partidos Comunistas de Argentina y Uruguay que trataran de llegar a acuerdos con los socialistas.

Aprovechando la presencia de un grupo de dirigentes latinoamericanos en Moscú, *Guralsky* propuso efectuar la Tercera Conferencia de Partidos Comunistas de América del Sur y del Caribe entre el 16 y el 28 de octubre. La misma tuvo carácter confidencial y su documentación tampoco fue publicada. Sin embargo, hemos podido acceder a los siguientes trabajos investigativos que nos permitieron hacer un resumen de los temas abordados y de las discusiones consumadas: “En camino hacia el Frente Popular: tercera conferencia de los comunistas latinoamericanos de 1934” (Yanchuk, 2002); “El difícil cambio hacia el Frente Popular: la Tercera Conferencia de Partidos Comunistas Latinoamericanos en Moscú (1934)” (Schelchkov, 2018); y “A Conferencia dos Partidos Comunistas da América do Sul e do Caribe (Moscou, Outubro, 1934) e os levantes de novembro de 1935 no Brasil” (Prestes, 2010).

El número de asistentes fue mayor que las anteriores. Participaron, por el CEIC: el ucraniano Dimitri Z. Manuilsky, *Mayor*; el alemán Fritz Heckert, *Herzog*; el italiano Palmiro Togliatti, *Mario Ercoli*; y el chino Chen Shao Yu, *Van Min*. Por la Comisión del CEIC para las cuestiones de América del Sur y del Caribe: el ruso Gueorgui B. Skalov, *Sinani*; el ruso Boris A. Vasiliev, *Ortodox*; el ruso Abram Jefefts, *August Guralsky*; el ruso Yulii I. Rosovski, *Julio Gómez, Ramírez, Rosenblum*; y el ruso Henri Yakobson, *Genrich Yan*. Por la sección latinoamericana de la *Profintern*: el lituano Mark S. Jaskin, *Duforque*. Por el SSA de la IJC: el estonio Piotr I. Rajomiagi. Por el Buró Sudamericano de la *Comintern* (BSA): Rodolfo J. Ghioldi, *Altobelli*. Por la CSLA: el uruguayo Eugenio Gómez, *Artigas*. Las delegaciones comunistas por países fueron las siguientes. Por Perú: Eudocio Ravines Pérez, *Montero*. Por Argentina: de la Federación de Jóvenes Comunistas de Argentina (FJCA), Jacobo José Cosin, *César Echevarría*; y del Partido Comunista de Argentina (PCA), Florindo Antonio Moretti (Morelli), *Sarmiento*, y Óscar Magnin, *Oliver Parodi, Moyano*. Por

México: de la Federación de Jóvenes Comunistas de México (FJCM), Ambrosio González, *Treviño*, *Chamaco*; y del Partido Comunista de México (PCM), Hernán Laborde Serrano, *Rojas*; *Arroyo*; y *Jilda*, *Jilme*. Por Colombia: José Gonzalo Sánchez, *Absalon Mazuera*. Por Uruguay: Julio Baccino, *Bochino*. Por Brasil: Valdunino Barbosa Loureiro, *Oliveira*, *Divinho*; Otavio Brandão Regó, *Fritz Mayer*; Lauro Reginaldo da Rocha, *Bangú*; José Caetano Machado Bruno, *Almeida*; Antonio Maciel Bonfim, *Queiroz*; Luis Carlos Prestes, *Garoto*, *Fernando*, *Vilar*; Elías Reinaldo da Silva, *André Souza*, *Waldivino*; y Fernando Paiva de Lacerda, *Silvio*. Por Panamá: Vicente Castillo Sánchez, *Justo*. Por Venezuela: Eduardo Machado Morales, *Robert Peralta*. Por Chile: Carlos Contreras Labarca, *Borges*. Por Colombia: Augusto Durán Ospino, *Díaz*; y Víctor Julio Merchan, *Andrade*. Por Cuba: Francisco Wilfredo Calderius López, *Blas Roca*, *Juan Bueno*. También estuvieron allí presentes varios profesores de la Escuela Internacional Lenin: Stanislav S. Pestkovsky, *Banderas*; Vladimir M. Miroshovski, *Miró*; Nadezha Y. Tulchinskaya, *Inessa*; y Zacharij Rabinovich, *Peter*; y los estudiantes latinoamericanos: Silo Soares Furtado de Meireles, *Menezes*; Gerónimo Arnedo Álvarez, *Olmedo*; Pinjos M. Meshkop, *Ramón*; y Wilfredo M. Velázquez Cabrera, *Jose Monpié* (Jeifets y Jeites, 2017; Yanchuk, 2002; Schelchkov, 2018; Prestes, 2010).

La amplia agenda incluía los análisis del carácter de la revolución, las tareas fundamentales para llevarla a efecto, la táctica del frente único y posibles aliados; el peligro del fascismo en la coyuntura internacional; las cuestiones agrarias y nacionales y las valoraciones de los casos concretos de Cuba y Brasil.

Rodolfo Ghioldi, *Altobelli*, directivo del Buró Sudamericano en su primera intervención analizó cómo la crisis económica y la rivalidad inter-imperialista habían reforzado la dependencia de los países semi-coloniales y las guerras, agravado la situación del pueblo y ahondado los antagonismos entre clases dominantes y explotadas. Siguiendo la política señalada por la Internacional, el argentino afirmó que el movimiento revolucionario estaba atravesando por un “tercer período” de importantes explosiones sociales, que existían condiciones objetivas en numerosos países para el estallido de la revolución democrático-burguesa en su primera etapa. Era muy importante lograr entonces la hegemonía del proletariado y la alianza con el campesinado, las nacionalidades oprimidas de indios y negros, y la pequeña burguesía para alcanzar el poder a través de la creación de *soviets*. Había que valorar las posturas de la burguesía nacional y las tendencias nacional-reformistas y radicales de los partidos burgueses. En los esfuerzos por atraer a las muchedumbres, repitió las consignas del frente único en la base de las restantes organizaciones, así como la necesidad de

mantener la independencia de clase, la proletarización de los cuadros partidistas y el centralismo democrático (Jeifets y Schelchkov, 2018, pp. 277-278).

Cuando el 17 de octubre, Ghioldi volvió a tomar la palabra sus posiciones habían variado ligeramente. En su alegato reconoció que las ideas del italiano Palmiro Togliatti sobre el fascismo lo habían impactado, si bien no entendía cabalmente los cambios que se estaban manejando. Una de las causas de esa situación la achacó a la lentitud burocrática del recorrido de las directrices entre la “casa matriz” y los partidos comunistas, las cuales demoraban meses en llegar a su destino. Asimismo, defendió la urgencia de la unidad de la clase obrera y aconsejó establecer conversaciones con socialistas, anarquistas y otros partidos de izquierda. Para él “la primera etapa de la revolución antifeudal y antiimperialista consiste en la destrucción de todo el control de los terratenientes, de las supervivencias pre-capitalistas, la solución más radical de todas las cuestiones de la revolución agraria, de la expulsión de los imperialistas y el no reconocimiento de las deudas externas” (Schelchkov, 2018, pp. 22-39).

Durante los debates, Eudósio Ravines y August Guralsky también defendieron en general las políticas del “tercer período”. El peruano apoyó la táctica de formación de *soviets* y los esfuerzos que en ese sentido se hicieron en Chile y Cuba. En tanto, el vice jefe del SLA consideró que existía un peligro importante: la fascistización de las fuerzas nacional-reformistas (dentro de las cuales aparecían elementos revolucionarios y también fascistas) (Schelchkov, 2018, pp. 295-301). A final, la conferencia recomendó aplicar una política más flexible con relación a la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), dirigida por Víctor Raúl Haya de la Torre.

Resulta interesante ver cómo, a propuesta de Eudósio Ravines, en esta reunión fue aceptada una rectificación con respecto a dos intelectuales que hasta poco antes habían sido fuertemente criticados: el chileno Luis Emilio Recabarren y el peruano José Carlos Mariátegui.

En ese entorno, las posiciones de Manuilsky y Sinani resultaron ambivalentes. Estaban viviendo un período de transición entre una política sectaria izquierdista y una perspectiva unitaria más amplia. Sinani anclado en las directivas del Sexto Congreso de la IC aún en vigencia, prevenía a los delegados sobre un pronto viraje táctico. Había que estar preparado, cambiar rápidamente y adecuarse a las circunstancias. Propuso una mudanza de actitud hacia los socialistas o socialdemócratas; apelar a figuras filocomunistas, como el mexicano Vicente Lombardo Toledano, para concertar el frente único proletario. Ahora rectificaba: una revolución agraria, antimperialista y anti-

feudal requería de una alianza con todas las fuerzas interesadas en derrocar los regímenes burgués-terratenientes.

En criterio de Yanchuk, la conferencia fue muy crítica y autocrítica y en algunos casos injusta. Ejemplo de ello fue la discusión acerca de la cuestión campesina. Se censuró a la mayoría de los partidos por carecer de un programa agrario integral. Una muestra de ello fue el caso de Cuba, cuando bajo la dirección del partido comunista el central azucarero Mabay había sido confiscado por trabajadores agrícolas en septiembre de 1933, organizando un soviét y una milicia roja para defenderse. Sin embargo, los delegados criticaron a los cubanos porque no plantearon como lema la distribución de la tierra y su nacionalización. El secretario general de la organización, Francisco Calderius, *Bueno*, explicó que habían hablado con los campesinos para crear fincas colectivas en lugar del reparto individual de la tierra y la idea no fue bien acogida. La crítica llegó al extremo cuando un funcionario de la Internacional publicó un artículo sobre los errores de las ligas campesinas y propuso reemplazarlas con los comités de pobres. Al final, estas se disolvieron y los comités no se crearon (Yanchuk, 2005).

Por otro lado, al analizar este asunto en Brasil se produjo una significativa discusión sobre el movimiento guerrillero campesino liderado por Virgulino Ferreira da Silva, *Lampião*, uno de los más conocidos *cangaceiros*, famoso por su actitud de rebeldía frente a la policía y los terratenientes. El secretario general del PCB, Antonio Maciel Bonfim, *Keyros*, explicó que ya no eran grupos aislados, sino guerrilleros, “defensores de la libertad, defensores de la vida del campesinado”. De manera exagerada dijo que los *cangaceiros* y Luis Carlos Prestes contaban con una base de masas campesinas dispuestas a ir a la lucha armada, en tanto la autoridad del PC en el campo era indiscutible (Prestes, 2010).

Prestes y José Caetano Machado, *Almeida*, también expresaron sus esperanzas de atraer a los *cangaceiros* a la lucha, mientras varios líderes del partido consideraron a *Lampião* solo un bandido y acusaron a los miembros de la dirección del partido que insistían en apoyarlo de pequeño-burgueses (Yanchuk, 2002).

Acerca de la cuestión agraria, Ravines señaló que debían incluir en el frente unido a todos los campesinos, incluso, a los acomodados. Llamó la atención al hecho de que en varios sectores productivos disminuía el desempleo, ello haría reducir la participación de los obreros en las luchas revolucionarias, por tanto, el campo se convertiría en el centro de la revolución. Propuso pues, reanalizar las tesis de Mariátegui sobre la cuestión agraria en los países andinos, para quien la comunidad indígena era base de la revolución democrático-burguesa en el campo.

¿Qué fuerzas sociales debían integrar el frente único popular?, se preguntaron los delegados. Los mexicanos defendieron la idea del frente desde abajo y solo en el ámbito sindical. Consideraban a socialistas y radicales como fascistas y por lo tanto sin posibilidad de alianzas con ellos. El uruguayo Oscar Magnin, *Oliver*, planteó la idea de que el frente desde abajo incluyera miembros de los partidos burgueses reformistas, opinión compartida con Julio Baccino, *Martínez*. El brasileño Octavio Brandão, que en ese momento trabajaba para el SLA señaló que: “El frente único tiene dos caras, una, la conquista de las masas quitándoles la influencia de los líderes reformistas, anarcosindicalistas, pequeño burgueses y burgueses, y otra, desenmascarar a los líderes burgueses, reformistas, a los traidores de las masas. Nunca podemos ofrecer el frente común a los partidos burgués-terratenientes” (citado en Schelchkov, 2018, p. 370).

Ante tanta confusión, los participantes pidieron ayuda a la IC. El dirigente del Buró Sudamericano *Altobelli* argumentó que, si bien los partidos reformistas como el APRA o los partidarios de Ramón Grau San Martín estaban influenciados por la ideología fascista, arrastraban a las masas y, por tanto, debían trabajar con sus integrantes. Evitar el sectarismo y realizar acciones unidas no solo con las organizaciones de base, sino también con el liderazgo de los partidos reformistas nacionales y socialdemócratas que luchaban contra el feudalismo, el imperialismo y el fascismo.

La conferencia propuso dos opciones de lucha: 1. la creación de un frente popular único en el marco de la revolución democrático-burguesa, agraria y antiimperialista; y 2. el uso de métodos no pacíficos para la toma del poder. México y Cuba pertenecían a la primera opción; Perú y Brasil a la segunda.

En la reunión se aceptó la posibilidad de la alianza de los comunistas cubanos con los partidos nacional-reformistas y pequeño-burgueses, desde “arriba”, postura respaldada por el dirigente de la Liga Juvenil Comunista cubana, Wilfredo Velázquez Cabrera, *Mompié*, que defendió la creación de un Frente Popular y criticó las decisiones secretarias que el PCC había tomado con respecto al Secretario de Gobernación Antonio Guiteras, el cual había propuesto algunos acuerdos para trabajar unidos, que no fueron aceptados, perdiendo la oportunidad de llegar a convenios con el gobierno del doctor Ramón Grau San Martín sobre la cuestión de la tierra y el armamento del proletariado (Schelchkov, 2018, pp. 336-337). Esta opción fue cuidadosamente redactada en una “Resolución cubana” del 26 de febrero de 1935, es decir, después de finalizada la conferencia. La misma previó la creación de un “gobierno popular revolucionario” y delineó el programa en el

cual la consigna de un gobierno soviético solo tendría un sentido de agitación política.

La creación de un frente único en México se pospuso por un período más largo por la debilidad del partido, haciendo énfasis en fortalecer el trabajo con los sindicatos, organizaciones campesinas, gremios estudiantiles, etc. También se originó una evaluación más positiva sobre el gobierno de Lázaro Cárdenas.

La decisión de usar métodos insurreccionales en Perú se refería al apoyo a los levantamientos campesinos en comunidades indígenas para respaldar la proclamación de las repúblicas quechua y aymara de tipo soviético en el Cuzco y Puno.

Sobre Brasil, el asunto fue muy discutido. El nuevo secretario general, Maciel Bonfin, en la conferencia nacional de julio de 1934, había expresado que el país se encaminaba rápidamente hacia una crisis revolucionaria. Era la oportunidad para aprovechar el auge espontáneo de las masas y usar las simpatías y el prestigio de Prestes para ganarlas. La lucha de los campesinos y trabajadores ya no se podía contener. Las fuerzas represivas estaban debilitadas. La revolución se llevaría a cabo con o sin partido. Por eso los brasileños estaban allí, pidiendo asesoramiento para llevar adelante las tareas que debían enfrentar.

Manuilsky concordó con los brasileños en que su país avanzaba rápidamente hacia un estallido social. Presentó seis factores que, a su juicio, corroboraban esta conclusión: 1) el estatus semicolonial del país, traducido en un mayor grado de revolucionarismo de las masas; 2) la presencia de remanentes feudales sentaban las bases para una revolución agraria amplia; 3) la existencia de una cuestión nacional no tan agudamente expresada y las maniobras de los reformistas no tan evidentes 4) la presencia de una guerra civil; 5) el aparato estatal operando solo en áreas costeras, mientras que en el resto del país existían dos posibilidades: o se creaba un gran estado burgués dirigido por la oligarquía, o un gobierno soviético constituido por el PC; 6) el ejército estaba desorganizado y poco efectivo ante las guerrillas. Todas estas circunstancias abonaban un terreno fértil para ganar a las masas en una revolución soviética, aun siendo el Partido Comunista muy frágil. Los principales obstáculos a vencer serían: los intentos intervencionistas de Estados Unidos y algunos países fronterizos, el terror de las clases dominantes, y la falta de influencia sobre campesinos, indios y militares. Si con la revolución solo se lograba la creación de un verdadero partido comunista, eso sería un éxito. Estuvo de acuerdo con brindar ayuda, pero advirtió que la carga principal de la lucha recaería en los hombros de los camaradas brasileños. A

pesar de todas las dificultades y la juventud de su partido, Manuilsky se mostró entusiasmado ante esta perspectiva. Estaba convencido de que en un futuro no lejano la bandera roja ondearía alto sobre Brasil y ese hecho sería muy favorable no solo para el movimiento comunista latinoamericano, sino también para las luchas en los Estados Unidos y en todo el mundo.

A esa idea se sumaron *Sinani, Altobeli, Guralsky, Tulchinskaya, Miroshvsky* y los brasileños *Fernández, Silva y Mendoza*. Las camaradas propusieron medidas concretas para fortalecer el trabajo con el campesinado, los sindicatos, otras organizaciones de masas y partidos, y el ejército.

Después que la Conferencia tuvo lugar una reunión “a puerta cerrada” sobre la cuestión brasileña, con la participación de los jefes del SLA y algunos delegados especialmente escogidos: los brasileños Prestes y Ferreira Lima, el argentino Ghioldi, el cubano Calderius, el peruano Ravines y los máximos líderes de la *Comintern*, Dimitrov y Manuilski. El búlgaro defendió la aplicación inmediata de la táctica del Frente Popular, pero al final cedió a las presiones izquierdistas de Manuilski y de los delegados latinoamericanos que no querían abandonar los viejos modelos del “tercer periodo” y que promovían la insurrección armada en Brasil.

La estrategia flexible del frente popular se institucionalizó definitivamente en el Séptimo Congreso de la IC, unos meses después, en el verano de 1935, y ese cambio de táctica tuvo una importancia decisiva en el enfrentamiento con las fuerzas de la reacción, el fascismo y el imperialismo.

CONCLUSIONES

La izquierda comunista dirigida por la *Comintern* siempre tuvo a la clase obrera en un espacio priorizado de su atención, al considerar que esta constituía el sujeto revolucionario por excelencia, el sector social que no tenía nada que perder en la lucha, “solo sus cadenas”. Pero esa clase trabajadora en América Latina tenía sus particularidades en las décadas de 1920 y 1930. De modo general, no podía equipararse por su cantidad, estructura orgánica, preparación política y organización para la lucha con la de los países de capitalismo medio y desarrollado. Además, el entramado social en que se insertaba era también diferente.

La IC había prestado relativamente poco interés a sus secciones en esta región geográfica. Sin embargo, entre 1929 y 1934, en las tres conferencias comunistas realizadas, se concretaron serios intentos de análisis de esta realidad, para orientar la lucha anticapitalista y de li-

beración nacional. Fatalmente en esos debates se impusieron criterios derivados de la política de *bolchevización* y de la táctica *clase contra clase*, que favorecieron la adopción de posiciones ajenas a la cultura y tradiciones locales y redujeron las posibilidades de alianzas con otras clases y sectores de gran importancia en estos países.

En síntesis: 1) Hubo confrontaciones para definir el carácter de la revolución latinoamericana y, aunque algunos dirigentes locales alertaron sobre las diferencias existentes entre los países y apoyaron la idea de realizar directamente la revolución socialista, se impuso el criterio global de que primero era preciso pasar por una etapa democrático-burguesa, agraria y antimperialista, para luego ir a la de carácter socialista. 2) Aunque mucho se abogó por el logro de un frente unitario de los trabajadores y la necesidad de ganar la hegemonía del proletariado, a los Partidos Comunistas se les indicó valorar cuidadosamente a sus posibles aliados, evitando acuerdos con las dirigencias de los partidos nacionalistas, buscando apoyo en sus militancias de base, priorizando la asociación con el campesinado, eludiendo concertaciones decisivas con la pequeña burguesía y la intelectualidad, considerados solo compañeros temporales de viaje. 3) Si bien, por primera vez, se le dio importancia capital a la política relacionada con los pobladores aborígenes y los negros, la idea de que estos lucharan por alcanzar su autonomía desvió en gran medida los caminos más acertados para alcanzar los propósitos libertarios que esos estamentos sociales necesitaban.

La estrategia del frente popular, que comenzaba a ser aplicada más flexible y abarcadora, se institucionalizó definitivamente en el Séptimo Congreso de la IC, en el verano de 1935, y ese cambio de táctica tuvo una importancia decisiva en el enfrentamiento con las fuerzas de la reacción, el fascismo y el imperialismo. La historia ha demostrado que la clase obrera latinoamericana, si bien puede jugar un rol protagónico en las luchas revolucionarias de este continente, requiere del apoyo y la concertación con otras fuerzas sociales para alcanzar el triunfo definitivo sobre las oligarquías locales y los intereses imperialistas extranjeros.

BIBLIOGRAFÍA

De Oliveira, Érick Fiszuk (2017). *Revolução, guinadas e antifascismo: A Comintern e o PCB rumo às "Frentes Populares" (1928-1935)*. Disertación para obtención de título de Máster en Historia, Universidad Estadual de Campinas. Disponible en: http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/322590/1/Oliveira_ErickFiszukDe_M.pdf

- Jeifets, Lazar y Jeifets, Víctor (2017). *América Latina en la Internacional Comunista (1919-1943)*. Diccionario Biográfico. Buenos Aires: CLACSO.
- Jeifets, Víctor L. y Schelchkov, Andrey A. (Comps.) (2018). *La Internacional Comunista en América Latina: en Documentos del Archivo de Moscú*. Moscú y Santiago de Chile: Aquilo-Press y Ariadna ediciones.
- Kohan, Néstor (2003). *Marx en su (Tercer) Mundo*. La Habana: CICJM. Disponible en: <https://rebellion.org/docs/3413.pdf>
- Paredes Romero, Ricardo (2011). *Escritos Políticos*. Disponible en: <https://produccionesdigsoyuz.wordpress.com/2011/12/22/ricardo-paredes-romero-escritos-politicos/>
- Prestes, Anita Leocadia (2010). A Conferência dos Partidos Comunistas da América do Sul e do Caribe e os levantes de novembro de 1935 no Brasil. *Crítica Marxista* (Campinas), (22), 132-153. Disponible en: https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/artigo211artigo7.pdf
- Reig Romero, Carlos E. (Comp.) (2015). *El útil anhelo*. La Habana: La Memoria.
- Schelchkov, Andrey (2018). El difícil cambio hacia el Frente Popular: la Tercera Conferencia de Partidos Comunistas Latinoamericanos en Moscú (1934). *Izquierdas*, 43, 1-22, Santiago. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492018000600001>
- Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista (SSA de la IC) (1929). El movimiento revolucionario latinoamericano. Versiones de la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana. *Revista La Correspondencia Sudamericana*, Buenos Aires.
- Ulianova, Olga y Riquelme Segovia, Alfredo (Eds.) (2005). *Chile en los archivos soviéticos 1922-1991*. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- Yanchuk, I. I. (2002). En camino hacia el Frente Popular: tercera conferencia de los comunistas latinoamericanos de 1934. *Latinoamerikanskiy Istoricheskiy Almanakh*, 3, Moscú.
- Yanchuk, I. I., (2005). Segunda Conferencia de los Partidos Comunistas de América Latina, Moscú, 2-10 octubre 1930. *Almanaque Histórico Latinoamericano* (Moscú) (6).

“YO NO ME HICE PERONISTA PORQUE... LA VERDAD TENÍA MUCHA DESCONFIANZA DE PERÓN”. EL PERONISMO DESDE LA MIRADA DE MILITANTES DE IZQUIERDA, ARGENTINA, 1946-1955

Mariana Mastrángelo y Pablo Pozzi

INTRODUCCIÓN

El tema del peronismo ha estado en el debate público desde sus orígenes y, a su vez, generó un campo de estudio específico, abordado desde la sociología, la politología y la historia. Como señala Ricardo Sidicaro (2002), el análisis de este fenómeno estuvo atravesado por confrontaciones ideológicas y por juicios de valor de los más diversos signos. Lo interesante que plantea este autor es que el peronismo parece estar situado en un “permanente presente” (p. 11). Del peronismo se han estudiado en profundidad sus aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Desde sus orígenes, pasando por el 17 de octubre como fecha fundante, el tipo de Estado que lo caracterizó y sus vínculos con distintos actores sociales, como los empresarios, la Iglesia y, sobre todo, el sindicalismo y la clase obrera. En las últimas décadas se han abierto nuevas líneas de análisis que ahondan en el surgimiento del peronismo en el interior del país, la cultura y el rol de la mujer.¹ Entre los temas que se indagan en los últimos años, nos interesa profundizar la relación entre el peronismo y la izquierda. Existen una serie de artículos interesantes que estudian este tipo de vínculo, por ejemplo,

1 Abundan este tipo de trabajos en la Red de Estudios sobre el Peronismo (www.redesperonismo.org).

el clásico trabajo de Carlos Altamirano (2001) *Peronismo y cultura de izquierda*, que en su primer capítulo estudia la postura que asumieron socialistas y comunistas frente a la llegada de Perón al gobierno. A este libro, le siguieron otros estudios que profundizaron sobre el tema, como el de Hernán Camarero (2009) “Apogeo y eclipse de la militancia comunista en el movimiento obrero argentino de entreguerras. Un examen historiográfico y algunas líneas de interpretación”; el de Andrés Gurbanov y Sebastián Rodríguez (2016) “Los comunistas frente al peronismo: 1943-1955”; el de Aníbal Jáuregui (2012) “El peronismo en los debates del PCA 1945-1953”; el de Alicia Rojo (2012) “El trotskismo argentino y los orígenes del peronismo”; el de Emanuel Correa (2013) “Socialistas, comunistas y trotskistas ante el 17 de octubre de 1945”; el de Silvana Staltari (2014) “El Partido Comunista frente al peronismo: estrategia y tácticas políticas, 1945-1955”; y el de Claudio Panella y Marcelo Fonticelli (2007) sobre *La prensa de izquierda y el peronismo (1943-1949). Socialistas y comunistas frente a Perón*. Para estos autores la izquierda representa variantes del marxismo. Muchos de estos trabajos ahondan en el papel que jugaron y la postura que adoptaron las agrupaciones de izquierda, como fueron el Partido Socialista (PS), el Partido Comunista (PC) y el trotskismo frente al advenimiento del peronismo. En su mayoría, trabajan sobre los documentos oficiales de los respectivos partidos, o bien sobre la prensa partidaria. En este artículo nos interesa partir de las preguntas que se hacen Gurbanov y Rodríguez al final de su trabajo, sobre el papel que tuvo la militancia de base de las agrupaciones de izquierda frente al peronismo. Los autores abren una serie de preguntas acerca de si la “línea oficial del partido” era compartida por sus militantes. Este tipo de cuestionamientos nos resultan interesantes para indagar desde las fuentes orales, para conocer cómo interpretaron y vivenciaron militantes socialistas y comunistas el fenómeno del peronismo. Para adentrarnos en este tipo de subjetividades, analizaremos algunas entrevistas a militantes comunistas y socialistas que están incluidas en el Archivo del Programa de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Carlos Altamirano (2001) plantea en su libro *Peronismo y cultura de izquierda* que tanto “radicales, socialistas y comunistas percibieron, solo después del combate electoral del 24 de febrero de 1946 que el ascenso de Perón había revuelto las cartas y que el nuevo movimiento les había arrebatado algo a todos” (p. 13). Esta afirmación del autor nos resulta pertinente para preguntarnos: ¿Qué le arrebató Perón a la izquierda? ¿Cómo habían caracterizado los partidos de izquierda a Perón desde su llegada al poder con el Golpe del año 1943? ¿Qué significaba que este “movimiento tumultuario” —como lo definió el

diario *La Vanguardia* (19 de marzo de 1946) — irrumpiera en la arena política? La mayoría de los analistas consideran que la izquierda era la representante de los trabajadores y que tenía una fuerte inserción en la clase obrera en la década de 1940. Ahora bien, las preguntas que deberíamos hacernos serían: ¿Era realmente así? ¿El peronismo le arrebató esa representación?² De los testimonios orales aquí analizados hallamos que el problema planteado es más complejo que esa relación mecánica entre trabajadores e izquierda. En este contexto, encontramos que Perón se apropió y resignificó toda una tradición (en este caso de izquierda) que, al decir de Raymond Williams (2003), consideramos es selectiva. Según el autor, una tradición selectiva comienza su selección dentro del mismo período, de toda la masa de actividades se seleccionan ciertas cosas, se las valora y se hace hincapié en ellas (p. 59). Perón desde su llegada a la Secretaría de Trabajo y Previsión en el año 1943 usó un lenguaje de izquierda para dirigirse a los trabajadores. Él mismo lo expresaba en el siguiente discurso al decir: “Yo les hablaba un poco de comunismo. ¿Por qué? Porque si les hubiera hablado otro idioma en el primer discurso me hubieran tirado el primer naranjazo [...] Porque ellos eran hombres que llegaban de tener cuarenta años de marxismo y con dirigentes comunistas” (Perón, 1952, p. 290). Aquí deberíamos preguntarnos si Perón se dirigía al activismo, o bien a una cultura forjada en cuarenta años de marxismo. Tomando en cuenta que éste logró desplazar a muchos dirigentes dentro del Partido Socialista y el Partido Comunista,³ es factible pensar que su discurso interpeló a las bases. Más allá de la línea, existía una cultura de izquierda que Perón logró articular con una narrativa de fuertes resonancias con el pasado y, haciéndose cargo de sus reivindicaciones, logró interpelar y convertirlo en lo que luego

2 El estudio de este tipo de vínculo entre el peronismo, la clase obrera y la izquierda tiene una larga tradición historiográfica donde se distinguen dos tipos de argumentos bien diferenciados: los que postulan un quiebre abrupto, tanto en la tradición y en las prácticas políticas de los trabajadores, donde se destaca el clásico estudio de Gino Germani, y aquellos que ven elementos de continuidad entre las décadas de 1930 y 1940, con los trabajos de Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero (1972), Hugo del Campo (1983) y Juan Carlos Torre (1990).

3 Podemos mencionar casos como el de Jorge Michelin, secretario general de la Unión Obrero Textil (UOT) de orientación comunista, que desde el año 1943 participó de reuniones con Perón en la secretaría de Trabajo y Previsión; Ángel Perelman, militante fabril de formación trotskista de la Unión Obrero Metalúrgica (UOM), fue uno de los organizadores de la corriente nacional laborista que dio origen al peronismo; Ángel Borlengui, socialista del Gremio de Empleados de Comercio fue el primer ministro del interior de Perón; o Aurelio Hernández, proveniente del sindicalismo “rojo”, quien llegó a ocupar la secretaría de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el año 1947.

sería el sentido común peronista. Por ello consideramos que Perón encontró la manera de acercarse al movimiento obrero apelando, por un lado, a esa cultura y tradición de izquierda. Por el otro lado, Perón llevó a cabo las reivindicaciones que los trabajadores venían bregando durante años, donde el papel de la izquierda fue fundamental en la organización y la lucha. Nos resulta sugerente aquí para interpretar este fenómeno el planteo de Marcelo Raymundo que define al peronismo como una “revolución pasiva” que buscó generar un nuevo arreglo entre las clases para salir de una crisis orgánica. Esto implicaba que necesariamente se debían liberar fuerzas sociales que posteriormente podían tomar un rumbo autónomo (aunque Perón trató de “sujetar” a la clase obrera para que no se saliera del cauce). Para los trabajadores esto significó un mayor poder en los lugares de trabajo, aunque era un poder que había que defender, en muchos casos, a pesar de la dirigencia sindical (Raymundo, 2021). En este contexto, analizar el rol de la izquierda frente al fenómeno del peronismo es fundamental para comprender este complejo proceso.

LOS SOCIALISTAS FRENTE AL PERONISMO

Partimos del análisis que la prensa socialista hacía sobre la relación de Perón y los trabajadores. Ese tipo de vínculo era advertido por el periódico *La Vanguardia*, que también destacaba el rápido ascenso de Perón al poder, desde su participación en el golpe militar del año 1943 —que destituyó al presidente Ramón Castillo y dejó atrás la Década Infame—, hasta su arribo a la secretaría de Trabajo y Previsión. Lo que advierte desde un principio el periódico era el carácter autoritario del nuevo gobierno militar,⁴ lo que le valió la censura y el cierre intermitente hasta el año 1945. En particular, señalaba cómo la llegada de Perón a la secretaría de Trabajo y Previsión representaba un cambio significativo en la forma de construir su poder y, sobre todo, su relación con los obreros. Perón fue tejiendo las bases de un nuevo vínculo con esa masa trabajadora relegada, caracterizado por una nueva forma de relación en donde el Estado se convertía en intermediario en las relaciones laborales con el objetivo de lograr la armonía entre capital y trabajo, y alcanzar una mayor “justicia social y distributiva”.

4 El golpe militar se produjo en Argentina el 4 de junio de 1943 y derrocó al gobierno del presidente Ramón S. Castillo, último de la llamada Década Infame. Tres militares con el título de presidente se sucedieron en el mando: los generales Arturo Rawson (que estuvo al mando del país durante tres días), Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro J. Farrell. A su vez, durante este período se designaron cuatro militares en el puesto de vicepresidente: Sabá H. Sueyro, Edelmiro Farrell (luego presidente), Juan Domingo Perón y Juan Pistarini.

“Yo no me hice peronista porque... la verdad tenía mucha desconfianza de Perón”...

La Vanguardia señalaba el uso de un lenguaje caracterizado por una impronta corporativista y demagoga:

La demagogia que hemos conocido los argentinos apeló a los procedimientos de universal eficacia: aumentos de sueldos a estos o aquellos gremios, dominación y corrupción de los partidos oficialistas, penetración del movimiento obrero a fin de mantenerlo apolítico frente a los partidos y hacerlo servir a la política oficial, halago de todos los sectores populares, cultivo de la palmadita, de la promesa, del don de simpatía y de la actitud servicial. (*La Vanguardia*, 10 de diciembre de 1943, citado en Panella y Fonticelli, 2007, p. 28)

Sobre el tema de la justicia social, el periódico también marcaba su posición, reivindicando el protagonismo del PS en la lucha por las mejoras laborales y la organización de la clase obrera planteando que:

Nos resulta muy grato escuchar palabras justificadoras de los reclamos de *justicia social* [las cursivas son nuestras] por la que la clase obrera y el Partido Socialista vienen bregando desde hace más de medio siglo. Aquellas miden la expansión de la idea puesta en marcha por el socialismo y que aquí, como en todas partes, no siempre se realiza por obra directa de los socialistas mismos. [...] Pero objetivamente puede decirse que la era de la política social se inició en la Argentina con la aparición de las primeras organizaciones obreras, el estallido de las primeras huelgas, la fundación del Partido Socialista, la aparición de *La Vanguardia* y la obra de los legisladores socialistas, a partir de la jornada inicial y creadora de Alfredo L. Palacios, el primer diputado socialista de América. (*La Vanguardia*, 5 de diciembre de 1943, citado en Panella y Fonticelli, 2007, p. 29)

Es interesante analizar, en los distintos fragmentos aquí citados por el periódico *La Vanguardia*, cómo el peronismo vino a desafiar un discurso que hasta ese momento era potestad de la izquierda, pero que en boca de Perón era sinónimo de demagogia. El periódico enumera una serie de enunciados que el partido consideraba eran de su propia autoría: justicia social, organización obrera, las primeras huelgas y la legislación laboral que desde las primeras décadas del siglo XX había impulsado el PS en la figura de su primer diputado, Alfredo L. Palacios. Como podemos observar, *La Vanguardia* deja evidencia de que Perón tomó esa tradición selectiva como una selección de los baluartes de la izquierda, pero también como una interpretación de esta. Lo que podemos observar en las notas de *La Vanguardia* es que la relación con los trabajadores y el peronismo se convierte en un tema de disputa. En este sentido el periódico responde a una serie de declaraciones de Perón en donde expresaba que los socialistas lo combatían “porque su programa social les había restado clientes”, argumentando que:

No tememos por eso que el coronel Perón llama nuestra “clientela”. No sabíamos que él estaba tan deseoso de tener nuestra “clientela” de su lado. Nuestra obra tiene un sentido histórico y de permanencia que puede resistir los mordiscos de la urgencia temporal y pasajera. Nunca hemos tomado a la clase trabajadora como “clientela”, concepto mercantil y materialista que el sólo enunciarlo pone en descubierto el verdadero espíritu con que algunos se acercan al pueblo [...]. (*La Vanguardia*, 6 de marzo de 1945, citado en Panella y Fonticelli, 2007, pp. 29-30)

Aquí es interesante analizar cómo el PS percibía su rol frente a los trabajadores, considerándose a sí mismo “en un sentido histórico y de permanencia”, mientras el peronismo respondía a lo “urgente y pasajero”. El problema es que los trabajadores necesitaban soluciones concretas a sus necesidades, más allá de la retórica socialista. La pregunta que en el fondo no se formula el periódico es por qué Perón, a pesar de responder a lo urgente y pasajero, logró establecer un vínculo con los trabajadores que los socialistas no tenían (o se limitaba solo a los obreros más calificados como ferroviarios, gráficos, comercio), a pesar de los postulados que menciona en el artículo. Una posible respuesta la podemos encontrar en los testimonios orales que se refieren a la representación del socialismo entre los trabajadores. Este es el ejemplo de Elisa Rando, militante socialista desde muy joven y contemporánea a los orígenes del peronismo, para quien: “La realidad era esa: apareció la posibilidad de que alguien que pretendía hablar el idioma de los trabajadores, interpretarles sus inquietudes, formularles propuestas para salir adelante, para liberarse” (Rando, E., entrevista, 2004-2005).

Como se señala en la entrevista, Perón pretendió hablar el lenguaje de los trabajadores, y él mismo lo atestiguaba en su discurso cuando afirmaba que les hablaba “un poco de comunismo”, como ya señalamos en párrafos anteriores. A su vez, supo interpretar las necesidades de esa clase obrera postergada. Aquí cabría preguntarse qué elementos del lenguaje o qué acciones llevó adelante Perón para conectar con los trabajadores. El testimonio profundiza en el análisis al plantear que:

El problema de la clase trabajadora, realmente llena de privaciones, de angustias, de no tener salidas, porque realmente no había salidas. Los partidos políticos no existían, porque fueron declarados ilegales. Pero si hubieran existido, hubiera sido lo mismo, hasta ese momento existieron, y ¿qué teníamos? el conservadurismo, los radicales que eran un poquito más avanzaditos, más tibiecitos, menos reaccionarios que los conservadores, pero tampoco proponían nada que la clase trabajadora se sintiera liberada en alguna de sus angustias. El Partido Socialista nunca tuvo un

“Yo no me hice peronista porque... la verdad tenía mucha desconfianza de Perón”...

peso muy decisivo, nada más que tuvo una representación muy importante de diputados, cuando el radicalismo tuvo un período de aislación. Llegó a tener, creo recordar, unos treinta y dos diputados, que fue cuando salían una cantidad de leyes que hacían el cuerpo de la legislación laboral en ese momento, pero que no contaban con el poder ejecutivo de esa época para que pusiera en práctica esas leyes, salvo la ley de ocho horas, las cosas más gordas, pero lo otro que hacía también a la mejoría económica de la clase obrera, nunca se pusieron en vigencia. Hasta que en la secretaría de Trabajo y Previsión este buen hombre, sacó de la gaveta las leyes que allí dormían y las puso en práctica y después le agregó algunas más que la época ya las requería, que fue el Estatuto del Peón de Campo y el aguinaldo y las vacaciones. (Rando, E., entrevista, 2004-2005)

Del testimonio podemos observar, por un lado, cómo la entrevistada describe el contexto en el cual estaba inserta la clase trabajadora, con privaciones y necesidades sin satisfacer, al decir de Rando, “no había salidas”. Por el otro lado, señala el rol de los partidos políticos que, si bien habían sido declarados ilegales en el período estudiado, tampoco habían logrado dar respuestas a los obreros, desde los conservadores, pasando por los radicales y terminando con el PS. La crítica a su propio partido radica en que sus mayores esfuerzos estuvieron puestos en la representación parlamentaria y en la elaboración de leyes laborales, más que en la militancia y el acercamiento a los trabajadores. Y, sobre todo, estas leyes que tanto costó que se aprobaran, no fueron puestas en práctica. Subyace a esto una percepción de que las conquistas de la clase obrera se ganaban en la lucha, no solamente (o exclusivamente) en la acción legislativa. Siguiendo con la entrevista, Rando planteaba que: “Nosotros teníamos una doble lucha, la interna dentro del partido para que el partido sea un partido socialista, y la de afuera porque tampoco apoyábamos lo que estaba haciendo Perón” (Rando, E., entrevista, 2004-2005). En este contexto, Perón encontró un campo propicio para, desde la secretaría de Trabajo y Previsión, llevar a cabo una serie de acciones que dieron respuesta a la clase trabajadora, como el aumento de salarios, las obras sociales y las vacaciones pagas. Quizás entre la teoría, representada en las leyes laborales que los socialistas habían logrado en el parlamento y que luego “encarpetaban”, y la práctica, donde Perón las efectivizó, residía el punto de tensión en la relación entre los trabajadores y los partidos de izquierda. En este sentido, el peronismo logró apropiarse y, a su vez, resignificó esa tradición obrera donde la izquierda desde fines del siglo XIX había tenido un papel decisivo en su conformación. Desde la superestructura, Perón tuvo que otorgar algunas demandas para acercarse al movimiento obrero. Esto quedó plasmado en el discurso del año 1944 que planteaba que: “Para evitar que las masas que han recibido la justicia social y

lógica no vayan más allá en sus pretensiones, el primer remedio es la organización... Ya el Estado organizaría su reaseguro, que es la autoridad necesaria para que cuando esté en su lugar nadie puede salir” (Perón, 1944). De esta manera Perón cumplía con sus objetivos de tener satisfechas a las bases y controlados a los representantes sindicales, ya que el otro objetivo fue cooptar a algunos de sus líderes, como fue el caso emblemático de Ángel Borlengui, obrero del Gremio de Empleados de Comercio que llegó a ser su primer ministro del interior.

Siguiendo con esta línea de análisis, el Dr. Héctor Polino, diputado por el PS,⁵ plantea que con el peronismo:

Se produjo una falsa antinomia, que uno viéndolo en perspectiva con el tiempo, advierte que entramos los argentinos en una gran trampa, porque los peronistas, es decir los trabajadores, los humildes mayoritariamente adhieren al peronismo porque ven en el peronismo mejoramiento de las condiciones materiales de vida. Entonces los comienzan a tratar como personas en las fábricas, en los lugares de trabajo, en el campo, frente a la explotación de los conservadores. Pero el peronismo ahogó las libertades políticas y entonces los mismos sectores del campo popular estuvimos enfrentados: los que luchaban por lo que se llamaba en ese momento la justicia social. Entonces el campo popular se vio dividido, enfrentado, entre los que éramos antiperonistas y peronistas. (Polino, H., entrevista, 2004)

Esta división o “falsa antinomia” frente al fenómeno del peronismo, como sugiere Polino, se generó en la sociedad pero, fundamentalmente, dentro de la izquierda. Lo que estaba en disputa era el “campo popular” y sobre todo la relación con la clase obrera. Siguiendo con la entrevista, el diputado socialista expresaba que:

Viéndola a la distancia uno dice, pero ¿cómo nos han llevado a esto? porque los peronistas son el pueblo, nosotros también éramos pueblo, mientras tanto los grupos del poder económico y financiero hicieron sus grandes negocios cabalgando sobre las divisiones del campo popular. (Polino, H., entrevista, 2004)

En este sentido, la cultura de izquierda que se expresaba en una tradición selectiva que Perón logró interpretar, benefició en parte a los trabajadores, que efectivamente lograron ciertas conquistas, pero, sobre todo, como plantea Polino, los que sacaron ventaja e hicieron grandes negocios fueron los empresarios y la burguesía. Marina Kabat, en su trabajo *PerónLeaks*, caracteriza al gobierno de Perón como un “bonapartismo” de facto, donde éste se convirtió en intermediario entre la

5 El doctor Héctor Polino fue diputado nacional por el Partido Socialista por tres períodos consecutivos, desde el año 1993 hasta el año 2005.

clase obrera y la burguesía. Esta mediación, plantea la autora, cumple el objetivo de contener a la clase obrera y resolver la situación a favor de la burguesía. Como ya señalamos, para lograr la confianza de los trabajadores, Perón primero utilizó un discurso de tinte izquierdista, pero pronto su estrategia cambió y, para cumplir sus funciones y objetivos, debió reprimir a las fracciones vinculadas a partidos revolucionarios, luego continuó con el laborismo que lo apoyaba (que sostenía su autonomía), para finalizar con la masa obrera y sus dirigentes (Kabat, 2017, p. 63).

LOS COMUNISTAS FRENTE AL PERONISMO

El caso del Partido Comunista (PC) fue particular en relación con el peronismo porque dentro de la izquierda, fue la única agrupación que no adhirió al golpe militar del año 1943. También, era el partido de izquierda que contaba con mayor representación entre los trabajadores y los sindicatos en la década de 1940, con líderes obreros como José Peter y Rubén Iscaro,⁶ convirtiéndose de esta manera según el propio partido en “líder natural” de la clase trabajadora organizada. Por estas razones, el régimen militar tuvo entre sus objetivos principales la persecución y eliminación del comunismo, ya que representaba una clara amenaza. Esto se puso en práctica mediante distintas acciones, como la censura a la prensa partidaria (como el semanario *Orientación* y el periódico *La Hora*), detenciones ilegales, torturas y asesinatos. Por su parte, la reacción del PC se centró, en un principio, en una política anti-militar, central en la lucha contra el gobierno militar y en la figura de Perón como uno de sus protagonistas.

Comencemos analizando lo que decía el periódico *La Hora* al respecto:

El país fue sorprendido por un golpe militar reaccionario. Este golpe estalla cuando el movimiento de unidad democrática nacional estaba creciendo y desarrollándose y se aprestaba a resolver por sus propias fuerzas todos los problemas que afligen a la nación. La vía de la unidad nacional era y es el único camino justo para derrotar a la reacción oligárquica y pro-nazi. (*La Hora*, 5 de marzo de 1943, citado en Panella y Fonticelli, 2007, p. 89)

Para el PC, la confianza en el movimiento de *unión democrática nacional* (en consonancia con la estrategia de *frente popular*), como bien señala la prensa, era el único camino para derrocar a la reacción oligárquica pro-nazi. Esta estrategia política de intervención por medio

⁶ José Peter obrero de la carne y fundador de la Federación Obrera de la Carne, y Rubén Iscaro, obrero de la construcción y reconocido dirigente del Sindicato de la Construcción.

de los frentes populares llevó al partido, un par de años más tarde, a participar de la Unión Democrática, una de las tácticas que Kabat (2017) señala como errónea ya que dejó que la burguesía liderara este proceso y la izquierda se subordinara al mismo (p. 61). Sin embargo, y a pesar del exceso de optimismo por parte de los comunistas en una alianza de partidos políticos de carácter democrático y antifascista, sus objetivos eran claros:

La satisfacción de las reivindicaciones económicas y sociales de la clase obrera, la defensa de la democracia, la libertad y la soberanía nacional, la liquidación del fascismo y asegurar la paz duradera. (*La Hora*, 6 de junio de 1943, citado en Panella y Fonticelli, 2007, p. 91)

Días más tarde de estas editoriales de *La Hora*, la prensa del partido fue clausurada hasta el año 1945, limitándose a pasquines y publicaciones clandestinas. Desde un principio, la prensa del PC caracterizó al movimiento militar como nazi-fascista, en consonancia con lo que sucedía en el plano internacional. Este signo autoritario es señalado también en los testimonios orales. Este es el caso de Héctor Álvarez, militante por esos años de la Juventud Comunista de Buenos Aires:

Por el año '43, yo tenía 14 años o 13 años, estaba en segundo año del Nacional. Hubo un cambio muy fuerte, porque pasamos de los gobiernos conservadores sin grandes sobresaltos y bruscamente pasamos a la revolución, al golpe. Fue un cambio muy grande. Yo por suerte ya estaba politizado en ese momento. Tenía un hermano que estaba militando y me incorporé en esas ideas con facilidad. Entonces pude ubicar, aunque tuviera 13 años, entre lo que era un gobierno conservador y un gobierno golpista de tinte neofascista. Así que fui un contrera de entrada, no dejé nunca de pensar que, viniendo de militares, tomando el poder, viniendo de la corriente nazi... (Álvarez, H., entrevista, citada en Cutillo, 2018, pp. 371-372)

Es interesante en el testimonio destacar el cambio que significó el gobierno militar e, implícitamente, la llegada de Perón a la escena política. Asimismo, es importante subrayar que el entrevistado había comenzado su militancia desde muy joven en el comunismo, y esta politización le dio herramientas para entender ese cambio y caracterizarlo como neofascista. Además, lo ubica desde un lugar en donde Álvarez se percibe como un “contrera” desde el principio. Si Perón venía de las filas del GOU⁷ y había participado del golpe militar, nada

7 Grupo de Oficiales Unidos o Grupo Obra de Unificación. Fue una logia u organización secreta argentina de tendencia nacionalista, creada en el seno del ejército argentino, el 10 de marzo de 1943. Ese mismo año realizó un golpe de Estado al presidente Ramón S. Castillo.

“Yo no me hice peronista porque... la verdad tenía mucha desconfianza de Perón”...

bueno se podía esperar de este gobierno “golpista”. Esta postura de desconfianza es compartida por Víctor Barrios, militante comunista, y a diferencia del entrevistado anterior, del interior de la Argentina:

Yo no me hice peronista porque...la verdad tenía mucha desconfianza de Perón en sí por ser un militar. Y no sé será porque yo desde chico no tenía mucha simpatía con los milicos, que le decíamos en ese tiempo, en la zona rural que vivíamos en San Luis, generalmente a la policía o a los militares, le teníamos cierta alergia, es decir, eran los que reprimían a los campesinos cuando se rebelaban, o porque les faltaba el respeto a alguno o no lo saludaban, los metían presos, los reprimían y toda la gente que nos rodeaba cuando éramos muy chicos, le tenían una aprensión así a la...a la investidura de la... al uniforme, ya sea policíaco o militar. Y tenía cierta desconfianza en el mensaje, porque todos los que rodeaban a Perón eran gente rica, en los cuales nosotros desde chicos habíamos sufrido las consecuencias. (Barrios, V., entrevista, 2006)

Este sentimiento de desconfianza de Álvarez y Barrios hacia Perón y la gente que estaba a su alrededor, se inscribiría, según explica Hugo Del Campo (2005), en una tradición obrera que desconfiaba de todo elemento “externo” que se interesara en sus problemas y sobre todo porque el movimiento obrero era anti-militarista *per se* (pp. 173-174). Esa suspicacia se mantuvo luego de que Perón se impusiera en las elecciones del año 1946. El problema central que surgió en las filas del PC tras la llegada de Perón a la presidencia era: ¿Qué hacía el PC con relación a los trabajadores que se sentían atraídos por el peronismo? En el corto período que se extendió entre los acontecimientos del 17 de octubre y las elecciones del 24 de febrero de 1946 la virulencia discursiva se puede observar tanto del lado del peronismo como del comunismo. La disputa era por los votos, pero, sobre todo, por la representación de la clase trabajadora. Antonio, militante de la Juventud Comunista planteaba que para esa época:

Lo fundamental, era el tema del movimiento obrero, de los trabajadores y de juntarnos con la masa peronista con la idea de ser su guía...Charlar con ellos, vender la prensa del partido, compartir las luchas y llegado el caso y si se presenta la oportunidad, plantearles la afiliación. (Entrevista citada en Panella y Fonticelli, 2007, p. 111)

Es interesante en el testimonio recalcar la preocupación del partido —según la mirada del entrevistado— por el movimiento obrero. Sobre todo, se señala la nueva función que adoptó el comunismo en relación con “la masa peronista” ya que, de ahora en más, se convertiría en su guía. Ese sentido pedagógico que adoptó el partido se orientaba no solo a esclarecer a esa masa obrera desorganizada y sin conciencia de

clase, sino también, reubicaba al PC en un nuevo contexto donde los obreros habían votado a Perón, siendo ajeno al mundo del trabajo. Si bien la caracterización que se tenía sobre Perón no se modificó, ya que según la prensa representaba la “variedad aborigen del nazi fascismo que intenta hacer creer que él defiende al pueblo y a los trabajadores” (*La Hora*, citado en Panella y Fonticelli, 2007, p. 112), sí se aprecia un cambio de estrategia. Esto se puede observar en la identificación que hacía el comunismo del componente social que adhería al peronismo: eran “obreros engañados” que, al no tener experiencia política, eran presa fácil del discurso demagógico de Perón. Lo que no se cuestionaba en el fondo el PC, al igual que los socialistas, era por qué se dio este giro significativo de los trabajadores hacía el peronismo, cuando el comunismo local se sentía el “abanderado natural de la clase obrera” (*La Hora*, citado en Panella y Fonticelli, 2007, p. 116).

Hugo Del Campo plantea que la clase obrera semi-organizada y el movimiento sindical permanentemente dividido, atravesaron una experiencia inédita en relación con el peronismo que los transformó profundamente. Por primera vez, desde las esferas del poder, alguien apelaba a ellos como base de sustentación de un nuevo y vasto movimiento político. La identificación masiva de la clase obrera con Perón la llevó a unificarse y protagonizó una movilización política a escala nacional que irrumpió como factor determinante en ese campo. Esto lo logró al precio de abandonar sus viejas tradiciones ideológicas y sobre todo de ir perdiendo paulatinamente su autonomía frente a un líder autoritario y personalista (Del Campo, 2005, pp. 173-174). A esto podemos agregar que, como ya señalamos, desde lo discursivo Perón apeló a un espacio político y sindical que enfatizaba una identidad nacional y popular, afectando a la izquierda en general, pero directamente al PC. Al igual que a los socialistas, el peronismo les disputaba esa cultura, que, como remarca Del Campo, fue el precio que pagó la clase obrera al abandonar sus viejas inclinaciones ideológicas. Víctor Barrios reflexionaba sobre este tema al plantear que:

Por un lado, el hecho de tener el gobierno que le da el bienestar, digamos así, un estado de bienestar a la gente que venía siendo explotada, a pesar de que luchaba siempre en contra de la explotación, pero que no había conseguido lo que consiguió durante el período del peronismo. En donde las leyes, o, mejor dicho, las protestas que venían desde el año '30, eso indudablemente influyeron en el cambio en la mente de la gente. Que si bien respetaba la concepción de clase que mantuvieron los líderes, digamos así, del movimiento obrero o sus dirigentes naturales, la realidad era otra, pasaba por otro lado. Por el estómago, por la [...] digamos así, por el bienestar de tener una casa, de tener un trabajo, todo eso me parece que

“Yo no me hice peronista porque... la verdad tenía mucha desconfianza de Perón”...

influyó en gran medida el desplazamiento de esos trabajadores hacia el peronismo. (Barrios, V., entrevista, 2006)

Del análisis del testimonio se pueden destacar las necesidades de los trabajadores, donde las condiciones materiales determinaron que los obreros se sumaran al proyecto peronista, a pesar de que se subraya que la concepción de clase de los trabajadores respetaba y mantenía a sus líderes naturales, en este caso, refiriéndose al PC. Sin embargo, como bien lo expresa el entrevistado, la realidad pasaba por otro lado. En ese sentido, Perón realizó una lectura perspicaz de ese contexto y logró reinterpretar y resignificar una tradición obrera de lucha que, desde un estado de bienestar, se cristalizaba en cuestiones concretas como tener un trabajo, una casa y el estómago lleno. Eso significaría una resignificación en la mentalidad de los trabajadores, que explicaría para el entrevistado el por qué los obreros se hicieron peronistas. Barrios resalta también el papel que jugó la burguesía y cómo Perón fue el encargado de llevar adelante su política, al decir:

La burguesía fue muy hábil: le quitó la bandera de las reivindicaciones a la izquierda a través de las leyes obreras de Perón, además de las demás concesiones que hizo en nombre del Estado, y de esa forma logró la adoración de las masas a su figura...lo que pasó fue que la gente tenía objetivos inmediatos, se conformaron con la coyuntura, eran cosas de corto alcance [...] En una palabra...les llenan la panza para que no protesten ni cuestionen el sistema que los domina. (Barrios, V., entrevista, 2006)

En este fragmento del testimonio, Barrios resalta el vínculo entre la burguesía y el peronismo, y el contexto de los trabajadores, con objetivos inmediatos y coyunturales. Lo interesante de remarcar aquí es la frase “la burguesía le quitó la bandera de las reivindicaciones a la izquierda a través de las leyes obreras de Perón”, donde podemos inferir una crítica hacia la izquierda, en particular al PC, ya que ésta no supo interpelar a los trabajadores y sus necesidades, dejando pasar una oportunidad única. Esto explicaría por qué toda esa masa de obreros migrantes, los llamados “cabecitas negras”, adhirieron al peronismo. En este contexto, Barrios era uno de esos trabajadores que reunía las condiciones materiales para hacerse peronista, ya que era un obrero migrante del interior que viajó hacia Buenos Aires en busca de trabajo, y que hasta ese momento no formaba parte de ningún partido político. Es más, él participó de la movilización del 17 de octubre. Sobre esta experiencia señala que:

Había mamado sí, en Buenos Aires, mucha práctica con el peronismo, porque estaba trabajando en una heladería, que era en la calle, en la Ave-

nida de Mayo, donde había un grupo numeroso de trabajadores, aproximadamente cien, y la mayoría era gente del peronismo, yo creo que todos. El único que no adhería al peronismo en ese tiempo era yo...Es indudable que sentía mucha presión. Es decir, la discusión del peronismo ahí era muy...muy al día, estaba constantemente, cuando se hablaba de algo era hablar del peronismo. Pero aparte de lo que hablábamos era de nuestras raíces como gente del interior, gente que veníamos perseguidos por el hambre a Buenos Aires, porque no encontrábamos trabajo en la Capital, entonces se hablaba mucho, pero yo no adhería al peronismo y eso que marchamos juntos el diecisiete de octubre...Yo marché porque me sentía atraído por la cantidad de gente del interior que había. Es decir, los “cabe-cita negra”, que le llamaban en aquel tiempo a los que íbamos del interior, nos habíamos juntado todos. Es decir, parecía que éramos del mismo color, los negritos del interior que los señalábamos como cabecitas. (Barrios, V., entrevista, 2006)

El ejemplo de Barrios fue uno de tantos en este período, aunque la tendencia fue que de las filas del comunismo se pasaran al peronismo, lo que generó dentro del comunismo fracturas internas con la emergencia de un sector que postulaba el acercamiento al nuevo movimiento. Este es el caso de la célula ferroviaria que, junto a algunos intelectuales, como Rodolfo Puiggrós, Eduardo Astesano, Manuel Sadovsky y Gregorio Lebenson, fueron expulsados del partido. Este grupo tiempo después se transformaría en el Movimiento Obrero Comunista (MOC), que llegó a plantear la necesidad de lograr una síntesis entre los trabajadores reales y la militancia comunista. El MOC, al igual que otros militantes comunistas, criticaban en el fondo la conducción centralista (que denominaban “codovillista”, por Victorio Codovilla), planteando una conducción diferente de organización partidaria (Jáuregui, 2012, p. 6). Estos cuestionamientos internos, y sobre todo a la conducción del partido, se debían a la falta de debate dentro del PC. Así lo señalaba Otto Vargas, que comenzó su militancia en la Juventud Comunista, al plantear que:

En el PC se discutía poco, no se discutía nada. En el PC se discutía mucho en los pasillos y poco en las reuniones. Eso era una de las características principales de la metodología del PC, que se fue acentuando con el pasar de los años...Nunca hubo un clima de democracia interna en el PC como para discutir. (Vargas, O., entrevista, 2004)

Esta falta de discusión, que seguramente llevó al quiebre de esta fracción, resonó en la conducción, ya que el partido, si bien expulsó a los díscolos, debió plantear una nueva posición frente al peronismo. Esto se llevó a cabo en el undécimo Congreso realizado en agosto de 1946, que, paradójicamente, retomaba la postura del grupo expulsado y que

se sintetizaba en la frase: “apoyar lo positivo, criticar lo negativo”. Esto implicó, según Jáuregui, un alejamiento respecto a los antiguos partidos de la Unión Democrática y una nueva propuesta de alianza, el Frente de Liberación Social y Nacional, en el que se aspiraba a congregar a votantes tanto peronistas como no peronistas. De esta forma, se encaminaba a dar protagonismo al partido por encima de la oposición entre peronismo y anti-peronismo (2012, p. 7). En consecuencia, el PC dio un viraje significativo frente al peronismo, asumiendo, por un lado, que su victoria era inevitable, y, por el otro, el hecho de que Perón estableciera relaciones diplomáticas con la Unión Soviética (el PC argentino se caracterizó por ser uno de los más verticalistas de Latinoamérica). No obstante, es interesante analizar que a estos factores que mencionamos, se sumó el avance y la adhesión al peronismo entre la clase obrera, desplazando significativamente al PC. Otto Vargas observaba que:

Yo nunca fui gorila, la verdad. Nosotros realizábamos muchas tareas con relación al movimiento obrero: volanteadas, venta de periódicos en Berisso, en los frigoríficos, en otros lugares. E incluso en la propia convivencia en las pensiones con obreros que en su mayoría eran peronistas. Pero había una realidad: la gran mayoría, la enorme masa obrera y de las masas explotadas era peronista y el comunismo quedó reducido a una expresión minoritaria en la clase obrera. (Vargas, O., entrevista, 2004)

Lo que podemos observar en el testimonio de Vargas es que la militancia comunista, por cercanía en la fábrica o en las pensiones, tenía relación con trabajadores que eran peronistas. La pregunta que surge es por qué estos obreros no se hicieron comunistas, siendo que el PC era el “líder natural” de la clase obrera. Algunas respuestas que podemos ir dando según los testimonios recogidos se refieren, por un lado, a que las condiciones materiales determinaron que los trabajadores se volcaran al nuevo movimiento. Por el otro, a la falta de discusión y de democracia interna que señala uno de los entrevistados. Ahora bien, también debemos considerar un factor más, a saber, la distancia o desconexión que había entre la línea del Comité Central y lo que vivenciaba la militancia. Esto podemos observarlo en el testimonio de Antonio, militante comunista que participó del undécimo congreso donde se resolvió la disolución de los sindicatos comunistas:

Cuando se plantea la disolución de los sindicatos sentí un dolor muy grande, vi a Peter con lágrimas en los ojos, la idea de disolver fue de varios dirigentes, de Codovilla, Rodolfo Ghioldi, varios estuvieron en esa posición porque los sindicatos desarrollados bajo la influencia de Perón tenían a la mayoría de los obreros, los convenios se hacían con ellos y a los sindicatos

manejados por los comunistas nada, entonces iba a quedar un sello no más. La idea de que saliendo de eso e integrándose en las fábricas se iba a solucionar el problema, pero cuando se quería ingresar los peronistas nos echaban a patadas. No había otra cosa que hacer. Lo que faltó en el XI Congreso fue hacer un análisis crítico de las anteriores posiciones y explicarle a la militancia de que éste era un gobierno que se inició de una determinada manera que después fue variando y que era como se definió allí un gobierno nacionalista burgués. Pero no hay una transición, no hay una explicación y esta fue una constante durante mucho tiempo. (Entrevista citada en Panella y Fonticelli, 2007, pp. 123-124)

El testimonio de Antonio resume y pone de manifiesto la distancia entre esa dirigencia que planteaba retirarse de los sindicatos e incorporarse a los gremios peronistas, y el obrero y militante comunista de la fábrica, que no entendía el cambio de estrategia de la dirección del partido. Esto se explicaría según el entrevistado, porque no se hizo un análisis crítico de la situación. Aunque en el fondo, responde a la propia dinámica interna del partido, donde se discutía más en los pasillos que en las células y donde la dirigencia y los intelectuales del partido seguían sosteniendo que el PC era “un partido monolítico, unido, indestructible, templado en la lucha. Partido de vanguardia capaz de merecer la confianza de la clase obrera” (Arnedo Álvarez en *La Hora*, citado en Panella y Fonticelli, 2007, p. 123). Mientras, el peronismo se quedaba con la representación de la masa trabajadora.

CONSIDERACIONES FINALES

En este trabajo hemos querido ahondar en el estudio de la relación que se estableció entre la izquierda, el peronismo y el movimiento obrero. Partimos de una pregunta: ¿Qué le arrebató el peronismo a la izquierda en el vínculo con los trabajadores? Planteamos que el peronismo apeló a la representación de la clase obrera a partir de un lenguaje y de una tradición selectiva. Este primer acercamiento vino acompañado de la materialización de las históricas reivindicaciones que, desde un nuevo tipo de Estado, Perón logró concretar mediante medidas como las leyes laborales, el acceso a la casa propia o simplemente tener el “estómago lleno”, como planteaba uno de los entrevistados. Tanto el PS como el PC vieron peligrar la relación con los trabajadores, y desde distintas estrategias, intentaron no alejarse de los mismos. Pero ese “movimiento tumultuario”, junto a la represión que señala Kabat, vino a trastocar todo. El campo popular se dividió y la izquierda quedó como mero observador de este proceso.

En el caso de los socialistas, denunciaron este fenómeno por medio de la prensa partidaria, con una actitud pasiva en el trabajo con los obreros. Como planteaba una de las entrevistadas, a nivel parla-

mentario tenían peso, pero luego en el trabajo de masas hacían agua. Como planteaba Elisa Rando “teníamos una doble lucha, la interna dentro del partido para que el partido sea un partido socialista, y la de afuera porque tampoco apoyábamos lo que estaba haciendo Perón”. Esto generó un campo propicio, siguiendo con el testimonio, para que Perón se acercara a esos trabajadores postergados y les resolviera, desde la superestructura del Estado, sus necesidades materiales.

Por el lado del PC, los comunistas tuvieron un vínculo más complejo con el peronismo, donde hubo tensiones y contradicciones. Fueron muy críticos ante el surgimiento del peronismo, caracterizándolo como un movimiento nazi-fascista y, por esta razón, sufrieron duramente la censura y la represión. Ya con Perón en el poder, la situación cambió. Se pasó del ataque y la denuncia al nuevo movimiento, a la postura ambigua de “criticar lo negativo y rescatar lo positivo”. Esta actitud se debió, por un lado, a las críticas internas que surgieron dentro del mismo partido, que postulaban un acercamiento al peronismo para seguir estando cerca de la clase obrera. Este “entrismo” terminó con la expulsión de la célula de los ferroviarios y de figuras como Rodolfo Puiggrós, Eduardo Astesano, entre otros (tiempo después el partido adoptó esta postura). Por otro lado, el PCA quedó preso de las directivas que venían del Comité Central de la URSS, que marcaron la nueva línea del partido cuando Perón estableció vínculos comerciales con los rusos.

Entre las críticas de los militantes comunistas llaman la atención dos expresiones: una que refiere a la falta de democracia interna del partido y otra, que se desprende de esta, que marca la distancia que había entre el Comité Central y las bases. Antonio, uno de los entrevistados recordaba el día en que los dirigentes del partido comunicaron la disolución de los sindicatos donde los comunistas tenían peso y el ingreso a los gremios peronistas, ya que argumentaban, los trabajadores en su mayoría eran peronistas y los convenios colectivos los favorecerían. El entrevistado remarcaba que vio llorar a Peter y otras camaradas ante esta decisión. Nunca se hizo una autocrítica ni tampoco se explicó el porqué de este cambio, sobre todo porque, ya planteamos, el peronismo hizo un viraje muy profundo desde sus inicios, pasó de una postura pro-obrera a favorecer en el corto plazo los intereses de una burguesía nacional. Al decir de Marina Kabat, el peronismo puede caracterizarse como un bonapartismo de facto. O como plantea Marcelo Raymundo el peronismo fue una revolución pasiva. Ambas interpretaciones ponen de manifiesto que Perón se quedó con la mayoría de la representación de la clase obrera, aunque el grado de conflictividad se elevó exponencialmente durante sus gobiernos. En definitiva, como plantea Raymundo, consenso político y conflicto obrero se convirtie-

ron en dos caras de la misma moneda. De esta manera, la izquierda cedió su lugar de líder natural de la clase trabajadora, sin la más mínima autocrítica desde las conducciones. Fueron los testimonios de los militantes de base que aquí hemos recopilado quienes advirtieron el problema, señalando que la izquierda dejó pasar un momento histórico frente al peronismo.

BIBLIOGRAFÍA

- Altamirano, Carlos (2001). *Peronismo y cultura de izquierda*. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial.
- Amaral, Samuel (2000). Peronismo y marxismo en los años fríos: Rodolfo Puiggrós y el Movimiento Obrero Comunista, 1947-1955. *Investigaciones y Ensayos*, 50, 171-194.
- Amaral, Samuel (2008). *La renuencia de las masas: el Partido Comunista ante el peronismo. 1945-55*. Buenos Aires: UCEMA, Documento de Trabajo N° 379.
- Camarero, Hernán (2009). Apogeo y eclipse de la militancia comunista en el movimiento obrero argentino de entreguerras. Un examen historiográfico y algunas líneas de interpretación. En Ulianova, Olga (Ed.), *Redes políticas y militancias. La historia política está de vuelta*. Santiago: Universidad de Santiago de Chile/Ariadna Ediciones.
- Correa, Emanuel (2013). Socialistas, comunistas y trotskistas ante el 17 de octubre de 1945. *X Jornadas de Sociología*. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
- Cuttillo, Irene (2018). *Historias gorilas: represión en la Argentina durante los años 1943-1955*. Buenos Aires: Prometeo.
- Del Campo, Hugo (1983). *Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable*. Buenos Aires: CLACSO.
- Germani, Gino (1974 [1962]). *Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas*. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Gurbanov, Andrés y Rodríguez, Sebastián J. (2016). Los comunistas frente al peronismo: 1943-1955. *Temas de Historia Argentina y Americana*, 24. Disponible en: <https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/7655/1/comunistas-frente-peronismo-1943-1955.pdf>
- Herrera, Carlos (2009). Socialismo y “revolución nacional” en el primer peronismo. *El Instituto de Estudios Económicos y Sociales*. - *EIAL*, 20(2).

“Yo no me hice peronista porque... la verdad tenía mucha desconfianza de Perón”...

- Hobsbawm, Eric (1999). *Gente poco corriente. Resistencia, rebelión y jazz*. Barcelona: Editorial Crítica.
- Jáuregui, Aníbal (2012). El peronismo en los debates del Partido Comunista Argentino: 1945-1953. *A Contracorriente* (North Carolina University).
- Kabat, Marina (2017). *PerónLeaks*. Buenos Aires: Ediciones ryr.
- Massholder, Alexia (2012). La relación entre comunistas y peronistas, algunas notas desde la historia. *Cuadernos Marxistas*, 5.
- Mastrángelo, Mariana (2016). Víctor Barrios: un “pionero” del movimiento obrero riocuartense. Experiencia y tradición obrera en el interior argentino. En Pablo Pozzi (Coord.) *Rebeldes e inconformistas. Procesos de politización y rebelión en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO, Imago Mundi.
- Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos (1972). *Estudios sobre los orígenes del peronismo* (Tomo 1). Buenos Aires: Siglo XXI.
- Panella Claudio y Fonticelli, Marcelo (2007). *La prensa de izquierda y el peronismo (1943-1949). Socialistas y comunistas frente a Perón*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
- Perón, Juan (1952). *Conducción Política*. Buenos Aires: Mundo Peronista.
- Raymundo, Marcelo (2021). Peronism in Argentina: Left or right? En Munk, Ronaldo et al. *Rethinking Populism: Latin American Perspectives*. Londres: Palgrave [en prensa]
- Rojo, Alicia (2012). El trotskismo argentino y los orígenes del peronismo. *Revista ARCHIVOS de historia del movimiento obrero y la izquierda*, 1.
- Sidicaro, Ricardo (2002). *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Staltari, Silvana (2014). El Partido Comunista frente al peronismo: estrategia y tácticas políticas, 1945-1955. *Revista ARCHIVOS de historia del movimiento obrero y la izquierda*, 5.
- Torre, Juan Carlos (1990). *La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Williams, Raymond (2003). *La larga revolución*. Buenos Aires: Nueva Visión.

ENTREVISTAS

Entrevista a Elisa Rando, realizada por Liliana Federico en la ciudad de Buenos Aires, en los años 2004-2005. Programa de Historia Oral. Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

Entrevista al Doctor Héctor Polino, realizada por Liliana Federico en la ciudad de Buenos Aires, año 2004. Programa de Historia Oral. Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

Entrevista a Víctor Barrios realizada por Marcos Barbero en la ciudad de Río Cuarto en el año 2004. Programa de Historia Oral. Facultad de Filosofía y Letras. UBA.

Entrevista a Víctor Barrios por Pablo Pozzi y Mariana Mastrángelo en Río Cuarto, en el año 2006. Programa de Historia Oral. Facultad de Filosofía y Letras. UBA.

Entrevista a Otto Vargas realizada por Mariano Andrade en Buenos Aires, en el año 2004. Programa de Historia Oral. Facultad de Filosofía y Letras. UBA.

LOS TRABAJADORES DE NORWINCO: DEL OPERATIVO TUCUMÁN AL OPERATIVO INDEPENDENCIA

Ana Sofía Jemio

INTRODUCCIÓN

Este escrito se inscribe en una investigación de largo aliento que parte de las siguientes preguntas: ¿quiénes fueron las víctimas del genocidio en Tucumán? ¿Por qué fueron perseguidas?¹ Estas preguntas han emergido de una pesquisa anterior acerca de las formas de la violencia estatal en el sur tucumano durante el Operativo Independencia (1975-1976). Allí se observó que el conjunto de las víctimas difícilmente es aprehendido a través de grupos categoriales tales como “militantes”, “personas comprometidas” o similares. La dinámica represiva no se organizó únicamente a través del criterio individualizante de la acción de inteligencia —es decir, aquel que determinó los cuerpos a secues-

1 Esta investigación forma parte del Proyecto de Investigación Aplicada, Desarrollo y Transferencia (PIADT) 2020-2021, Estudio sobre las víctimas del genocidio en Tucumán, para promover la recuperación de identidades e historias locales en el “Espacio para la Memoria Escuelita de Famaillá”, radicado en el Centro de Estudios sobre Genocidio (UNTREF) y el Observatorio de Crímenes de Estado (UBA). El proyecto tiene como organizaciones destinatarias a la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán y al Espacio para la Memoria Escuelita de Famaillá. Bajo mi dirección y la de Julia Vitar, como parte de este proyecto se ha conformado un grupo de estudiantes universitarios con quienes se sostienen instancias de formación y de desarrollo de tareas de asistencia en investigación.

trar—. Se organizó, también, por un segundo criterio —esta vez totalizante— que identificó, clasificó y priorizó territorios a atacar.

Pero los hallazgos de la investigación mostraron algo más: dentro del territorio definido como blanco de ataque, no eran secuestrados solos los “militantes”, ni siquiera solo los simpatizantes o afines. ¿Cómo explicar ese grupo de víctimas sin apelar a la maldad, irracionalidad o exceso de los ejecutores? El camino elegido fue revisar la idea de militancia: en lugar de considerarla como un atributo individual de la víctima que la hace pertenecer a un colectivo (organización de militancia, lugar de militancia, etc.), la consideré como un producto que se gesta en un determinado tiempo y lugar (Jemio, 2021).

Para ello se planteó como hipótesis que las víctimas formaban parte de una territorialidad social (Izaguirre, 1994; Marín, 2009; Silveyra, 2018) organizada como red de redes, esto es, construida por vínculos tanto al interior de determinados grupos como entre grupos. Y que las distintas políticas represivas desplegadas durante el genocidio (Feierstein, 2007) tuvieron por objetivo la desarticulación de esas territorialidades sociales. Desarticulación que incluyó no solo la destrucción de los distintos agrupamientos del campo popular y sus vínculos, sino también la transformación de las condiciones que hacían posible esos agrupamientos: una cultura contestataria que se había forjado en décadas de lucha y que se expresaba en una manera de entender la realidad en términos de antagonismo social (Pisani, 2016; Pozzi, 2012).

Para avanzar con esta hipótesis de investigación —emergida de un estudio basado en dinámicas globales y en técnicas de tipo cuantitativo— me he propuesto desarrollar estudios de caso sobre grupos de víctimas de la clase trabajadora, sobre los cuales buscaré reconstruir y caracterizar: a) la trama comunitaria de la que las víctimas formaban parte, b) el entramado productivo en el que se ubicaban y los vínculos que permitió forjar con otros núcleos obreros; c) la organización sindical y política en esos espacios de trabajo y los vínculos que se forjaron con otros ámbitos sociales, y d) la trama represiva de la cual resultó ese grupo de víctimas.

Uno de los casos de estudio es el de los trabajadores de Norwinco, una fábrica que se instaló a fines de 1971 en Bella Vista, localidad al sur de Tucumán. La planta —dedicada a la producción de pasacasetes, motores, grupos electrógenos y motosierras— llegó a emplear alrededor de 120 trabajadores, 15 de los cuales fueron secuestrados entre 1975 y 1976.

Este trabajo resume los primeros avances en la investigación de este caso, atendiendo a la trama productiva de la que hacía parte la fábrica, el proceso de organización de las/os operarias/os —que crea-

ron un cuerpo de delegados y desafiaron a la conducción histórica de la UOM— y la represión de la que fueron objeto. Represión que tuvo características para-estatales y policiales primero, para quedar luego en manos del Ejército, durante el llamado Operativo Independencia.

NORWINCO, LAS METALÚRGICAS Y EL OPERATIVO TUCUMÁN

Cuando la Norwinco se instaló en Tucumán en 1971, la actividad metalúrgica ya tenía una historia en la provincia. Pero era una historia que se movía al compás de un ritmo ajeno: el que marcaba la agroindustria azucarera.

Como explica el historiador Roberto Pucci (2007), los dos períodos con un crecimiento importante en la actividad metalúrgica estuvieron ligados a momentos de transformación en el mundo azucarero. En la década del treinta, el crecimiento fue por la necesidad de sustituir la producción de las piezas y maquinarias que necesitaba la agroindustria tanto para las tareas agrícolas como para las industriales.² Entre la década del cincuenta y los primeros sesenta ese crecimiento fue deudor de la mecanización y reequipamiento industrial que se produjo en el sector azucarero durante aquellos años.

También la crisis que azotó en la segunda mitad de los sesenta a los más de 100 talleres metalúrgicos que existían en aquel entonces tuvo como epicentro la agroindustria azucarera.³ Es que entre 1966 y 1968 la dictadura militar encabezada por Juan Carlos Onganía cerró 11 de los 27 ingenios azucareros que existían en la provincia. Esto generó una honda crisis económica, social y política, cuyos efectos marcaron por décadas el destino de toda la provincia y su población.⁴

Uno de los aspectos más críticos de aquel contexto fue, naturalmente, la destrucción de puestos de trabajo que afectó no sólo a la agroindustria sino a todas las actividades económicas que directa o indirectamente dependían de ella. Tucumán presentó los índices de desocupación más altos del país, que no fueron aún más escandalosos porque aproximadamente 1 de cada 4 tucumanos se fue de la provincia en busca de sustento.

2 Para un análisis sobre el desarrollo de la industria metalúrgica asociada a la agroindustria azucarera entre 1870 y 1940, ver Moyano (2012).

3 En menor proporción, el sector metalúrgico producía también para otros rubros económicos, como trabajos viales e industria de la construcción (Pucci, 2007, pp. 149-150).

4 Las dos obras de referencia para comprender el cierre de ingenios en la provincia son las de Roberto Pucci (2007) y Silvia Nassif (2016). Para otros trabajos que analizan algunas consecuencias del cierre de ingenios en la provincia, ver Crenzel (1991), Murmis y Waisman (1969), Osatinsky (2006), Paolasso y Osatinsky (2007).

El gobierno militar justificó esta política de concentración y centralización de capitales con el dogma de la eficiencia: el país no podía subsidiar una industria deficitaria e incapaz de sostenerse por sí sola.⁵ Prometió diversificar la estructura económica provincial y absorber, así, la mano de obra desplazada por el cierre de los ingenios. Para encarar esta tarea creó el llamado Comité Operación Tucumán (COT).⁶

Las promesas de cambio se formalizaron en el Plan de Transformación Agroindustrial de la Provincia de Tucumán que preveía una serie de incentivos para lograr el desarrollo y diversificación de actividades agrícolas e industriales. Como la creación de empleo por estas vías seguiría un ritmo ajeno a las urgencias de la desocupación tucumana, se creó de manera complementaria un Régimen de Trabajos Transitorios que consistía, básicamente, en distintas formas de subsidios o empleos estatales precarios.⁷

5 Distintos estudiosos han señalado que el desbloqueo del neoliberalismo en el mundo, esto es, su concreción como proyecto civilizatorio, se produjo en Chile con el golpe de Estado de 1973. Y señalaron que allí tuvo un rol muy importante la Escuela de Chicago (Klein, 2010; Murillo, 2012). El historiador Roberto Pucci (2007, pp. 140-141) también advierte sobre el rol que tuvo esta casa de estudios en el experimento tucumano a través de una alianza estratégica con distintas instituciones académicas que legitimaron el proyecto de reforma estructural de la economía tucumana. La influencia del proyecto neoliberal continuó, según el autor, en los planes previstos para la transformación de la economía tucumana, para lo cual se contrataron servicios de distintos organismos tecnocráticos y académicos que tenían vínculos con las usinas neoliberales.

6 El COT se creó mediante el Decreto-Ley 17010, aprobado el 10 de noviembre de 1966. Debía planificar y ejecutar medidas que alivien la emergencia económica de la provincia a través del desarrollo agroindustrial. Esta normativa fue modificada por la Ley 18202, aprobada el 9 de mayo de 1969, que ampliaba los beneficios previstos para las actividades económicas que se instalen en la provincia o amplíen las existentes.

7 El derrotero del Régimen de Trabajo Transitorio muestra la eficacia de la organización de los trabajadores a la hora de garantizar su propia subsistencia. Inicialmente, el gobierno planteó como objetivo de esta política “proveer ocupación a obreros y empleados de ingenios cerrados mientras se logra la instalación de fuentes definitivas de trabajo”. En consecuencia, destinó por tiempo acotado indemnizaciones y compensaciones para trabajadores de ingenios cerrados y cañeros afectados por la expropiación de sus cupos de producción. Cuando seis meses después las protestas se multiplicaron por toda la provincia, el gobierno local implementó un sistema de empleo transitorio (conocido más tarde como Bolsa de Trabajo) por el cual se contrataba (de manera inestable, con paga reducida y sin beneficios sociales) a obreros de ingenios cerrados (muchos de ellos calificados) para tareas como desmonte, limpieza de canales, etc. Este sistema, al que finalmente se llamó Régimen de Trabajo Transitorio fue ampliando sus destinatarios y dejó de ser exclusivamente para obreros de ingenios cerrados. Su amplitud y renovación fue materia de disputa con los distintos gobiernos. Disputa que fue ganada por los trabajadores, que lograron, en 1972, la incorporación a la planta estable de la administración pública provincial (Consejo Federal de Inversiones, 1973).

El Plan fue un verdadero fracaso si se lo mide por su objetivo central: generar trabajo. Solo la emigración masiva de tucumanos y la recuperación de la actividad azucarera en los primeros setenta permitieron que los niveles de desocupación en la provincia comenzaran a mejorar, aunque siguieron siendo más altos que a nivel nacional.

El plan de transformación industrial —ítem que nos ocupa aquí— no modificó un elemento central en la composición del empleo fabril: los ingenios azucareros siguieron siendo (aun con 11 fábricas menos) el rubro que mayor empleo generaba, aunque la proporción que ocupaba en relación al total de los trabajadores de industria fue menor.

Hasta 1965, los 27 ingenios ocupaban directamente 33 mil personas, mientras que el resto del sector industrial, compuesto por 700 empresas, llegaba apenas a los 5.300 trabajadores. En 1974, después de ocho años de régimen de promoción industrial con el que se radicaron o ampliaron 69 nuevas empresas en la provincia, los ingenios seguían siendo los mayores empleadores, pero ahora representaban el 41% del empleo total en las industrias.

Cuadro 1
Cantidad de trabajadores según tipo de industria

	1965		1974	
Industria azucarera	33.000	86%	17.546	41%
Industrias no azucareras	5.300	14%	24.784	59%
Total	38.300	100%	42.330	100%

Fuente: Para 1965, Mentz y Elías (1966, citado en Consejo Federal de Inversiones, 1973, p. 11). Para 1974, Secretaría de Estado y Planeamiento y Coordinación (1977, p. 203).

No obstante, sí hubo algunos cambios en la composición de la estructura industrial que interesan destacar para comprender el lugar de Norwinco, en particular, y las metalúrgicas, en general, dentro de la lucha de clases en la provincia durante los setenta.

Uno de estos cambios es la radicación de establecimientos industriales de mayor tamaño que reunían a un número importante de trabajadores, característica que hasta entonces era casi privativa de los ingenios. Como se observa en el siguiente cuadro, con solo 65 empresas promovidas se crearon más del doble de los empleos que había en 1965 en los establecimientos industriales no azucareros. Si antes los establecimientos de más de 100 obreros eran una rareza (6 sobre 739), un tercio de las empresas promovidas tenían esta característica.

Cuadro 2
Cantidad de empresas según número de trabajadores empleados

	1965	1974
1 a 50	724	29
51 a 100	9	13
101 a 500	6	18
Más de 500	0	5
Total empresas	739	65
Total trabajadores	5276	11679

Fuente: Para 1965, Mentz y Elías (1966, citado en Consejo Federal de Inversiones, 1973, p. 11). Para 1974, Secretaría de Estado y Planeamiento y Coordinación (1977, p. 206).

Incluso el nivel de concentración es mayor si miramos la composición interna de esas empresas: solo las 5 más grandes generaban la mitad de todo el empleo. Se destacaban en ella las textiles Alpargatas y GRA-FANOR, que sumaban poco más de 3 mil trabajadores. En efecto, el rubro textil era el primero en orden de importancia entre las nuevas fábricas: con 10 plantas representaba el 40% del valor total de la producción de las 69 existentes. Le seguía el rubro productos metálicos, maquinaria y equipos con 17 establecimientos y el 23% del valor total de producción (Secretaría de Estado y Planeamiento y Coordinación, 1977, p. 205). En este último rubro estaban, entre las más grandes, Motorola y Fedders (de BGH/SICOM),⁸ Bosch y Norwinco.

Con unos 120 obreros, Norwinco era una de las 23 fábricas más grandes que se habían instalado con el Operativo Tucumán. La planta se construyó en Bella Vista, un pueblo azucarero al sur de la capital tucumana que había resistido el cierre del ingenio y logrado su reapertura, pero que igualmente sufría los efectos de la desocupación generalizada en la provincia. Además de Norwinco, se instaló allí una fábrica de fósforos que ocupaba menos de 100 personas.

Como en el resto de los pueblos azucareros, la diferencia de magnitudes era palpable: el ingenio Bella Vista empleaba en 1976, solo para sus tareas industriales —es decir, sin contar la cosecha y traslado de la caña—, 925 trabajadores permanentes y 2.316 transitorios (Secretaría de Estado y Planeamiento y Coordinación, 1980, p. 300). No

8 La empresa Boris Garfunkel e Hijos (BGH) se dedicó inicialmente a la comercialización y distribución de electrodomésticos. En la década del sesenta se transforma en fabricante mediante convenios con Fedders y con Motorola, ambas estadounidenses. La alianza con Motorola tomó forma a través de otra firma, SICOM, que pertenecía al mismo grupo.

obstante, si se tiene en cuenta que el casco urbano de Bella Vista tenía por ese entonces 7.013 habitantes, no dejaba de tener su importancia una fábrica que daba sustento a 120 familias (Secretaría de Estado y Planeamiento y Coordinación, 1980, p. 55).

La compañía Norwinco fue creada oficialmente en 1970 como subsidiaria de la empresa Winco, cuyas plantas de producción estaban en la Provincia de Buenos Aires. Winco había comenzado como un taller de fabricación de tocadiscos en 1954, pero pronto tuvo una expansión que la llevó adquirir licencias extranjeras e incorporar nuevos productos. Como estrategia de supervivencia frente a la crisis que atravesó entre 1962 y 1963, la empresa diversificó su producción incorporando la fabricación de grupos electrógenos y motores, al tiempo que impulsó la exportación de sus productos. Esta estrategia permitió una nueva etapa de expansión, en el marco de la cual decidieron, en 1969, crear la empresa subsidiaria Norwinco (Pampín, 2008). En 1971 solicitaron y obtuvieron la inclusión de la fábrica dentro de los beneficios del régimen de promoción industrial del que gozaba la provincia.⁹ Así, trasladaron a Tucumán la producción de la línea de grabadores-reproductores de cinta y reproductores para autos. Además, en 1973 recibieron autorización para fabricar motores y grupos electrógenos con el compromiso de exportar el 60% de la producción.

Durante los primeros setenta la empresa fue generando un desequilibrio financiero que terminó por afectar la dinámica productiva a partir de 1973-1974, cuando el contexto macroeconómico generó dificultades en la demanda interna y en la capacidad de exportación (Pampín, 2008). En ese contexto crítico, la empresa demoró el pago de salarios y de contribuciones sociales, generando conflictos gremiales tanto en las plantas de Buenos Aires como en la de Tucumán. La empresa respondió con suspensiones y despidos, provocando nuevas medidas de protesta. Los trabajadores de ambos lugares denunciaron, además, maniobras de vaciamiento de la fábrica y exigieron garantías sobre la continuidad de sus puestos de trabajo.

En este contexto de crisis, en 1974 la firma se acogió a un régimen de rehabilitación que otorgaba el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), institución que designó en 1975 un veedor y otorgó nuevos

9 En virtud de este régimen, la empresa obtuvo a) la exención de los impuestos a los réditos y sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes en un 100% durante cuatro años, decreciendo gradualmente hasta el 10% en el décimo año; b) la exención de impuesto a los sellos y de impuesto a las ventas en un 100% durante los dos primeros años, bajando gradualmente hasta el 25% en el quinto año; y c) la exención de recargos aduaneros a la importación de maquinaria y repuestos por valor de 182 mil dólares para la sección motosierras (Consejo Federal de Inversiones, 1973, pp. 149-165).

préstamos con el objetivo de preservar las fuentes de trabajo y producción. La crisis, sin embargo, se profundizó. En el caso de Winco, el BANADE terminó nombrando el directorio que intervino con un plan cuyo objetivo era la reorganización administrativa y el restablecimiento de la “disciplina” en la fábrica (Pampín, 2008). En Norwinco, no hubo una intervención directa del BANADE, aunque sí nuevas designaciones en 1974, que, como se verá, llegaron con la firme decisión de disciplinar a los trabajadores.

FLORENCIO ROBLES, LA UOM Y EL CUERPO DE DELEGADOS

Durante el Operativo Tucumán se instalaron en la provincia 17 fábricas metalúrgicas. La consecuencia lógica fue el aumento en el número de trabajadores a ser representados por la bien disciplinada Unión Obrera Metalúrgica (UOM) filial Tucumán, que tenía su propio Vandor: “Florencio Robles era un patrón. Era el patrón. Estaba rodeado siempre de un montón de guardaespaldas”, cuenta Raúl, un ex trabajador de la Norwinco.¹⁰

Como Vandor, el *Chancho* Robles no solo fue secretario general de la UOM: condujo la Confederación General del Trabajo (CGT) provincial y, durante el tercer gobierno peronista, fue nombrado delegado regional del Ministerio de Trabajo en Tucumán. Su base estuvo siempre en la UOM y, por eso, la construcción de poder adentro del sindicato y el control de los delegados de fábrica fue una política constante.

Una pieza clave de esa estrategia era la renovación de las autoridades del gremio. En 1965, 1968, 1970 y 1972 se había impuesto la lista de Robles usando distintos artilugios: impugnación de la lista opositora, presentación de un padrón complementario con votantes no metalúrgicos, elección de la junta electoral sin presencia de la mayoría de los delegados.¹¹

10 Todas las citas de Raúl fueron extraídas de la entrevista que le hice en Bella Vista, en enero de 2021, en el marco del PIADT “Estudio sobre las víctimas del genocidio en Tucumán para promover la recuperación de identidades e historias locales en el Espacio para la Memoria Escuelita de Famaillá”.

11 La reconstrucción del conflicto gremial que se presenta en este apartado fue realizada a partir de la siguiente prensa partidaria: *El Descamisado* (Buenos Aires), Año 1, N° 27, 20 de noviembre de 1973, pp. 10-11; *El Descamisado* (Buenos Aires), Año 1, N° 44, 19 de marzo de 1974, pp. 12-14; *Militancia peronista para la liberación* (Buenos Aires), Año 1, N°18, 11 de octubre de 1973, pp. 24-25; *Militancia peronista para la liberación* (Buenos Aires), Año 1, N°16, 27 de septiembre de 1973; *Estrella Roja* (Buenos Aires), N° 37, Lunes 5 de agosto de 1974, pp. 17 y 19; *Estrella Roja* (Buenos Aires), N° 40, Lunes 23 de septiembre de 1974, p. 6; Informe sobre el Movimiento Sindical de Base (MSB) (s/f circa 1974); *Izquierda Popular* (Buenos Aires), Año 1, N° 1, 1° al 15 de septiembre de 1972, p. 1.

Pero en la última elección, la de 1972, la cuestión no fue sencilla: “Ellos han tenido problemas tremendos porque había unas elecciones donde les gana Guía, un trabajador de apellido Guía. Ese era muy combativo, revolucionario era ese. Y lo matan” (Raúl, entrevista, enero de 2021).

Para entender ese conflicto hay que remontarse a octubre de 1971. Con las elecciones previstas para algunos meses después, la UOM había decidido regularizar la designación de delegados dentro de las plantas porque solo 12 de los 50 establecimientos metalúrgicos tenían representantes oficiales ante la UOM.

Como resultado de ese proceso, había poco más de 100 delegados que debían ser convocados a un congreso donde se designaría la junta electoral para dar paso a la renovación de las autoridades del sindicato. Ese congreso, que se hizo en febrero de 1972, reunió a tan solo 17 delegados. Fueron menos aun los que eligieron la junta electoral que impugnó a la lista opositora y validó únicamente a la de Robles.

Con esa maniobra, habían dejado afuera a los delegados opositores que impulsaban una democratización del gremio, muchos de ellos provenientes de las nuevas fábricas instaladas durante el Operativo Tucumán que, como se ha señalado, reunían un número importante de trabajadores.

Esto motivó una protesta de los obreros que habían solicitado a la dirección nacional del gremio la impugnación de la lista de Robles. Amenazaron, incluso, con desafiliarse de la UOM si no obtenían respuesta. Pero la chispa que terminó de desatar el conflicto vino por la suspensión de un delegado de SICOM/Motorola. Sus compañeros y los obreros de Fedders hicieron un paro y luego se dirigieron al local de la UOM para pedir la intervención del gremio. Como no recibieron una respuesta favorable, tomaron la sede sindical y convocaron a otros metalúrgicos en su apoyo. En asamblea, unos 800 trabajadores resolvieron desconocer la comisión directiva que se había elegido en febrero de manera fraudulenta y designar una provisoria que convocase a elecciones en un plazo de un mes y medio. Al frente de la nueva comisión estaba Juan Carlos Guía, obrero del taller De la Porte, miembro de la Agrupación Metalúrgica Felipe Vallese y militante del Peronismo de Base. Ese mismo día, un sábado 26 de agosto de 1972, un grupo de 4 personas encabezado por el propio Robles entró en la sede de la UOM y disparó por la espalda a Juan Carlos Guía, quien murió unas horas después.¹²

12 Para ampliar sobre este conflicto, ver Nassif (2014, pp. 589-590).

Pese a la protesta y repudio generalizado de los trabajadores¹³ y a los tibios intentos de la justicia por investigar lo ocurrido, la conducción de Robles siguió e incluso ganó, con otro fraude, las elecciones de 1974. También siguió y creció la organización de comisiones internas y cuerpos de delegados dentro de las fábricas, la mayoría de los cuales no eran reconocidos oficialmente por el gremio:

Dos o tres veces fuimos a visitarlo [a Florencio Robles] porque nosotros éramos delegados, pero no reconocidos por la UOM. Los únicos que representaban a la UOM eran los que ellos aceptaban como delegados. Se elegía ahí [en la fábrica], pero lo aceptaba la UOM. Yo no he sido aceptado por la UOM porque yo era interno. (Raúl, entrevista, enero de 2021)

Rolando —también obrero de la Norwinco— dice que los delegados internos eran entre 4 o 5, y había dos reconocidos por la UOM.¹⁴ Él cree que en ese momento se peleó como se peleó porque en la fábrica había una democracia que consistía en defender lo justo, “lo que tiene que ser”, independientemente de las opiniones políticas de cada quien:

Yo no pensaba como un gremialista, yo pensaba únicamente como una persona que estaba luchando por mí, por mi familia, y por los que estábamos ahí. [...] Decirte que uno salía a la calle y éramos, así, gremialistas: mentira. Si no teníamos ni una bandera siquiera, ni un pasacalle teníamos si quiera para poner. No éramos tan así. Pero sí defendíamos. Y sí, no te puedo discutir, sí había pensamiento, muchachos más grandes que estaban ahí que sí tenían su pensamiento en política. (Rolando, entrevista, marzo de 2021)

Ese pensamiento era de izquierda y esos muchachos tenían vinculación con algunas organizaciones políticas: algunos con el Partido Comunista, otros con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Éste último había formado distintos frentes de masa en el contexto del retorno democrático de 1973, entre ellos el Movimiento Sindical de Base (MSB). Uno de sus planteos centrales era la convergencia

13 Frente al asesinato de Guía, la Agrupación Metalúrgica Felipe Vallese decidió la desafiliación masiva de la Seccional mientras seguía exigiendo el desplazamiento de Robles. Además, distintas agrupaciones como Junta Popular Metalúrgica del Frente de Izquierda Popular (FIP), el Partido Comunista Argentino, el Movimiento Juvenil de Recuperación Sindical y la Juventud Obrera Metalúrgica repudiaron el asesinato y exigieron una investigación judicial.

14 Todas las citas de Rolando fueron extraídas de la entrevista que le hice en San Miguel de Tucumán, en marzo de 2021, en el marco del PIADT “Estudio sobre las víctimas del genocidio en Tucumán para promover la recuperación de identidades e historias locales en el Espacio para la Memoria Escuelita de Famaillá”.

de todas las líneas y expresiones antiburocráticas hacia una centralización organizativa y programática (Stavale, 2019). Coincidían en este punto con distintas corrientes políticas de la izquierda marxista y peronista. En efecto, luego del asesinato de Juan Carlos Guía, la Agrupación Metalúrgica Felipe Vallese —con peso dentro de la línea antiburocrática de la UOM— había planteado como línea la “unidad en la acción, con organización para garantizar que los esfuerzos no se desperdicien y con solidaridad con los que luchan por nuestros objetivos” (*Militancia peronista para la liberación*, 11 de octubre de 1973, p. 25). De este modo, la lucha antiburocrática hacía converger en listas sindicales, cuerpos de delegados u otras instancias organizativas a trabajadores de distintas corrientes políticas y con distintos grados de politización bajo los principios comunes de exigir mejoras en las condiciones de vida y trabajo y el ejercicio de la democracia sindical.

Como había coincidencia “en lo que tiene que ser”, como dice Rolando, todos juntos se organizaron para dar pelea a una situación que amenazaba con dejarlos sin trabajo:

La fábrica era prácticamente un taller de armado: todo venía de Buenos Aires y había que armarlo ahí. Decían fábrica, pero no. Te recalco esto por qué: estas cosas han sido por intermedio del gobierno. Resulta que ellos le daban 10 años sin pagar impuestos a cada fábrica que se instalaba en Tucumán en ese tiempo. 10 años. [...] Al no pagar impuesto, todo lo que pasaba por la aduana no lo pagaba. Entonces Winco Buenos Aires importaba 3, 4 o 5 máquinas y qué hacían: la traían acá a la Norwinco: “Es para Norwinco” porque Norwinco no pagaba. Si decían que era para Winco, tenían que pagar, entonces las traían para acá, paraban, las tenían un tiempito y las llevaban allá. Ahí llegó un momento en que nosotros empezamos a ver que iban sacando cosas y la iban desmantelando a la fábrica. Ahí es donde se hace paro. Yo estaba en la parte gremial, era gremialista. Decíamos que no tenía que ser así porque nos íbamos a quedar todos sin trabajo. (Rolando, entrevista, marzo de 2021)

Las maniobras de la fábrica también fueron denunciadas por los trabajadores de la planta Ciudadela de Winco. En julio de 1974, fueron despedidos 90 trabajadores de la fábrica luego de participar en una huelga exigiendo el pago de los salarios atrasados. Allí denunciaron que la firma alegaba falta de trabajo, pero, en realidad, se había llevado maquinaria a la planta de Pacheco y de Tucumán, ambas registradas bajo la firma Norwinco (*Noticias*, 12 de julio de 1974, p. 8).

Para evitar el vaciamiento y cierre de la empresa, los trabajadores de Norwinco tomaron medidas:

Hemos estado en paro nosotros, como dos o tres meses de paro. Ahí hacíamos grupos, de noche nos íbamos reemplazando. Teníamos unos aco-

plados y ahí se hacía un fogón folclórico, de noche. En la época esa estaba el furor de Horacio Guarani. Todas las canciones folclóricas, había varios guitarreros, varios muchachos que tocaban instrumentos y ahí se hacía un fogón.

— Pregunta: ¿En apoyo a la huelga?

— Claro, para pasar la noche. (Raúl, entrevista, enero de 2021)

El conflicto terminó con un acuerdo entre los trabajadores y la patronal según el cual la empresa podía llevar las maquinarias con la promesa de reemplazarlas por otras nuevas. Pero lo que llegaron no fueron nuevas máquinas sino suspensiones para trabajadores que habían participado activamente de la medida de fuerza. La respuesta fue un paro total que obligó a la empresa a dejar sin efecto las suspensiones.

En este contexto de conflictividad, en algún momento del primer semestre de 1974 llegó a la fábrica el militar retirado José María Menéndez en calidad de jefe de relaciones industriales. Su hermano, Luciano Benjamín, era entonces el comandante de la Vª Brigada de Infantería, es decir, la principal autoridad militar en Tucumán.

José María Menéndez no estaba solo:

Florencio Robles. Le mandaba guardaespaldas para que lo protejan a Menéndez. Tenía chofer. Sabíamos todos. Amdor [trabajador de Norwinco desaparecido] nos decía: “este es el Loco Tito, lo manda Florencio Robles para que lo custodie. Este es el que lo ha matado a Guía”, decía, me contaba. Porque ellos sabían, seguro que había sido así. (Raúl, entrevista, enero de 2021)

El que también iba acompañado a la fábrica era el gerente general Carlos Víctor Brignolo. Según declaró uno de los empleados en 1974: “por los problemas laborales que se suscitaron no hace mucho, lo acompañan empleados policiales de la ciudad Capital”.

También había policías, pero de civil, infiltrados en la fábrica:

Vinieron los servicios de inteligencia de la Federal y se han metido ahí como trabajadores en la fábrica [...]

—Pregunta: ¿Cómo se dan cuenta que llegan los de la Federal?

—Porque nos enteramos. Te comento, resulta que nos hicimos amigos con ellos. Una vez al más cercano, que trabajaba justo en mi sección, lo invito a mi casa a comer un asado y nos ponemos a charlar. Me cuenta que venían de allá de Buenos Aires y que la situación estaba mal [...]. Él comentaba que la fábrica estaba mal allá, y me aconsejaba que dejara de pertenecer como delegado interno “porque vas a perder —me decía—, no, no te metás, hacéte al lado, te van a pasar cosas malas a vos, no te conviene. Te digo, por favor, no te metás, retiráte”. Mi padre estaba ahí también y me dice “bueno,

mirá lo que te ha dicho”, ya sabíamos, ya teníamos conocimiento que eran milicos. (Raúl, entrevista, enero de 2021)

Raúl no se fue en ese momento, sino algunos meses después cuando la presión sobre los trabajadores aumentó.¹⁵ Hubo telegramas de despedido, desabastecimiento de materia prima que interrumpía la producción y auguraba nuevos desempleados y distintos actos de persecución y hostigamiento contra los activistas. Producto de ello, otros tres trabajadores, que luego serán secuestrados en 1975, dejaron también la fábrica.

MILITANCIA Y CULTURA CONTESTATARIA

En la introducción señalaba que la hipótesis que funciona como norte de esta investigación es que el genocidio no solo se propuso destruir la red de organizaciones que supo construir el campo popular, sino que también buscó transformar mediante el terror una cultura contestataria.

Esta cultura contestataria no es equivalente a “muchas personas militando” ni es el resultado de influencias externas que les “revelan” o les hacen tomar conciencia a las personas acerca de las injustas condiciones en las que viven. Pablo Pozzi (2015) propone “invertir los términos de nuestra observación y análisis” y estudiar la politización como un proceso social complejo, que tiene como punto de partida irremplazable la experiencia práctica concreta de la clase. Es allí donde se forjan valores, sentimientos, percepciones y pautas culturales que se articulan en una forma de entender la realidad en términos de antagonismo social. En otras palabras, en un sentido común clasista que no siempre puede explicarse como el resultado de una racionalización de la experiencia de los trabajadores ni tener el grado de articulación propio de una ideología formal.

Ubicar el proceso de politización en el plano de las condiciones humanas de existencia no significa negar poder a las propuestas políticas (organizativas) y sus expresiones ideológicas más explícitas. Es, en cambio, advertir que existe una relación dinámica y compleja entre ambas instancias, relación que no es de exterioridad (Jemio y Pisani, 2021).

La experiencia organizativa de Norwinco que se reconstruyó hasta aquí constituyó el ámbito concreto de articulación en la acción de

15 El derrotero de Raúl permite seguir el rastro de las coordinaciones entre los servicios de inteligencia y las fábricas. Fue empleado en el Ingenio Fronterita y pasado el período de prueba, con un desempeño satisfactorio, le dijeron que no podían efectivizarlo porque los informes de la Norwinco eran demoledores: era subversivo.

sujetos con diferentes trayectorias, experiencias, filiaciones políticas y orígenes de clase. En este apartado, referiré brevemente algunas reflexiones de Raúl y Rolando acerca de cómo piensan ellos su propio proceso de politización y su vinculación con las luchas sindicales.

Raúl nació en 1948, junto con su hermano mellizo. Siete hermanos fueron en total. Dice él que con tantos hijos que se tenían en esa época no había sueldo que alcance. Su padre de sueldos sabía, porque trabajaba en el escritorio del ingenio, liquidando sueldos y jornales. En la jerarquía del mundo azucarero, el puesto ranqueaba alto pero su padre, a diferencia de su tío, era más “obrerista” y en lugar de ir a la confitería a tomar un trago con los de su stirpe, se iba a comer empanadas con los trabajadores.

“A mí siempre me ha gustado la política porque a mi padre le gustaba mucho, le encantaba a él la política”, cuenta Raúl. Su papá era radical, radical, “por supuesto radical no antiperonista”, aclara:

Yo tuve el ejemplo de eso, porque hay radicales antiperonistas. Mi madre era antiperonista, pero... Yo tenía 6 o 7 años cuando dan el golpe a Perón. Sabíamos tener una radio chiquitita. La gente del fondo aplaudía, yo decía: ¡cómo puede ser! Él era albañil y creo que cosechero del ingenio, tenía 5 hijos y todo, vivían pobrementemente. Nosotros también, lo mismo, pero teníamos radio. Como a las 6 o 7 de la tarde se prendía la radio para escuchar el informativo de Buenos Aires, todo lo que estaba sucediendo allá después del golpe. Y los escuchábamos a los de atrás que aplaudían. Mi padre no. Mi padre siempre ha sido más obrerista. Él tenía un hermano que trabajaba también en el escritorio. Él se enojaba con mi padre porque tiraba más para los obreros. Como él estaba en sueldos y jornales, había gente que tenía que cobrar y no sabía. Entonces él los hablaba: ¡Eh!, vení, cobrá. Ya está para que vengas a cobrar. Eso a mi tío no le gustaba, era más patronal, más cuadrado. Pero peronista. (Raúl, entrevista, enero de 2021)

Raúl trae en su relato un “más allá” de las identidades políticas explícitas al que le pone nombre: su papá era más “obrerista”. Algo parecido, aunque bajo otro nombre identifica Rolando. En su familia, de política mucho no se hablaba. “Había un entrevero”, me contesta cuando le pregunto por quién votaban en su casa: una parte de la parentela era radical, la otra peronista. De lo que sí se hablaba en su casa o, mejor dicho, se hacía, era de otra política, una que Rolando dice que se hace día a día:

Algunas veces me llama la atención cuando dicen “yo no soy político”. No. Si vos sacás bien las cosas y ves, todos son políticos. En qué sentido: en

aquel negocio está un bote de aceite a 100 pesos, en aquel otro está a 80. Yo me voy para allá a comprar el de 80. Ahí ya estás haciendo política vos. Vos estudiá bien la política y vas a ver que la estás haciendo. [...] La política es parte de la vida. La política de los chorros estos, no. Esa es otra cosa. (Rolando, entrevista, marzo de 2021)

De esa política de todos los días sí que se hacía en su casa. Cuando me dijo que el arma más poderosa que tenían en ese momento estaba acá (señalándose la cabeza), le pregunté de dónde venían esas ideas:

De la misma crianza que uno tiene, querida. Y después de ver la gente, te digo, mi padre trabajaba en el ingenio y uno sabía, qué era ser empleado de ingenio, trabajador de ingenio, del surco. Uno sabía cómo era la cosa. Después en la fábrica no podías no defender algo que estaba fuera de lo normal. (Rolando, entrevista, marzo de 2021)

Lo que estaba fuera de “lo normal”, de “lo justo”, de “lo que tiene que ser” era lo que perjudicaba al obrero. Y la política, la otra, la de los partidos, no podía nublar ese acuerdo, me dice Rolando y me lo explica con una metáfora:

Si nosotros decidimos poner ese poste de luz [señala], capaz que yo soy de la idea de ponerle un foco cuadrado. Y vos me decís: no, mirá, yo lo quiero poner redondo. Y me mostrás y capaz que a mí me gusta y te digo: tenés razón, lo pongamos redondo. Si nos quedamos peleando por eso, nos quedamos todos a oscuras. (Rolando, entrevista, marzo de 2021)

En los aprendizajes de ambos, la experiencia del cierre de ingenios en Tucumán tuvo un lugar central. Recuerdan ese sentido de la solidaridad que estaba en la base de la capacidad de resistencia de los trabajadores. Ni la familia de Raúl ni la de Rolando se habían llevado la peor parte en esa historia: a diferencia de los 40 mil o 50 mil desocupados que dejó la crisis, los padres de ambos habían conservado sus trabajos. Eso sí, en condiciones más precarias o con sus ingresos disminuidos. “En esa época, nosotros vendíamos pan —cuenta Raúl—. Como éramos muchos en la casa, siete, yo salía a vender pan con mi hermano. Teníamos un carrito y repartíamos acá, todo esto”. Con la cabeza a flote, como podían, participaban de una cadena de solidaridades que hacía posible la subsistencia de los trabajadores:

Cierra el ingenio y la gente se desesperaba porque no iban a tener pan. A nosotros nos mandaban el pan de la ciudad un señor que era muy amigo de mi madre [...] Estábamos con el cierre de ingenio y el problema era que la gente no tenía con qué pagar. Entonces nos dice el señor este, un portugués, “no, no hay problema, yo le doy pan, total, algún día me van a pagar”.

Me dice “yo les voy a seguir dando pan, cuando me pagan, me pagan”. Casi tres o cuatro meses hemos aguantado y la gente pagaba. (Raúl, entrevista, enero de 2021)

Algo similar cuenta Rolando, que recuerda cómo su padre y otros que, como él, tenían una situación mejor ayudaban “porque tenía que comer la gente. El que tenía una situación mejor ayudaba, para comprar comida”. Y también dice que cuando ellos tuvieron conflicto en la fábrica, él ya tenía un ejemplo de cómo era la cosa porque había visto cómo se había peleado en Bella Vista por el ingenio:

Porque a Bella Vista lo han cerrado. Han pasado días, meses, se han juntado, han armado una comisión. Yo era chico y veía eso. [...] Toda la gente se ha ayudado. Queda la gente sin trabajo y los comerciantes también. Los comerciantes han mandado un representante a esa comisión. El ingenio por otra parte, con los gremialistas, a esa comisión. El cura, a esa comisión. Eran como 6 o 7 en esa comisión. Pero si vos sacás conclusiones, estaba todo el pueblo. Uno representaba a todos. Eso es lo que se ha hecho. (Rolando, entrevista, marzo de 2021)

La forma “más obrerista” del padre de Raúl, la claridad sobre “lo que tiene que ser” que transmite Rolando aluden, en términos generales, a esa cultura contestataria de la que hablaba al comienzo de este apartado. Una cultura hecha de valores, sentimientos, percepciones y formas de entender el mundo que se forjó en las experiencias de vida y que no siempre ni necesariamente cristalizan en expresiones ideológicas y programáticas más explícitas. La relación entre ambas instancias es un eje de análisis pendiente, que excede a los límites de este escrito, pero encuentra en nuestros dos entrevistados distintos vínculos.

LOS SECUESTROS Y LA PRODUCCIÓN DE TERROR

En febrero de 1975 se lanzó en Tucumán el llamado Operativo Independencia. Publicitada como una operación anti-guerrillera, esta medida dio comienzo al genocidio en la provincia. Con la participación de todas las fuerzas represivas estatales y bajo la conducción del Ejército, se instauró un nuevo esquema represivo que consistía en el secuestro de personas, su reclusión, tortura e interrogatorio en centros clandestinos de detención y, a partir de allí, tres destinos posibles a) la liberación inmediata, b) la legalización, y c) la ejecución y posterior desaparición del cuerpo. Durante 1975 y hasta el golpe de Estado funcionaron al menos 60 espacios de detención clandestina por todo el territorio provincial y allí fueron trasladadas al menos 769 personas secuestradas en Tucumán y en las provincias limítrofes (Jemio, 2021).

Para ese entonces, los hermanos Menéndez habían ascendido en sus respectivos puestos de trabajo: Luciano Benjamín había pasado al III° Cuerpo de Ejército y José María había llegado a gerente de Norwinco. A estos logros familiares se sumó el del primo Mario Benjamín: sería nombrado como el segundo jefe del Operativo Independencia, en ese momento a cargo de Adel E. Vilas.

En una investigación previa, señalé dos características frecuentes en las formas de la violencia estatal y sus dinámicas en este período. La primera, un modo de operar escalonado y sucesivo por el cual la represión afectaba intensamente un territorio acotado, en un período de tiempo corto. Luego, la intensidad de la represión se desplazaba a otros lugares. La segunda característica es la existencia de una importante proporción de sobrevivientes entre las víctimas, predominancia que alcanza en algunos lugares hasta el 70% del total de víctimas.

Ambas características se observan en el caso de Norwinco. De los 120 trabajadores que hubo en la fábrica, fueron secuestrados 15, de los cuales 3 continúan desaparecidos. La mayoría de ellos (9) fueron secuestrados en agosto de 1975.

Pero si seguimos más detalladamente la secuencia represiva, se observa también un aceitado funcionamiento de la actividad de inteligencia. El primer secuestro se produce contra un trabajador que formaba parte del grupo de activistas de la fábrica y que vivía en San Miguel de Tucumán. Él era, además, estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional de Tucumán —junto con José Raúl Amdor, que será secuestrado y desaparecido en agosto— y militaba en una organización de izquierda.¹⁶ Fue secuestrado con dos obreros metalúrgicos más, también con actividad sindical en la línea antiburocrática que disputaba la conducción de la UOM: uno era su hermano, que trabajaba en Motorola/SICOM, el otro, un trabajador de Fedders/BGH.

Los siguientes 9 secuestros fueron en agosto. Habían transcurrido ya siete meses desde el inicio del Operativo Independencia. Cuenta Raúl que ya tenía cierta noción de lo que estaba ocurriendo, pero pensaba que a él no le iba a pasar:

Como había información, uno se enteraba por los diarios de los operativos militares, estaba esa efervescencia que lo habían llevado a fulano, que lo habían llevado a mengano, que lo habían secuestrado y lo habían llevado a Famaillá. Uno no le daba importancia porque estaba seguro de no pertenecer, no conocíamos, yo no sabía qué eran esas organizaciones [revolucionarias], qué predicaban o qué perseguían. No tenía un sentido crítico ahí.

16 Un entrevistado cree que era del Partido Comunista.

Sí las aplaudía, pero porque se vivía la pobreza, la miseria y la injusticia de lo que significaba el cierre de los ingenios. (Raúl, entrevista, enero de 2021)

También Rolando pensó que a él no le iba a pasar nada y cree que el secuestro de ellos en agosto fue una manera de aterrorizar al resto. Como todos los conocían, cuenta, si los llevaban a ellos, de quienes todo el pueblo sabía que no eran guerrilleros, quería decir que podían llevar a cualquiera.

El carácter masivo del secuestro refuerza la hipótesis de Rolando: en menos de un mes secuestraron a 9 personas, 2 en San Miguel de Tucumán y el resto en Bella Vista. Todas las personas capturadas habían tenido distintos niveles de participación en los conflictos de la fábrica, aunque solo 6 de ellos seguían vinculados a Norwinco. Los otros 4 habían sido despedidos o habían renunciado a causa de la persecución sufrida.

La mayoría (8) fue trasladada a la Escuelita de Famaillá, donde algunos pudieron reconocerse entre sí. Supieron, incluso, que allí estuvieron José Raúl Amdor y José Raúl Zapata, que continúan desaparecidos.

La mitad de los que fueron secuestrados ese mes fueron legalizados y pasaron varios años en las cárceles de la dictadura con causas fraguadas o bajo la figura de presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Quienes siguieron trabajando allí luego de aquel agosto de 1975 quedaron con miedo, le contó a Raúl su hermana, que siguió yendo a la fábrica. Dice que al temor generalizado se sumó la desconfianza: el fantasma del “no te juntes”, “al subversivo no hay que arrimarse”. Tres trabajadores más fueron secuestrados en septiembre de 1976, un año después de aquella primera redada.

Ese año la fábrica cerró sus puertas. Cuando eso ocurrió, José María Menéndez ya no estaba en la fábrica: el mismísimo marzo de 1976 se había ido a trabajar a Altos Hornos Zapla, en Palpala (Jujuy).

A MODO DE CIERRE

En este trabajo he presentado los avances preliminares de un estudio de caso en torno a los trabajadores de la fábrica Norwinco, su proceso organizativo y la represión de la que fueron objeto.

A través de este abordaje busqué dar cuenta de la historia de un grupo de víctimas a partir de los entramados productivos, sociales y organizativos de los que formaban parte. Se trata de una apuesta por explicitar que los vínculos entre las víctimas exceden los lazos estrictamente políticos: estaban unidas entre sí por una compleja red

de vínculos vecinales, de parentesco, laborales, sindicales y político partidarios.

Esta forma de entender la constitución del blanco de ataque de la actividad represiva busca, además, dar otra inteligibilidad a la política represiva desplegada por el Operativo Independencia: su estrategia de “tierra arrasada” no tenía que ver única ni principalmente con quitar el apoyo a la guerrilla en el monte sino con desarticular determinadas territorialidades sociales, destruir ese entramado relacional que era el sustrato del que emergía la politicidad cotidiana de las clases trabajadoras.

BIBLIOGRAFÍA

- Consejo Federal de Inversiones (1973). *Análisis y evaluación del plan de transformación agroindustrial de la provincia de Tucumán*. Buenos Aires: Consejo Federal de Inversiones, Informe final n° 17, Serie Técnica.
- Crenzel, Emilio (1991). *El tucumanazo*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Feierstein, Daniel (2007). *El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Izaguirre, Inés (1994). *Los desaparecidos: Recuperación de una identidad apropiada*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Jemio, Ana Sofía (2021). *Tras las huellas del terror. El Operativo Independencia y el comienzo del genocidio*. Buenos Aires: Prometeo.
- Jemio, Ana Sofía y Pisani, Alejandra (2021). Cultura obrera y procesos de politización en el sur tucumano. Las historias de María y Juan. En Pozzi, Pablo y Lohn, Reinaldo (Coords.), *Una mirada crítica desde la izquierda. Homenaje a Luiz Felipe Falcão*. Buenos Aires: CLACSO.
- Klein, Naomi (2010). *La doctrina del shock: El auge del capitalismo del desastre*. Barcelona: Paidós.
- Marín, Juan Carlos (2009). *Cuaderno 8*. Buenos Aires: Ediciones PICASO.
- Militancia peronista para la liberación* (1973, 11 de octubre). Año 1, N° 18, Buenos Aires.
- Moyano, Ricardo Daniel (2012). Industria azucarera y actividad metalúrgica en Tucumán (1870-1940). *Revista de Historia Industrial. Economía y Empresa*, 22(53), Barcelona.

- Murillo, Susana (2012). *Posmodernidad y neoliberalismo: Reflexiones críticas desde los proyectos emancipatorios de América Latina*. Buenos Aires; Ediciones Luxemburg.
- Murmis, Miguel y Waisman, Carlos (1969). Monoproducción agroindustrial, crisis y clase obrera. La industria azucarera tucumana. *Revista Latinoamericana de Sociología*, 5(2), Buenos Aires.
- Nassif, Silvia (2014). *Las luchas obreras tucumanas durante la autodenominada Revolución Argentina (1966-1973)*. Tesis de Doctorado, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
- Nassif, Silvia (2016). *Tucumán en llamas: El cierre de ingenios y la lucha obrera contra la dictadura (1966-1973)*. San Miguel de Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras.
- Noticias* (1974, 12 de julio). Año 1, N° 225, Buenos Aires.
- Osatinsky, Ariel (2006). *Las transformaciones económicas y el deterioro social de Tucumán en los años de Onganía*. Ponencia presentada en el XII Encuentro de cátedras de Ciencias Sociales y Humanísticas para las Ciencias Económicas.
- Pampín, Graciela (2008). La industria de bienes electrónicos y el desarrollo tecnológico en la Argentina. Expansión y crisis de Winco, S.A., 1954-1980. *Revista de Historia Industrial. Economía y Empresa*, 17(38), Barcelona.
- Paolasso, Pablo y Osatinsky, Ariel (2007). *Las transformaciones económicas y sociales de Tucumán en la década de 1960*. Ponencia presentada en el VIII Encuentro de la Red de Economías Regionales y I Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías Regionales.
- Pisani, Alejandra (2016). La clase obrera azucarera tucumana. Aproximaciones teórico metodológicas para el estudio de su relación con el PRT-ERP entre 1966 y 1975. *Historia, Voces y Memoria*, 9, Buenos Aires.
- Pozzi, Pablo (2012). ¿Quién hizo el mundo? Fuentes orales y política en la cultura de los obreros argentinos. *Oral History Forum d'histoire orale*, 32, Canadá.
- Pozzi, Pablo (2015). Trabajadores y procesos de politización y rebelión. *Esboços — Revista do Programa de Pós-Graduação em História da UFSC*, 22(33), Florianópolis.
- Pucci, Roberto (2007). *Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán 1966*. Buenos Aires: Ediciones del Pago Chico.

- Secretaría de Estado y Planeamiento y Coordinación (1977).
Tucumán en cifras. Estadísticas, Gobierno de la Provincia de Tucumán.
- Secretaría de Estado y Planeamiento y Coordinación (1980).
Tucumán en cifras II. Estadísticas, Gobierno de la Provincia de Tucumán.
- Silveyra, Malena (2018). Aproximaciones al concepto de genocidio desde una perspectiva marxista. Aportes para comprender el caso argentino. *Conflicto Social. Revista del Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social*, 11(20), Buenos Aires.
- Stavale, Santiago (2019). *Perros en las fábricas: La política sindical del PRT-ERP, sus prácticas y la experiencia de sus militantes en fábricas del Gran Buenos Aires, 1973-1976*. Tesis de Doctorado, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

ARTE, CIDADE, POLÍTICA E HUMOR NO COTIDIANO BRASILEIRO

REFLEXÕES A PARTIR DA OBRA DO ARTISTA E HISTORIADOR
SÉRGIO LUIZ DE CASTRO BONSON (1974-2005)

Emerson César de Campos

*“O artista é um inventor. O campo de experiência
de sua criação é o da vida de todos os dias”*
(Jeudy, 2005, p. 139)

*“Se a cultura deve ser uma crítica efetiva, precisa
manter sua dimensão social”*
(Eagleton, 2005, p. 23)

À GUIA DE INTRODUÇÃO

Diz o adágio popular que, quem sabe faz, quem não sabe, conta história. Tentarei, aqui, como não sei fazer arte, contar alguma história, o que nos dias desse incipiente século XX é uma provocação, uma heresia. O título pouco auspicioso desse escrito certamente não faz jus à engenhosidade e ao engajamento presentes na obra do artista e historiador Sérgio Bonson. Contudo, a enunciação intitulada tenta capturar as expressões do cotidiano de Florianópolis, a capital de Santa Catarina (Brasil), naquilo que ele encerra de manifestação artística e engajamento político e, assim, por diferentes maneiras, exibir um pouco da trama vivida pelo artista e historiador.

Pouco antes do seu falecimento, em outubro de 2018, Celso Martins¹, jornalista e amigo de Sérgio Bonson, com quem trabalhou por

1 Eu tive a oportunidade de conhecer melhor Celso Martins em seu trabalho de jornalista, escritor e historiador, quando em 2003 o mesmo iniciou sua graduação em História, concluída em 2007 com Trabalho de Conclusão de Curso sob minha orientação. Agradeço (*in memoriam*) imensamente ao Celso Martins, pelas inúmeras conversas que tivemos ao longo do período descrito, e pelas duas formais entrevistas que me concedeu, a última aqui citada.

vários anos no jornal *O Estado*, criador do blog *Sambaqui na Rede*, em entrevista que me concedeu, manifestou que as condições de trabalho (no jornalismo, área da comunicação a qual Sérgio Bonson trabalhava) se alteraram significativamente, em particular a partir do começo dos anos 2000. Essa mudança obrigou os trabalhadores no jornalismo a um processo de reinvenção da profissão, bem como das produções artísticas da área (caso de Bonson). Tais ações se realizaram muito em função da crescente e irreversível informatização do setor, o aumento considerável de concorrentes e os baixos salários recebidos (Martins, 2018). Martins havia sido vinculado ao Partido Comunista Brasileiro — PCB — enquanto Bonson, mesmo sem vínculo partidário, em sua arte engajada, empregava sua energia criativa, seu trabalho, na postura crítica e de resistência ao ordenamento autoritário do poder em todas as suas esferas: federal, estadual e municipal. Durante o período no qual Bonson trabalhou, sua arte engajada sempre esteve à serviço do campo político crítico de esquerda.

Para fins desse texto e afinada a proposta da temática do livro no qual ele se insere, entendo esquerda enquanto um campo de disputa que se realiza na arena social ocorrida cotidianamente, e que partindo da experiência, de uma práxis, emprega esforços em aplacar dificuldades sociais e ampliar os horizontes de uma autêntica e real democracia. É certo que mesmo frente aos esforços da direita em fluidizar a solidez existente na polarização política — dizem: “não existe mais direita e esquerda” —, na América Latina em Geral, e no Brasil em particular, todos sabemos para que lado o social, quando em uma balança, pode ser pesado e medido enquanto pluma ou chumbo.

Sendo assim, destaco o envolvimento de Sérgio Bonson com a classe trabalhadora na qual se inseria, divulgando a partir de sua arte engajada, muito do tenso cotidiano brasileiro, mantendo o humor que caracteriza sua obra, e que tento aqui exibir de diferentes formas e em distintas manifestações. Este texto discute arte engajada de esquerda a partir das expressões gráficas produzidas por Sérgio Bonson tanto na chamada grande imprensa, a exemplo dos trabalhos por ele realizado nos Jornais *O Estado* e *Folha de São Paulo*, quanto na imprensa alternativa de esquerda, a exemplo dos Jornais *Afinal* e *A Bernunça*. Nesse passado que não passa que caracteriza o *Tempo Presente*, as contribuições da oralidade que gentilmente me foram concedidas, em larga medida suportam a forma final que tomou o texto. Espero ter conseguido, a ver prova nas próximas páginas, fazer vazar, em reconstituição história — mesmo sabendo que o todo jamais é igual a soma das partes, pois há sempre subjetividades que não se consegue alcançar — dos sentidos da linguagem artística utilizada por Sérgio Bonson, na arena de conflitos sociais que é uma cidade como Flo-

rianópolis, muito bem apresentada em personagens políticos (reais ou ficcionados) ou trabalhadoras e trabalhadores urbanos (reais ou ficcionados). As palavras apresentadas por Bonson em suas charges (como demonstradas na sequência) muito lembra do cuidado que precisamos ter e da acuidade que necessitamos desenvolver na escolha das mesmas, como bem demonstrado por Raymond Williams (2007).

UM INÍCIO POSSÍVEL

Ainda em 2005, eu preparava uma pesquisa sobre a Praça XV de Novembro, localizada no centro da capital catarinense, e as suas transformações junto à urbanidade local, regional e nacional. Simultaneamente, iniciei uma pesquisa sobre Humor, Cidade e História em Quadrinhos, e encontrei (em realidade, relembrei) a obra de Sérgio Bonson. Naquela oportunidade, eu havia estimulado em Michele Petry², acadêmica do curso de História e, também, em Zenir Maria Koch³ (companheira de Sérgio Bonson, falecido naquele mesmo ano), a realização de pesquisa sobre a obra de Bonson. Caminhos e des-caminhos fizeram com que Michele Petry iniciasse sua pesquisa, em 2009, e eu a tenha suspenso, retomando-a em 2011. Concluí em 2014 uma etapa de pesquisa sobre Sérgio Bonson e, em 2020, no ano da agudização da pandemia de Covid-19, retomei algumas lacunas que percebia nos meus escritos sobre o artista e o historiador, especialmente relacionada ao humor e ao engajamento político da arte e da obra de Sergio Bonson. Mas, enfim, por que pesquisar um artista? Melhorando a pergunta: Por que não pesquisar? Ainda mais quando esse artista é também um exímio contador de histórias, um historiador de formação acadêmica e um profundo conhecedor da urbanidade da capital catarinense. Mais ainda, quem resiste a uma boa história sobre humor, cidade, arte e política?

Sérgio Luiz de Castro Bonson (Figura 1), ou simplesmente Bonson, como ficou conhecido, foi artista e historiador, nascido em Florianópolis (SC) no dia 13 de novembro de 1949 e falecido em 8 de dezembro de 2005. Graduiu-se no Curso de História da Universidade

2 Michele Petry, antes de ex-orientanda é, hoje (2021), uma amiga. Sou grato por demais a todo incentivo e parceria dela comigo no sentido de compreendermos de forma mais elaborada a obra de Sérgio Bonson.

3 Agradeço sobremaneira toda a disposição e solicitude com as quais Zenir Koch sempre me tratou. Também pela entrevista que me concedeu formalmente (citada neste texto), por outras tantas conversas que tivemos e pela presença e engajamento em nosso campo político e nos desafios que as universidades nos colocam diariamente. Zenir se aposentou recentemente e, mesmo assim, continua disposta a lutar por uma condição social justa e digna para todas e todos brasileiras e brasileiros.

Federal de Santa Catarina (UFSC) no ano de 1972 e, naquela década, iniciou a sua proximidade com as artes.

Como autodidata tornou-se caricaturista, chargista, cartunista, desenhista, aquarelista e artista plástico. Bonson viveu parte considerável de sua vida imerso no intrincado cotidiano da capital catarinense, morava no centro da cidade e por ali transitava sempre atento às paisagens, aos corpos e às falas. O ambiente urbano o inspirava. Dele vinham os cenários, os personagens e as histórias que apreendia e rerepresentava em caricaturas, charges, cartuns, desenhos e aquarelas. (Petry, 2011b, p. 10)

No relato de Zenir Maria Koch, companheira de Bonson até seu falecimento, pode-se perceber que:

Bonson foi estudante universitário na UFSC no início dos anos de 1970, neste período ele cursava história e eu pedagogia. Oportunidade em que nos conhecemos, fizemos amizade e realizamos juntos cursos na área da didática. Bonson nunca comentou a existência de familiares artistas/docentes e nem falou das suas posições políticas. Penso que foi sob a influência do seu mestre e amigo Américo Augusto da Costa Souto [falecido em 09/08/2011], seu guru intelectual, no período da Universidade e após, que Bonson exerceu, em pouco tempo, a profissão de Professor de História no Ensino Médio e no Ensino Superior. Na sua trajetória de vida pessoal e profissional, a sua maior dedicação foi ao estudo e à produção artística como ilustrador, cartunista, chargista, desenhista e pintor de aquarelas. Após termos cursado a universidade, o meu contato pessoal com ele ocorria ocasionalmente. Aos poucos fui conhecendo mais sobre o artista Bonson, por meio do Jornal *O Estado* onde ele publicava diariamente uma charge e uma tirinha intitulada Waldirene, a AM. Nesse Jornal, e posteriormente em outros periódicos que ele trabalhou em Santa Catarina e em São Paulo, no Estadão e na Folha, Bonson se tornou um grande cartunista/ilustrador. Mas, foi especialmente na cidade de Florianópolis que ele evoluiu muito como artista (amava a sua cidade e cotidianamente percorria o centro (Praça XV, Felipe Schmidt e arredores, onde se inspirou e criou suas inúmeras obras), e ficou conhecido e admirado pelo humor expresso nas suas charges. Acompanhei Bonson de perto, a partir de 1987, na sua arte de desenhar com lápis crayon e de pintar aquarelas, quando passei a conviver mais com ele, como sua namorada, tornando-se sua companheira durante os muitos anos de sua luta para sobreviver como chargista e artista plástico. Considero que foi nesses anos, até 2005 (ano de seu falecimento), que Bonson se firmou como artista plástico, na especialidade aquarela, ao produzir uma quantidade expressiva e significativa de belas pinturas, intituladas cenas urbanas, da cidade de Florianópolis contemporânea. Tais obras foram mostradas em inúmeras exposições (individual e coletiva) por ele organizadas e também por curadoras, após seu falecimento, a exemplo de Michele Petry. (Kock, 2021)

Nelson Rolim⁴, proprietário da Editora Letras Contemporâneas (Florianópolis/SC), desde a década de 1970 teve contato com Bonson e a obra do artista ilhéu. Na entrevista que gentilmente me concedeu, comenta:

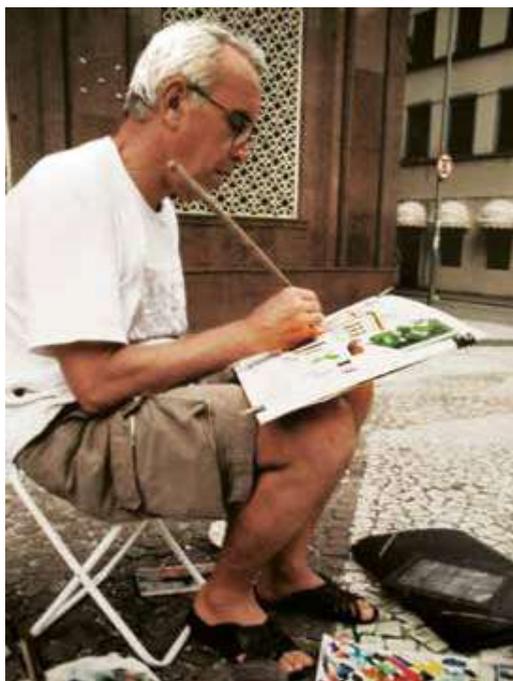
Conheci Bonson por acaso num sábado à noite, em 1976, quando ia do centro caminhando pela Avenida Beira Mar em direção à Boate da Engenharia (uma festa promovida pelo Diretório Acadêmico), e parei numa espécie de breque com mesas ao relento (à época tinham muitos terrenos livres com botecos improvisados), e Bonson estava só bebendo. Logo começamos a conversar, bebemos, o que faríamos sempre nos anos seguintes, e fomos para festa juntos. Naturalmente, o que nos aproximou imediatamente foi a nossa imediata identificação como opositores de esquerda à ditadura, ele nativo e eu chegando na Ilha para morar definitivamente. Ele era declaradamente de esquerda, por isso chegou até a ser preso em 1968, mas não teve militância em partidos, ao menos não mais organicamente. Porém, naquele tempo, todos nos ajudávamos na luta contra a ditadura e pelas liberdades democráticas, em especial a de expressão, indispensável ao seu ofício. Tinha que segurar o rojão! (Rolim, 2021)

Na fala de Rolim (2021), há menção explícita à incipiente urbanidade da capital catarinense, e como nela o clima político era vivido, experimentado. Assim, inicialmente viabilizo um contato mais elaborado com a obra do artista no sentido de identificar as narrativas sobre as transformações do urbano, promovidas em Florianópolis, que se materializaram na sua obra: a gentrificação do centro da cidade, o setor de serviços estimulado pelo crescente movimento de turistas (brasileiros e estrangeiros), as vicissitudes da vida urbana — a exemplo do alto custo de vida da capital catarinense — o crescimento da violência e outras tantas manifestações da urbanidade verificada e posta em telas e aquarelas, cuja dimensão política está sempre presente e atravessa toda a obra do artista. Assim, as obras de Sérgio Bonson se constituem como fontes importantes à identificação de narrativas históricas que apreendem, em diversas medidas, as percepções do universo urbano que o constituem, possibilitando qualificação mais adequada da complexidade das relações desenvolvidas no cotidiano de Florianópolis. Mais à frente, e neste mesmo texto, veremos o engajamento político e bem-humorado de Sérgio Bonson em suas participações em dois jornais alternativos (progressistas ou de esquerda) para os quais realizou trabalhos: *Jornal Afinal* e *Jornal A Bernunça*.

4 Nelson Rolim me foi extremamente atencioso e gentil comigo em todas as oportunidades. Agradeço muito ao Rolim para além da atenção que me dispensou, pelo trabalho desafiador de publicar livros, jornais, revistas e outra tanta sorte de manifestos sobre a cultura brasileira.

Figura 1

Fotografia de Sérgio Vignes, com Sérgio Bonson “artistando” em Florianópolis (SC), sem data



Fonte: Petry (2013, p. 51).

URBANO E URBANIDADES NA OBRA DE SÉRGIO BONSON

Muitas são as faces do urbano e das experiências socioculturais e políticas que se apresentam na obra de Bonson. Em suas expressões gráficas de humor⁵, Bonson apresenta cenários de vários pontos turísticos, de lugares de passagem, de estabelecimentos comerciais da cidade, além de personagens que expressam o estranhamento promovido pelo trânsito em um novo território. Expressões gráficas de humor são publicadas no jornal *O Estado* (de Florianópolis/SC), em meados dos anos de 1974 e de 1986, no *Jornal de Santa Catarina* (de Blumenau/SC), de 1974 a 1976, na *Folha de São Paulo* e no *Estado de São Paulo*, de 1984 a 1985, no jornal *A Notícia* (de Joinville/SC) e nos livros de Bonson: *Waldirene, a AM, Henricão, Soiza*, de 1987, *Tudo*

5 Um termo que se refere a caricaturas, charges e cartuns, conforme Campos e Petry (2010).

pelo Soizial, de 1990, e *Bonson sem Censura*, de 1996. São títulos que inventariam artisticamente as experiências do urbano na capital catarinense ao criarem “tipos”, ou seja, personagens que fazem alusão explícita às transformações ocorridas na cidade em seu crescimento, ao investimento no turismo, à chegada de trabalhadores especializados no setor de serviços: Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), entre outros. Florianópolis, nas três décadas em que tento situar esta reflexão, ou seja, o período no qual Bonson produziu — entre 1974 e 2004 —, tem a sua população acrescida de 125 mil habitantes (em 1974) para algo em torno de 360 mil (em 2004). Isso implica pensar que a cidade praticamente triplica a sua população, enquanto Bonson por ela circulava e produzia. Assim, e de modo a deixar mais claras e explícitas as minhas reflexões, aqui, tento entrecruzar arte, política, humor e crítica, em jornais de circulação ampla e diária.

Sérgio Bonson viveu desde seu nascimento até sua precoce morte (ocorrida quando ele contava com 56 anos de idade) na capital catarinense e mais ainda no centro da cidade, sendo seu último endereço situado à Rua Anita Garibaldi, a uma quadra da Praça XV de Novembro, retratada por ele em diferentes formas e momentos. Os recortes temporal e temático deste texto vêm tentar elucidar as experiências vividas por Bonson vinculadas à temporalidade da urbanidade da capital catarinense. A juventude de Bonson, vivida na década de 1970, teve como palco a materialidade do urbano estimulada e construída por meio do projeto nacional desenvolvimentista e profundamente autoritário do governo militar brasileiro (1964-1985). Entre as décadas de 1970 e 1990, Florianópolis encaminhou e solidificou a urbanidade que hoje (2021) apresenta. Naqueles vinte anos, parte considerável do setor de serviços foi inovado, sendo requerida melhor qualificação profissional dos agentes envolvidos com o desenvolvimento urbano da capital catarinense. Nesse período, houve a instalação de grandes empresas no setor de energia — pois era e é evidente o crescimento, mais ainda sustentável, em tempos de sustentabilidade, essa panaceia contemporânea — a exemplo da Eletrosul, e na publicidade a exemplo das agências Propague (criada em 1962) e Quadra (criada em 1979) na capital catarinense, e que, entre outros tantos clientes, tiveram em suas carteiras os governos de Santa Catarina e a Prefeitura Municipal de Florianópolis. Ainda é da década de 1970 o aterro da Baía Sul e o soterramento do antigo Miramar⁶. Com a perda, entre outros, dos es-

6 Sobre esses espaços criados a partir de soterramento, ver em especial dois excelentes trabalhos: Nonnenmacher (2007) e Michelmann (2015).

paços marítimos ocupados pelos citados aterros (e por outros tantos, a exemplo da Beira Mar Norte, iniciado ainda na década de 1960 e concluído somente na de 1990), a urbanidade de Florianópolis toma novas feições e novos personagens urbanos entram em cena.

Na esteira do colocado até agora, e na tentativa de visibilizar a representação de Bonson acerca das transformações da cidade de Florianópolis entre as décadas de 1970 e 1990, apresento três personagens que acompanham as permutas cidadinas realizadas na capital catarinense no período aqui recortado, e sem ordem previamente colocada: Waldirene, Henricão e Soiza. Segundo Michele Bete Petry, os personagens retratados por Bonson são:

Um político radialista, uma empregada doméstica e um surfista são os três principais personagens criados por Bonson no decorrer de sua trajetória profissional. Soiza, Waldirene e Henricão apareceram inicialmente em cartuns diários nas páginas do jornal O Estado e, mais tarde, nas histórias em quadrinhos reunidas e publicadas em livros. A complexidade das relações estabelecidas entre eles foi bem elaborada por Bonson para representar o cotidiano da cidade de Florianópolis. (Petry, 2011b, p. 131)

Waldirene trabalha como empregada doméstica, e importante considerar que é uma profissão “inflacionada” pela nova urbanidade citada, visto que camadas médias urbanas precisarão cada vez mais de trabalhadoras e trabalhadores com perfil voltado ao atendimento de serviços, dentre os quais, o doméstico. Então, a Waldirene criada por Bonson é o que, na visada do artista, mais se aproximava de um “perfil” de profissional próprio da esfera doméstica, privada ou não.

O Henricão criado por Bonson é um jovem, filho de Luci e legítimo representante dessa chamada nova experiência urbana experimentada em sua emergência social tão a gosto das camadas médias da capital catarinense, aqui insinuada, ainda que rapidamente. Ele é um rapaz que viaja para os Estados Unidos, usa roupas e acessórios no estilo *surfwear*, que incorpora desde os traços linguísticos e expressões idiomáticas, muito do *american way of life*. Surfista em todas as horas, invariavelmente retrato com prancha de *surf* e com a “descolada” inscrição corporal dos praticantes do *surf*, que na década de 1980 se inicia com uma tímida, mas constante popularização.

O Soiza criado por Bonson muito elucidada as práticas culturais necessárias à comunicação urbana. Soiza é um comunicador de rádio. Como já bem inferido por Michele Petry, é fato que Bonson nomeou Soiza como um locutor FN, e uma hipótese para o uso da sigla “FN” ao invés de “FM” seria a de que Bonson estaria brincando com o nome da cidade “FloriaNópolis” (Petry, 2011b, p. 142). Seja como for, e com a ressalva feita, Soiza é fundamentalmente um locutor de

grande alcance, participando de programas radiofônicos voltados às camadas populares e com a audiência que contavam à época as rádios AM. Criado na década de 1980, inicialmente nas tirinhas do jornal *O Estado*, Soiza tem claras pretensões políticas (datam da mesma época as criações de Waldirene e Henricão). O personagem criado é visivelmente inspirado na presença de César Souza, famoso radialista e, também, apresentador de programa televisivo, tendo sido vereador em Florianópolis eleito em 1982, deputado estadual e federal por Santa Catarina. O Soiza criado por Bonson muito encarna da cultura política catarinense de viés populista e conservador. Conforme tenho colocado neste texto, a dimensão política e bem-humorada está sempre presente na obra de Sérgio Bonson.

Sem condições de explorar a dimensão imagética neste momento, visto que extrapola os fins deste texto, indico e apresento a seguir três quadrinhos de Sérgio Bonson que apresentam algumas das características dos mencionados personagens.

Figura 2
Em cena: Waldirene e Dona Luci



Fonte: www.angelfire.com/art2/sergiobonson

Figura 3
Em cena: Soiza, Alao, Waldirene, Henricão e Dona Luci



Fonte: www.angelfire.com/art2/sergiobonson

Figura 4
Em cena: Soiza e Alao



Fonte: www.angelfire.com/art2/sergiobonson

ARTE, HUMOR E CULTURA POLÍTICA EM SÉRGIO BONSON

A cultura política acionada por Sérgio Bonson em sua obra vai se apresentando cada vez mais engajada e afinada com os segmentos populares, e como esses lidam e entendem seus representantes políticos, ainda contrária ao militarismo posto em sua forma autoritária (incluindo a de governo) e antidemocrática. Soma-se a isso a resistência política aliada ao acionamento do riso. Para Bonson, assim me parece, quanto mais “fortes” os personagens políticos a serem satirizados, maior a força de resistência fomentada pelo humor. O artista realizou um extenso trabalho de produção de quadrinhos e charges de cunho político. Segundo, ainda, o relato de Zenir Maria Koch (2021):

Bonson sempre foi um crítico, com posição de esquerda que era claramente evidenciada no seu trabalho diário como cartunista, e não filiado a partido

político. A luta política, por uma sociedade livre, justa e igual, sempre esteve presente na vida de Bonson. Inicialmente, participando do movimento estudantil secundarista e universitário e, posteriormente, nos seus traços de desenhos de humor, fazia críticas à política e aos políticos do contexto nacional e local. Na sua trajetória de vida, Bonson sofreu perseguições durante a ditadura militar, razão pela qual, requereu e lhes foram concedidas indenizações, pelo governo de Santa Catarina (Lei nº 10.719/1998) e pelo Governo Federal (Leis nº [10.559](#) /2002 e nº [9.140](#)/1995), por ter sido detido sob a acusação de ter participado de atividades políticas.

Importante deixar anotado que, em 1968, Bonson foi preso, em duas oportunidades, por policiais militares. A primeira prisão ocorreu em 5 de dezembro de 1968, como impedimento à sua participação nas manifestações programadas contra o então presidente, Marechal Artur da Costa e Silva. A sua libertação se deu após a visita do referido presidente, com um inquérito instaurado contra ele, na Secretaria de Segurança do Estado de Santa Catarina — Instituto de Identificação. A segunda prisão ocorreu em 14 de dezembro de 1968, no seu local trabalho como escriturário — Reitoria da UFSC, quando um funcionário do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), acompanhado de outro policial, o prendeu para averiguações relacionadas com as suas atividades políticas no Grêmio Estudantil Professor José Brasilício do Instituto Estadual de Educação (IEE) de Florianópolis. Sobre essa e outras prisões, continua Zenir Maria Koch (2021):

Eu também era integrante do Grêmio Estudantil. Sei através de documentação que mais tarde [em 1998] me mostraria Bonson, que a sua detenção foi acompanhada de interrogatórios de um dia todo, o suficiente para prejudicar a sua vida profissional, pessoal e familiar. Em 17 de dezembro de 1968, Bonson foi demitido, pelo Reitor Ferreira Lima, da função de escriturário que exercia na Reitoria da UFSC, ficando assim, impedido de prosseguir a sua carreira profissional naquela universidade. Em 1969, ele foi atingido pela inelegibilidade decretada pelo mesmo reitor, que o impediu de concorrer a eleição para membro do Conselho Executivo do Diretório Central dos Estudantes da UFSC. Em 10 de abril de 1978, mais uma vez Bonson foi vítima da censura da ditadura militar, ao ser demitido do cargo de chargista no *Jornal O Estado*, por ter publicado uma charge alusiva ao então Presidente da República General João Batista Figueiredo.

São relevantes as contribuições do artista e historiador na produção de expressões gráficas de humor inscritas na ambiência política, em particular destaque para o período que aqui coloco. O humor costuma despertar e potencializar o interesse em temas, os quais, para a maior parte das pessoas, costumam ser mais dados aos especialistas e, nesse sentido, o humor político encerra mesmo essa perspectiva

crítica e analítica do mundo que nos cerca. O humor político que aqui apresento é datado majoritariamente das décadas de 1980 e 1990 e por elas ser entendido e referenciado. Mais ainda, neste texto de apresentação de Sérgio Bonson relacionado ao humor político, não tenho a pretensão de ser engraçado (embora admita que ficaria satisfeito caso o escrito e apresentado pudesse liberar algum riso). Segundo o que nos apresenta o *Humor in America*, organizado por Lawrence E. Mintz (1988, p. vii):

Tornou-se convencional começar os estudos escolares do humor com duas renúncias: é necessário um pedido de desculpas pelo fato de que o estudo do humor não é, por si só, engraçado, e a atenção é dirigida para a aparente ironia de que embora o humor seja trivial e superficial, o estudo dele é necessariamente significativo e complexo⁷.

Para além dos espaços nomeadamente públicos nos quais foram veiculadas as imagens e edições aqui citadas, Bonson contribuiu como ilustrador em publicações, boletins, jornais e informativos de movimentos de esquerda, sempre que era solicitado por sindicatos/associações de trabalhadores de Florianópolis. Participou ativamente, em Florianópolis, na produção do *Bernunça*, um jornal alternativo de esquerda, inspirado no *Jornal O Pasquim*⁸, veiculado em Santa Catarina entre 1987 e 1988 (investigação que realizo atualmente, 2021), e realizou também alguns trabalhos para o *Jornal Afinal* (1980-1981).

A criação artística de Sérgio Bonson vai se realizando no aprimoramento de um traço — inconfundível — a partir de referências diversas. Como exposto por Zenir Maria Kock, em sua trajetória de vida pessoal e profissional, sua maior dedicação foi ao estudo e à produção artística como ilustrador, cartunista, chargista, desenhista e pintor de aquarelas. Para Nelson Rolim (2021):

Bonson tem um traço absolutamente original, o que lhe confere a importância que tem como artista. Todos os chargistas catarinenses de alguma forma foram influenciados pelo Bonson, pois o que não lhe faltava era irre-

7 Tradução livre sobre o original: “*It has become conventional to begin scholarly studies of humor with two disclaimers: an apology is offered for the fact that the study of humor is not, of itself, funny, and attention is directed to the apparent irony that though humor is itself trivial and a superficial, the study of it is necessarily significant and complex*” (Mintz, 1988, p. vii).

8 *O Pasquim* foi um semanário alternativo brasileiro, editado entre 26 de junho de 1969 e 11 de novembro de 1991. É reconhecido, sobretudo, por seu papel informativo e bem-humorado de crítica ao regime militar brasileiro (1964-1985). Um trabalho bastante denso e competente sobre *O Pasquim* pode ser encontrado em Pires (2006).

verência e espalhafato em suas atitudes, uma personalidade que, com sua produção artística genial, lhe conferia a condição de ‘mestre’. Frank Maia é um dos seus herdeiros, e muitos outros.

O espalhafato posto na obra de Bonson e citado por Nelson Rolim, com efeito, é facilmente percebido na obra do artista ilhéu. Como um artista profundamente conectado à dimensão sociocultural — que alimentava sua criação artística — Bonson materializava em arte as chamadas culturas do povo e mantendo nelas o escracho bem-humorado — mesmo quando fatalista — e a perspectiva de crítica profunda à cultura política catarinense, em particular, e à brasileira em geral. É necessário entender as expressões gráficas de humor: charges e quadrinhos precisam sempre da dupla inscrição: temporal e cultural. Somente nesse expediente de dupla inscrição é que uma obra de arte plástica, charge ou quadrinhos, se torna compreensível a “jaula” de significados que as culturas — e todas — encerram. Trabalhando nessa perspectiva é que a historiadora Natalie Zemon Davis, ainda em 1990, indicava sobre as razões do desgoverno na França do século XVI (qualquer semelhança com o desgoverno brasileiro neste 2021 não será mera coincidência), as manifestações da cultura popular que artistas do período, Hieronymus Bosch na pintura e Rabelais na literatura, tão bem exibiram. Do ponto de vista da administração governamental formal, as manifestações populares, sobretudo de caráter profano e/ou obsceno, são permitidas como válvula de escape — desviando a atenção da realidade. Sabemos, pois, que as manifestações populares — festivas ou não — auxiliam por um lado, à manutenção de certos valores de uma comunidade — até garantindo a sobrevivência —, e por outro, fazem a crítica à ordem social (Davis, 1990). O suposto desgoverno popular quase sempre é rigoroso na sua análise do político e do Estado. Sérgio Bonson é um artista que soube bem compreender as nuances de nosso desgoverno. Ainda que este texto e nesta oportunidade eu não tenha condições de adensar discussão teórico-metodológica, preciso apresentar alguma, ainda que mínima, sobre as formas que o grotesco toma historicamente. Em Bakhtin (1987) ou por meio do revigoreamento que ele promoveu da obra de François Rabelais, sabemos que carnavalesação, inversão da ordem estabelecida, o baixo material e corporal, caracterizam e são diacríticos do grotesco, ontem e hoje presentes nas expressões gráficas de humor.

Poucas são as manifestações populares que colocam e produzem sínteses tão expressivas como adágios populares. Aqui, coloco um adágio holandês (ou flamengo) a partir do qual Hieronymus Bosch (1450-1516) teria — ainda uma querela não resolvida — produzido o tríptico (aqui apresentarei apenas o painel central) *Carro de Feno*. Diz o adágio: “O mundo é como um carro de feno e cada um pega o quan-

to pode”. Em rápida interpretação sobre o tríptico de Bosch (abaixo exibido apenas em sua parte central) se pode inferir que, no painel citado, o carro de feno, que em holandês indica insignificância, exhibe personagens que perseguem e mesmo tentam nele subir, o carro do fútil, do passageiro e transitório. No cortejo retratado por Bosch estão na balada o papa, o rei e a nobreza, proprietários do carregamento de feno, acompanhados, cercados por objetos e pessoas caricatas, numa mesma esfera terrena, todas e todos desejanτες dos valores terrenos, caminhando para a danação⁹.

Figura 5
Em cena: o carro de feno



Fonte: Bosch, Hieronymus (1485-1500), “O carro de feno” (Pintura), óleo sobre madeira, 135 x 100 cm (Museu do Prado, Madri, Espanha).

9 Em minha compreensão, Bosch é o mestre do período que melhor exibiu e expressou na arte a tensa relação do homem com o transcendente. A religião é um dos principais motes de Bosch, presente em todos os seus trabalhos, mais ainda no conhecido *Jardim das Delícias* ou na *Tábua dos Sete Pecados Capitais*. Embora estimulante, a discussão suscitada extrapola os limites postos a este texto.

Entrando na metade final deste texto e indicando aqui fontes virtualmente ainda não trabalhadas sobre a obra de Sérgio Bonson, as próximas charges e caricaturas que são apresentadas mostram um pouco do trabalho que Bonson realizou para dois jornais alternativos de esquerda: *Jornal Afinal* e *A Bernunça*.

O *Jornal Afinal* foi criado em maio de 1980 e se manteve em circulação até julho de 1981; foram, portanto, treze edições. A linha editorial de *Afinal* seguia caminhos que possibilitavam crítica firme ao regime militar que grassava país afora naqueles tempos sombrios; e ainda empreendeu o *Afinal* uma autêntica — mesmo que incipiente — problematização daquele árido tempo presente, circulando pelo estado de Santa Catarina. Na excelente dissertação que desenvolve sobre o *Jornal Afinal*, Arielle Rosa Rodrigues¹⁰ expõe: “[...] durante a sua existência [*Jornal Afinal*], procurou [...] em suas reportagens, matérias e notas, [...] denunciar o que considerava serem ações arbitrárias e que prejudicassem de algum modo a população catarinense” (Rodrigues, 2019, p. 9). Nos poucos trabalhos¹¹ que realizou Bonson para o *Jornal Afinal*, destaco esse posto na Figura 6, publicado nas páginas 14 e 15 do *Afinal*, em maio de 1980, sob título “O Golpe do Cardeal”.

O cardeal Dom Alfredo Scherer, em maio de 1980, era autoridade eclesiástica em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, distante 462 km de Florianópolis, onde estava situada a sede do *Jornal Afinal*. A matéria muito bem escrita — e bem-humorada — por Ney Vidal, diz que o Cardeal mais conservador do país (Scherer citado), que havia ocupado as páginas policiais em 31 de dezembro de 1979 em função de uma insólita aventura¹², desta feita, já em

10 Deixo aqui meu especial agradecimento à Arielle Rosa Rodrigues, quem me disponibilizou todos os números digitalizados do *Jornal Afinal*. Essa ajuda de “última hora” que me concedeu, sem a qual seria impossível a materialização deste texto.

11 Segundo Nelson Rolim, citado anteriormente neste texto (entrevista concedida) Bonson teria realizado quatro trabalhos para o *Afinal*. Segundo (Rodrigues, 2019, p. 38), “O conselho editorial [*Jornal Afinal*] foi constante até a 8ª edição e era composto pelas seguintes pessoas: Eloy Peixoto Galloti, Flávio Espedito Carvalho, Jurandir Pires de Camargo, Ney Vidal Filho, Nelson Rolim de Moura e Sérgio A. F. Rubim. Contudo, a partir da 10ª edição 59, Jurandir Pires de Camargo e Sérgio A. F. Rubim.

12 Em 31 de dezembro de 1979, quando saía dos estúdios da Rádio Difusora, onde acabara de gravar seu programa, o cardeal foi sequestrado por dois homens ainda no centro de Porto Alegre. Golpeado a faca várias vezes, foi humilhado pelos assaltantes que o obrigaram a se despir completamente e o abandonaram numa estrada da zona sul da capital do Rio Grande do Sul. O episódio repercutiu fortemente no Brasil e no mundo, sendo o violento ato lamentado e condenado por várias personalidades e autoridades no país. O ministro da Justiça, à época, Petrônio Portela,

maio de 1980, estava às voltas com uma missão pouco ou nada referente ao mundo do celestial. Antes, pelo contrário, havia pouco (janeiro de 1980), Scherer declarara apoio à aprovação da pena de morte no Brasil. A matéria de Ney Vidal ainda indica as feitas de Scherer em relação ao manifesto que o eclesiástico lançou em repúdio à maior e mais organizada greve dos operários metalúrgicos de São Paulo, ocorrida em 1º de abril¹³, durando 43 dias. A matéria de Vidal comenta, pois, um evento que acabara de ocorrer, visto que “estamos” em maio de 1980. Ativo junto às frentes conservadoras do país, naquele maio de 1980, em determinada noite, o cardeal ligou para Afonso Ribeiro Neto, conhecido por Al Neto, escritor, jornalista, e uma figura emblemática, tanto por seus hábitos formais quanto pela atividade pecuarista e a posse de terras no Planalto Catarinense, sobretudo nas cercanias de Lages. Al Neto em si é mote suficiente para outro texto. Aqui, penso que duas palavras podem melhor elucidá-lo: *Caudillho* e *Coroné*. Na ligação feita por Scherer a Al Neto, o cardeal solicitou ajuda ao pecuarista no sentido de requerer envolvimento dele com as bases rurais e políticas conservadoras no apoio ao manifesto citado. Naquele manifesto contra os operários do ABC paulista, Scherer, em realidade, marcava posição única entre o cardealato e bispado brasileiro, organizados por meio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil — CNBB. Segundo o manifesto de Scherer e seguindo o verdadeiro espírito cristão, seria necessária uma frente ampla para combater o comunismo que franqueava junto à CNBB, que o cardeal via como um antro de comunistas. Assim, Al Neto, além dele, conseguiu mais oito líderes signatários à “carta dos fazendeiros” cantada por Scherer ao pecuarista. Juntos, os oito¹⁴ signatários detinham mais de 15 mil hectares de terras, uma região onde milhares de camponeses não a tem. A carta citada, publicada na íntegra nas duas páginas da matéria de Ney Vidal no *Afinal*, indica o profundo respeito e sincero amor filial aos

afirmou que o fora “alvo de um ato de terror; sem, contudo, poder concluir pela conotação política de grupos radicais de direita ou de esquerda”. À época havia uma onda de violência no país, quase sempre praticada por grupos armados de extrema direita contra autoridades eclesiásticas, que já haviam atacado os bispos dom Adriano Hipólito (ocorrido em 1976), dom Luciano Mendes de Almeida e dom Estêvão Avelar. Para detalhes sobre o ocorrido, ver entre outros, o *Verbetes Biográfico* de Alfredo Vicente Scherer em *Fundação Getúlio Vargas* (2009).

13 O 1º de abril no Brasil é uma data emblemática: dia nacional da mentira, no sentimento popular; e o primeiro dia do Golpe Militar ocorrido no Brasil em 1964.

14 São eles: Ivo Tadeu Bianchini, Célio Camargo Vieira, Milton Tadeu Barroso Ganborgi, Júlio César Ribeiro Ramos, Francisco Valio Vaz, Luiz Renato Krebses, Paulo Oswaldo Ramos e Gracilio Felipe de Moraes.

quais os signatários estão imbuídos e a forma contundentemente contrária à posição subversiva que havia tomado a CNBB. Segundo ainda os signatários, a verdadeira Igreja Católica teria em Scherer seu último representante do cristianismo no Sul do Brasil.

De posse de todas essas informações, Sérgio Bonson, no estilo que o caracteriza, coloca os personagens do imbróglio numa charge muito perspicaz e criativa. Num cortejo semelhante ao retratado por Bosch na Figura 5 e visivelmente influenciado pelo artista flamengo, Bonson coloca o grotesco¹⁵ à serviço da cultura popular, humoristicamente satirizando a situação social de modo competente escrita na matéria de Ney Vidal. Na charge de Bonson estão em cortejo o cardeal Scherer, Al Neto e a figura zoomorfizada do diabo, os três montados num bovino mocho, como se chamam no Sul do Brasil os bois girolandos e/ou angus que não possuem chifres e, no caso das fêmeas, são excelentes produtoras de leite. Nesse sinal¹⁶ colocado por Bonson (o boi mocho), nosso bardo artista faz uma profunda crítica à postura conservadora encenada pelo cardeal e Al Neto. Ambos, junto do diabo, em realidade deveriam estar montados num cavalo puro sangue marchador (raça originalmente brasileira desenvolvida há mais de duzentos anos, a partir do sul do estado de Minas Gerais), mas Bonson, no melhor estilo grotesco que encerra toda charge de excelência, os coloca montados num mocho, ressaltando as funções pecuaristas de Al Neto e as terrenas e nada celestiais de Scherer.

15 Magistral síntese acerca do grotesco pode ser encontrada em Petry (2011b). Em sua Dissertação, a partir dos trabalhos do também flamengo artista Pieter Bruegel, o velho, Michele Petry indica caminhos e descaminhos para se pensar historicamente o grotesco. Muito sedutora a ideia de adensar discussão a respeito do grotesco e em diálogo com Petry, aqui, dados os limites deste texto, não será possível realizar.

16 Suscito brevemente a abordagem descrita por Carlo Ginzburg (1989) em seu trabalho intitulado *Mitos, Emblemas e Sinais*.

Figura 6
Em cena: o bispo



Fonte: Bonson, Sérgio (1980) "Al Neto e o diabo" em *Jornal Afinal* (Florianópolis) Nº 2, p. 14.

Noutro trabalho feito para o *Afinal*, Sérgio Bonson narra graficamente em sua charge o curto texto de Orlando Tambosi posto na seção Feira Livre (páginas 4 e 5) do Jornal. O texto da matéria é o seguinte: "Um obscuro vereador de Itajaí (do PDS é claro) sugeriu a decretação da pena de morte os bandidos e corte das mãos para os ladrões. Se essas medidas entrassem em vigor, certamente veríamos muitos manetas à frente de nossas instituições". Bonson seguiu a mesma dimensão do deboche ao que nos assombra: corrupção política, desvio de recursos públicos para fins privados e, naquele momento, do quarto final da Ditadura Militar no Brasil. Entre esses elementos que assustam quaisquer perspectivas democráticas, estava também a pena de morte¹⁷. A pena capital é ainda hoje assunto bastante tenso no Brasil, e estão

17 Uma análise bem articulada sobre a pena de morte no Brasil, a partir de dois processos-crimes, pode ser encontrada em (Abal e Reckziegel, 2018).

envolvidos com ele sobretudo os setores mais conservadores de nossa sociedade. Naquele primeiro semestre de 1980, mais precisamente em 31 de janeiro de 1980, foi fundado o Partido Democrático Social — PDS, o mesmo citado por Tambosi em seu texto. O PDS é praticamente um desdobramento da Aliança Renovadora Nacional — ARENA, que sustentou politicamente o governo da Ditadura Militar no Brasil. Em 1980, espalhava-se a ideia, sobretudo entre parlamentares da base autoritária governamental. É o caso, entre outros, de Amaral Netto, deputado federal pelo Rio de Janeiro sempre por partidos como ARENA e PDS, que fazia campanha ostensiva pela pena de morte no país.

Figura 7

Em cena: o político e o carrasco



Fonte: Bonson, Sérgio (1980). O político e o carrasco, *Jornal Afinal*, Florianópolis.

Agora, já em outro momento na carreira e após ter trabalhado para a *Folha de São Paulo*, visto que “Entre os anos de 1980 e 1985, Bonson, que se dedicava aos desenhos de humor, passou a trabalhar como chargista no *Jornal de Santa Catarina* e a atuar como *free-lancer* nos jornais *Folha de São Paulo* e *O Estado de São Pau-*

lo” (Petry, 2011b, p. 45), Sérgio Bonson se envolve com a criação do jornal alternativo *A Bernunça*¹⁸. O periódico ainda não me está plenamente identificado (até o fechamento deste texto), visto que consegui apenas dois números do jornal, mas posso afirmar que foi criado em 1986 (provavelmente no mês de agosto). Depois de alguma pesquisa, encontrei o expediente do jornal onde se lê: “Jornal *A Bernunça* — o jornal de boca grande — é uma publicação da Rede Bernunça de Comunicação — RBC — sediada à rua [sic] Madre Benvenuta, 26, Trindade, Florianópolis, Santa Catarina. Conselho Editorial: Dario de Almeida Prado Júnior, Eloi Galotti Peixoto, Márcio Dison e Sérgio Luiz de Castro Bonson” (*A Bernunça*, 1986, p. 2, grifo do autor).

Em realidade, e voltando ao envolvimento de Bonson com as motivações socioculturais que a todos se colocavam, o artista bem manifesta muito da chamada cultura popular tradicional e não folclorizada — felizmente — da Ilha de Santa Catarina. *A Bernunça* é uma figura zoomorfizada, o que é muito comum encontrar na obra do artista ilhéu¹⁹. Segundo Nereu do Vale Pereira (92 anos de idade em agosto de 2021), folclorista em sua plenitude, economista e doutor em Ciências Humanas (UFSC, 1974), assumiu vaga de deputado estadual em 1965 (até então era suplente desde 1963) e fundou o Partido Democrático Cristão (PDC), ainda em 1946, *A Bernunça* é uma “espécie de dragão ou bicho-papão que engole tudo o que encontra pela frente [...] e tem origem em tradições ibéricas e espanholas da região da Galícia, onde existem desfiles de um monstro folclórico muito semelhante, denominado ‘coca” (Pereira, 2010, p. 2). Com corpo humano e cabeça de dragão, *A Bernunça* é uma manifestação cultural legítima da cultura catarinense, folclorizada ou não²⁰. O *Boi de Mamão*, que tem *A Bernunça* como um de seus personagens, é cultura ainda bem viva no litoral de Santa Catarina e em algumas cidades interioranas, é basicamente uma encenação cômica e dramática sobre a morte e a ressurreição do boi, retratado, também, como vimos, por Bonson, na charge anterior.

Seja como for, em seu Ano II, número 2, de junho de 1987, na página 2, *A Bernunça* traz matéria assinada por Marcio Dison sob o

18 Agradeço sobremaneira a atenção e gentileza que me dispensou Heitor Caraméz Peixoto, quem me forneceu ao menos dois números do *A Bernunça*, além de outras informações que me foram de grande valia para conclusão deste texto.

19 Entre outros, ver: Roberge e Broering (2013).

20 Para problematização sobre o papel do folclore na cultura brasileira e sua aproximação e/ou afastamento das ciências humanas a partir do olhar do sociólogo progressista Florestan Fernandes, ver Garcia (2001).

título: “Bernunça essa moda pega e Califa do Palácio”, onde se lê: “A boca grande da *Bernunça* está sendo de grande valia para a política de contenção de despesas que o coronel Pedro Ivo Figueiredo de Campos afirma estar empenhado em executar no governo de Santa Catarina”. Resumidamente, a matéria, em suas duas partes citadas, atribui ao então governador de Santa Catarina, entre 1987 e 1990, uma série de atos que privilegiavam altos salários aos cargos comissionados do Governo do Estado, a exemplo de seu sobrinho, Sérgio Veríssimo Ribeiro. A matéria é fechada com a cobrança de cumprimento de comprometimento do governador e de seus secretários, com a devolução aos cofres do estado de tudo que eventualmente fosse recebido “indevidamente”. Bonson utiliza o expediente da zoomorfização tanto para *A Bernunça*, pelas razões aqui demonstradas, quanto para os políticos referenciados na matéria, que em forma zoomorfizada de cobras ou serpentes, assustados pela possível engolida da *Bernunça*, dizem: “Calma! Calma! A gente vai devolver a grana”, conforme apresentado na Figura 8 a seguir:

Figura 8
Em cena: *A Bernunça*



Fonte: Bonson, Sérgio (1987) “A Bernunça” em *A Bernunça* (Florianópolis) Ano II, Nº 2.

O último trabalho de Sérgio Bonson que apresento aqui neste texto é também uma charge²¹ publicada no jornal *A Bernunça*, em que ele,

21 Bonson foi editor do jornal *A Bernunça*. O artista sempre assinou seus trabalhos. Nessa charge publicada aqui, “o trenzinho”, não há assinatura de Bonson, tampouco de outro artista. Até onde consegui levantar de informações quando do fechamento deste texto, Bonson era o único chargista de *A Bernunça*. O jornal já havia passado por algumas ameaças de processos pelas notícias e charges publicadas. Em realidade, um processo foi formalizado um pouco mais à frente, no mês de agosto de 1987, sobre outra charge assinada por Bonson. É possível inferir, com chances quase absolutas de acerto, que é uma charge de Bonson, pelo traço característico do artista, e em particular pelo personagem posto em segundo plano na charge, que diz: “Que trem que nada! Olhóhóhó! [preste atenção, veja] isso é a turma da penca”, o qual se repete com expressões corporais muito semelhantes, em outros trabalhos de Bonson,

como colocado anteriormente, era um de seus editores. No mesmo Ano II, número 2, de junho de 1987, na página 3, em matéria assinada por Nunzio Briguglio²², somos convidados a conhecer um pouco da gênese do Estado e da Nação Brasileira, a partir de uma análise histórico-psicológica, como faz, entre outros, Cornelius Castoriadis (1995). Em sua matéria, Briguglio explicita uma série de traumas vividos pela Nação Brasileira, em particular, em sua cultura e pelos políticos que tentam representá-la, invariavelmente sem muito sucesso. Segundo Briguglio:

É muito trauma. Aí veio aquele mesmo coronel símbolo da pior escória política da história deste país e virou o salvador do povo brasileiro [vindo do Maranhão] [...]. Pobre povo brasileiro, abandonado pela mãe [a corte portuguesa], fúrnicado pelo primeiro pai [Dom Pedro I], devasso na infância e juventude, colocado no meretrício pelo terceiro [República Velha], o quarto se suicidou [Getúlio Vargas], o sexto o rejeitou [Jânio Quadros], o sétimo o traiu [Ditadura Militar] e o oitavo [José Sarney] o recriminou dizendo que a culpa de tudo é dele. Diabos! Queria que fosse de quem?

A síntese artística apresentada por Bonson na charge referente ao texto de Briguglio é perspicaz, mordaz, obscena e absolutamente precisa, ao invocar expressões da cultura local (Florianópolis) e relacioná-la à cultura política nacional, sendo ambas resultado de uma sacanagem²³ política coletiva. Partindo de seu tempo presente, datado de 1987, Sérgio Bonson coloca à frente e puxando um trenzinho, desses que se faz em brincadeiras ou festas de carnaval, ninguém menos (tampouco mais) que José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, ou simplesmente José Sarney, presidente do Brasil entre 1985 e 1990. Na sequência do trenzinho, está Ulysses Guimarães, à época presidente da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional e, também, da Assembléia Nacional Constituinte (1987-1988) instaurada em 1º de fevereiro de 1987, que produziria a atual e vigente Constituição Brasileira. Guimarães foi conhecido opositor à Ditadura Militar, e se pode inferir que, na-

a exemplo de *Impressions de France*. Assim, é bem possível que Bonson não tenha assinado a charge evitando processo ou mesmo algum outro tipo de censura, pois, afinal, embora a partir de 1985 a censura tacitamente deixara de existir, uma formalização do fim desse repressor dispositivo seria consolidado apenas em 3 de agosto de 1988 e, posteriormente, inserido na Constituição Brasileira, promulgada em 5 de outubro do mesmo 1988 e vigente até hoje (2021).

22 À época editor do *Correio Braziliense* e correspondente de *A Bernunça* em São Paulo e Brasília.

23 Para uma abordagem detalhada do sentido de obscenidade e sacanagem presentes na obra de Bonson, ver o competente trabalho de Broering (2020).

quele período, era tão ou mais influente na política nacional que José Sarney. Na charge realizada, todos os personagens completam a ordem do trenzinho, todos em forma caricata e nus (assim como Sarney e Guimarães, um militar, um rico cartola (seria um banqueiro?) e o Tio Sam, a personificação nacional dos Estados Unidos. José Sarney efusivamente cantarola: “Se não for para o Maranhão vai pro Piauíííí”, em franca alusão ao estado do Piauí, que a exemplo do Maranhão, terra de Sarney, é um estado da Região Nordeste, mas também aludindo à onomatopéia de um trem. Em segundo plano, vê-se um traseunte qualquer — quase sempre caricaturado da mesma forma nos trabalhos de Bonson — fumando despreocupadamente e afirmando: “Que trem que nada! Olhóhóhóhó! [preste atenção, veja] isso é a turma da penca”²⁴. Nesse momento, a criatividade de Bonson é magistral, quando articula a sacanagem política presente na capital catarinense — e nela se entende a expressão “turma da penca” — com aquela de base nacional, colando a política como uma grande sacanagem. À guisa de título e no rodapé da charge, Bonson coloca: Sarney e os miquinhos amestrados: “Vamos nesta festa fazer um trenzinho”²⁵.

24 Bonson realizou alguns trabalhos para o *Jornal Diário do Litoral*, conhecido por *Diarinho*, da cidade de Itajaí (SC). O *Diarinho* tem linha editorial que segue a linguagem popular, na maioria das vezes, obscena e com forte concepção eschachada e humorística. Em 30 de junho de 2006, comentando os arranjos políticos feitos às pencas pelos políticos para as eleições em outubro daquele ano, em sua coluna no *Diarinho* e, também, em seu blog *De Olho na Capital*, o jornalista César Valente diz que: “A penca tá formada! Tal e qual na penca do Ribeirão (uma espécie de trenzinho lendário e profano, onde um ia engatado no outro), PMDB, PSDB, PFL e PPS trancaaram-se em um hotel (hum...) e depois de horas as portas fechadas decidiram que irão mesmo juntinhos para as eleições (Valente, 2006).

25 Em 1983, Léo Jaime, famoso cantor brasileiro (também ator), compôs a música *Sônia*, em que se pode encontrar em parte da letra: “Sônia, chega mais aqui e fica bem juntinho Sônia, vamos nessa festa fazer um trenzinho, você na frente e eu atrás, e atrás de mim um outro rapaz, Sônia, que loucura!”. Léo Jaime era confundido à época que Bonson produz a charge, como ainda integrante da banda João Penca e seus Miquinhos Amestrados. João Penca foi uma banda brasileira de *rockabilly* e *surf music*. Léo Jaime deixou João Penca e seus Miquinhos Amestrados em 1983, quando compôs a música *Sônia* citada.

Figura 9

Sarney e os miquinhos amestrados



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sérgio Luiz de Castro Bonson tem uma obra artística e uma arte engajada que vai muito além do que aqui tentei demonstrar. Em função dos limites colocados ao texto para essa ocasião, não foi possível adensar nem apresentar mais detalhadamente trabalhos que se constroem de forma precisa e competente sobre a obra de Sérgio Bonson, a exemplo de Petry (2011). Conforme tratado aqui (e em outros trabalhos aqui referenciados), a obra de Sérgio Bonson está simultaneamente relacionada às especificidades do local em que é produzida e à dimensão nacional, sobretudo, ao incorporar realidades mais amplas acerca dos momentos que ele retratava.

Importa ressaltar que, potencialmente, podem possibilitar o alcance de narrativas mais elaboradas sobre o cotidiano da cidade de Florianópolis entre 1974 e 2004, ano esse que antecede aquele do falecimento do artista e historiador Sérgio Bonson. Ele soube como poucos capturar a polissemia das urbanidades, onde elas ocorreram e, em particular, na capital catarinense. É proposital a polissemia para *urbanidade* que aqui demonstrei. O termo *urbanidade* vem sendo utilizado até mesmo na esfera do Direito, no sentido de que seria necessário

tratar a todos de forma igual, respeitosa e discreta. Nos trabalhos de Bonson aqui apresentados, pode-se verificar essa multiplicidade de sentidos da urbanidade por meio dos diferentes personagens elencados pelo artista, quer seja nos livros publicados e nos trabalhos realizados para a grande imprensa, a exemplo de *O Estado* e a *Folha de São Paulo*, quer seja nos jornais alternativos de esquerda como o *Afinal* e *A Bernunça*. Necessário lembrar que os dois jornais alternativos em que trabalhou Bonson estão separados por sete anos, não é conta da mentira, e sim um período (1980-1987) em que a obra de Bonson amadurece à medida que entra 1980 em plena Ditadura Militar, e sai em 1987, em plena abertura democrática e com o fim — ao menos formalmente — da censura patrocinada pelo Estado Brasileiro ao longo dos anos de chumbo.

Por último, um agradecimento e uma parte pequena de um poema. Agradeço a minha companheira e também historiadora, Júlia Scherer, pela leitura atenta do texto, e pelas valorosas observações que me fez. Quanto ao poema, sigo Fernando Pessoa (1987): “É preciso não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores: há ideias apenas. Há cada um de nós como uma cave. Há uma janela fechada, e todo mundo lá fora; e um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela”. E não é um artista como Bonson, um exímio abridor de janelas?

REFERÊNCIAS

- A Bernunça* (1986). *O jornal da boca grande*, II(2). Florianópolis.
- Abal, Felipe Cittolin e Reckziegel, Ana Luiza Setti (2018). A pena de morte na Ditadura Civil-Militar brasileira: uma análise processual. *Tempo e Argumento*, 10(25). Florianópolis.
- Bakhtin, Mikhail (1987). *A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais*. São Paulo: Hucitec.
- Bonson, Sérgio (1987). *Waldirene A AM*. Florianópolis: Edeme Ind. Gráfica.
- Bonson, Sérgio (1990). *Tudo pelo soizial*. Florianópolis: Papa-Livro.
- Broering, Virginia (2020). *Cenas de humor explícito: sacanagem nas tirinhas Waldirene a AM (1986-1990)*. Dissertação de Mestrado em História, Florianópolis. Disponível em <https://bit.ly/3gaQesM> (acesso em 19 de fevereiro de 2021).
- Campos, Emerson César de e Petry, Michele Bete (2010). Histórias desenhadas: os usos das expressões gráficas de humor como fontes para a história. *Fronteiras*, 1. Florianópolis.

- Castoriadis, Cornelius (1995). *A instituição imaginária da sociedade*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Davis, Natalie Zemon (1990). *Cultura do povo: sociedade e cultura no início da França moderna*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Eagleton, Terry (2005). *A idéia de cultura* (Tradução de Sandra Castello Branco). São Paulo: Unesp.
- Fundação Getúlio Vargas (2009). *Biografia Vicente Scherer*. Disponível em <https://bit.ly/3AWmA2e> (acesso em 18 de agosto de 2021).
- Garcia, Sylvia Gemignani (2001). Folclore e sociologia em Florestan Fernandes. *Tempo Social*, 13(2). São Paulo.
- Ginzburg, Carlo (1989). *Mitos, emblemas e sinais: morfologia e história*. São Paulo: Cia. das Letras.
- Jeudy, Henri-Pierre (2005). *Espelhos das cidades*. Rio de Janeiro: Casa da Palavra.
- Kock, Zenir Maria (2021, 20 de julho). [Entrevista cedida a] Emerson César de Campos. Florianópolis.
- Martins, Celso (2018, 08 de abril). [Entrevista cedida a] Emerson César de Campos. Florianópolis.
- Memória Política de Santa Catarina (2020). *Biografia Nereu do Vale Pereira*. Disponível em <https://bit.ly/3mcvK6T> (acesso em 18 de agosto de 2021).
- Michelmann, Alan Cristhian (2015). *Franklin Cascaes, a divulgação turística de Florianópolis e a invenção da "Ilha da Magia"*. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em História, Florianópolis.
- Mintz, Lawrence E. (1988). *Humor in America*. Washington, D.C.: Library of Congress.
- Nonnenmacher, Marilange (2007). *Vida e morte Miramar: memórias urbanas nos espaços soterrados da cidade*. Tese de Doutorado em História, Florianópolis.
- Pereira, Nereu do Vale (2010). *O Boi de Mamão: folguedo folclórico da Ilha de Santa Catarina: Introdução ao seu Estudo*. Florianópolis: Associação Eco Museu do Ribeirão da Ilha.
- Pessoa, Fernando (1987). *Obras em prosa*. Lisboa: Publicações Europa-América.
- Petry, Michele Bete (2011a). Histórias em quadrinhos: o cotidiano e a cidade de Florianópolis (SC) na contemporaneidade. Em Campos, Emerson César de; Falcão, Luiz Felipe Falcão e Lohn, Reinaldo Lindolfo (Orgs.), *Florianópolis no tempo presente* (Florianópolis: UDESC / DIOESC) Vol. 1.

- Petry, Michele Bete (2011b). *Entre desenhos, aquarelas e expressões gráficas de humor: a cidade e o cotidiano de Florianópolis (SC) na obra de Sérgio Bonson*. Dissertação de Mestrado, Florianópolis. Disponível em <https://bit.ly/3stzcLm> (acesso 30 de junho de 2021).
- Petry, Michele Bete (2013). Sérgio Bonson: um artista da cidade e do cotidiano. *Revista História Catarina*. Florianópolis.
- Pires, Maria da Conceição Francisca (2006). *Cultura e política entre Fradins, Zeferinos, Graúnas e Orelanas*. Tese de Doutorado em História, Rio de Janeiro.
- Roberge, Livia Bernardes e Broering, Virginia (2013). Da cozinha ao Congresso: as diferentes perspectivas do humor na obra de Sérgio Bonson (1974-2004). *Anais do IV Encontro Nacional de Estudos da Imagem e I Encontro Internacional de Estudos da Imagem*, 7 a 10 de maio.
- Rodrigues, Arille Rosa (2018). *Os alternativos da ditadura: o caso do Jornal Afinal (Florianópolis, 1980-1981)*. Dissertação de Mestrado, Florianópolis.
- Rolim, Nelson (2021). [Entrevista cedida a] Emerson César de Campos. 6 de agosto. Florianópolis.
- Valente, Cesar (2006, 30 de junho). Um dinheiro que nunca veremos? *De Olho na Capital*. Disponível em <https://bit.ly/3CZ61F2> (acesso: 18 de agosto de 2021).
- Williams, Raymond (2007). *Palavras-Chave: um vocabulário de cultura e sociedade* (Tradução de Sandra Gardini). São Paulo: Boitempo.

NEOLIBERALISMO Y CLASE OBRERA

REFLEXIONES EN TORNO A LAS TRANSFORMACIONES EN LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO DE LA LUCHA DE CLASES EN ARGENTINA

Alejandra Pisani

INTRODUCCIÓN

La categoría política de izquierda es y ha sido a lo largo de la historia objeto de debates que tuvieron efectos políticos concretos. En la actualidad uno de los ejes de esos debates gira en torno a su pertinencia, habida cuenta de la crisis del “socialismo real” que a partir de la caída del muro de Berlín abrió un período de incertidumbres, replanteamientos y de una pretendida disolución de las fronteras con la derecha (Archila, 2006). Este debate supone de manera más o menos solapada otra discusión que refiere a su vigencia como proyecto político. Es decir, lo que está en juego en esas discusiones no es sólo si la noción de izquierda es pertinente para caracterizar a las diversas formas de organización y lucha actuales contra el orden establecido sino, en el mismo movimiento, la determinación de la vigencia de la abolición de la propiedad privada como proyecto político.

Entre los argumentos que pretenden sustentar la inviabilidad de los proyectos revolucionarios adquieren cada vez más fuerza aquellos que sostienen que la globalización económica torna imposible cualquier régimen social que se sitúe por fuera del mercado mundializado y la interdependencia de las actividades productivas, políticas y culturales capitalistas (García Linera, 1999) y aquellos que reducen toda experiencia política posible al binomio “democracia-totalitarismo”,

postulando que cualquier obstaculización del Estado al funcionamiento libre del mercado, por mínima que sea, es primer paso hacia el totalitarismo. De este modo, se sostiene, los proyectos revolucionarios no solo son inviables sino también indeseables en tanto violatorios de la libertad de individuos.

Diversos estudios (Dardot y Laval, 2013; Foucault, 2007; Harvey, 2007; Murillo, 2018, 2020) han planteado que esas posiciones forman parte de estrategias neoliberales de gobierno de los sujetos y las poblaciones. Estas estrategias tienen entre sus núcleos centrales la colonización de las subjetividades a través de lo que se anunció como una “revolución cultural” que debería transformar los valores, percepciones y sentimientos orientándolos hacia la naturalización del interés personal, a la libertad individual y la competencia como aspectos constitutivos de lo humano.

Siguiendo esta clave de lectura el presente artículo sostiene que uno de los blancos de estas estrategias es la neutralización del potencial disruptivo de las resistencias obreras y de las trabas que la lucha de clase implica para la reproducción de las relaciones sociales capitalistas. Desde esa perspectiva, el objetivo es reflexionar sobre algunos aspectos del concepto de clase social en los textos de Marx, en particular en lo que refiere a su potencial para la comprensión de las estrategias neoliberales de gobierno de la lucha de clases en Argentina.

EL CONCEPTO DE CLASE SOCIAL EN MARX. LA CENTRALIDAD DE LA CULTURA EN LAS LUCHAS Y RESISTENCIAS OBRERAS

Uno de los principales desafíos a la hora de especificar el concepto de clase social es que Marx no proporciona una definición formal del mismo. Si bien esto trae aparejados numerosos inconvenientes, la ausencia puede ser entendida en sí misma como un indicador, la falta de un concepto “abstracto” se vincula al hecho de que, para Marx, las clases constituyen un fenómeno histórico que sólo puede comprenderse en el marco del proceso social en el que cobran existencia y se desarrollan. De ahí que la mayoría de sus especificaciones partan del estudio de dos clases sociales fundamentales, la burguesía y el proletariado. En “La llamada acumulación originaria” (Marx, 2011) la existencia de las clases es explicada como el resultado del desarrollo de la división del trabajo. Esta división, a su vez, encuentra fundamento en una violencia expropiatoria que, en el mismo movimiento, despoja a los productores directos de la propiedad que ejercían sobre sus medios de producción, produce la apropiación de estos medios por parte de la burguesía y elimina las relaciones que convertían a los trabajadores en propiedad de terceros. De este modo, la expropiación de los medios de producción convierte a los trabajadores en clase proletaria y a los

expropiadores en burguesía. Sin embargo, la explicación acerca de la conformación de las clases sociales no se reduce a un momento histórico particular; la escisión de los trabajadores respecto de los medios de producción es un proceso que el orden social capitalista produce y reproduce a cada momento como condición para su existencia.

Pero la clase obrera no se presenta inmediatamente por el hecho de existir estructuralmente ni por verse forzada a vender su fuerza de trabajo. En *La ideología alemana* (Marx y Engels, 1970) se plantea que los individuos sólo conforman una clase en cuanto se ven obligados a sostener una lucha común con otra clase, ya que por fuera de esta confrontación se enfrentan unos con otros hostilmente en el plano de la competencia. Las primeras formas de esta confrontación, a su vez, se producen de manera simultánea a la conformación estructural de la clase. Es importante aclarar que en este planteo la idea de confrontación adquiere un sentido amplio que excede a las luchas con objetivos declaradamente revolucionarios, incluyendo todas aquellas prácticas que dan cohesión a los trabajadores como grupo social y constituyen de hecho una traba al normal desarrollo de las relaciones sociales capitalistas.

El concepto de clase social designa entonces una relación socio-histórica que refiere a dos dimensiones íntimamente relacionadas entre sí: un posicionamiento estructural y una confrontación devenida de la contradicción entre los propios intereses y los de la clase antagónica. Estos dos sentidos aparecen condensados en un pasaje de *El 18 brumario de Luis Bonaparte*, donde se plantea que “en la medida en que millones de familias viven bajo condiciones económicas de existencia que las distinguen por su modo de vivir, sus intereses y su cultura de otras clases y las oponen a éstas de un modo hostil, aquellas forman una clase” (Marx, 2003, p. 116). En este texto se introducen nuevos elementos al concepto de clase, además de la posición estructural y la confrontación con la clase antagónica, la clase se define aquí por un “modo de vivir” y “una cultura” específicas. Aunque ninguna de estas instancias aparece claramente especificada, las mismas parecen ubicarse como mediación entre los procesos antes referidos. La cultura puede pensarse entonces como un espacio en el cual las contradicciones estructurales se resuelven en confrontación social. Esto implica que el establecimiento de la lucha que configura a la clase como tal depende, en gran parte, del sentido que los sujetos que la componen otorguen a su propia situación objetiva. La experiencia de explotación dará lugar a una acción transformadora sólo en la medida en que dicha situación sea concebida como injusta, no natural, compartida por otros y, por lo tanto, factible de ser modificada a través de la acción colectiva. El conocimiento de las múltiples formas de entender ese

carácter injusto y los objetivos de las acciones de la clase solo puede resultar del estudio de experiencias históricas concretas que exceden los límites del presente escrito. Sin embargo, es posible sostener de manera tentativa que sin estas percepciones sería imposible la transformación de la clase económica en sujeto político.

De este modo, las dimensiones del concepto de clase referidas permiten sostener que la clase obrera se configura como tal a partir de procesos objetivos y subjetivos: los primeros, vinculados a la inserción en la estructura productiva, y los segundos, relacionados con las formas de significación de esa inserción, que permiten (o dificultan) diversas formas de resistencia y lucha de clases. Cabe aclarar que la alusión a los procesos objetivos y subjetivos de la clase refiere aquí a instancias analíticas que resultan indisociables en la realidad concreta y que no se trata de instancias monolíticas sino que incluyen heterogeneidades a su interior. Así, si bien las condiciones objetivas del orden social capitalista suponen siempre la explotación de una clase por parte de la otra, las formas que asume esta relación varían históricamente dependiendo de las diferentes correlaciones de fuerza que se establecen en el proceso de lucha de clases. Del mismo modo, las condiciones subjetivas varían a lo largo de la historia e incluso en un mismo momento pueden existir significaciones diversas que dan lugar a acciones diferentes y a veces contradictorias por parte de diferentes sectores de clase. Esta heterogeneidad, sin embargo, no implica que los procesos subjetivos posibles en un momento histórico determinado sean infinitos ya que los mismos están vinculados a las condiciones materiales de existencia de los trabajadores.¹ Esto implica que las condiciones objetivas establecen límites a los procesos subjetivos posibles haciendo que algunos sean más probables que otros pero no los determinan mecánicamente.

Resumiendo lo planteado hasta aquí, las clases sociales constituyen un fenómeno anclado en tres procesos: una posición estructural definida a partir de la relación con los medios de producción; una confrontación posibilitada por la percepción de la diferencia entre los propios intereses y los de la burguesía; y un cierto “modo de vivir” o “cultura” que, según la hipótesis planteada, constituiría una de las condiciones que hacen posible que la experiencia objetiva de explotación dé lugar a diversas formas de confrontación.

1 Al respecto resulta sugerente el concepto de “limitación estructural” desarrollado por Erik Olin Wright según el cual la estructura social establece los límites dentro de los cuales pueden variar los procesos subjetivos excluyendo ciertas posibilidades (Wright, 1983, pp. 8-9).

Esta lectura no pretende agotar el complejo problema del concepto de clase social en los textos de Marx, se trata más bien de rastrear algunos elementos que aporten a la comprensión de las estrategias neoliberales de gobierno de la lucha de clases.

LOS COMIENZOS DEL NEOLIBERALISMO EN ARGENTINA. LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES COMO OBSTÁCULO A LA GENERALIZACIÓN DE SUS ESTRATEGIAS

En *Nacimiento de la biopolítica* Foucault (2007) sostiene que el neoliberalismo es irreductible a una mera doctrina económica, se trata de una racionalidad política que articula elementos discursivos y extra-discursivos para dar lugar a formas específicas de gobierno de los sujetos y de las poblaciones. En consonancia con esto, el autor afirma que “el problema del neoliberalismo no es saber cómo puede recortarse, dentro de una sociedad dada, un espacio libre que sería el mercado, el problema pasa, al contrario, en saber cómo se puede ajustar el ejercicio global del poder político a los principios de una economía de mercado. En consecuencia, no se trata de liberar un lugar vacío sino de remitir, referir, proyectar en un arte general de gobernar los principios de una economía de mercado” (Foucault, 2007, p. 157). Esto significa que la dimensión “económica” del neoliberalismo es indisoluble de un conjunto de estrategias políticas orientadas a la generalización de la competencia como forma del vínculo social, la auto-responsabilización de cada sujeto por la propia vida y muerte, la naturalización de la desigualdad y la ontologización de libertad, entendida como derecho individual a la no coacción. En una de sus dimensiones esas estrategias apuntan a que los sujetos se perciban como “empresarios de sí mismos”. Esto es, como individuos que orientan sus prácticas a la maximización de sus beneficios, a través de una óptima utilización de los recursos disponibles en todos los ámbitos de su existencia, y cuya libertad los lleva a tomar decisiones que pueden impulsar en cada caso su éxito o su fracaso. Por esta vía, la explotación y la desigualdad dejan de ser fenómenos sociales vinculados a un modo de producción particular para convertirse en el resultado del fracaso de algunos individuos en sus propias elecciones (Becker, 1983; Hayek, 1995; Mises, 1968).

La construcción de esas estrategias encuentra uno de sus momentos fundantes en el Coloquio Walter Lippmann, una reunión internacional de empresarios e intelectuales que se desarrolló en París en agosto de 1938 con el objetivo de fundar una organización que contribuyera a la restauración del liberalismo en un contexto signado por las consecuencias de la llamada “crisis del 30”, el ascenso del fascismo y del nacionalsocialismo, la guerra civil española, la presencia amenazado-

ra de la Unión Soviética, la beligerancia de los partidos nacionalistas y el *New Deal* en los Estados Unidos. Estos acontecimientos fueron leídos como una amenaza al normal desarrollo del capitalismo en tanto implicaban una mayor intervención del Estado, la politización de los mercados y una planificación de la economía (Denord, 2001; Foucault, 2007). De los debates desarrollados en el Coloquio surgieron dos premisas básicas: la primera, era necesario un Estado fuerte, que interviniera para proteger y garantizar el funcionamiento del mercado; y la segunda, los derechos económicos debían tener prioridad sobre los derechos políticos. Aparte de eso, hubo también un acuerdo básico en el modo de plantear el problema como una disyuntiva clara, simple, definitiva, sin medias tintas: economía de mercado o economía planificada, libertad o totalitarismo. Estas premisas se asentaban en un diagnóstico según el cual el liberalismo había devenido en un obstáculo para el gobierno de la lucha de clases y esto, en buena parte, estaba relacionado con la difusión de ciertos valores y percepciones que habían posibilitado diversas formas de lucha en pos de la realización efectiva del derecho a la igualdad.

De ese diagnóstico surgió, como fue mencionado, la necesidad de gestionar un nuevo liberalismo, o “neoliberalismo”, término que fue utilizado en el Coloquio, no sin debates, pero que habría sido acuñado por Ludwin von Mises en 1927. Con ese objetivo se decidió la creación del Centro Internacional de Estudios para la Renovación del Liberalismo que se reunió, por primera vez, en enero de 1939, con el propósito de organizar un congreso internacional a realizarse en el segundo semestre del año (Escalante, 2018; Salinas, 2016). El comienzo de la Segunda Guerra Mundial impidió que el congreso se reúna, pero la idea no se perdió. Apenas terminada la guerra, bajo el liderazgo de Friedrich Hayek, con financiamiento de empresarios estadounidenses y suizos, tuvo lugar la reunión fundacional de la Sociedad Mont Pèlerin, que sigue viva hasta la fecha, y que ha llegado a tener más de 900 miembros.² Entre sus principales objetivos se encuentra la articulación internacional de innumerables tanques de pensamiento que difundan los valores, ideas y prácticas del nuevo liberalismo, para lo cual, intentan colocar a sus “hombres clave” en diversos espacios internacionales, estatales nacionales, subnacionales, universidades y medios de comunicación³ (Foucault, 2007; De Büren, 2015; Murillo, 2020).

² 15 de los 26 invitados al Coloquio Lippmann estuvieron años después en la *Mont Pèlerin Society*.

³ Si bien existen organizaciones previas a la Sociedad Mont Pellerin, que actualmente se plantean objetivos similares, como la Fundación Rockefeller cuyos co-

Unos años después de la creación de la Sociedad Mont Pélerin, Von Mises, uno de sus miembros fundacionales, fue invitado por el Centro de Difusión de la Economía Libre y dictó seis conferencias en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La visita ocurrió en el mismo momento en que desde el Estado comenzaban a plantearse estrategias que mostraban las huellas del incipiente plan neoliberal.⁴ Entre ellas, la reducción del gasto de la administración pública y “racionalización” del funcionamiento de las empresas del Estado que formaron parte del llamado “plan de estabilización económica” anunciado por Frondizi a fines de 1958. Sus lineamientos se definieron en el marco de las recomendaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de las negociaciones llevadas a cabo para la obtención de un préstamo *stand-by*. Sin embargo, la implementación de estas medidas no estuvo exenta de conflictos. Entre los más resonantes pueden citarse la huelga de los petroleros en Mendoza contra la firma de los contratos con empresas norteamericanas iniciada en noviembre de 1958, en cuyo marco se declaró el estado de sitio, movilizándose tropas militares y deteniéndose a numerosos dirigentes sindicales; las medidas de fuerza llevadas a cabo por los trabajadores del frigorífico Lisandro de la Torre durante la segunda mitad de 1959, que incluyeron la ocupación del frigorífico y enfrentamientos directos con las fuerzas represivas; y las luchas llevadas a cabo por los trabajadores ferroviarios a fines de 1961 como respuesta a la puesta en marcha del *Plan Larkin* a instancias del Banco Mundial (BM), que incluyeron manifestaciones y enfrentamientos en varias partes del país y culminaron con la aplicación del Plan CONINTES.⁵ A estos conflictos se sumaron las importantes huelgas y medidas de fuerza protagonizadas por los empleados bancarios, los obreros metalúrgicos, los trabajadores textiles y los obreros azucareros tucumanos, además de cientos de disputas de menor al-

mienzos se remontan a 1889 o la Fundación Ford nacida en 1932, las características propias de estas organizaciones tornan difícil el acceso a fuentes que permitan determinar si la formación y articulación internacional de tanques de ideas forma parte de sus objetivos iniciales o si se fue configurando de manera posterior.

4 Dos años antes, en 1956, Friedrich Hayek había llegado al país para entrevistarse con el presidente de facto Pedro E. Aramburu y el mismo año Argentina se había incorporado al Fondo Monetario Internacional.

5 El Plan CONINTES (Connoción Interna del Estado) fue el nombre que recibió un régimen represivo aplicado en Argentina entre noviembre de 1958 y agosto de 1961, cuyo objetivo era poner fin a una serie de protestas obreras haciendo uso de la represión estatal y otorgándole, a su vez, “una amplia jurisdicción a las Fuerzas Armadas en la lucha contra los disturbios internos”.

cance y tres huelgas generales (Anzorena, 1998; Gordillo, 2003; James, 1991; Salas, 1990).

En materia educativa el gobierno de Frondizi se pronunció contra “el monopolio del Estado sobre la enseñanza” y, en agosto de 1958, avanzó sobre la reglamentación del artículo 28 de la Ley 6403/55 donde se establecía que “la iniciativa privada puede crear universidades libres”, es decir, que podían emitir títulos oficiales, siempre y cuando se sometieran a reglamento. La ley, que había sido aprobada por decreto por la dictadura de Aramburu en diciembre de 1955, fue impulsada por el Partido Demócrata Cristiano y apoyada por los sectores más conservadores de la burguesía y por personalidades como Álvaro Alsogaray. El decreto fue resistido por el sector universitario de la UBA que a lo largo de 1956 protagonizó huelgas, toma de facultades y manifestaciones públicas que llevaron a la renuncia del entonces rector de la UBA, José Luis Romero, y del Ministro de Educación, Atilio Dell’Oro Maini. En 1958 los conflictos se reanudaron, pero esta vez con mayor participación de los estudiantes secundarios, e incluyeron movilizaciones, ocupaciones de colegios, asuetos, piquetes y enfrentamientos callejeros con quienes apoyaban la ley. Estas acciones contaron con la adhesión de diversas organizaciones obreras e incorporaron entre sus ejes programáticos no solo las demandas propias, sino también la defensa de los recursos patrimoniales como el petróleo ante la firma de los contratos con empresas norteamericanas. Finalmente, el artículo fue aprobado con algunas modificaciones, entre ellas que las universidades privadas no podrían recibir subsidios estatales y que estarían sujetas a ciertos controles administrativos. De este modo, ya hacia fines de la década del cincuenta es posible observar una fuerte ofensiva por parte de las clases dominantes locales en articulación con los organismos internacionales, como el BM o el FMI, que tendía a la implementación de medidas de corte neoliberal, como la privatización de recursos estratégicos, la disminución de la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado y la desaparición de derechos sociales postulados como universales como la educación. Sin embargo, el despliegue de estas estrategias se vio fuertemente obstaculizado por las luchas y resistencias de los trabajadores que, cada vez más, empezaban a ser percibidas como una amenaza a la reproducción del orden social.

Otro momento clave en el despliegue del neoliberalismo en Argentina se produjo a partir de junio de 1966, cuando el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Arturo Illia se hizo con el poder del Estado, disolviendo la división de poderes y prohibiendo cualquier forma de organización política. La autodenominada “Revolución Argentina” desplegó un conjunto de medidas con el objetivo de “eficientizar” el

Estado y “racionalizar” la economía. A nivel educativo, esto se tradujo en un proyecto de reforma integral que abarcaba desde los primeros años hasta la universidad. El proyecto quedó plasmado en el documento *Educación, recursos humanos y desarrollo. Situación presente y necesidades futuras*, elaborado por el Consejo Nacional del Desarrollo y publicado en 1968. Allí se plasmaron los resultados del primer estudio sistemático en materia de educación elaborado por el Estado (De Luca, 2006). El estudio tomó tres grandes dimensiones para el análisis del sistema educativo que ponían de manifiesto la extensión de una lógica económica en la realización de diagnósticos y propuestas hacia el sistema educativo. Esas dimensiones fueron: eficiencia interna, eficiencia externa y distribución de oportunidades. A lo largo de todo el documento priman las consideraciones en torno a un supuesto “bajo rendimiento” de las “inversiones” realizadas en educación que, según lo allí planteado, estaría vinculado al carácter centralizado del sistema educativo. Frente a este problema el informe proponía la elaboración de una “ley básica” que regulara y diera organicidad a la participación de las autoridades provinciales en la prestación de servicios educativos. Un mes después de la aparición pública de este documento la dictadura de Onganía implementó la Ley 17878, cuyo propósito definido fue la descentralización del sistema educativo. Por esta vía, comenzaban a sentarse las bases de la estrategia según la cual la educación dejaba de ser un derecho universal que el Estado nacional debía garantizar a todos sus ciudadanos y pasaba a ser una “prestación” que las administraciones locales debían gestionar atendiendo a las peculiaridades de la población y a los recursos disponibles. Otro aspecto central de las reformas educativas implementadas por la dictadura de Onganía tuvo por objeto a las universidades. En agosto de 1966, unos días después de la represión conocida como “la noche de los bastones largos”, fue sancionada la Ley 16912 que habilitaba la intervención del Ministerio Nacional de Educación sobre las universidades y prohibía cualquier tipo de actividad política a los centros de estudiantes. A principios del año siguiente se sancionó la denominada “Ley orgánica de las universidades” que prohibía de modo explícito cualquier actividad política en su interior; habilitaba el ingreso de la caballería a la universidad, permitía el cesanteo de docentes por motivos políticos, excluía a los estudiantes de los órganos de gobierno de las universidades y abría la posibilidad de arancelamiento para alumnos que no aprobaran determinada cantidad de materias o reprobaran exámenes. De este modo, se ponía de manifiesto una estrategia tendiente a neutralizar el potencial disruptivo del movimiento estudiantil en el marco de su creciente articulación con diversas luchas y resistencias obreras que se estaban llevando a cabo en ese momento.

En el plano económico, uno de los blancos de la política de “racionalización” fue la provincia de Tucumán. La dictadura decidió intervenir y cerrar los ingenios en teoría menos eficientes, regular la producción de caña a partir de la expropiación de los cupos de producción a los pequeños productores rurales, mantener cupos de producción por ingenio, y poner en marcha un plan de incentivos fiscales para la radicación de nuevas industrias. Si bien estas medidas implicaron fuertes resistencias por parte de los trabajadores, que incluyeron huelgas, sabotajes, tomas de fábricas, enfrentamientos directos con las fuerzas represivas e incendios de cañaverales, el proceso no pudo ser revertido. A nivel estructural, las medidas llevaron al cierre de once de los veintisiete ingenios que funcionaban en la provincia, lo que supuso una contracción del 41% del aparato productivo local dado el carácter monoprodutor de su economía (Murmis y Waisman, 1969; Pavetti, 2001; Sigal, 1969, 1973). Los trabajadores portuarios fueron otro blanco de estas políticas. Con el objetivo de reducir los costos de las operaciones se puso en marcha un decreto que anulaba la jornada reducida en trabajos insalubres, disminuía el pago de horas extras y modificaba el tiempo de trabajo “normal”, reduciendo el salario a la mitad y dejando un tendal de despidos. Estas medidas dieron lugar a un paro de tres meses de alcance nacional, cuyo núcleo dinámico fue el puerto de Buenos Aires. El plan de racionalización económica alcanzó también a los trabajadores ferroviarios. A principios de 1967, se redujeron las horas de descanso, se ampliaron las horas de trabajo semanales obligatorias, hubo despidos masivos, traslados, clausura de ramales y privatización de talleres que pasaron a manos extranjeras. La dirección de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria terminaron finalmente acordando su participación en la gestión de las reformas y la intervención militar impuso parcialmente la racionalización del sector (Schneider, 2007). Estas luchas coincidieron con otros conflictos obreros, entre ellos, la represión violenta de una manifestación de trabajadores de Luz y Fuerza por la policía porteña y el inicio de paros en toda la industria automotriz cordobesa (Anzorena, 1998).

Las medidas tendientes a la concentración del capital y a la redistribución del ingreso en favor de los sectores más concentrados de la economía se agudizaron cuando en marzo de 1967 Adalberto Krieger Vasena, recientemente incorporado como ministro de economía, puso en marcha el llamado “Plan de Estabilización y Desarrollo”, con apoyo del FMI y del gobierno de Estados Unidos. El plan implicó la suspensión de los convenios colectivos de trabajo, el congelamiento obligatorio de los salarios por veinte meses, la reducción de la indemnización por despidos, la sanción de una ley de hidrocarburos, que permitía la participación de las empresas privadas en el negocio del

petróleo, y la sanción de la ley de alquileres que facilitaba los desalojos. Todo esto en un contexto signado por el debilitamiento, repliegue y fractura de las organizaciones sindicales tradicionales y los canales de expresión política de los trabajadores. Sin embargo, esto no supuso una clausura de la capacidad de lucha y resistencia de la clase obrera. Entre 1967 y 1969 los trabajadores argentinos llevaron adelante múltiples medidas de fuerza, entre las que se destaca la huelga de los trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en Ensenada, que contó con el apoyo de los trabajadores de las filiales de Mendoza y Comodoro Rivadavia y del movimiento estudiantil. La huelga, que se prolongó por sesenta y tres días e involucró a más de siete mil obreros, culminó con el despido de más de mil trabajadores, la pérdida de derechos laborales y la intervención de los sindicatos participantes. A esta medida de fuerza se sumaron las protagonizadas por los trabajadores de General Motors, empleados de farmacia, lecheros, papeleros, textiles, metalúrgicos, transporte y construcción, por sólo mencionar algunas. Estas acciones expresaron un incremento de la conflictividad obrera que alcanzó su pico máximo en el llamado “ciclo de los azos” entre 1969 y 1972. Aunque no es posible abordar aquí el complejo problema de los procesos que llevan a estas insurrecciones populares, ni las peculiaridades de cada una de ellas, es importante destacar que las mismas ponían de manifiesto una persistencia de la capacidad de organización, lucha y resistencia por parte de diversos sectores de la clase trabajadora que operó como obstáculo a los primeros intentos de despliegue del neoliberalismo en Argentina.

Retomando lo planteado en el apartado anterior, es posible argumentar que entre las condiciones que permitieron el despliegue de esas luchas durante las décadas del sesenta y setenta se encuentra la persistencia de ciertos valores (explícitos o no) y de una cultura forjada a lo largo de la experiencia histórica de la clase obrera. Si bien la especificación de estos valores sólo puede resultar de un estudio riguroso de las experiencias históricas concretas que excede las posibilidades de este artículo, es posible sostener de modo tentativo que entre esos valores resultaron particularmente significativos aquellos vinculados a una solidaridad intra-clase, cuya base material estaría dada por su práctica en la acción transformadora de la realidad objetiva a través del trabajo con otros, y aquéllos articulados en torno a la construcción de un “nosotros” frente a un “otros”, a partir de la percepción de la diferencia entre la propia experiencia y la del resto de los grupos sociales a los que estaba ligada su actividad (Pozzi, 2004, 2015 y 2021).

La persistencia de estos valores, anclados en las condiciones materiales de vida de los trabajadores y transmitidos oralmente de gene-

ración en generación, constituiría, según la hipótesis de trabajo aquí desarrollada, una de las condiciones centrales de las luchas y las resistencias obreras desarrolladas a lo largo de las décadas del sesenta y setenta en Argentina. Al tiempo que estas prácticas pondrían de manifiesto los efectos no deseados de las estrategias liberales de gobierno de la lucha de clases. Estas estrategias, que sobre la base de la ficción de un sujeto portador de derechos universales apuntaban a evitar “riesgos” manteniendo los problemas sociales dentro de los márgenes considerados “aceptables”, habían favorecido la difusión de ciertos valores y percepciones de la realidad que dieron lugar a diversas formas de lucha que aspiraban a la realización efectiva de esos derechos formalmente universales y con ello produjeron un cuestionamiento del orden social capitalista (Murillo, 2008, pp. 78-79). En este marco, las estrategias neoliberales, cuyo desbloqueo se produjo hacia mediados de la década del setenta, pueden ser leídas como un intento por parte de las clases dominantes de resolver problemas vinculados al gobierno de la lucha de clases.

EL DESBLOQUEO DEL NEOLIBERALISMO EN ARGENTINA. MOMENTOS CLAVE EN EL DESPLIEGUE DE SUS ESTRATEGIAS

La década del setenta marca el comienzo de una mutación en las estrategias de gobierno de la lucha de clases que llevará a una profunda reconfiguración de las relaciones sociales, políticas, culturales y económicas. Esta mutación se produjo en el marco de la crisis del modelo de acumulación industrial y de la conformación de un nuevo paradigma socio-técnico basado en el desarrollo de nuevas tecnologías y comunicaciones. El nuevo paradigma implicó la instauración de un modo de producción basado en la innovación constante de productos y procesos, la transformación de los modos de organización del trabajo y la flexibilización de los sujetos en tanto productores y consumidores. Ello ocurrió en un contexto geopolítico signado por el conflicto entre la URSS y el mundo capitalista, y entre países centrales y del Tercer Mundo, que se conjugaba con una intensificación de los movimientos sociales de liberación a nivel internacional. A nivel local el éxito de la revolución cubana en 1959 y sus repercusiones en los movimientos insurgentes que se estaban desarrollando, evidenciaban un proceso de crisis de legitimidad de la hegemonía estadounidense en la región (Ceceña, 2002; Calveiro, 2006).

En ese contexto, los organismos financieros internacionales, como el BM, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impulsaron programas de reformas que funcionaron como una arista fundamental en el despliegue del neoliberalismo a nivel local. Esos organismos, más allá de sus funciones formalmente establecidas en

la concesión de préstamos y la orientación y supervisión de políticas económicas, se convirtieron en gigantescos tanques de pensamiento neoliberales. Desde esos espacios se producían estudios supuestamente “empíricos” de todo tipo que luego serían la base para recomendaciones que se presentaban como exclusivamente “técnicas”, pero que apuntaban a una profunda transformación social. Esto ocurría en el mismo momento que la invocación cínica a la democracia por parte de Estados Unidos en el marco de la guerra fría se traducía, en lo que respecta a América Latina, en una política explícita de apoyo a las dictaduras institucionales de las fuerzas armadas, basadas en la “Doctrina de la Seguridad Nacional”.

El despliegue de las nuevas estrategias de gobierno de la lucha de clases se inició emblemáticamente en América Latina con el asesinato del presidente Salvador Allende en 1973 y, en Argentina, con la dictadura que el 24 marzo de 1976 se hizo con el poder del Estado con la complicidad de diversos sectores civiles. A través de la implementación de estrategias basadas en la difusión del terror en el conjunto social y en la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas, la dictadura logró profundizar las medidas tendientes a la acumulación del capital que se venían gestando desde hacía ya varios años. Para esto se recurrió a la reducción de los aranceles que grababan los bienes importados, a la subvaluación del dólar y a la manipulación de las tasas de interés a través del sistema financiero, que pasó a ser, junto al Estado, el principal reasignador de los recursos internos y externos dando lugar a la conformación de una deuda externa sin precedentes. Las políticas desplegadas implicaron también una redefinición del rol del Estado que consistió más en su reorientación que en su “achicamiento”. Se redujeron drásticamente los gastos en educación y salud, mientras se incrementaba el presupuesto militar y de seguridad; se privatizaron las empresas estatales, las empresas públicas estrecharon su vinculación con las firmas oligopólicas a través de la demanda de bienes y servicios, y se eliminaron las transferencias hacia el Estado provenientes del sector agropecuario. La estructura productiva se tornó crecientemente regresiva y adquirió especial relevancia el sector financiero que fue subsidiado vigorosamente. Todo esto ocurría en el marco de una acentuada caída del salario real, la intervención de las entidades sindicales y la supresión de las convenciones colectivas en materia salarial y del derecho a huelga (Azpiazú, Basualdo y Khavisse, 1986).

El golpe militar de 1976 marca, así, un momento de inflexión en lo que respecta a las condiciones de lucha y resistencia de la clase obrera en Argentina: la reestructuración económica supuso una profunda transformación de las bases sociales sobre las que se movían las

maniobras políticas hasta ese momento, al tiempo que esta reestructuración se vio posibilitada por la difusión del terror a lo largo de todo el entramado social.

De este modo, las políticas impulsadas por la dictadura pueden ser leídas en el marco de una estrategia tendiente a la transformación de las condiciones objetivas y subjetivas sobre las cuales se habían montado las luchas y resistencias hasta ese momento. La nueva estrategia buscaba internalizar una idea de justicia que dejaba de encontrar fundamento en la igualdad abstracta y pasaba a basarse en la naturalización de una organización social desigual y la exclusión de ciertos grupos sociales a partir de la denegación de su carácter de ciudadanos. Si bien la eficacia de esta estrategia fue un aspecto central en la transformación de los procesos sociales, políticos y económicos vigentes hasta este momento, sus efectos no fueron monolíticos y generaron múltiples acciones de resistencia por parte de los trabajadores a lo largo de todo el período dictatorial.⁶ Esto se conjugó con el hecho de que el nuevo paradigma socio-técnico requería de sujetos flexibles a los que la ilusión de autonomía indujese al consumo, y la dictadura constituía un límite a los flujos de mercancías, personas e información. De ese modo, en la década del ochenta paulatinamente se produjo la emergencia de las llamadas “democracias” en varios países del continente entre los que se encontraba Argentina (Murillo, 2002).

Luego de la reapertura democrática uno de los momentos claves en la implementación de las estrategias neoliberales en Argentina fue la ola de reformas institucionales, políticas y económicas basadas en las recomendaciones formuladas en el Consenso de Washington de principios de la década del noventa. Entre los elementos sustantivos de estas reformas cabe resaltar la remoción de una amplia gama de mecanismos regulatorios; la liberalización del mercado cambiario, de los flujos de divisas internacionales y del régimen de inversiones extranjeras; la supresión del control de precios; la apertura externa de la economía y la eliminación del régimen de consulta previa para la importación de diversos bienes. Esto ocurría mientras se iniciaba un aceleradísimo ciclo de endeudamiento externo (público y privado) y se privatizaban casi la totalidad de las empresas estatales. En este marco, además, se ubicaba a las “fuerzas del mercado” como asignadoras “naturales” de los recursos y se producía una “desregulación” del mercado de trabajo que implicaba la pérdida de conquistas laborales de vieja data y que se manifestó, entre otros aspectos, en una muy elevada tasa de desocupación y precarización de las ocupaciones.

6 Para un estudio pormenorizado de estas resistencias, véase Pozzi (2008) *La oposición obrera a la dictadura (1976-1982)*.

Estas medidas, venían a complementar el proyecto de la última dictadura militar otorgándole un mayor grado de organicidad y funcionalidad, al tiempo que encontraban sustento ideológico en el discurso neoliberal que se difundía a través de la incorporación de ciertos “hombres claves”⁷ en lugares estratégicos de la administración pública, los medios de comunicación y las universidades. Dicho discurso, se estructuraba en torno al cuestionamiento de los valores negaban la existencia de derechos universales y apuntaban a que los sujetos aceptaran acríticamente que las principales “fallas de mercado” se debían a un “excesivo” intervencionismo estatal y a la proliferación de regulaciones que impedían el libre desenvolvimiento de las “fuerzas de mercado”. Sobre esa base se argumentaba que la remoción de tales regulaciones permitiría liberar esas fuerzas intrínsecas de la competencia y con ello maximizar el bienestar social (Beltrán y Castellani, 2013; Ferrer, 2012; Murillo, 2002; Schorr, 2013).

En consonancia con este planteo, se impulsó una drástica reforma en materia educativa que incluyó una descentralización del sistema educativo primario y secundario; el reemplazo de la histórica escuela primaria por la Educación General Básica (EGB), que extendió de siete a nueve años la escolaridad obligatoria, y de la escuela media o secundaria por la Educación Polimodal, de sólo tres años de duración y con un fuerte compromiso en su oferta de terminalidades con el mercado laboral. Estas reformas, impulsadas a través de la “Ley de Transferencia de Establecimientos de Nivel Medio y Superior No Universitario” y de la “Ley Federal de Educación”, de 1991 y 1993 respectivamente, fueron complementadas la por la “Ley de Educación Superior”. Entre los elementos más significativos de esta última pueden citarse la utilización de la palabra “servicio” en referencia a la educación superior y la habilitación a las instituciones nacionales para “dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional”, lo que junto con la ausencia de una definición explícita de su gratuidad abría la posibilidad de su arancelamiento. Asimismo, estableció la creación de una comisión encargada de evaluar y acreditar a las instituciones y carreras (la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) y se habilitó a que las casas de estudios con más de cincuenta mil estudiantes definan “su propio régimen de admisión”.

El argumento central que sostuvo a estas políticas fue que los grandes sistemas escolares eran ineficientes, inequitativos y, sus productos, de baja calidad. De tal afirmación se infería que la educación

7 Los “hombres clave” eran líderes locales ligados al *establishment* internacional que comenzaba a conformar un comando mundial.

pública había fracasado y se presentaban las políticas de reducción de la responsabilidad del Estado en la educación como la única reforma posible. Este discurso provenía fundamentalmente del BM que, con el objetivo de reducir los gastos de los Estados en educación, proponía que se dejara de financiar la educación media y superior, y desplazar la atención hacia la enseñanza básica, donde la inversión sería más “eficaz”. De esta manera, se haría más eficiente el gasto público y se lograría una mayor equidad en la provisión de la educación a la población (Echenique, 2003; Puiggrós, 1996). Se sostenía, además, que la descentralización del sistema educativo dotaría de más participación a las comunidades otorgando a las escuelas libertad para decidir cómo invertir los recursos obtenidos de subvenciones o de sus propias actividades. En la práctica, esto implicó una transferencia de la responsabilidad de la educación desde el Estado a la comunidad —no solo la responsabilidad de educar sino también la de financiar la educación— y de las decisiones desde las instituciones hacia los individuos y, con ello, la responsabilización individual sobre el éxito o el fracaso en el recorrido educativo (Olmos, 2008). Así, uno de los aspectos centrales de esta estrategia fue (y sigue siendo) el traslado de categorías del mercado a la educación a partir de las cuales se postula que la “eficacia” y la “equidad” en materia educativa son incompatibles con su universalidad. Esta imposición de la lógica empresarial a la educación puede concebirse en el marco de la construcción de estrategias de subjetivación que hacen de la competencia y del individualismo las virtudes máximas de los sujetos y que en la práctica han tenido efectos excluyentes, discriminatorios y de refuerzo de las diferencias y las desigualdades que existen en el sistema.⁸

La década del noventa marcó así un fuerte avance en los procesos tendientes a la transformación de las condiciones objetivas y subjetivas de lucha de la clase obrera. Las medidas económicas apuntaron a una mayor apertura externa comercial y, junto con la privatización de una importante cantidad de empresas públicas, llevaron a una drástica mutación del mercado de trabajo y a un fuerte incremento de los índices de desocupación, subempleo y sobreocupación. Esto ocurría en el marco de la disolución del sistema centralizado de negociaciones colectivas, aprovechada por los empleadores para flexibilizar las con-

8 El carácter excluyente de esta estrategia puede observarse en la propuesta de establecer un “ranking” de escuelas o de universidades a partir de las mediciones centralizadas basadas en el concepto de eficiencia antes referido. A través de este mecanismo se instaura una lógica de competencia entre las instituciones cuyo efecto central es la exclusión de ciertos grupos sociales en tanto que las escuelas, para ser competitivas, pueden expulsar a los diferentes, a los desposeídos, quienes les “bajan” la *performance* para competir (Olmos, 2008).

diciones contractuales y de trabajo. En este escenario se fue cambiando el tradicional modelo fordista de organización de la producción a través de la implementación de la polifuncionalidad de tareas, el trabajo en equipo y la rotación interna laboral en diferentes puestos y oficios. Este fenómeno se acompañó de un proceso de tercerización de actividades dentro de las empresas que derivó en que los trabajadores debieran hacerse cargo por sí mismos de la seguridad social y de la salud, eximiendo a los empresarios de asumir esa responsabilidad. La generalización de esta modalidad incidió en la conformación de una importante camada de trabajadores que, junto con sus familias, pasaron a carecer de cualquier tipo de protección en materia de estos servicios en un contexto signado por la privatización del sistema de salud y del régimen previsional de jubilaciones (Schneider, 2007).

Estas transformaciones marcaron un profundo cambio en las condiciones materiales de existencia de los trabajadores que impactó negativamente sobre su capacidad de lucha y resistencia. La precarización laboral, el aumento de los índices de desocupación y el temor constante a la pérdida del trabajo desalentaron la organización en los lugares de trabajo para quienes conservaban su empleo y tuvieron efectos fuertemente desestructurantes sobre los sujetos que perdieron su trabajo (Murillo, 2008). De este modo, las transformaciones referidas afectaron profundamente la posibilidad de construcción de valores ligados a la solidaridad entre pares al fomentar la competencia entre los sujetos por los puestos laborales y al privarlos del trabajo como uno de los espacios materiales fundamentales de construcción de los mismos. Simultáneamente, los nuevos modos de organización laboral asignaban a los trabajadores una corresponsabilidad sobre el éxito o el fracaso de la empresa, lo que tendía a disolver en los trabajadores la percepción de la diferencia (o el antagonismo) entre las propias condiciones de vida y las del resto de los grupos sociales.

Finalmente, las medidas vinculadas a la flexibilización laboral obligaron a los trabajadores a responsabilizarse individualmente de aspectos centrales de su vida como la seguridad social o la salud, que hasta ese momento recaían en las empresas y el Estado. Esto sucedía en el mismo momento que las reformas en materia educativa parcelaban y especializaban la educación media apuntando a la construcción de saberes requeridos por el mercado, se fomentaba la competencia entre y al interior de las diversas instituciones educativas, y se apuntaba a desarticular la noción de la educación como derecho universal e inalienable de los sujetos.

Si bien estos cambios trajeron aparejada una transformación de las condiciones de las luchas obreras que se tradujo en su disminución a partir de la década del noventa, no supusieron una clausura

de las mismas. Durante los primeros años del gobierno de Menem las principales protestas se orientaron a detener la caída del salario y a la defensa de las empresas públicas. Algunos de los conflictos más importantes fueron los protagonizados por los trabajadores ferroviarios, los obreros telefónicos y los metalúrgicos de Somisa. A partir de 1993 los conflictos se agudizaron en el ámbito regional y provincial: la protesta en Santiago del Estero, con el incendio de la sede de gobierno, fue una de sus expresiones más resonantes (Schneider, 2007). A partir de 1995 se produjo un aumento de las luchas protagonizadas por docentes y estudiantes frente al proyecto de reforma educativa. Desde el sector universitario se realizaron movilizaciones, tomas de facultades en todo el país y un abrazo al Congreso para intentar impedir la votación de la Ley de Educación Superior. En el ámbito de la educación básica una de las medidas más impactantes fue la instalación de la “Carpa Blanca” frente al Congreso de la Nación, entre abril de 1997 y diciembre de 1999, en reclamo de una ley nacional que garantizase un fondo para la educación pública (Vázquez, 2005). Estas medidas ponían de manifiesto la persistencia de valores vinculados a la educación como derecho universal inalienable y al rol del Estado como garante de su cumplimiento.

Otro de los ejes del conflicto en esos años tuvo como protagonistas a los trabajadores que habían perdido sus puestos de trabajo como consecuencia directa o indirecta de la privatización de YPF y de Gas del Estado. En las localidades que vivían de la actividad petrolera, como Cutral-Co, Plaza Huincul, Tartagal y General Mosconi, la crisis económica derivó en puebladas que incluyeron enfrentamientos directos con las fuerzas represivas. Las protestas territoriales de los desempleados condujeron a la conformación de nuevas organizaciones denominadas en forma genérica como “Movimientos de Trabajadores Desocupados”, que a la metodología de los paros y las huelgas sumaron los cortes de calles y rutas (Svampa y Pereyra, 2003). Al respecto, resulta significativa la autopercepción de los sujetos como “trabajadores”, pese a haber sido despedidos de sus empleos, ya que la misma puede ser interpretada como un indicador de la persistencia de criterios culturales, solidaridades, aspiraciones y relaciones sociales vinculados a su experiencia obrera (Camarero, Pozzi y Schneider, 2001). En consonancia con la hipótesis de trabajo que guía el presente escrito puede sostenerse que la persistencia de estos criterios culturales fue uno de los factores centrales que permitieron que un factor potencialmente desmovilizante como la desocupación fuera significado como un problema colectivo y diera lugar a las luchas antes mencionadas.

Otro de los momentos clave en la implementación de la gubernamentalidad neoliberal es el que se extiende desde 2015 hasta 2019. A

nivel estructural este período se caracterizó por la implementación de una serie de medidas tendientes a la apertura de los mercados, tales como el levantamiento de los controles monetarios, la eliminación de los impuestos a la exportación y las restricciones sobre los granos, además de la firma de uno de los endeudamientos más grandes en la historia argentina. Estas políticas se combinaron con una retracción del gasto público en relación con el PBI que comenzó por el empleo público e incluyó el recorte de los subsidios a servicios como el gas y la electricidad, que junto a la inflación produjeron una caída del salario real. Las transformaciones incluyeron también un avance de las políticas tendientes a la “flexibilización” del mercado de trabajo y a la auto-responsabilización de los trabajadores por su propia situación. Entre ellas, pueden citarse, la llamada “Ley del empleo joven”, que alienta la creación del trabajo precario; la “Ley de Aseguradoras del Trabajo”, que dificulta la posibilidad de realizar juicios a las patronales por accidentes; o el “Proyecto de Reforma Laboral” y la “Ley de Reforma Previsional”. Medidas éstas que han producido importantes resistencias, tales como las multitudinarias movilizaciones frente al Congreso Nacional y en diversas partes del país, en diciembre de 2017, mientras se estaba tratando la Ley de Reforma Previsional. Durante las mismas se dispusieron operativos represivos de amplias dimensiones, primero en manos de la Gendarmería Nacional y luego en manos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que incluyeron ataques con balas de goma y carros hidrantes y tuvieron como saldo numerosos heridos y detenidos.

En materia de educación, uno de los elementos más relevantes vinculados a la implementación de políticas de corte neoliberal fue el proyecto de Reforma Educativa presentado como “Plan Maestro”, cuya base es el documento *Profesores Excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe* elaborado por el BM en 2015. Este proyecto propone que padres y miembros de la comunidad puedan opinar sobre la contratación y despido del personal de las escuelas como vía para lograr reducir el ausentismo docente y aumentar los resultados del aprendizaje de los estudiantes. En consonancia con este planteo, fueron numerosas las declaraciones públicas del presidente Mauricio Macri y de diversos funcionarios en los que se presenta a las maestras y los maestros como un sector que abusa de sus privilegios, elude obligaciones y aprovecha el ausentismo, sin ofrecer pruebas de estos dichos e invisibilizando las condiciones de trabajo a las que están sometidos, al tiempo que se implementan censos concebidos por consultoras privadas para establecer los rankings escolares. En cuanto a la educación superior, se subraya el “alto costo” de las universidades públicas y sus bajas tasas de graduación en proporción

a los ingresantes, lo cual, sumado su desfinanciamiento, puede ser leído como parte de una estrategia orientada a su arancelamiento.

Estas medidas, que apuntan a la disolución de derechos formalmente universales de los sujetos, también se orientan a la construcción de un cierto modo de vivir y de comprender el mundo, de vincularse con otros y de concebirse a sí mismos por parte de los sujetos. En otras palabras, las transformaciones antes descriptas desbordan por mucho al recorte o la restricción de ciertos derechos: forman parte de una estrategia que apunta a un cambio radical de las relaciones sociales respecto del cual la transformación de los procesos de subjetivación resulta un aspecto central. Esta centralidad no sólo está dada por la necesidad de construir sujetos capaces de desempeñarse en el mundo laboral atendiendo a las nuevas necesidades del capital, sino también porque las estrategias de subjetivación que los construyen producen, en el mismo movimiento, una transformación de los valores, aspiraciones y deseos que vuelven aceptable e incluso deseable esa transformación en las propias condiciones materiales de existencia.

Este aspecto se vuelve central a la hora de pensar las condiciones de lucha y resistencia de los trabajadores en la actualidad ya que, al ubicar como blanco los valores y la cultura de los sujetos, apuntan a la transformación de una de las condiciones centrales que históricamente han permitido que la experiencia objetiva de explotación de los trabajadores diera lugar a la confrontación. Entre los elementos que configuran las nuevas estrategias de subjetivación resultan particularmente significativos aquellos vinculados a la construcción del sujeto como “empresario de sí mismo”, ya que implican la introyección de valores vinculados a la competencia con los pares, la natural desigualdad de los sujetos y la vinculación entre el mérito individual y las condiciones de existencia, que se oponen de modo directo a aquellos que, según la hipótesis aquí desarrollada, fueron un aspecto central de las luchas y las resistencias de la clase obrera a lo largo de su experiencia histórica.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El recorrido realizado hasta aquí apuntó a dar cuenta de algunos de los momentos clave en la configuración de la racionalidad neoliberal de gobierno en Argentina. A partir del mismo se ha ubicado a la dictadura cívico-militar iniciada en marzo de 1976 como un punto de inflexión en el despliegue del neoliberalismo cuyo rasgo predominante fue la generalización de estrategias de gobierno que, si bien preexistían a este momento, se veían obstaculizadas en gran medida por las luchas y resistencias de los trabajadores.

Se sostuvo, además, que en esas luchas ha jugado un papel central la persistencia de valores contestatarios ligados a la solidaridad entre pares y a la percepción de las diferencias entre la propia situación vital y la de otros grupos sociales. Según la hipótesis de trabajo planteada, la importancia de estos valores radica en que han permitido que las condiciones materiales de explotación (y la acentuación de las mismas que el avance de políticas vinculadas a las nuevas formas de acumulación del capital supondría) fueran significadas como no naturales, injustas y, por esa vía, dieran lugar una acción colectiva transformadora. Se ha planteado también que las diversas formas de resistencia al despliegue de las estrategias neoliberales protagonizadas por los trabajadores pondrían de manifiesto los efectos no deseados de las estrategias liberales de gobierno de la lucha de clases desplegadas desde fines del siglo XIX. Y que esto es algo que las clases dominantes advirtieron muy tempranamente, tal como lo evidencian los debates producidos en el marco del Coloquio Walter Lippman. El problema con las formas de gobierno liberales es que, más allá de sus diferencias, se sostenían en la ficción de los derechos universales lo cual habría contribuido a la difusión de ciertos valores y percepciones de la realidad que posibilitaron diversas formas de lucha que aspiraban a la realización efectiva de esos derechos y con ello al cuestionamiento del orden social capitalista. Estas luchas adquirieron su máxima expresión en Argentina entre mediados de la década del sesenta y mediados de la del setenta, y funcionaron hasta ese momento como una barrera de contención a la implementación de políticas de corte neoliberal. Atendiendo a la importancia de estas luchas es posible plantear que el quiebre producido hacia mediados de la década del setenta no sólo está relacionado a las nuevas necesidades del capital, surgidas de la Tercera Revolución Industrial en el marco del cambio en el patrón de acumulación a escala global, sino también, y en el mismo movimiento, a la necesidad de desarrollar nuevas estrategias de gobierno de la lucha de clases.

Entre esas nuevas estrategias resultan particularmente significativas aquellas que apuntan a la expansión de la dinámica empresarial al conjunto de las relaciones sociales y, en particular, las que se orientan a la construcción de los sujetos como “empresarios de sí mismos”. A través de estos mecanismos el neoliberalismo busca introducir la competencia como ordenador social multiplicando la forma empresa en cada punto del entramado social. Se trata de una tecnología de gobierno que a través de la internalización de ciertos valores, modos de conducirse, pensar y desear apunta a modular las prácticas subjetivas en dirección a la maximización de sus beneficios a través de una óptima utilización de los recursos disponibles en todos los ámbitos

de su existencia. Dicha visión encuentra sus comienzos en la teoría subjetiva del valor elaborada por Menger, que fue recuperada posteriormente por Mises y Hayek, y se complementa con lo que Gary Becker denominó “teoría del capital humano” (Becker, 1983). Para esta teoría, proveniente de la Escuela de Chicago, el concepto de capital se extiende más allá de las meras transacciones económicas hasta abarcar toda la experiencia vital de los sujetos. Esto implicaría que en cada esfera de su vida los sujetos efectúan cálculos basados en la lógica costo-beneficio que los lleva a preferir o renunciar en pos de lograr los objetivos que se proponen. El logro de estos objetivos, además, estaría relacionado en gran parte por las acciones previas de los sujetos, esto es, por las inversiones que cada individuo realizó sobre sí mismo para posicionarse de un modo más favorable en la competencia con otros. Por esta vía, la explotación y la inequidad ya no son explicados como fenómenos sociales vinculados a un modo de producción particular sino como el efecto del fracaso de algunos individuos en sus propias elecciones e inversiones. Se diluye así la contradicción capital-trabajo: la capacidad de producir aparece como un capital que cada trabajador invierte para obtener una renta a partir de un intercambio paritario con quien lo contrata. Si el capital es administrado de un modo eficiente el trabajador logrará un incremento de su propia satisfacción, mientras que si no lo hace deberá asumir los costos de su mala inversión. La dualidad entre patrones y trabajadores queda invisibilizada ya que en ambos casos se trataría de empresarios cuya renta dependería de lo acertado de sus propias inversiones.

De este modo, se configura una estrategia que apunta a gobernar a los sujetos a través de su propio deseo moldeándolo de manera tal que todas sus acciones los conduzcan a posicionarse en lugares más favorables en una competencia con otros que se extiende a cada ámbito de la vida (Murillo, 2018). Se trata de una forma de subjetivación que ya no se fundamenta en la ficción de la universalidad del sujeto y sus derechos sino en la introyección de valores vinculados a la valoración de la libertad individual, la competencia y la autogestión de la vida como aspectos centrales de la existencia humana. En este punto es posible dar cuenta de la potencia del concepto de clase social como clave de lectura de las estrategias neoliberales: los valores en función de los cuales se procura modular el deseo subjetivo se oponen punto por punto a los valores que históricamente jugaron un papel central en las luchas y resistencias de los trabajadores según la hipótesis aquí desarrollada. La libertad a partir de la cual se interpela a los sujetos es, como fue planteado, una libertad concebida de modo individual y negativo, una libertad entendida como ausencia de coacción que no se realiza ni puede realizarse con otros, dado que tanto el semejante

como el Estado aparecen como un obstáculo para la misma. Esto se suma a la valorización de la competencia como ordenador social, con la naturalización de la desigualdad entre los seres humanos que ella supone. De este modo, se apunta a la introyección de percepciones, aspiraciones y valores que tienden a obturar aquellos ligados a la solidaridad intra-clase de los trabajadores. El otro deja de ser un semejante, un sujeto con quien colectivamente se lleva a cabo la acción transformadora de la realidad objetiva a través de trabajo, para convertirse en un competidor que debe ser vencido de cara a la realización de los propios objetivos. De manera complementaria, los valores ligados a la autogestión de la vida, al equiparar a trabajadores y patrones en términos de empresarios, tienden a invisibilizar las diferencias entre la propia experiencia de los trabajadores y la de los otros grupos sociales a los que está ligada su actividad, y con ello la posibilidad de percibirse como un colectivo cuyos intereses son opuestos a los de las clases dominantes.

La eficacia de estas estrategias de gobierno es innegable, el avance del neoliberalismo en los últimos años es prueba de ello, sin embargo, esto no implica que su objetivo esté cumplido. Los valores gestados a lo largo de la experiencia histórica de la clase permanecen en la memoria de los trabajadores, incluso conviviendo de manera contradictoria con aquellos construidos a través de las estrategias neoliberales, y puede vérselos reaparecer en cada una de sus luchas y resistencias.

BIBLIOGRAFÍA

- Anzorena, Oscar (1998). *Tiempo de violencia y utopía. Del golpe de Onganía (1966) al golpe de Videla (1976)*. Buenos Aires: Ediciones del pensamiento nacional.
- Archila, Mauricio (2006, octubre-noviembre). *La izquierda hoy. Reflexiones sobre su identidad*. Ponencia presentada en el seminario Marx Vive, Bogotá, Colombia.
- Azpiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo y Khavisse, Miguel (1986). *El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80*. Buenos Aires: Legasa.
- Banco Mundial (1995). *El financiamiento de la educación en los países en desarrollo. Prioridades y estrategias para la educación*. Washington: BM.
- Becker, Gary S. (1983). *El capital humano. Un análisis teórico y empírico referido fundamentalmente a la educación*. Madrid: Alianza.
- Beltrán, Gastón y Castellani, Ana (2013). *Cambio estructural y reconfiguración de la elite económica argentina (1976-2001)*.

- Observatorio Latinoamericano (Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe)*, 12.
- Calveiro, Pilar (2006). Los usos políticos de la memoria. En Gerardo Caetano (Comp.), *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- Camarero, Hernán; Pozzi, Pablo; y Schneider, Alejandro (2001). *Eppur si muove*. De la realidad a la conceptualización en el estudio de la clase obrera argentina. *Taller. Revista de sociedad, cultura y política*, 6.
- Ceceña, Ana Esther (2002). Estrategias de dominación y planos de construcción de la hegemonía mundial. En Gambina, Julio (Comp.), *La Globalización Económico- Financiera. Su impacto en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- Dardot, Pierre y Laval, Christian (2013). *La nueva razón del mundo*. Barcelona: Gedisa.
- De Büren, M. Paula (2015). La sociedad *Mont Pélerin*, un espacio de articulación. En Murillo, Susana (Coord.), *Neoliberalismo y gobiernos de la vida. Diagrama global y sus configuraciones en la Argentina y América Latina*. Buenos Aires: Biblos.
- De Luca, Romina (2006). La Reforma educativa de Onganía. El tercer momento de una estrategia. *Razón y Revolución*, 15.
- Denord, François (2001). Aux origines du néo-libéralisme en France. Louis Rougier et le Colloque Walter Lippmann de 1938. *Le Mouvement Social*, 195, 9-34. Disponible en: <http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2001-2-page-9.htm>
- Echenique, Mariano (2003). *La propuesta educativa neoliberal. Argentina 1980-2000*. Rosario: Homo Sapiens.
- Ferrer, Aldo (2012). La construcción del Estado neoliberal en la Argentina. *Revista de Trabajo*, 8(10).
- Foucault, Michel (2007). *Nacimiento de la biopolítica*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- García Linera, Álvaro (1999). ¿Es el Manifiesto comunista un arcaísmo político, un recuerdo literario? Cuatro tesis sobre su actualidad histórica. En Gutiérrez, R. et al., *El fantasma insomne. Pensando el presente desde el Manifiesto comunista*. La Paz: Muela del Diablo.
- Gordillo, Mónica (2003). Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada, 1955-1973. *Nueva Historia Argentina*, 9.
- Harvey, David (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid: Ediciones Akal.

- James, Daniel (1991). *Resistencia e integración*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Marx, Karl (2003). *El 18 Brumario de Luis Bonaparte*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Marx, Karl (2011). La llamada acumulación originaria. En *El Capital*, Tomo I, Vol. 3. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Marx, Karl y Engels, Friedrich (1970). *La ideología alemana*. Montevideo: Pueblos Unidos.
- Marx, Karl y Engels, Friedrich (2002). *Manifiesto comunista*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Murillo, Susana (2002). La cuestión social en Buenos Aires. La condición trágica de los sujetos. En Murillo, Susana (Coord.), *Sujetos a la incertidumbre. Transformaciones sociales y construcción de subjetividad en la Buenos Aires actual*. Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación.
- Murillo, Susana (2008). *Colonizar el dolor. La interpelación ideológica del Banco Mundial en América Latina. El caso argentino desde Blumberg a Cromañón*. Buenos Aires: CLACSO.
- Murillo, Susana (2018). Neoliberalismo: Estado y procesos de subjetivación. *Revista de la Carrera de Sociología (UBA)*, 8(8).
- Murillo, Susana (2020). La potencia de la vida frente a la modulación del deseo y el terror, en tiempos neoliberales. *Revista Theomai, Estudios Críticos sobre sociedad y desarrollo* (número especial), 101-120.
- Murmis, Miguel y Waisman, Carlos (1969). Monoproducción agroindustrial, crisis y clase obrera: la industria azucarera tucumana. *Revista Latinoamericana de Sociología*, 5(2).
- Olmos, Liliana (2008). Educación y política en contexto. Veinticinco años de reformas educacionales en Argentina. *Revista Iberoamericana de Educación*, 48, 167-185.
- Pavetti, Oscar (2001). Azúcar y Estado en la década de 1960. En Bonano, L. (Coord.), *Estudios de Historia Social de Tucumán*. San Miguel de Tucumán: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán.
- Pozzi, Pablo (2004). *Por las sendas argentinas: el PRT-ERP, la guerrilla marxista*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Pozzi, Pablo (2008). *La oposición obrera a la dictadura (1976-1982)*. Buenos Aires: Contrapunto.
- Pozzi, Pablo (2015). Trabajadores y procesos de politización y rebelión. *Esboços: Histórias Em Contextos Globais*, 22.

- Pozzi, Pablo (2021). *¡Usted es comunista! Estudios sobre clase, cultura y política en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo.
- Puiggrós, Adriana (1996). *La otra reforma. Desde la educación menemista al fin de siglo*. Buenos Aires: Galerna.
- Salas, Ernesto (1990). *La resistencia peronista: la toma del frigorífico Lisandro de la Torre*. Buenos Aires: Altamira.
- Schneider, Alejandro (2007). *Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo. 1955-1973*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Schorr, Martín (2013). La industria argentina luego de la reconquista de la democracia. *Observatorio Latinoamericano* (Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe), 12, 164-182.
- Secretaría del Consejo Nacional de Desarrollo (1968). *Educación, recursos humanos y desarrollo económico social. Situación presente y necesidades futuras* (T. I, Serie C, N° 7-3). Buenos Aires.
- Sigal, Silvia (1969). Crisis y conciencia obrera: la industria azucarera tucumana. *Revista Latinoamericana de Sociología*, 2.
- Sigal, Silvia (1973). Acción obrera en una situación de crisis: Tucumán 1966-1968. Documento de trabajo, Instituto Torcuato Di Tella, Centro de Investigaciones Sociales. Buenos Aires.
- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.
- Vázquez, Silvia (2005). *Luchas político educativas: el lugar de los sindicatos docentes*. Buenos Aires: CTERA.
- Von Hayek, Friedrich (1995). *Camino de servidumbre*. Madrid: Alianza.
- Von Mises, Ludwin (1968). *La acción humana*. Madrid: Sopec.
- Wright, E. O. (1983). *Clases, crisis y estado*. Madrid: Siglo XXI.

PARTE II

**CLASE TRABAJADORA Y
LUCHAS POPULARES EN
AMÉRICA LATINA EN LOS
SIGLOS XX Y XXI**

¡NI FIESTA NI CONGOJA! EL 1° DE MAYO EN TIEMPOS DE LA LEY MALDITA, SANTIAGO DE CHILE, 1948-1958¹

Viviana Bravo Vargas

El 1° de mayo es una fecha emblemática para los y las trabajadoras. No obstante, a diferencia de otros países, el caso chileno no ha recibido suficiente atención desde el campo historiográfico.² En este texto, nos proponemos aportar a la reconstrucción de sus conmemoraciones, dando cuenta de las transformaciones, despliegues urbanos y plataformas de lucha que cobraron protagonismo en los años en que estuvo vigente la Ley de Defensa de la Democracia (LDD). Para ello, retomamos la propuesta analítica propuesta por Eric Hobsbawm en “El nacimiento de una fiesta” a la hora de significarlo. En sus páginas, el historiador británico recorre el origen y arraigo de una “tradicción no inventada” sino surgida desde abajo y de repente, que se convirtió

1 Este trabajo es parte del proyecto “Clase trabajadora y protesta urbana en el marco del agotamiento y crisis del desarrollismo. Santiago y Valparaíso 1947-1964”. Fondecyt Iniciación N°11180315.

2 Para el caso chileno contamos con el trabajo pionero de Garcés y Milos (1989) y un estudio sobre los anarquistas en la conmemoración de 1973 (Godoy, 2013), además del aporte que realiza Jorge Navarrete en su trabajo inédito “La calle es política: movilización obrera en la ciudad y represión de la protesta. Santiago, 1905-1924” (2021). En el caso argentino contamos, por ejemplo, con los aportes de Teitelbaum (2016), Poy (2011) y Viguera (1991). Para México y Brasil ver, respectivamente: Carbó (2006) y Bilhão (2013).

en ritual. Conmemorada internacionalmente desde 1889, y replicada año a año, alcanzó una significativa potencialidad movilizadora: “Sin duda la rapidez con que ascendió y se institucionalizó fue debida al éxito extraordinario de la primera manifestación” (Hobsbawm, 1999, p. 135). La primera conmemoración, tuvo como fuerza propulsora el hecho —tan simbólico como materialmente relevante— de detener el trabajo, salir a marchar y concentrarse en las calles, cuestión que coincidió con un avance triunfante de la fuerza, el estado anímico y la confianza del trabajo en numerosos países (Hobsbawm, 1999).

En Chile, al igual que en otras latitudes, pasó a ser parte central de la vida de la clase obrera y de la identidad laboral. Y si efectivamente sirvió para fortalecer la identidad y socialización de clase a través de expresiones festivas de lucha, adquirió las características reivindicativas y antagónicas de cada coyuntura histórica. Ello se sostiene en la articulación de diversos elementos: la incorporación de una memoria histórica de luchas pretéritas, la actualización y expresión de los conflictos centrales que remueven el presente, la capacidad de interpelar unificadamente a los patrones y al Estado, y la visualización del poder de convocatoria y manifestación, expresado en el espacio público. Y todavía más, estableció un horizonte de demandas aún no integradas dentro de los canales institucionales y que serán parte fundamental del programa que levantó la Unidad Popular en 1970.

Tal como han señalado Mario Garcés y Pedro Milos (1989) en el recorrido que hacen por algunos de sus hitos, si bien su origen se remonta a 1889 en homenaje a los llamados mártires de Chicago y la lucha por la jornada laboral de ocho horas, su conmemoración en Chile rememora asimismo a los caídos del movimiento obrero chileno. En ese sentido, las organizaciones sindicales y políticas fueron agentes fundamentales que interpretaron, enmarcaron y transmitieron la significación histórica del legado de miles de hombres y mujeres que dieron sus vidas por exigir el derecho a la organización, la manifestación y la huelga; y a salarios, sueldos y condiciones de trabajo dignas. Una tradición de lucha sedimentada en la trayectoria que ha recorrido el movimiento popular. Pero también, propulsó la actualización de las luchas y la elaboración mancomunada de pliegos petitorios y plataformas programáticas. Por tanto, ha permitido realizar procesos de balance y discusión interna para enfrentar las tareas pendientes y horizontes futuros.

Declarado feriado legal por Carlos Ibáñez del Campo en 1931 o santificado por la Iglesia Católica desde 1955, ha intentado ser cooptado por los sectores dominantes para convertirlo en un día de reconciliación y paz en la relación capital-trabajo. No obstante, al menos en el período que recorren los diez años que aquí abordaremos, si bien

su conmemoración continúa incorporando una dimensión festiva, a través de las diversas expresiones en que se enmarca la lucha popular, se demostrará que estuvo muy lejos de convertirse en la “Fiesta del trabajo” que proponía el Estado. El análisis de los 1° de mayo confirma la tesis que, en el contexto de auge y crisis del desarrollismo, la relación entre el Estado y la clase trabajadora estuvo muy lejos de ser armónica o consensuada y que cada derecho y conquista fue fruto de la organización y lucha. En efecto, si es innegable que durante este período asistimos a un proceso de ampliación de las bases sociales del Estado, éste fue construido desde abajo, con sectores movilizados que interpelaron a patrones y gobernantes y que, lejos de ser lineal, experimentó retrocesos, frenos e impulsos (Bravo, 2017a, 2017b y 2020).

Trabajadores y trabajadoras, debieron lidiar con una legislación represiva y con aparatos que se encargaron de cumplirlas (Huneusus, 2009; Loveman y Lira, 2014). Si bien se han documentado bastante las repercusiones que tuvo para el Partido Comunista de Chile (PCCH) la LDD promulgada en septiembre de 1948, conocida como “Ley Maldita” (Furci, 2017; Daire, 1988; Arrate y Rojas, 2003; Álvarez, 2020)³, no se ha puesto el mismo énfasis en los alcances de las políticas anti-obreras que entrañó dicha legislación. Bajo su arbitrio hubo numerosas purgas en el movimiento sindical y diversos dispositivos de espionaje y castigo. Además, fue complementada con decretos que restringieron aún más el derecho a huelga, que facilitaron la intervención de sindicatos y la persecución de sus dirigentes.

En septiembre de 1955 fue promulgada la circular Yáñez-Koch o decreto 4161, para sofocar la protesta obrera en un contexto de intensa movilización y fortalecimiento de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), después del paro nacional de 1955.⁴ A través de este decreto, la autoridad pudo intervenir libremente en la organización de los sindicatos. La abogada Pamela Martínez, en su análisis en torno a los casos de vulneraciones a la libertad sindical en Chile, ha detallado los alcances de la circular Yáñez-Koch: “La fecha de la elección del director o directorio se fijaría según el decreto, una vez que la respectiva Inspección del Trabajo visara las listas de candidatos que de acuerdo a lo que determinara el Gobernador departamental no merecía obje-

3 A través de la LDD se marginó de la vida política al PCCH. Entre otras medidas que afectaron a sus militantes, se les exoneró del sector público, se borró de los registros electorales a aproximadamente 30 mil votantes de esa filiación, además de diversas persecuciones, intimidaciones y castigos que debieron sufrir sus militantes o quienes presumiblemente lo eran.

4 La circular fue elaborada y propuesta por el ministro de trabajo, Eduardo Yáñez, y por el ministro del interior, Osvaldo Koch.

nes. Si se efectuaba la elección del candidato inhabilitado por las autoridades como miembro del directorio del sindicato, el Gobernador tenía la potestad de cancelarles la personalidad jurídica” (Martínez, 2019, p. 88). Por tanto, quedaban imposibilitadas de ser electas no solo las personas que hubiesen sido excluidas de los registros electorales o municipales, sino que hubiesen sido acusadas de atentar contra las disposiciones de la LDD. Por lo demás, la Dirección del Trabajo, si lo juzgaba necesario, podía encargar a un funcionario público la administración y la inversión de los fondos sindicales. Bajo este decreto quedaron inhabilitados alrededor de 4 mil trabajadores.

Como constancia de la vulneración de derechos, quedaron los requerimientos presentados ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante aquellos años: “Principalmente concerniente con la prohibición del derecho de sindicalización de los funcionarios públicos, las restricciones de la libertad de afiliación, la imposición de requisitos para el ingreso a los sindicatos, el control de las finanzas a los sindicatos, la huelga convertida en delito en los servicios esenciales y una serie de restricciones a la libertad sindical” (Martínez, 2019, p. 32)⁵, entre estas, la prohibición para reunirse bajo las constantes promulgaciones de Estado de Sitio o Zona en Estado de Emergencia.

El problema, como ha señalado Jorge Barría (1971a), ya no era, o no podía ser la lucha meramente sindical, sino que se trasladaba al terreno de las libertades públicas, mermadas por las acciones del gobierno y las fuerzas represivas (p. 70). Junto a ello, la clase trabajadora debió enfrentar el crecimiento inflacionario, el deterioro de los salarios y el encarecimiento de la vida (Pizarro, 1986; Sepúlveda, 1959; Hinojosa, 1967; Ortiz, 1998; Pavilack, 2011; Rodríguez, 2017). Por su parte, durante el gobierno de Gabriel González Videla, se intentó contener el alza de los precios vía reducción de los salarios reales en la llamada “política de contención coactiva”, comandada por el ministro de hacienda y presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Jorge Alessandri. Cuando la inflación se aceleró entre 1953 y 1955, Ibáñez del Campo contrató una misión de expertos extranjeros llamados “Klein & Saks” que propusieron una mayor apertura económica, ajuste de corte monetarista y abandono parcial del impulso interventor del Estado (Rodríguez, 2017, p. 187; Misión Klein & Saks, 1958).

5 Denuncias a la OIT en década del cincuenta: n° 141 de 1956, n° 134 de 1956, 153 y 154. Caso 134 sobre prohibición del derecho a huelga en el sector público e impedimento a dirigente sindical para asistir a reunión OIT. Caso 141, despido de trabajadores por su participación en huelga de solidaridad y protesta por parte del personal de la mayoría de los bancos del país, y despido de dirigentes sindicales por participar en reuniones de la OIT.

Son tiempos, además, de una importante disputa urbana (Bravo, 2020); tiempos en que crecen las periferias de las ciudades, debido a los procesos migratorios favorecidos por las promesas desarrollistas. Desde el norte y sur del país, llegaron miles de hombres y mujeres a buscar un lugar de trabajo y vida. Traían consigo su experiencia de organización y lucha, que abonará a conformar la cultura política de la nueva clase trabajadora urbana. Y no sólo protagonizarán peleas por un sitio para vivir (Garcés, 2002), sino también, el requerimiento de reformas estructurales y distributivas encauzadas a través del desarrollo de una red de organizaciones de clase. Esta radicalización política se evidenció, por ejemplo, en la ampliación de las bases militantes; en la votación de Salvador Allende en 1958; en las marchas contra las alzas y por la defensa de las libertades públicas; y en el poder de convocatoria de la CUT, nacida en 1953, en una serie de concentraciones, paros y huelgas que Gabriel Salazar (2006) ha graficado como el *volcán gremial* (Angell, 1974; Barría, 1971a; 1971b).

De esta compleja trama de tensiones, resistencias y negociaciones, dio cuenta la conmemoración del 1° de mayo, a lo largo de los diez años en que estuvo vigente la Ley Maldita. Con el fin de historizarla, en una primera parte de este trabajo, daremos cuenta del despliegue urbano de cada jornada y los elementos generales que constituyeron la forma en que se expresó la *lucha de calles* en cada conmemoración,⁶ en estrecho vínculo con los hábitos y la cultura política de las clases populares. La apropiación y resignificación del espacio público; la defensa de las calles, plazas y esquinas que marcaron la trayectoria de su movilización; los espacios de socialización y los diversos modos en que la clase trabajadora se hizo parte, más o menos masivamente, más o menos unitariamente, año a año.

En la segunda y tercera parte, reconstruiremos cada conmemoración desde el giro conservador de Gabriel González Videla en 1947 hasta la derogación de la LDD al finalizar el período de Carlos Ibáñez del Campo, dando cuenta de los procesos de organización sindical, las apuestas por la movilización, las plataformas de lucha y la conflictiva relación estatal que caracterizó el período. También, por cierto, los esfuerzos del ejecutivo y de otras instituciones por disputar el sentido de la jornada “transformándola en otra cosa” (Hobsbawm, 1999) o utilizándola para debilitar a las organizaciones. A través de estos obje-

6 Por *lucha de calles* entendemos las formas de lucha, ocupación del espacio, movilización, articulación y confrontación, distintivas del proceso antagónico que se suscita al interior de la sociedad urbana en el marco del desarrollo del capitalismo.

tivos, demostraremos que en Chile, al menos hasta fines de la década de 1950, el 1° de mayo, fue un día de protesta.

EL 1° DE MAYO EN LAS CALLES Y PLAZAS DE SANTIAGO

1946 fue un año complicado para los trabajadores organizados. Las consecuencias del paro de febrero de aquel año, como respuesta a la matanza de la Plaza Bulnes, había tenido serias repercusiones al interior de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH) y acentuado aún más las diferencias entre comunistas y socialistas (Bravo, 2017a). Finalmente, la CTCH se había roto en dos fracciones. La CTCH-PC, conducida por el dirigente comunista Bernardo Araya, y la CTCH-PS, liderada por el socialista Bernardo Ibáñez. Esta división marcó una triste página en la historia del sindicalismo y también su debilidad (Pozo, 2013).

La conmemoración de los 1° de mayo durante esos años reflejó esa división, consignando al menos dos actos centrales, cuestión que se evidenciaba tanto en Santiago como en otras regiones. Ahora bien, quien contase con el beneplácito del gobierno o una mayor posición de fuerzas en el campo de batalla política podría realizar su concentración en el lugar más céntrico y emblemático de la ciudad, utilizando las arterias propuestas para congregarse, como Plaza Bulnes o Plaza Constitución. Pero sin duda, la Plaza Artesanos (llamada oficialmente Tirso de Molina), ubicada en la zona norte de Santiago, fue un espacio privilegiado para las asambleas masivas y protestas obreras de la clase trabajadora durante la segunda mitad del siglo XX. El transporte público paralizaba sus actividades por lo que el traslado generalmente era a bordo de camiones, transporte particular, bicicleta o, sencillamente, caminando, por lo que, a pesar de no asistir ese día al trabajo, se observaba bastante movimiento en determinados tramos de la ciudad.

Ese día era precedido por una importante organización que estaba más presente en la medida en que prosperaba el grado de unidad de las fuerzas sindicales y de la izquierda en general, a inicios de la década de 1950. De esta manera, avanzando la década, las actividades preparativas en diferentes sectores territoriales, sedes sindicales y espacios públicos se ampliaron. Durante el mes de abril las comisiones organizadoras de cada jornada de 1° de mayo cumplían una labor de intensa coordinación y propaganda. Por ejemplo, pongamos atención a una parte del programa de agitación elaborado para 1955: viernes 15 de abril, mitin en población Lo Encalada; domingo 17, mitin en población San Eugenio; jueves 21, concentración en el local de la CUT comunal, ubicado en el local de Chile-España n° 271; domingo 24, mítines en las poblaciones Maule y Santa Julia. En tanto, el 21 de

abril, la Federación Industrial de la Construcción (FINC) celebró una concentración preparatoria en Plaza Artesanos y se citó a una asamblea extraordinaria en el sindicato de la fábrica de calzado Aycaguer y Dhualde: “En esta oportunidad un dirigente dará una charla a los obreros sobre el significado del Primero de Mayo. Están invitados un dirigente de la CUT y una dirigente femenina”; por su parte, los trabajadores textiles organizaban una concentración para el domingo 24 de abril en el Teatro Sicchel (*El Siglo*, 16 de abril de 1955, p. 3).

También la propaganda para promover la actividad era importante. Los sindicatos y federaciones se comprometían con la elaboración y distribución de determinada cantidad de volantes y de lienzos en las calles, que irían ganando en tamaño y colorido con el correr de los años. A fines de la década de 1950 se contaba, además, con parlantes colocados en vehículos que recorrían la ciudad transmitiendo el mensaje de los trabajadores y convocando al acto central.

El plano de Santiago, tal como en otras manifestaciones de protesta, se dividía en cuatro. En cada uno de esos puntos se congregaba, al menos dos horas antes y siempre por la mañana, una concentración que salía en desfile hacia el acto central. Ello les permitía a las familias de trabajadores recorrer la ciudad, socializar, reconocerse entre pares, vocear consignas y demostrar fuerza. La división urbana correspondía a los sitios que alojaban los lugares de trabajo y vida de los trabajadores; de la misma manera, los representantes que eran responsables de la organización de cada columna encabezaban el desfile. Estaban asociados a esos sindicatos, pero también a la dinámica del territorio, incorporando organizaciones de pobladores, culturales, deportivas, etcétera.

Un punto de congregación invariable era en Estación Central, sector poniente de Santiago. Ahí convergían los empleados y obreros de la Federación Ferroviaria y de la Federación de Trabajadores de Electricidad y Gas, junto a otros sindicatos de Quinta Normal, Tercera, Cuarta y Novena comunas, como la Santiago Watt, Mecánica Industrial, Areneros de Maipú, Fundación Las Rosas y Transportes Victoria. También convergían organizaciones territoriales, como los Comités de Pobladores de Los Nogales, Barrancas, etcétera.

La segunda columna se congregaba por el sur de la ciudad, en Avenida Matta esquina Arturo Prat o San Isidro. Hasta ahí llegaban los obreros de la Federación del Cuero y Calzado, Federación Nacional de Panificadores, Curtidores, Metalúrgicos, Vitivinícolas, y los sindicatos y pobladores de la séptima, octava y décima comuna, además de San Miguel, La Cisterna, La Granja y San Bernardo, aunque esta última comuna en algunas ocasiones organizaba su propia conmemoración.

La columna del sector oriente se agrupaba en Plaza Baquedano, donde arribaban mayoritariamente empleados de la Federación de Educadores de Chile, Trabajadores de la Salud, Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Agrupación de Empleados Semifiscales, Empleados de Cías. de Seguros, Trabajadores de Utilidad Pública, Química y Farmacia, Unión de Profesores, empleados Bancarios, obreros de Obras Públicas, Unión de Obreros Municipales, Federación de Empleados de Teléfonos, trabajadores de la prensa, Federación de la Construcción, Asociación Postal Telegráfica, Federación de Estudiantes de Chile, además de los sindicatos y pobladores de las primera y séptima comuna, Providencia, Las Condes y Barrio Bellavista, Ñuñoa, Providencia y Puente Alto.

El cuarto punto de reunión se concentraba en la zona norte, usualmente era la misma Plaza Artesanos o en ocasiones Plaza Chacabuco; congregando a los sindicatos hípicos, Transportes Colectivos del Estado, Cervecerías Ebner, Hospital Roberto del Río, Apresto y Tintorerías Chile, Hospital Psiquiátrico, Wilson Plaque, la zapatería Beltrán Ilharreborde, etcétera. Junto a otros sindicatos y organizaciones de pobladores de la quinta y sexta comunas, Conchalí, Batuco, Renca y Colina, además de los sectores de El Salto, Negrete, Recoleta e Independencia.

En ocasiones, hubo hasta cinco puntos de reunión previa y otros espacios de importante sociabilidad obrera, como Plaza Argentina, frente a la Estación Central, o Plaza Ercilla, ubicada en calle Blanco Encalada. En el caso de regiones, una columna desfilaba de un lugar de encuentro hacia el acto central; en el caso de Valparaíso, solía partir desde la Aduana hasta el acto central en Plaza O'Higgins.

Frente a cada columna marchaban las diversas estructuras o directivos. Por ejemplo: en 1947 la columna Estación central, fue encabezada por el Consejo Local de la CTCH; la columna Plaza Artesanos, por el Consejo Directivo Nacional CTCH y Alianza Democrática Nacional; la columna Plaza Baquedano, por la Secretaría Provincial CTCH, Alianza Democrática Provincial y el Consejo Directivo Local de la CTCH de Ñuñoa. En tanto, la columna Avenida Matta fue encabezada por el Consejo Local CTCH de San Miguel.

Desde 1950, Clotario Blest acostumbraba encabezar la columna Baquedano, dónde marchaba la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y el consejo nacional de la CUT; Ernesto Miranda lo hacía en la columna Av. Matta, junto a la Federación del cuero y el calzado, seguida del Consejo Local de la CUT de San Miguel. La columna de Estación Central, por su parte, a cargo de Raúl Pinto, de la Federación Ferroviaria y la Federación Electrogás. La columna de

la Plaza Chacabuco, estaba a cargo de Esteban Delgadillo, de la CUT Provincial.

El orden del desfile se disponía según lo convenido entre los propios sindicatos y demás organizaciones. Filas de disciplinadas familias trabajadoras marchaban alrededor de una hora tras bandas de música, estandartes, banderas y motes. Es importante insistir que la composición de las marchas estaba conformada por numerosas mujeres, obreras, empleadas y esposas de trabajadores, también por niños y ancianos, lo que conformaba un evento familiar y de clase sumamente relevante.⁷

Algunos sectores acostumbraban realizar carros alegóricos que acompañaban el desfile y que representaban una escena de la coyuntura actual. También era común ver “monos” en una horca o en una cruz, con carteles que resumían las afrentas. Además, muy usual en aquellos años, un equipo de ciclistas apoyaba con la seguridad y coordinación de las columnas, sirviendo de enlace entre las diferentes columnas para regular la marcha de los desfiles y controlar que las columnas llegasen a la misma hora al acto central.

Las trayectorias urbanas que recorrían esas marchas fueron permanentemente fruto de disputa con la autoridad. Las organizaciones apostaban por desfilas por las calles más visibles, protagónicas, concurridas y/o simbólicas. Por ello, no daba lo mismo por dónde marchar y parte de los propósitos de las solicitudes para conmemorar el 1° de mayo giraba en torno a “la defensa del recorrido”. Por ejemplo, en 1955 advertía el diario *El Siglo*:

Fue un acuerdo movilizar a todos los organismos bases para defender el recorrido solicitado para las columnas el día Primero por la CUT y provincial y no aceptar que las autoridades —en forma arbitraria— quieran obligar a los trabajadores organizados a desfilas por las calles alejadas del centro. En este sentido se acordó instruir a las federaciones y sindicatos para que protesten por este hecho hasta obtener la aceptación del siguiente recorrido solicitado con toda anticipación al Jefe de la Plaza: Columna de la Estación Central; Alameda, Amunátegui, Plaza Artesanos; Columna de Avenida Prat, calle Prat, Ahumada y Plaza Artesanos. Columna Plaza Baquedano, Alameda, San Antonio, Plaza Artesanos. Sin embargo, la Intendencia quiere autorizar recorridos totalmente inconvenientes para restar importancia a este acto. (*El Siglo*, 24 de abril de 1955, p. 8)

Si bien las marchas eran autorizadas, lo usual era que las trayectorias variasen en algunos tramos. Después de la llegada de los/las traba-

7 Sobre la participación política de las mujeres trabajadoras chilenas en la década de 1950, ver Seguel (2020).

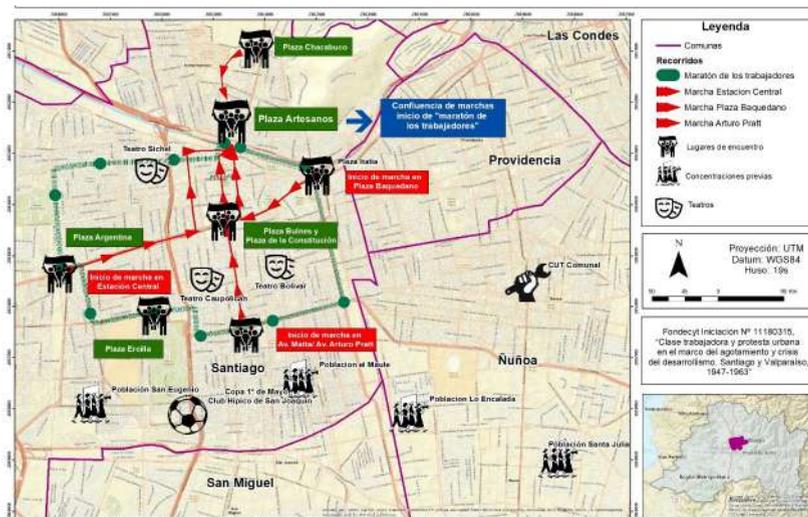
jadores/as al acto central, alrededor de las 11 de la mañana se daba comienzo el acto con los oradores programados. En el escenario, armado en la plataforma de dos camiones, hubo ocasiones en que la lista parecía eterna, como en 1951 con 16 oradores, pero usualmente oscilaba entre 10 y 12. Es interesante observar que, desde su génesis, la CUT le dio su propio sello a la conmemoración, dándole el carácter de Asamblea General, en que los y las trabajadores actualizaban sus demandas y legitimaban colectivamente, al finalizar el acto, la plataforma de lucha para corto y mediano plazo. Al calor de la capacidad oratoria de sus delegados, se levantaba ante los asistentes cada uno de los puntos, y éstos eran ratificados entre aplausos, gritos y puños levantados.

Al finalizar, se organizaba espontáneamente un desfile hacia el centro de Santiago, que solía durar algunas cuadras y disolverse poco a poco, en la medida en que las familias trabajadoras se encauzaban rumbo a sus destinos. Al día siguiente, los diarios daban cuenta de la jornada y las repercusiones de los dichos y entretelones generalmente se extendían en el tiempo.

También se organizaban otras actividades de índole cultural y deportiva que se desplegaban en el espacio urbano. Desde 1955, se comenzó a realizar la “maratón obrera Primero de Mayo” o también llamada “maratón de los Trabajadores”, por las calles de Santiago. La partida y la meta se encontraban en el podio oficial de la Plaza de Artesanos, donde el ganador tenía el honor de recibir el premio y saludar desde ahí a los trabajadores reunidos. El recorrido era el siguiente: Plaza Artesanos, Santa María, Puente, Independencia, Bandera, San Pablo, Matucana, Estación Central, Alameda, Bascuñan, Blanco Encalada, San Ignacio, Avenida Matta, Vicuña Mackenna, Puente Pío Nono, Avenida Santa María, Plaza Artesanos. Estas trayectorias y dinámicas en el espacio público pueden observarse en la siguiente cartografía:⁸

8 Cartografía realizada por la geógrafa Imara Álvarez, en el marco de nuestro proyecto FONDECYT Iniciación N°11180315.

Imagen 1
El 1° de mayo en las calles y plazas de Santiago (1948-1958)



Como vemos, el deporte se promovía en los territorios con la organización de festivales de fútbol. Muy competitivo era el que se realizaba en canchas de la Agrupación Daniel Palma, ubicadas en Club Hípico con San Joaquín. Ahí connotados clubes populares disputaron la copa 1° de mayo, como el Club Deportivo Lusitania del barrio San Eugenio, River Plate, Unión Club Hípico, Inter Lauder, Areneros de San Miguel, Manuel Guerra, Los Chilenitos, Chañarcillo, entre otros elencos de reconocida capacidad. Además, desde el campo cultural, se exhibían galas artísticas en teatros y sindicatos. Por ejemplo, en 1955 destacó el organizado por la Comisión Juvenil de la CUT en el Teatro Bolívar, con la asistencia de delegaciones de Valparaíso, San Antonio, Polpaico, San Bernardo y otros pueblos. También durante el acto central, se daba un espacio para conjuntos corales y poetas populares que declamaban versos propios y de conocidos poetas.

1947-1952: TIEMPOS DE QUIEBRES Y RESISTENCIAS

El 1° de mayo de 1947 cuatro columnas de la CTCH-PC marcharon desde distintos puntos de Santiago. A pesar de la tensa relación que se agudizaba entre el PCCH y el gobierno de González Videla, fueron autorizados para realizar el acto en Plaza Constitución, frente a La Moneda. Pocas semanas antes, se les había solicitado el cargo a los ministros comunistas que participaban en el gabinete de gobierno,

arguyendo que el contexto de movilizaciones que enfrentaba el país era instigado por ellos (Rojas, 2019). Era fundamental para la central demostrar fuerza, convocatoria, unidad y disposición de lucha.

Las fotografías atestiguan el paso de contingentes disciplinados y solemnes, con banderas y estandartes, marchando orgullosamente frente a La Moneda. Pasarían varios años para que pudiesen volver a ocupar esos espacios, y quizás lo sabían o sospechaban. En el podio, dirigentes comunistas como Galo González, Pascual Barraza o el diputado Luis Sandoval, Ricardo Fonseca, el aún Intendente de Atacama, Albino Pezoa, y dirigentes sindicales de trayectoria, como Juan Vargas y Luis Ortega, no repararon en las críticas al gobierno. Había dos cuestiones fundamentales que concentraban la preocupación de la CTCH-PC: la insatisfacción ante el proyecto de sindicalización campesina, que ponía una serie de trabas a la organización en los campos; y, tal como expresaban en forma vehemente, “¡el cumplimiento del programa jurado al pueblo!”. El gran ausente fue el propio Bernardo Araya, que no pudo asistir, pero su mensaje fue leído ante los asistentes. El sindicalista seguía la misma línea, criticando lo que llamaba “políticas de gobierno al servicio de los enemigos del progreso obrero”, y las alzas de las tarifas en la locomoción y en otros servicios (*El Mercurio*, 2 de mayo de 1947, p. 21). En la ocasión, la joven artista y folclorista Violeta Parra, recitó el poema de su autoría “A Luis Emilio Recabarren”, que fue vitoreado entre los asistentes.

Por su parte, la CTCH-PS, realizó su concentración en Plaza Ercilla. Esta disposición de espacios se revertiría en los años siguientes, ya que a futuro los socialistas junto a González Videla ocuparían aunadamente la Plaza Constitución. El Partido Socialista celebraba la decisión de marginar a los comunistas del gobierno, destacando su afán “agitador”, cuestión recalcada por Bernardo Ibáñez en su discurso. La editorial del diario socialista *La Opinión* se plegaba a esta voz: “No conmemoramos esta vez el 1° de Mayo como lo hacíamos en otros tiempos, en un ambiente de solidaridad y de concordia porque ahora, un partido extranjero, que no sirve a los intereses del pueblo y vive pisoteando el libre derecho a organizarse de los trabajadores, ha establecido un verdadero régimen de terror en el país, después de haber empañado en sangre las faenas y sindicatos obreros. Empeñado en servir los intereses de una potencia euro-asiática, que quiere sojuzgar a nuestra América, el comunismo, provoca la guerra civil en todas partes, porque así su tarea traidora tiene mayor éxito” (*La Opinión*, 1 de mayo de 1947, p. 3).

A pesar de estas diferencias, la evaluación que realizaban ambas centrales en torno a las condiciones de vida de la clase trabajadora no estaban tan alejadas, ya que las intervenciones de un lado y otro es-

tuvieron marcadas por el rechazo a las recientes alzas, principalmente del gas, luz, movilización, que aquejaban los bolsillos de los más pobres. Además de exigir la promulgación de las leyes 4054 y 4055 y beneficios laborales, como pago por semana corrida, indemnización por años de servicio y salario familiar, construcción de viviendas para el pueblo, etcétera.

En agosto de 1947 irrumpió la emblemática huelga del carbón. Se declararon en huelga indefinida los trabajadores de Lota, Coronel, Curanilahue y Lirquén, sumándose otros trabajadores y zonas del país. González Videla respondió con tono enérgico y autoritario, ordenando la expulsión de los funcionarios públicos comunistas que aún permanecían en el gobierno. Dos días después presentó al congreso el proyecto de ley para hacer uso de la Ley de facultades extraordinarias. La ley fue aprobada aceleradamente, el 22 de agosto de 1947. El presidente volvería a solicitarla en dos ocasiones, mientras se terminaba de discutir y aprobar el Proyecto de Ley de Defensa de la Democracia.

De esta manera, 1948 presenció un 1° de mayo caracterizado por la discusión en torno a la aprobación de la Ley Maldita y por diversos dispositivos represivos que ya se ejecutaban contra los comunistas y el mundo obrero organizado. En este contexto, el Día de los trabajadores, intentó ser cooptado por el Estado, asumiendo el propio González Videla un protagonismo impuesto. Para ello, encabezó un acto con militantes del Partido Radical en el Teatro Caupolicán para posteriormente liderar una marcha hacia la Plaza Constitución, donde fue fotografiado profusamente por la prensa adicta al gobierno. Ahí en la plaza, le esperaba en pleno la CTCH-PS para realizar un acto en conjunto. Es más, el presidente se dirigiría a los asistentes desde los balcones de La Moneda, discurso que sería transmitido en cadena nacional de radioemisoras.⁹

El desfile, organizado por La Moneda y la CTCH-PS debía efectuarse en el siguiente orden:

Avanzada de 8 hombres de frente y 15 por ambos costados; b) Bandera chilena y dos abanderados; c) Banda de Guerra; d) Presidente de la República y Consejo Ejecutivo Nacional; e) Directiva Nacional Sindical; f) Directiva Provincial Sindical; g) parlamentarios y regidores; h) Directiva Provincial P.R. banda Consejo Nacional Obrero. 1) Orfera; 2) Grupo Textil; 3) Gráficos;

9 Hablaron Bernardo Ibáñez; Carlos Godoy, secretario general interino de la CTCH; Arturo Jaúregui, consejero nacional de la Confederación de Trabajadores del Perú y secretario administrativo de la CIT; Roberto Pérez Núñez, secretario de la CTCH provincial; Galvarino Rivera, presidente de la Cámara del Comercio Minorista; Isauro Torres, senador del Partido Radical; y Pedro Opitz, senador y presidente del Partido Radical.

4) Grupo de la Construcción; 5) Grupo del Cuero; 6) Tranviarios; 7) Obre-ros Agua Potable; 8) Obreros Alcantarillado; 9) Choferes; 10) Beneficencia; 11) Campesinos; 12) Fiscales; 13) Municipales; 14) Frente de la Vivienda; 15) Subsistencias, VEGAS, Matadero, etc., 16) Papelera Puente Alto; 17) Gremios Varios; 18) Famae, banda; 19) Fiscales; 20) Profesores; 21) Correos y Telégrafos; 22) Particulares; 23) Semifiscales; 24) Delegaciones de Provin-cias; 25) Comunas: 1er Distrito por orden de comunas; 26) 2° Distrito; 27) 3er Distrito; 28) 4° Distrito.

Diversos medios adeptos al régimen iniciaron una intensa propagan-da para celebrar la “Fiesta del Trabajo”, una dimensión, que como hemos observado, pone el énfasis en la relación de armonía y conciliación en la relación capital-trabajo. Lo central en la llamada “Fiesta del Trabajo” era la unión de fuerzas en contra del comunismo. La figura del *subversivo* alborotador, fue graficada por Bernardo Ibáñez, advirtiendo sobre los sucesos que recientemente conmovían a Bogotá. Y es que, en el mes de abril, en dicha ciudad, se había desarrollado una intensa rebelión popular conocida como el “bogotazo”, que el dirigente aprovechó de citar, responsabilizando y advirtiendo sobre el peligro de la intervención comunista en la “destrucción, asesinatos, saqueos e incendios ocurridos en Colombia” (*El Diario Ilustrado*, 2 de mayo de 1948). En definitiva, bajo diversas advertencias, la impronta de la conmemoración fue la defensa de la democracia, la condena al comunismo y el cuestionamiento al conflicto social. Finalmente, no tenemos muchas referencias sobre la participación concreta en dichas actividades ya que los diarios de oposición, especialmente *El Siglo*, enfrentaban la censura.

El 1° de mayo de 1949 fue el primero que se conmemoró bajo la Ley de Defensa de la Democracia, mientras se redoblaban las prác-ticas represivas y cientos de dirigentes eran perseguidos. En dicha ocasión, La Moneda patrocinó la actividad organizada por la CTCH-PS en el Estadio Chile,¹⁰ que contó con la participación de González Videla. En tanto, a pesar de los dispositivos represivos y que muchos debían refugiarse en la clandestinidad, los sindicatos asociados a la CTCH-PC realizaron su concentración en Plaza Ercilla.¹¹ Fue una con-centración mucho más modesta, que las anteriores. Meses más tarde, casi al finalizar el año, salió a la luz la Junta Nacional de Empleados

10 Entre los oradores: Luis Gálvez; el secretario provincial de la CTCH, Roberto Pérez Núñez; y los dirigentes Juan Briones, Nazario Salinas, Pedro Cáceres, Manuel Hormazábal y Gabriel González Videla, presidente de la República.

11 Presentes en la tribuna, los señores Guillermo Del Pedregal, Elías Laferte, Juan Vargas Puebla, Santiago Wilson, Armando Rodríguez Quezada, Humberto Martones, Israel Friedmann, Asdrúbal Pezoa y Abraham Zamorano.

Fiscales (JUNECH), eslabón que irá aportando hacia la unificación y que reunió a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Confederación de Empleados Particulares (CEPCH) y la Asociación de Empleados Semifiscales (ANES).¹² Tanta sospecha provocó este proceso de unificación en el gobierno, que será relacionado directamente con los sucesos conocidos como la “revuelta de la chaucha”, derivada del alza del transporte en el mes de agosto de aquel año. Desde entonces, Clotario Blest, comenzó a tener un protagonismo cada vez más relevante en las iniciativas de reconstrucción orgánica y unitaria del sindicalismo, en general, y en la organización de los 1° de mayo, en particular.

Los frutos de los esfuerzos unitarios comenzaron a evidenciarse mínimamente en 1950, cuando las fuerzas sociales opositoras lograron concretar la concentración del 1° de mayo en Plaza Artesanos. No obstante, muchos dirigentes históricos y de base se encontraban en la clandestinidad, detenidos o relegados. De hecho, nuevamente, el diputado y dirigente sindical Bernardo Araya sólo pudo enviar una nota que fue transmitida a los asistentes, ya que había sido encarcelado y posteriormente condenado a tres años y un día de relegación por violar las disposiciones de la LDD. No obstante, pudieron estar presentes como oradores Clotario Blest, a nombre de la JUNECH; el diputado Humberto Martones; Domiciano Soto; Antonio Poupin; Mirreya Lafuente; Guillermo Del Pedregal; Movimiento Nacional Pro Paz; Ismael Aguirre, de la Alianza de Intelectuales; y otros miembros de la Izquierda Democrática. También, en esa oportunidad, estuvo el senador General Carlos Ibáñez del Campo. Acusaba *El Mercurio* que al finalizar el acto, “los manifestantes, profirieron frases injuriosas contra el Presidente la República y algunos dirigentes políticos” (*El Mercurio*, 1 de mayo de 1950, p. 27).

Por su parte, el gobierno junto a la CTCH-Ibáñez, realizaron una modesta concentración en el Teatro Imperial, ubicado en San Diego 1344. De todas formas, la debilidad y atomización en que se encontraba el mundo del trabajo incidieron en la escasa afluencia que caracterizó a todas las iniciativas.

La reconstrucción del campo popular pareció dar frutos en 1951 cuando logró conmemorarse de manera un poco más articulada. El alza incesante del costo de la vida aunado a un clima de constante persecución política gatillaron diversos conflictos en la esfera laboral y social. Según se informó más tarde, ese año se realizaron 150

12 También, la Asociación Nacional de Empleados Municipales, la Federación Industrial Ferroviaria de Chile y la Asociación de Empleados Administrativos de la Beneficencia.

huelgas ilegales (que involucraron a 6.564 empleados particulares y 40.879 obreros) (*Noticias de Última Hora*, 15 de abril de 1952, p. 7). En especial, el mes de abril se desarrollaron intensos conflictos, como la huelga de los trabajadores de CHILECTRA en Santiago y Valparaíso. A pocos días de conmemorarse el 1° de mayo, el gobierno decretó zona en estado de emergencia a Santiago. El intendente aclaró que no se permitirían marchas espontáneas, por lo que sólo podrían marchar por el recorrido autorizado por el gobierno y, al finalizar, la concentración debía ser disuelta en la misma plaza. Además, se ordenó el acuartelamiento de las Fuerzas Armadas y del orden en la capital.

Pero las reuniones para conformar el referente articulador continuaban. El llamado Comité Único, integrado por cerca de treinta organizaciones sindicales, de obreros y empleados, al que se sumó el Comando Nacional contra las alzas y la Federación de Estudiantes de Chile, conformó una comisión organizadora del 1° de mayo, que incluyó la elaboración de un manifiesto que establecía los puntos de convergencia y lucha: “Trabajadores de Chile: Impulsad la lucha por vuestra unidad sindical. Por la libertad y derogación de las leyes represivas, en especial de la Ley de Defensa de la Democracia. Contra las alzas y la especulación. Por la libertad de todos los presos por cuestiones sociales y la reincorporación de todos los trabajadores exonerados”¹³.

Las diversas fuerzas sociales y políticas que integraban el Comité quisieron estar representadas en las intervenciones en Plaza Artesanos, por ello, los asistentes debieron hacer gala de su paciencia y entusiasmo para escuchar el despliegue de dieciséis oradores (Garcés y Milos, 1989). En aquella ocasión, el énfasis estuvo en poder lograr una central única, como herramienta poderosa para defender los derechos de los trabajadores. En este sentido, seis meses más tarde, se dio un avance significativo con la conformación del Comité Nacional de Obreros y Empleados. Uno de sus éxitos, según ha señalado Jorge Barría, fue aunar los esfuerzos y realizar en conjunto los preparativos para el 1° de mayo de 1952 que, por primera vez desde 1945, logró organizarse mancomunadamente. Fue en esa ocasión, ante una multitud reunida en Plaza Artesanos, cuando se anunció la formación de una comisión de Unidad Sindical con miras a constituir finalmente la Central Única de Trabajadores de Chile (Barría, 1971a, p. 40). Según relató Clotario Blest en una entrevista, aprovechando el carácter de Asamblea General que se instauraba los 1° de mayo: “Había 50 mil personas, les hice la siguiente pregunta: ¿quieren o no quieren

13 Manifiesto del 1° de mayo, *Claridad*, XXI, marzo 1951, p. 1 (citado en Barría, 1971, p. 35).

Unidad?’ Y todos gritaron: ‘Unidad, Unidad, Unidad’, aproveché el momento y volviéndome a los dirigentes que estaban conmigo en la tribuna, les dije: ‘vamos a formar una comisión de 35 compañeros, que prepara un congreso de donde salga un solo organismo de los trabajadores’. Al calor del momento, elegimos a los compañeros” (Echeverría, 2013, p. 202).

Los últimos meses de González Videla estuvieron marcados por conflictos, como la huelga de los profesores que fue apoyada por un paro de la FECH. Paralelamente, agudizaba la situación, con el conflicto en la zona del salitre y también en Chuquicamata y Potrerillos. Según informaba el diario *Noticias de Última Hora*, a fines de abril se registraban 20 mil obreros en huelga en el país (*Noticias de Última Hora*, 25 de abril de 1952, p. 24).¹⁴ Y si, por una parte, el gobierno militarizaba la zona del cobre, por otra, anunciaba un indulto presidencial para los obreros procesados por delitos de carácter gremial, de acuerdo con las disposiciones de la LDD.

Con todo, 1952 giró en torno a las campañas presidenciales. En la tarde noche del 30 de abril, el comando de Carlos Ibáñez del Campo organizó la llamada “Marcha del Trabajo”, como homenaje al candidato. Bajo la consigna “Contra la desidia de los políticos profesionales”, cuatro columnas se concentraron en los puntos habituales para converger en Plaza Bulnes, mismo lugar donde se realizaría al día siguiente el acto por el 1° de mayo, organizado por el Comité Nacional de Empleados y Obreros, junto a comités de pobladores, estudiantes y otras organizaciones.

La cercanía entre las marchas y la utilización del mismo espacio no cayó muy bien a quienes apoyaban la candidatura presidencial de Salvador Allende (Frente del Pueblo), pero poco se podía hacer ante la adrenalina electoral y las fuerzas que hasta ese momento arrasaba Ibáñez del Campo. Incluso hubo reproches mutuos por ocupar paredes ya utilizadas por alguna de las convocatorias para hacer propaganda. Durante el homenaje, Ibáñez del Campo recalcó lo que haría muchas otras veces durante su gobierno: citar las iniciativas impulsadas durante su gestión anterior, como el Código laboral, y declarar feriado el 1° de mayo, para los funcionarios públicos, primero, y posteriormente, de manera extensiva, al resto de los y las trabajadoras. Además, reiteraba su compromiso con abolir la LDD al iniciar su gestión.

14 En las oficinas salitreras María Elena y Pedro de Valdivia pararon 9.600 obreros en una huelga de 60 días de duración, que finalmente fue resultado por la mediación de Salvador Allende. También se encontraban en huelga 8 mil trabajadores del cobre y 108 de la empresa constructora Pérez Zujovic.

Las organizaciones que eran parte del Comité único¹⁵ impulsaron diversas actividades de agitación para preparar los ánimos para el 1° de mayo a lo largo del país; en ellas se insistió en exigir la derogación de la LDD, bandera de lucha de ambas campañas. Llegaron incluso a poner sobre la mesa la amenaza de un paro nacional si no era derogada. Además, se exigía la libertad a los presos políticos, el fin a las alzas, la nacionalización del cobre y materias primas, reforma agraria, mejoramiento de sueldos y salarios, y seguridad social, enfatizando la unidad de los trabajadores y el anhelo de “crear una Central Única de clase, independiente de todo tutelaje partidista y gubernamental”. En esta ocasión la asistencia duplicó la de los años anteriores (*El Diario Ilustrado*, 1 de mayo de 1952, p. 4). En tanto, la bastante mermada CTCH-PS, comandada por Bernardo Ibáñez, llamó a reunirse en su local ubicado en Monjitas 583. Una reunión prácticamente testimonial que se irá replicando tercamente en los años siguientes.

1953-1958: UNIDAD EN EL SINDICATO Y EN LA CALLE

La Central Única de Trabajadores (CUT) salió a la luz pública en febrero de 1953. Y, si bien el modelo normativo consagrado en el Código del trabajo de 1931 no admitía a las centrales sindicales superiores, éstas históricamente existieron y fueron reconocidas social y políticamente (Martínez, 2019, p. 30). De hecho, Carlos Ibáñez del Campo, que en septiembre había triunfado en las mesas electorales, fue invitado junto a sus Ministros de Estado a la primera concentración pública de la CUT, realizada el 12 de marzo de 1953. El presidente usó la tribuna para reafirmar su voluntad de cumplir con el programa de gobierno (Barría, 1971a, p. 63).

Pero la relativa armonía se iría resquebrajando. Fue un año de bastante agitación y conflicto laboral, hubo huelgas en el carbón y otras áreas productivas. Una de ellas, la huelga en la empresa textil Sumar —según ha señalado Arrate y Rojas— inauguró las tomas de industria como forma de protesta. Fue a raíz de la represión con que

15 Entre ellas participaron: Junta Nacional de Empleados de Chile, Federación Industrial Ferroviaria, ANEF, ANES, Asociación de Empleados Municipales, Asociación de Empleados de la Beneficencia, Confederación de Particulares, Federación de Educadores de Chile, Confederación de Trabajadores de Chile, Federaciones nacionales de obreros mineros, metalúrgicos, Electrogas, construcción, textiles, cerveceros, dulce, hoteleros e importantes sindicatos y sus consejos provinciales, Federaciones de empleados de los Bancos, de los Sindicatos de la Beneficencia, de la Industria Gráfica, Choferes de microbuses y taxis, Consejo de Santiago de la Unión de Obreros Ferroviarios, Federación Santiago Watt, Arturo Velásquez, dirigente CTCH, Gremios de panificadores, química y farmacia, de la madera, del transporte, Movimiento Unitario de Trabajadores, Ernesto Miranda, dirigente del MUNT.

respondió el gobierno, que el socialista Clodomiro Almeyda renunció como Ministro del Trabajo, y fue reubicado en el de Minería. Según Arrate y Rojas (2003), hasta entonces existía un clima de entendimiento que se manifestó el 1° de mayo de 1953 (p. 296). Pero no estamos de acuerdo, al interiorizarnos en él, se evidencian las tensiones que ya estaban latentes desde los días previos.

El anticomunismo de Ibáñez del Campo y el autoritarismo represivo con el que respondió ante el conflicto laboral y social fueron el sello su periodo presidencial, y esto quedó demostrado tempranamente, con la recurrente utilización de la LDD, además de otros dispositivos legales que utilizó para pacificar el conflicto social. Un día antes de conmemorarse el 1° de mayo de 1953, el diario *El Siglo* fue censurado y clausurado durante 10 días, acusado de ser una publicación subversiva; además, fue detenido su director, Raúl Araya Bori. La querrela de seis carillas, se detenía en “los peligros que encierran las actividades comunistas en el país; su crecimiento en los últimos meses y la firme actitud que adoptará en el futuro el Gobierno para reprimir las actividades sediciosas” (*El Mercurio*, 30 de abril de 1953, p. 21). Y eso no era todo, el ejecutivo dejaba en claro lo necesario de mantener la Ley de Defensa de forma permanente, para cautelar la seguridad constitucional. En cuestión de meses el gobierno pasó de cuestionar las prácticas de la CUT a desconocerla completamente como interlocutora de los trabajadores. Dos eventos previos al 1° de mayo expresaron ese distanciamiento: los dirigentes intentaron, infructuosamente, en diversas ocasiones reunirse con el Ministro del Interior, Osvaldo Koch, e insistieron, también infructuosamente, en realizar la concentración del 1° en Plaza Bulnes.

Los preparativos de la primera conmemoración organizada por la CUT estuvieron conformados por comisiones, subcomisiones y comandos de organizaciones sindicales que trabajaron en la preparación de la “gran manifestación de masas”. Finalmente, ante la negativa de la autoridad para ocupar Plaza Bulnes, el acto debió realizarse en Plaza Artesanos. Esta vez, cinco columnas marcharon por Santiago hasta llegar a la plaza: Avenida Matta esquina Arturo Prat, Plaza Argentina, Plaza Baquedano, Mapocho esquina de Avenida Matucana y Plaza Chacabuco. Los asistentes llevaron los letreros con leyendas alusivas, estandartes sindicales, camiones y carretelas adornadas. Los oradores de la concentración fueron: Clotario Blest, presidente de la CUT; Baudilio Casanova, Secretario general; y Ernesto Miranda, por los consejeros. También estuvo presente el dirigente estudiantil, Laureano León, que pocos días antes había estado detenido en Valparaíso, acusado de portar *propaganda roja*. A continuación, algunos fragmentos del tenor de las intervenciones. Ernesto Miranda: “Hoy

está recordación no se hace como una fiesta ni como un día de congoja, se realiza como una manifestación de recuerdo, de protesta y de recuento de los acontecimientos y de nuestra posición en el concierto social". Clotario Blest: "Ya no se trata de derogar la Ley de Defensa de la Democracia, ahora se aplica con mayor energía y rigor que en el anterior Gobierno. Esta ley no se aplica a los grandes ladrones y sinvergüenzas, no se aplica a los señores del Club de la Unión; se aplica a los trabajadores". Laureano León: "Saldremos a la calle a defender la libertad. Los estudiantes saldremos a la calle a protestar contra las leyes represivas" (*Noticias de Última Hora*, 2 de mayo de 1953, p. 3).

Al finalizar la Asamblea General, se legitimaron los siguientes acuerdos:

Los trabajadores reafirman su unidad con motivo de la actitud provocativa de patronos y del Gobierno; luchar por la inmediata solución de los conflictos pendientes; luchar por el respeto a organizaciones sindicales y dirigentes e impedir el lanzamiento de campesinos y la exoneración de empleados: indemnización por años de servicios, salario mínimo y otros beneficios para obreros; luchar contra el alza del costo de la vida, la especulación, monopolios y latifundios y pedir la expropiación de riquezas nacionales y derogación de la Ley de Defensa de la Democracia y reapertura de "El Siglo"; y protestar por denegación de permiso para efectuar una concentración en la Plaza Bulnes. (*El Mercurio*, 2 de mayo de 1953, p. 1)

Finalmente, hubo una improvisada marcha por Bandera y la Alameda, hasta el Cerro Santa Lucía.

A comienzos de 1954 el Partido Socialista Popular rompió con el gobierno y pasó a la oposición, lo que contribuyó a la extensión del conflicto social. El plan económico implementado por el gobierno solo parecía empeorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Mientras se desarrollaban diversas huelgas en servicios esenciales como salud, transporte y minería del cobre, el mes de mayo fue el momento en que la lucha de clases se expresó con fuerza y se recrudecieron las diversas posiciones.

La masiva y ordenada concentración del 1° de mayo en Plaza Artesanos alineó las posiciones. Por segundo año consecutivo se les negó la Plaza Bulnes, lo que abonó aún más a que las críticas fueran francas y feroces. Pocas veces se había observado tal cantidad de asistentes. Cuatro pobladas marchas reunidas previamente en las plazas Baquedano, Chacabuco, Argentina y Av. Matta llegaron a escuchar por más de tres horas a los oradores. Representantes de los gremios de empleados particulares, bancarios, telefónicos, de electrogas, del profesorado, un representante del Consejo Provincial, el vicepresidente nacional de la CUTCH y, por último, el presidente de la CUT, Clotario

Blest, criticaron la gestión de Ibáñez. Con todo, no imaginaba Blest que sus palabras le costarían la cárcel: “Hombres que en su campaña electoral prometieron un paraíso no han hecho otra cosa que transformarlo en un infierno” (*El Diario Ilustrado*, 2 de mayo de 1954, p. 10). Estas alocuciones fueron parte de las expresiones que utilizó.

Las intervenciones fueron amenizadas con números artísticos de poesía y el coro de ex alumnos de la Escuela Salvador Sanfuentes, que interpretó el “Himno Nacional”, “El cantar eterno”, “El himno de la Juventud” y “La marcha de los molineros.” Además, cuestión que se irá masificando con los años, hubo numerosos periódicos, libros y volantes voceados alrededor de la plaza durante el acto. En medio de los desfiles sucedió un hecho llamativo. Quienes marchaban en la columna que salía desde Plaza Baquedano hacia la Alameda, se encontraron para su sorpresa con el automóvil del mismísimo Gabriel González Videla y su esposa Rosa Markmann. Al ser reconocido por el contingente de profesores, fue escupido e insultado por los manifestantes. Reporteros del diario *Noticias de Última Hora*, relataban así lo sucedido: “Sin pensarlo dos veces, una maestra se lanzó sobre la corbata de González Videla y lo increpó con extraordinaria dureza: “Traidor, Vende Patria ¿Cómo te atreves a presentarte aquí?”” (*Noticias de Última Hora*, 2 de mayo de 1954, p. 6). Finalmente, el ex-presidente debió ser escoltado por carabineros para salir del lugar.

El episodio de Plaza Baquedano, junto a las críticas emanadas desde el acto central, le sirvieron al Ministro del Interior, contraalmirante Jorge Aros, para denunciar a la CUT como una institución ilegal que entorpecía o provocaba dificultades al desenvolvimiento normal de las actividades económicas del país. Clotario Blest, como señalamos, fue llevado ante los Tribunales de Justicia, acusado de injuriar al jefe de Estado en el discurso del 1° de mayo, en virtud de infracción a LDD y, posteriormente, fue detenido en la cárcel pública. Ante la gravedad de la situación, la CUT llamó a un paro general para el 17 de mayo de 1954. Aún falta estudiar este paro con mayor detalle, pero no hay consenso al evaluarlo. Para el historiador Jorge Barría se trató de un fracaso, en parte debido a que Blest fue liberado el día anterior y el gobierno ofreció un aumento salarial para trabajadores del Estado, lo que le habría quitado piso a la movilización (Barría, 1971a, p. 66). En cambio, para Héctor Humeres (1957), jurista que escribe sobre la huelga al calor de los hechos, se trata de un paro nacional exitoso, debido a que se plegó el 80% de los servidores públicos y del sector privado (p. 163). Además del transporte público y privado, paró un grueso del sector minero e industrial y, parcialmente, la administración pública y los universitarios. Según cifras de la CUT, pararon 509 mil trabajadores pero, según Barría, fue la cuarta parte (Barría,

1971a, p. 67). Con todo, la percepción en torno a lo exitoso del paro le dio una posición de fuerza a la CUT (Arrate, 2003, p. 300).

Retomando los pasos de González Videla, en 1955, Carlos Ibáñez del Campo decidió salir a disputar el espacio público y organizar su propia concentración de 1° de mayo en Plaza Constitución. Ello fue precedido por la conformación de una supuesta Confederación de Trabajadores Independientes de Chile —instancia fantasma levantada por la oficina de coordinación sindical del gobierno— liderada por el Comandante Jorge Ibarra, junto al Sindicato de la Sociedad de Paños de Tomé y el de la Compañía de Gas de Valparaíso. La idea era aparentar una división entre los trabajadores y quitarle peso a la CUT.

Por disposición oficial, desde las primeras horas del 1° de mayo, permanecieron acuartelados durante 24 horas integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. La administración de Ibáñez del Campo financió el traslado de trabajadores desde Valparaíso en microbuses y, especialmente, en trenes. La organización había previsto que desde ahí saldrían en marcha hacia Plaza Constitución para escuchar el discurso presidencial. Pero a la llegada del tren hubo incidentes en Estación Central: quienes se dirigían a Plaza Artesanos les lanzaban insultos y monedas de un peso, tratándolos de vendidos. Además, “algunos de los viajeros, en lugar de sumarse a la columna que se movilizaba hacia La Moneda, se dirigieron a la Plaza Artesanos, pero los organizadores de este evento procedieron a quitarles los pasajes, lo que dio lugar a violentos cambios de expresiones” (*El Mercurio*, 2 de mayo de 1955, p. 21). Durante el trayecto, un microbús con propaganda de adhesión al mandatario fue apedreado en la intersección de Vergara con la Alameda.

Lo central de la intervención de Ibáñez del Campo fue recalcar la ilegalidad de la CUT y su incitación a la subversión del orden público, inspirada, según dijo, por influencias foráneas. Pero a pesar de sus esfuerzos, la actividad del gobierno fue escasamente concurrida, llenando sólo un tercio de la plaza. En contraste, la concentración de Plaza Artesanos destacó nuevamente por su masividad y organización. Las columnas partieron desde cuatro puntos de Santiago, previa concentración y sincronía. En tanto, en la plaza, observaba *El Diario Ilustrado*: “Desde mucho antes, se instalaban numerosos vendedores y hasta un stand de diarios y de revistas de inspiración comunista, como ‘Nuestro Tiempo’ y ‘China Popular’, un ‘órgano de los partidarios de la paz’ y otros. Algunos de estos periódicos lucían grandes fotografías de los jefes soviéticos. Estos fueron voceados insistentemente con las conocidas consignas antinorteamericanas” (*El Diario Ilustrado*, 2 de mayo de 1955, pp. 13 y 16).

Entre los oradores, nuevamente destacó la oratoria de Clotario Blest, quien ocupó unos minutos para recordar que sus palabras le costaron la cárcel un año atrás:

Si esta vez se me encarcela de nuevo —dijo— sufriré gozoso la pérdida de la libertad; pero nadie acallará mi voz, que es la voz de los trabajadores. Esta no es fiesta como pretenden algunos. Es la recordatoria trágica de sucesos gloriosos pero sangrientos; es la reafirmación de la esperanza y de la fe en los destinos de la clase trabajadora. (*El Diario Ilustrado*, 2 de mayo de 1955, pp. 13 y 16)

El acto fue cerrado por Ernesto Miranda, dirigente de la Confederación del Cuero y del Calzado, quien invitó a los trabajadores a mantener su unidad y seguir peleando en la lucha por conquistar poder. Al terminar fue expresada en voz alta la plataforma de lucha propuesta por la CUT, condensada en los siguientes puntos: unidad de todos los trabajadores, Reforma Agraria, comercio con todos los países del mundo y derogación de las leyes represivas (*El Mercurio*, 2 de mayo de 1955, p. 21).

Recordemos que, desde 1955, la Iglesia Católica optó por dotar de un nuevo sentido a la conmemoración, intentando disputar el espacio que pugnaban las organizaciones de clase a la hora de representar al campo popular. En 1955, Pío XII, el llamado pontífice de la Guerra Fría, declaró al 1° de mayo como feriado católico bajo la denominación de Día de San José el Trabajador. De reconocida postura anticomunista y ante cerca de 300.000 peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro, les puso en guardia contra el comunismo y los principios que se identificaban con éste. La prensa conservadora chilena escribía al respecto: “Su gigantesca demostración de fe oscureció por completo las manifestaciones comunistas de la fecha. Los obreros y sus familias, algunas vestidas con ropas personales de vivos colores, interrumpieron 26 veces con atronadores aplausos y vítores el discurso de 25 minutos de Su Santidad”. Dijo el pontífice, en dicha ocasión: “habiendo recibido como tal el bautismo cristiano, el 1° de mayo lejos de ser un estímulo para discordia, odio y violencia, es y será una recurrente invitación a la sociedad moderna para que realice lo que todavía falta para la paz social” (*El Diario Ilustrado*, 2 de mayo de 1955, pp. 13 y 16).

Ante dichas orientaciones, en Chile, la Sociedad de Obreros de San José, celebró la llamada Fiesta del Trabajo con una misa a las 8:30 horas. Como parte de los rituales se bendijeron las herramientas de trabajo y también hubo una misa vespertina con procesión por el interior templo, llevando la imagen del San José (*El Mercurio*, 1 de mayo

de 1955, p. 25). Pero desde 1956 se evidenció la intención de multiplicar el ritual y concentrar mayores espacios de reflexión. En diversas parroquias de barrios obreros, como Santa Sofía, San Gerardo, San Alberto de N. S. de Mercedes, Jesús Obrero, El Salto, Santa Lucrecia del Monte Carmelo, etc., a las misas y bendición de herramientas se agregó la organización de reuniones tipo asambleas, en las que sacerdotes, laicos y obreros católicos se referían a las enseñanzas sociales de la Iglesia y el lugar del trabajo en la vida cristiana. En estos espacios se profundizaba, además, en las orientaciones que daba la institución en torno a su concepción de justicia social y las relaciones entre capital y trabajo. Aquel año, señalaba entusiasta *el Diario Ilustrado*: “Estos actos del Día del Trabajo Cristiano, alcanzaron singular brillo y significado y son una promesa de que en el futuro seguirá incrementándose este espíritu cristiano de la masa trabajadora en nuestro país” (*El Diario Ilustrado*, 2 de mayo, 1956, p. 1). De esta manera, cada año, existirá un pronunciamiento por parte de la iglesia, a través de su arzobispado y sacerdotes, que acentuará el espíritu católico de la Fiesta del Trabajo o también llamada Fiesta del Santo Obrero San José.

La propia Iglesia estaba preocupada y entendía que los ánimos tendían a apoyar demandas transformadoras de mayor alcance. La indignación por la escasez y la especulación de los alimentos agotaban la paciencia y aumentaban el conflicto con el gobierno. Mes a mes era lo mismo. Según la propia prensa conservadora, y basándose en cifras oficiales, el aumento del costo de vida entre marzo de 1954 y marzo de 1955, alcanzó el 72,59% y, entre enero de 1953 y marzo de 1955, o sea, en 27 meses, fue del 194,28% (*El Diario Ilustrado*, 17 de abril de 1955, p. 5). Por otra parte, desde 1955 el costo de vida subió un 84%. El obrero Emeterio Rojas, explicaba sobre la dificultad para llegar a fin de mes: “no me alcanza para vivir y todo porque hay que pagar mucho más que los precios oficiales para comer, el aceite cuando se encuentra vale el doble del precio fijado. El pan resulta como a \$50 kilo, azúcar venden por octavo, subió la luz, el agua y el gas ¿qué más quieren los especuladores y el Gobierno?” (*El Diario Ilustrado*, 22 de abril de 1955, p. 11).

La solución que buscó el ejecutivo sólo empeoró las cosas. Para controlar la inflación y estabilizar la economía, Ibáñez del Campo decidió contratar la asesoría norteamericana de la “Misión Económica y Financiera Klein & Saks” (1958, p. 2). Su propuesta, bajo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), traería fuertes repercusiones que impulsarían la movilización política en los años siguientes. El 7 de julio de 1955, se desarrolló un exitoso paro nacional como protesta contra el alza de la vida; pararon funcionarios del Estado y afectó de forma importante al comercio y la industria.

Asumiendo el peligro, el gobierno propuso a los dirigentes que bajarán la movilización y les convocó a una mesa negociadora en forma de comisiones mixtas (Humeres, 1957, p. 163). Las diferencias entre quienes apostaban por continuar con el paro indefinido y quienes, por el contrario, consideraron pertinente bajarlo —postura que finalmente se impuso— terminaron debilitando a la central. Mientras tanto, Ibáñez del Campo ganaba tiempo y desgastaba a los trabajadores sin llegar a ningún puerto. El próximo paro, con una CUT debilitada, sería enfrentado de forma muy distinta por el gobierno.

El 1° de mayo de 1956, la directiva de la CUT se encontraba detenida en la cárcel pública.¹⁶ Llevaban cuatro meses presos. El tiempo había sido muy intenso desde el paro de julio de 1955. Aunque las consecuencias estuvieron lejos de serlas: resquemores y reproches dentro de las propias organizaciones, persecución y detención de dirigentes, arrestos masivos de sindicalistas, relegaciones y desmoralización. Por si fuese poco, desde septiembre de 1955 hasta febrero de 1956, Chile vivió nuevamente bajo estado de sitio, en virtud de la existencia de diversas huelgas, catalogadas como actividades sediciosas de tendencia comunista. En respuesta al paro nacional convocado por la CUT para el 9 de enero de 1956, el estado de sitio se extendió desde las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, O'Higgins y Concepción al resto del país. La CUT fue acusada por la autoridad de ser una "entidad organizada al margen de la ley, que pretende convertirse en autoridad suprema al ordenar un Paro Nacional encaminado a presionar a los poderes constituidos, con miras a arrancarles resoluciones tendientes a lograr sus pretensiones contrarias a los altos intereses de la nación" (Martínez, 2019, p. 62).

A continuación, los ministros Koch y Yáñez enviaron la circular actualizando las instrucciones en torno a la legislación vigente, referente al control sobre las elecciones sindicales (Decreto 4161 de 1955). La intención era impedir que fuesen candidatos a directores sindicales las personas inhabilitadas de acuerdo con la LDD e inhibir la participación en nuevos conflictos. El decreto conocido como la circular Koch-Yáñez atentaba contra la libertad sindical y el derecho a la representatividad. Desde entonces, la demanda por derogar la circular Koch-Yáñez se sumó a la plataforma de lucha por las libertades políticas, y sus implicancias serían parte de los argumentos para fun-

16 Se encontraban detenidos los dirigentes: Clotario Blest, Manuel Collao, Baudilio Casanova, Isidoro Godoy, Juan Vargas, Julio Alegría, Bernardo Araya, Ramón Domínguez, Héctor Durán, Luis Figueroa, Carlos Matus y René Reyes.

damentar el requerimiento que ese año presentó la CUT ante la OIT, como señalamos en un inicio.¹⁷

En lo económico, el gobierno envió el proyecto de ley anti-inflacionista basado en las recomendaciones de la Misión Klein-Saks, basadas en las indicaciones del FMI. Entre los puntos esenciales y más sensibles para la clase trabajadora estaban: restricción de la demanda y del poder de compra de los asalariados, reajustes inferiores al costo de vida, estabilización (congelamiento) de sueldos y salarios. Además, se establecía la libertad de precios, restricciones del circulante y freno al gasto público. Si bien el paro de enero de 1956 tenía como objetivo el retiro del proyecto, muy pocos trabajadores se plegaron. El estado de sitio y las medidas consignadas en la circular Koch-Yáñez conseguía intimidar a las directivas.

Con la vieja táctica de endurecer las medidas represivas, por una parte, y por otra, mostrarse magnánimo, ese mismo día Ibáñez del Campo envió un proyecto de ley de amnistía para obreros y empleados públicos procesados por las huelgas de agosto y septiembre de 1955. Paralelamente, en virtud del estado de sitio procedió a detener a diversos dirigentes sindicales, especialmente a los integrantes de los consejos provinciales y locales de la CUT y los relegó a distintos puntos del país. Se volvió a habilitar incluso el campo para prisioneros de Pisagua. Además, denunció en los tribunales a dirigentes del Consejo Nacional por LDD y, aunque muchos lograron escabullirse para no ser procesados, un sinnúmero de dirigentes provinciales y locales de la CUT fueron relegados (Barría, 1971a, p. 82).

El fracaso del paro debilitó aún más a la CUT y debieron pasar varios años y otro período presidencial para que retomase la estrategia del paro nacional. Ese fue el tenso ambiente en que se desarrolló el 1° de mayo de 1956. Por ende, no experimentó la masividad de los años previos. No obstante, comenzaba a despuntar y retomar la iniciativa política el Frente de Acción Popular (FRAP) bajo el liderazgo de Salvador Allende. No es extraño que esto se reflejase en esa jornada, en su participación como orador sobre el podio de Plaza Artesanos.

Si bien el intendente de Santiago, Gustavo Aguirre Luco, declaró que no concedería autorización a la CUT para que efectuase concentraciones, ya que carecía de personalidad jurídica, el permiso fue so-

17 La primera gran queja ante el organismo estaba relacionada con la detención masiva de dirigentes sindicales especialmente los dirigentes de la CUT, por la tipificación de huelga como delito y aplicación de medidas privativas de libertad por el hecho de participar u organizar una huelga. También alegaban que después de la huelga del 9 de enero de 1956, no era posible celebrar reuniones sindicales sin permiso previo y sin la presencia de representantes de la policía (caso n°134) (Martínez, 2019).

licitado a través de los diversos gremios. Lo mismo sucedió en Valparaíso. La concentración debió realizarse en Avenida Argentina esquina Rancagua, ya que fue negado el permiso para efectuarla en la Plaza O'Higgins, como era tradicional. Además, los carabineros impidieron hacer uso de la palabra al dirigente de la CUT, Alberto Texier, cuando éste ya había alcanzado a dirigirse a los manifestantes.

En Santiago, llegaron hasta Plaza Artesanos cuatro columnas que debieron conformarse con transitar por un trayecto menos protagónico. En el estrado, también estaban presentes Aniceto Rodríguez; los diputados, Roberto Fierro, Martínez Campos y Humberto Martones; los dirigentes de la CUT en libertad bajo fianza, Ernesto Miranda y Armando Aguirre; los consejeros de la CUT, Carlos Morales, Juan Lamatta, Domiciano Soto, Elías Lafertte, Ana Ugalde y dirigentes de la Juventud (*Clarín*, 2 de mayo de 1956, p. 5). Especialmente emotivo fue el momento en que se leyó el mensaje de los dirigentes de la CUT detenidos. Ni siquiera habían podido visitarles o intentar pasar simbólicamente por afuera del recinto ya que fue fuertemente resguardado por la fuerza pública y se les cerró el paso a quienes lo intentaron.

No obstante, la creatividad otra vez fue parte de la mística que emanaba de las marchas. Por ejemplo, en una de ellas —según consignaba *El Siglo*— “un guaripola dirigió banda de músicos portando una escoba quebrada”, en tanto, pobladores de La Legua, que cada año acostumbraban preparar carros alegóricos, llevaron uno que representaba el Anexo de la Cárcel, donde estaban presos los dirigentes de la CUT (*El Siglo*, 2 de mayo de 1956, p. 2). Las consignas también fueron un poderoso medio de expresión. Revisemos las más sonadas de la Jornada:

- A la lucha los pintores, contra el hambre y los traidores
- Dejaremos de ser pobres, nacionalizando el cobre
- Con la lucha callejera triunfará la clase obrera
- El Ministro de Economía sólo sabe de carestía
- Contra el hambre y la opresión se levanta la nación
- Todo Chile pide y grita se derogue la Ley Maldita.

Por su parte, la oficina sindical de La Moneda no realizó ningún acto oficial, sino una transmisión por cadena nacional de emisoras radiales. Además, esperó al 2 de mayo para anunciar el alza de la bencina, de 27 a 40 pesos, y de la parafina, de 22,40 a 33,40 pesos el litro. Y aunque se señalaba expresamente y por decreto que no subiría el precio del transporte, era un nuevo peso para los bolsillos de la clase trabajadora, poco antes de empezar el invierno. La chispa de este ma-

lestar se sentiría meses más tarde, en la lucha de calles que se gatilló en Valparaíso y Santiago en las jornadas del 2 y 3 de abril.

Serían tratados de “agitadores”, “instigadores” y “comunistas” por el Ministro del Interior quienes se rebelaron contra el alza de las tarifas de la locomoción en abril de 1957. Ante la pregunta “¿por qué se protesta?”, insistía *El Siglo*: “El alza escandalosa de la locomoción ha venido a colmar la indignación acumulada por las del azúcar, aceite, porotos, luz eléctrica y tantas otras que hacen la vida imposible. La Anaconda aparece según su propio balance habiendo sustraído a Chile en el año 1956 utilidades ascendentes a más de 40 mil millones de pesos, y sus magnates reciben continuamente condecoraciones en ceremonias en La Moneda. El pueblo aspira, mientras tanto, siquiera a que no se lleve más lejos su hambreamiento. Es hora de escucharlo” (*El Siglo*, 1 de abril de 1957, p. 3).

Fue una advertencia a toda la clase política, dijo Salvador Allende, de la cual no se descartaba. En tanto, en el Congreso los parlamentarios coincidían en el temor o preocupación por la estabilidad del régimen democrático. Temor que reaparecía ante contextos de movilización popular. La prensa conservadora iba más allá incluso, advirtiendo que “los últimos sucesos políticos bien podrían ser ‘preludio’ de una aventura antidemocrática” (*El Diario Ilustrado*, 25 de abril de 1957).

También el campo popular estaba preocupado, pero por la violencia represiva con que habían sido aplacadas las jornadas de abril. La conmemoración del 1° de mayo de 1957 dio cuenta de ello. Nuevamente, bajo estado de sitio, con escaso espacio para la organización y la difusión de la actividad, ya que el jefe de zona en estado de emergencia de la ciudad de Santiago, general Horacio Gamboa, sólo autorizó la concentración 24 horas antes. Además, el taller de la Imprenta Horizonte donde se imprimía *El Siglo*, que acostumbraba a difundir y coordinar las diversas actividades preparativas, había sido destruido por investigaciones, y estuvo censurado hasta el 30 de abril; a la prensa en general, se le había prohibido informar sobre actividades sediciosas, por tanto, se negaron a difundir las informaciones sobre la CUT.

Con todo, aunque la asistencia fue mucho menor a la de ocasiones anteriores, cuatro columnas desfilaron hacia Plaza Artesanos. Además, la “Maratón de los Trabajadores”, organizada esta vez por el Sindicato de Suplementeros y la Comisión Juvenil de la CUT, pudo concretarse en el circuito de 12 km, que partía en Plaza Artesanos, recorría diversos barrios de Santiago y finalizaba nuevamente en el podio de los trabajadores.

En el acto hubo once oradores,¹⁸ además, se leyeron los mensajes de quienes no pudieron estar presentes, como los del secretario general de la CUT, Baudilio Casanova, relegado en San Carlos; Juan Vargas Puebla, tesorero de la CUT, relegado en Villa Alegre, y de Clotario Blest, relegado en la localidad de Molina, muy crítico con Ibáñez del Campo: “Hoy como ayer, se repite la historia de la persecución y el ultraje contra la clase trabajadora. El Gobierno del Señor Ibáñez del Campo, pasará a la historia del país, como el reinado de la incapacidad, el nepotismo y la irresponsabilidad, ha mantenido una persecución a la CUT porque ha visto en ella un muro de contención infranqueable de sus sueños cesaristas” (*Noticias de Última Hora*, 1 de mayo de 1957, p. 12). Quizás la parte más emotiva fue la nota firmada por 63 obreros, empleados y estudiantes, reclusos en la Cárcel Pública, y procesados por la LDD, con motivo de las manifestaciones de protesta de abril. También enviaron saludos y mensajes solidarios representantes del FRAP y del Movimiento por las Libertades públicas.

Al finalizar la concentración, se acordó actuar en tres ejes fundamentales: 1. Ante la carestía de la vida: movilizarse para detener las alzas de bienes de primera necesidad y servicios públicos, impulsar la creación de un fondo de bonificación para mantener los precios, formado por un impuesto directo a las grandes ganancias de las empresas del cobre, salitre, manufacturas y bancarias. Exigir el reajuste extraordinario de sueldos y salarios para compensar las alzas. Impulsar el estudio y aprobación por el Parlamento del salario vital obrero y asignación familiar para todos. 2. Ante la cesantía y problemas de vivienda: exigir la creación de un seguro nacional de desempleo e inamovilidad en el trabajo, un plan extraordinario de construcciones habitacionales populares y obras públicas en todo el país. Además de ayuda técnica y entrega de materiales de construcción a los pobladores. 3. En torno a las limitaciones de las libertades públicas: continuar la lucha por la derogación de la LDD y de la circular Yáñez-Koch, mediante la cual ya habían sido inhabilitados más de 3 mil dirigentes de diversos sindicatos, bajo la intervención de la policía política. Además, acordaron entregar un memorial al gobierno, para exigir el castigo a los responsables de la represión de las jornadas de abril y que las Fuerzas Armadas no fuesen transformadas en fuer-

18 Entre los oradores se encontraban: Víctor Herrera, CUT Provincial; Miguel Pradenas, en nombre de los trabajadores relegados; Alfredo Leiva, Trabajadores de la Salud; Humberto Elgueta, Federación de Educadores; Manuel Inostroza, Obreros de la Construcción; Julio Stuardo, Federación de Estudiantes; Carlos Morales, Trabajadores del Estado; Manuel Gallarado, Trabajadores Mineros; Manuel Aguirre, Trabajadores del Cuero; Eladio Díaz, CUT Nacional; y Santiago Pereira, representante de la ANEF.

zas de choque contra los trabajadores (*Noticias de Última Hora*, 1 de mayo de 1957, p. 12).

Los meses siguientes fueron intensos. Desde diversos frentes se buscaba canalizar la energía liberada con las jornadas de abril y responder a la crisis política y social manifiesta en el país. Entre los meses de julio y agosto, se concretaron dos hitos de importante trascendencia para la historia política chilena. Se trata de la reunificación del Partido Socialista, lo que abonará a fortalecer la alternativa de izquierda, y el surgimiento de la Democracia Cristiana, que entrará a disputar la representación de parte del campo popular.

El último 1° de mayo bajo la gestión de Ibáñez del Campo estuvo marcado por el clima electoral. El ibañismo se encontraba debilitado, administrando sus últimos meses de gobierno. Por el contrario, la figura de Salvador Allende, representante del FRAP, repuntaba con un programa de lucha que retomaba las aspiraciones levantadas por la clase trabajadora, y de las que, en parte, hemos dado cuenta en estas líneas. Si bien finalmente resultaría vencedor el candidato derechista, Jorge Alessandri, sería por muy pocos votos, evidenciando el fortalecimiento del campo popular y la consolidación del FRAP como una alternativa de poder real. La extensión de las luchas sociales y del clima de agitación política, junto a la percepción de que era necesario apuntar hacia transformaciones de mayor alcance, son un dato para sostener este planteamiento. El discurso de Ernesto Araneda, secretario de la CUT Provincial, el 1° de mayo de 1958, dio cuenta del contexto que en ese momento atravesaban los y las trabajadoras:

Los actuales conflictos de los compañeros de Cemento Melón, que en septiembre del año pasado presentaron su pliego de peticiones y que llevan más de 10 días de huelga, sin que se les dé solución alguna, con el agravante de que los patrones de esa industria han hecho una demanda declarando ilegal las peticiones y la huelga. La huelga del mineral de cobre de Chuquicamata que lleva más de 22 días, sometida al famoso Estatuto del Cobre, que ha limitado el derecho a petición y pone a los trabajadores frente a la acción impositiva del Gobierno y de la Chile Exploration. La huelga de Spalloni, con más de 120 días de duración, declarada ilegal, por obra y magia de la Junta de Conciliación Metalúrgica. El conflicto de los obreros de Madeco, que ante la firme actitud de los trabajadores, la Junta de Conciliación se ha visto obligada a aprobar el pase para la huelga que antes había negado. Los conflictos que hemos indicado, unidos a la acción que desarrollan los trabajadores en el Norte, Centro y Sur, demuestran el ascenso de las luchas en defensa de sus intereses y que no se someten fácilmente a los planes de congelación y de privaciones. (Ernesto Araneda, discurso citado en *Noticias de Última Hora*, 1 de mayo de 1958, p. 5)

Paralelamente a las huelgas que señalaba Araneda, se desarrollaban distintos conflictos laborales, movilización y protesta de los trabajadores del azúcar, de los ferroviarios de las maestranzas de San Bernardo, Valparaíso y Coquimbo, de la salud, estucadores, panaderos, industria de las cecinas y mueblistas, que mantenían a las calles en constante movilización. No sólo se paralizaba, sino que los y las trabajadoras salían a manifestar su descontento en diversos espacios de socialización política: asambleas en sedes sindicales, concentraciones en plazas públicas, reuniones, discusiones, marchas, pancartas y consignas.

Y, en medio de ese clima de agitación y descontento, la consigna del 1° de mayo fue: “A derrotar la política de la ‘congelación’”. Se planteaba como una nueva jornada de lucha, por la derogación de la LDD, de la circular Yáñez-Koch, por mejores sueldos y salarios, por mayor asignación familiar (igualitaria) y, en general, por el cumplimiento de la “Plataforma Inmediata de Lucha” de la CUT. Los trabajadores solicitaron Plaza Bulnes y se la concedieron, asimismo, se autorizó el recorrido propuesto para las cinco columnas. Era evidente que Ibáñez del Campo quería evitar ciertos conflictos y despedirse del sillón presidencial dejando un halo “progresista”, intentando quizás, limpiar con su escoba el componente represivo y autoritario que marcó su segundo período al mando del país. Cuestión que en parte logrará con la ley de transparencia eleccionaria y la derogación de la LDD.

Para la ocasión, la CUT desplegó una intensa campaña propagandística: la camioneta con parlantes que recorrió las calles santiaguinas convocando a la protesta fue la gran novedad de la época. Además, al igual que en ocasiones anteriores, se colocaron lienzos en las principales arterias de Santiago y la comisión de prensa preparó el primer ejemplar del periódico de la CUT como homenaje a la Conmemoración de la Masacre de los Mártires de Chicago. La comisión organizadora, dispuso que en esta ocasión sólo hiciesen uso de la palabra cinco oradores: Camilo Casanova, Carlos Greebe, Ernesto Araneda, Eleodoro Díaz Muñoz y Clotario Blest, quien, como sabemos, había estado preso o relegado en las últimas versiones.

Fue interesante el discurso de Clotario y su postura ante la elección presidencial. El sindicalista dio cuenta de su postura ante las inquietudes que removían el piso sindical: ¿correspondía que la Central se pronunciase a favor de algún candidato? ¿Era conveniente defender la autonomía y no participar de ese tipo de discusiones políticas? Las respuestas a esas preguntas eran parte del debate que, desde los inicios de la CUT, provocó acaloradas discusiones internas, en torno a la defensa de la autonomía y unidad de los trabajadores y su participación en partidos políticos. Los desacuerdos que de alguna manera habían logrado convivir hasta entonces, se habían agudizado recién

temente. En la Segunda Conferencia Nacional, realizada en febrero de 1957, la CUT había experimentado su primer quiebre cuando la mayor parte de los delegados estuvieron de acuerdo en generar una alianza con la izquierda, propuesta por el Partido Socialista Popular, para fortalecer el FRAP, con miras a las elecciones parlamentarias de marzo y, por supuesto, las presidenciales. En tanto, el sector anarco-sindicalista, si bien minoritario, defendió la autonomía y se marginaron de la CUT para conformar el llamado Comité de recuperación sindical (Arrate y Rojas, 2003, p. 314).

Ese 1° de Mayo en Plaza Bulnes, Blest expresó abiertamente que, si bien entre los trabajadores debía primar el componente unitario por encima de otras diferencias, era importante canalizar las demandas a través de otras orgánicas de clase:

Los trabajadores deben actuar en la vida cívica del país a través de los organismos políticos de acuerdo con sus convicciones y simpatías y deben llevar a aquellos hombres de su clase que mejor los interpreten y defiendan sus intereses de clase, conjugándolos con los generales de la colectividad. Lo contrario, sería hacerle el juego a la Derecha Económica que exclusivamente ha legislado y legislará contra el pueblo y la clase trabajadora. (Clotario Blest, 1 de mayo de 1958, discurso citado en *El Siglo*, 2 de mayo de 1958, p. 9)

Por su parte, el sector anarco-sindicalista, también llamado “recuperacionista”, convocó a un acto en el Teatro Balmaceda, con poco más de 200 trabajadores, en el que reafirmaron su propuesta de autonomía sin tutelaje político y acción directa de la clase trabajadora.

El 6 de mayo, el ejecutivo presentó con suma urgencia, ante el parlamento, el proyecto de Ley de Seguridad Interior del Estado con que se justificaba la derogación de la LDD. A excepción de la derecha, gran parte de los legisladores coincidían en dos puntos: no había servido para eliminar al comunismo, pero sí había sido el mejor medio del que dispuso el gobierno para reprimir al movimiento sindical y perseguir a las organizaciones obreras. Después de intensos debates, modificaciones y negociaciones entre el parlamento y el ejecutivo, el 2 de agosto fue promulgada la Ley de Seguridad del Estado, Ley 12927. Si bien, como señala Huneuus, era un avance con respecto a la vida política de los comunistas, la legislación que finalmente se aprobó y sustituyó a la Ley Maldita, “mantuvo limitaciones a los derechos de los trabajadores y a la libertad sindical, lo que constituyó un legado negativo en la legislación laboral chilena, que dañará las relaciones capital-trabajo, con efectos perjudiciales en los posteriores años de la democracia” (Huneuus, 2009, p. 353).

En las elecciones presidenciales de 1958, Jorge Alessandri, candidato y portavoz de los empresarios triunfó con una estrecha votación. Llegaría a La Moneda con el fin de concretar un ambicioso proyecto de modernización capitalista. Se abrían nuevos desafíos y escenarios para la clase trabajadora y sus expresiones orgánicas. La lucha de calles continuaría dando cuenta de nuevos niveles de antagonismo y de radicalización política, aspirando a transformaciones de mayor alcance.

CONCLUSIONES

En Chile, el 1° de mayo, al menos durante los años de vigencia de la Ley Maldita, fue una conmemoración que, a pesar de ser reconocida por el Estado, tuvo que defenderse. Defender el derecho a manifestarse en el espacio público, defender las trayectorias propuestas, defender a individuos y organizaciones. También ante los intentos de transformarlo “en otra cosa”, hubo que defender el sentido de lucha. Como vimos, la Iglesia Católica consiente del avance comunista y de la potencialidad de este excepcional feriado irrupido desde abajo, intentó convertirlo en una fiesta cristiana, espacio de paz y reconciliación, lejana a la lucha de clases. También los gobiernos de González Videla e Ibáñez del Campo intentaron cooptarlo desde el Estado reforzando la idea de “Fiesta del Trabajo”.

Pero estuvo lejos de serlo. En ese sentido, el 1° de mayo fue parte integrante de la trayectoria obrera y popular que se construyó a contrapelo de las disposiciones del poder. Cada año, la clase trabajadora salió a las calles, se agrupó, desfiló por las arterias santiaguinas, portando estandartes, coreando consignas, levantando lienzos. Cada cartel expresaba las demandas de un trabajo más digno, una vida sin precariedad, un espacio para vivir. También expresaron la complejidad política y estratégica que fue adquiriendo el movimiento popular en su recorrido. Y es que, la plataforma de lucha de cada 1° de mayo fue insistente en al menos tres aspectos: visibilizar y condenar la carestía de la vida, exigiendo detener las alzas constantes y un reajuste digno de sueldos y salarios; exigir la derogación de las leyes represivas que limitaban o imposibilitaban el ejercicio de las libertades públicas; y demandar propuestas estructurales que fueran en beneficio de las grandes mayorías, como la reforma agraria que transformará el régimen de propiedad de la tierra y la nacionalización de los recursos naturales, en especial, la minería del cobre.

La movilización de los y las trabajadoras, fue *a pesar de* diversas normativas represivas que apuntaban a desincentivar la organización y participación de los trabajadores en política. Hay que subrayar que durante diez años estuvo vigente la LDD y se utilizó sistemáticamente en

contra de las organizaciones de trabajadores. Aún más, el Estado utilizó decretos complementarios, como la llamada circular Yáñez-Koch, que desde 1955 intervino expresamente en la vida sindical, prohibiendo la elección de dirigentes que tuviesen condenas o antecedentes por violar las disposiciones de la LDD, es decir, que hayan participado en huelgas, paros nacionales o hubiesen sido detenidos en movilizaciones, etcétera. El 1° de mayo en ocasiones se conmemoró en ciudades militarizadas bajo el decreto de Zona en Estado de Emergencia. Además, durante estos años, era común que las Fuerzas Armadas, investigaciones y carabineros se acuartelasen, lo que nos da un importante indicio de la concepción bajo la cual se asumía el conflicto obrero.

Tal como pudimos observar, dirigentes nacionales de la CUT y dirigentes de base, incluso por años consecutivos, no pudieron marchar o participar en el acto central por estar detenidos o relegados en zonas apartadas del país. Con todo, es clara la masividad que va adquiriendo esta fecha con los años. Por tanto, es evidente que la participación en los 1° de mayo, fue el correlato de procesos orgánicos y unitarios que protagonizó el movimiento popular, a través de instancias de clase como la CUT, pero también sumando su adhesión a banderas políticas de izquierda. La candidatura de Salvador Allende, y la suma de su base de apoyo dio cuenta de ello, en la medida que el dirigente socialista representó una alternativa fraguada en el campo popular.

Las calles fueron democratizadas desde abajo, para ejercer colectivamente y a viva voz el derecho a la política. Durante este proceso, la clase trabajadora fue haciendo suyos los espacios de reunión y socialización, como plazas, locales sindicales, teatros populares, calles y esquinas que masificaron la política y contribuyeron a conformar un proceso de democratización social y ascenso del movimiento popular que aportará al recorrido histórico de la llamada vía chilena al socialismo en 1970. Esa fue la ciudad creada desde abajo, y cada 1° de mayo dejó su huella urbana. Fue la trayectoria de hombres, mujeres y familias trabajadoras que llegaron desde el norte y sur del país a buscar nuevas oportunidades y que construyeron en esas calles y banderas, lugares de trabajo y de la vida, parte fundamental de su identidad clasista. Se trató del encuentro de experiencias históricas y nuevas que conformarán la cultura popular urbana, que se reagrupa y fortalece en los años cincuenta a través de organizaciones de clase, experiencias comunes y diversas formas de lucha.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez, Rolando (2020). *Forjando la vía chilena al socialismo: el Partido Comunista de Chile en la disputa por la democracia y los movimientos sociales (1931-1970)*. Santiago: América en Movimiento.
- Angell, Alan (1974). *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile. De los orígenes hasta el triunfo de la Unidad Popular*. México: ERA.
- Arrate, Jorge y Rojas, Eduardo (2003). *Memoria de la izquierda chilena*, Tomo I. Santiago: Javier Vergara Editor.
- Barría, Jorge (1963). *Trayectoria y estructura del Movimiento Sindical Chileno. 1946-1962*. Santiago: INSORA.
- Barría, Jorge (1971a). *Historia de la CUT*. Santiago: Prensa Latinoamericana.
- Barría, Jorge (1971b). *El movimiento obrero en Chile*. Santiago: Ediciones de la Universidad Técnica del Estado.
- Bilhão, Isabel (2013). Dia de festa, dia de luto ou feriado nacional? As diferentes concepções do Primeiro de Maio no Brasil ao longo dos anos 1929. *Hib, Revista de História Iberoamericana*, 6(1), 29-52.
- Borón, Atilio (1975). Notas sobre las raíces histórico-estructurales de la movilización política en Chile. *Foro Internacional* (México), 16(1).
- Bravo, Viviana (2020). Clase trabajadora, izquierda y protesta urbana en la crisis del desarrollismo (Chile 1960-1962). En Necochea, Gerardo y Pantoja, José (Coords.), *La rebeldía en palabras y hechos. Historias desde la orilla izquierda latinoamericana en el siglo XX*. Buenos Aires: CLACSO/INAH.
- Bravo, Viviana (2017a). Chile no va hoy a la fábrica: Protesta obrera y represión política en el verano de 1946. *Izquierdas* (Santiago), 35.
- Bravo, Viviana (2017b). La sangre, la furia y la memoria: Ramona Parra en el martirologio comunista de la postguerra (Chile 1946-1947). *Páginas* (Rosario), 20.
- Daire, Alonso (1988). La política del Partido Comunista desde la post-guerra a la Unidad Popular. En Varas, Augusto (Comp.), *El Partido Comunista en Chile*. Santiago: Cesoc.
- Ministerio del Interior (1955, 20 de septiembre). *Decreto 4161 de 1955*. Publicado el 14 de enero de 1956.
- Echeverría, Mónica (2013). *Antihistoria de un luchador, Clotario Blest 1823-1990*. Santiago: LOM.

- Furci, Carmelo (2017). *El Partido Comunista de Chile y la Vía al Socialismo*. Santiago: Ariadna.
- Garcés, Mario (2002). *Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago 1957-1970*. Santiago: LOM.
- Garcés, Mario y Pedro Milos (1989). *Los sucesos de Chicago y el 1° de mayo en Chile*. Santiago: Eco.
- Godoy, Eduardo (2013). 1° de mayo de 1973: Los anarquistas y el gobierno de la Unidad Popular. *Cuadernos de Historia* (Santiago), 39.
- Hobsbawm, Eric (1999). El nacimiento de una fiesta: El primero de mayo. En *Gente poco corriente. Resistencia, jazz y rebelión*. Barcelona: Crítica.
- Humeres, Héctor (1957). *La Huelga*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.
- Huneuus, Carlos (2009). *La Guerra Fría Chilena. Gabriel González Videla y La Ley Maldita*. Santiago: Debate.
- Loveman, Brian y Lira, Elizabeth (2014). *Poder judicial y conflictos políticos (Chile: 1925-1958)*. Santiago: LOM.
- Martínez, Pamela (2019). *Los casos de vulneraciones a la libertad sindical cometidas por Chile*. Santiago: Ediciones Jurídicas.
- Misión Klein & Saks (1958). *El programa de estabilización de la economía chilena y el trabajo de la misión Klein & Saks*. Santiago: Editorial Universitaria.
- Navarrete, Jorge (2021). *La calle es política: movilización obrera en la ciudad y represión de la protesta. Santiago, 1905-1924* [Manuscrito inédito], Santiago.
- Ortiz, Óscar (1998). Una fecha para recordar: 7 de julio de 1955. *Hombre y sociedad*, 5.
- Pavilack, Jody (2011). *Mining for the Nation. The Politics of Chile's Coal Communities from the Popular front to the Cold War*. University Park: The Pennsylvania State University Press.
- Pizarro, Crisóstomo (1986). *La huelga obrera en Chile*. Santiago: SUR.
- Poy, Lucas (2011). Socialismo y anarquismo en los orígenes del Primero de Mayo en Argentina (1890-1895). *Trabajadores* (Buenos Aires), 2, 27-57.
- Pozo, Cristian (2013). *Ocaso de la unidad obrera en Chile: confrontación comunista-socialista y la división de la CTCH (1946-1947)*. Tesis de Magíster en Historia, Universidad de Chile.
- Ribera, Anna (2006). El primero de mayo en la ciudad de México en los tiempos de la revolución. *Andes* (Salta), 17.

- Rodríguez, Javier (2017). *Desarrollo y desigualdad en Chile (1850-2009). Historia de su economía política*. Santiago: Dibam.
- Rojas, Jorge (2019). Los funcionarios comunistas en el gobierno de González Videla, 1946-1947. *Cuadernos de Historia* (Santiago), 49.
- Salazar, Gabriel (2006). *La violencia política popular en “Las Grandes Alamedas”. La violencia en Chile 1947-1987 (Una perspectiva histórica popular)*. Santiago: LOM.
- Seguel, Kimberly (2020). *Hacia la desmitificación del silencio feminista: historia del movimiento de mujeres en la década de 1950 en Chile*. Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
- Teitelbaum, Vanesa (2016). El anarquismo en Tucumán: expresiones de protesta y rituales obreros, 1900-1912. *Izquierdas* (Santiago), 28, 27-92.
- Viguera, Aníbal (1991). El primero de mayo en Buenos Aires, 1890-1950: evolución y usos de una tradición. *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani”* (Buenos Aires), 3, 57-60.

FRENTES FEMINISTAS DE MUJERES TRABAJADORAS, UN CAMINO HACIA POLÍTICAS DE EMANCIPACIÓN, CHILE, DÉCADA DE 1950¹

Kimberly Seguel Villagrán

“Necesitamos dirigir nuestra atención a los procesos históricos que, a través del discurso, posicionan a los sujetos y producen sus experiencias”.

Joan Wallach Scott

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, ya no es posible dudar de los múltiples beneficios que ha traído el estudio de la participación política de las mujeres en las organizaciones y movimientos sociales, llevando a las y los investigadores a comprender la diversidad y complejidad de estos espacios desde distintas perspectivas (Scott, 2008; Olivares, 2019). No obstante, este campo de investigación sigue siendo parte de los desafíos urgentes que debemos asumir como historiadoras e historiadores, pues mantenemos una deuda vigente con las mujeres y su historia de acción política. En este sentido, este trabajo busca aportar al conocimiento sobre el Movimiento de Mujeres y Feminista en Chile durante la década de 1950, el que estuvo caracterizado por una militancia compuesta mayoritariamente por trabajadoras obreras y populares y por una orientación de sus luchas hacia la superación de sus condiciones de explotación, precarización y desigualdad a través de políticas emancipadoras.

¹ El presente texto es producto de la tesis de pregrado titulada “Hacia la desmitificación del silencio feminista: historia del movimiento de mujeres en la década de 1950 en Chile” (2020), Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago.

Reescribir esta historia ha significado asumir el desafío de develar el espeso manto de oscuridad que se posó, por mucho tiempo, sobre el movimiento de mujeres en la década del cincuenta. Pese a que hay un consenso historiográfico en señalar que, durante la primera mitad del siglo XX, las mujeres lucharon contra “la pesadez de las estructuras sociales y políticas” (Álvarez, Gálvez y Loyola, 2019, p. 9) demandando una mayor participación política (Gaviola et al., 1986), la segunda mitad del siglo se ha descrito como un período de “ciudadanización equivocada” donde la participación política de las mujeres se mantuvo sólo en las capas altas de la sociedad, no logrando incorporar a las de sectores medios y populares (Salazar y Pinto, 2002). Por otra parte, la teórica feminista Julieta Kirkwood (1990) caracterizó a la década de 1950 como parte del “silencio feminista”, etapa que habría estado definida por “una abrumadora pasividad política femenina” reflejada en la inexistencia de organizaciones autónomas de mujeres y de planteamientos teóricos feministas (p. 98). Siguiendo esta reflexión, otras investigaciones han asegurado que, durante el periodo señalado, el movimiento de mujeres sufrió la pérdida de un objetivo común, provocando un debilitamiento y una disminución de su radicalidad (Gaviola, Largo y Palestro, 1992).

En los últimos años han surgido trabajos historiográficos que han permitido resquebrajar esa oscuridad, mostrando los cambios experimentados por el movimiento de mujeres durante la segunda mitad del siglo. Se ha señalado que, más que la pérdida de un objetivo común, el movimiento vivió una fragmentación que se explica en las contradicciones dadas durante un período antidemocrático, donde se promulgan, de forma casi simultánea, dos leyes totalmente opuestas en lo que a participación política se refiere. En septiembre del año 1948 se dictó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que se mantuvo vigente hasta el año 1958, la cual prohibía el funcionamiento del Partido Comunista (PC), mientras que sólo cuatro meses más tarde, en enero de 1949, se publicaba la Ley de Sufragio Universal Femenino (Alfaro, Inostroza y Hiner, 2021). Esta contradictoria situación provocó quiebres y tensiones dentro de las organizaciones que componían el movimiento feminista. Sobre este tema, Elena Caffarena señalaba que “Gabriel González Videla destruyó el MEMCH” (citado en Rojas y Jiles, 2017, p. 22); mientras se decía “incorporar” a las mujeres a la democracia, las militantes comunistas —entre quienes se encontraban algunas de las integrantes del Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH)— no solo eran borradas de los padrones electorales sino también sometidas a persecución política.

Los elementos recién expuestos nos invitan a repensar la historia del movimiento de mujeres y feminista de la década de 1950, desde

una postura crítica de las formas en que se ha relatado su historia, donde se ha impuesto una *oficialidad* que ha impedido observar la multiplicidad de procesos y formas en que este se ha manifestado. Es por esto que proponemos comprender la historia del movimiento de la década de 1950 como una continuidad de la experiencia feminista en Chile, no sólo bajo el prisma del feminismo como un elemento identitario o reivindicativo, sino también como un espacio que se caracteriza por su forma de organización, el deseo de subvertir un orden impuesto y la insistencia de luchas bajo la cobertura de lo colectivo (Follegati, 2016). En este sentido, es importante capturar el carácter inherentemente político del movimiento feminista, reflejado en sus demandas y propuestas emancipadoras, manifiestas dentro y fuera de la institucionalidad, las cuales, cómo veremos más adelante, buscaron la mejora inmediata de las condiciones materiales de las mujeres, pero también la superación de sus condiciones de opresión por medio de la “desestabilización” del poder patriarcal.

Teniendo presente que no podemos comprender el movimiento feminista de forma acotada, pues se corre el riesgo de homogenizar o universalizar su historia, proponemos una metodología de análisis que nos permite acceder a una lectura más profunda sobre el movimiento feminista de los años cincuenta, bajo tres dimensiones que dan cuenta de su complejo entramado. Estas dimensiones son: 1) los colectivos, las organizaciones de mujeres y la caracterización de su militancia; 2) las principales demandas y propuestas políticas; y 3) los hitos políticos durante la década. Por otro lado, nos parece importante señalar que, con el fin de subvertir el silenciamiento impuesto, hemos trabajado con ahínco y cuidado en la recopilación de testimonios de mujeres que participaron en la organización del movimiento, pues nos parece que asumir el desafío de relatar esta historia implica hacer resonar sus voces y sus memorias, confrontando todo gesto que busque a callarlas (Chakravorty, Spivak y Giraldo, 2003). Como también lo ha planteado Yuderkys Espinosa (2012), debemos atender a “versiones no oficiales y marginales del feminismo [...] a fin de registrar estas voces, cuerpos, posturas críticas, apuestas de sentido que tienden a quedar ocultas por la historia oficial construida por los feminismos que gozan de mayor legitimidad y visibilidad” (p. 1).

CONTEXTO HISTÓRICO QUE ACOMPAÑÓ AL MOVIMIENTO DE MUJERES Y FEMINISTA DE LA DÉCADA DE 1950

En primer lugar, es importante observar y comprender el momento histórico en el que se desarrolló el movimiento de mujeres y feminista de la década del cincuenta. A nivel internacional, la situación política estuvo fuertemente determinada por la Guerra Fría y la persistente

lucha anticomunista presidida por Estados Unidos, provocando una clara incidencia en la política nacional. Por un lado, la promulgación de la *Ley Maldita* se constituyó como un ejemplo de la arremetida *anticomunista* en el país (Loveman y Lira, 2000, p. 132). Por otro, la polarización de los actores políticos entre grupos *comunistas* (y sus simpatizantes) y grupos *anticomunistas*, generó tensiones y complicaciones en las relaciones entre el Estado, administrado bajo una línea claramente anticomunista, y los movimientos sociales existentes en el período, integrados por militantes o simpatizantes del PC. En especial, el movimiento de trabajadoras y trabajadores, que para la década de 1950 se constituía como un importante actor político, se manifestó de forma abierta y crítica hacia la persecución política que estaba viviendo la militancia comunista (Salazar, 2006).

El contexto económico es otro factor que caracterizó este momento histórico. Es posible apreciar que, durante gran parte de la década de 1950, se vivió en Chile una fuerte crisis económica que puso en jaque al modelo desarrollista, perdurando a lo largo de los gobiernos de Gabriel González Videla (1946-1952) y de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958) (Fernandois, 2005). La crisis estuvo caracterizada por la creciente inflación que afectó los precios de los alimentos de primera necesidad y de los productos de sobrevivencia (Orellana, 2012, p. 133). Esto acrecentó aún más las desigualdades económicas existentes entre los ciudadanos(as), llevando a los más pobres a condiciones complejas para enfrentar la carestía de la vida (Morandé y Noton, 2004, p. 122). Las soluciones políticas a la crisis estuvieron centradas en mantener relaciones crediticias con Estados Unidos y en la intervención al Estado a través de la implementación de “asesorías”, como la de la misión extranjera llamada “Klein-Saks” (Alfaro, Inostroza y Hiner, 2021, p. 59). Las estrategias utilizadas por los gobiernos de turno generaron resistencia en la población, que observaba cómo no lograban dar solución al problema económico. La línea política implementada provocó también el empequeñecimiento del aparato estatal, acabando con años de desarrollo y un incremento de la deuda externa del país (Correa, 2001, p. 187; Fernandois, 2005, p. 187; y Bravo, 2020, p. 170).

Frente a estos elementos, el escenario político-social del país se fue configurando bajo la fuerte presencia de movimientos populares en las calles. Las condiciones económicas y políticas impusieron la necesidad de la rearticulación de diversos actores sociales unidos en la lucha por una vida digna. Es por esto que, entre los años 1951 y 1958, se registraron más de 1542 huelgas, tanto legales como ilegales (Loveman y Lira, 2000, p. 183), dentro de las cuales se encuentran las jornadas de protestas de abril de 1957, conocidas también como la

“Batalla de Santiago” (Salazar, 2006, p. 134). Las principales razones de estas manifestaciones fueron el encarecido costo de la vida (entre ellos, el aumento del costo del transporte público), las especulaciones en los costos de los productos de primera necesidad, los bajos sueldos y la demanda por mayor presencia del Estado en los sectores más pobres del país.

La década de 1950 se presenta como escenario de la intervención de múltiples movimientos sociales y la coordinación de varias alianzas estratégicas que buscaron intervenir en la agenda nacional exigiendo solución a sus demandas sociales. Para el año 1952, las organizaciones de obreros y empleados plantearon como estrategia la coordinación de un espacio que permitiera la articulación de distintas organizaciones de trabajadores. El primer paso fue organizar nuevamente la conmemoración del “primero de mayo unitario” que, desde 1946, no se organizaba de forma conjunta entre organizaciones (Orellana, 2012, p. 139). El segundo paso fue formar espacios de articulación. Para fines de 1952 existían dos nuevas coordinadoras de organizaciones sociales, el Comité de Unidad, encargado de la conmemoración del 1° de mayo e integrado por agrupaciones obreras, y el Comando Contra la Especulación y las Alzas, compuesto por diversas organizaciones sociales. Al año siguiente, el movimiento de trabajadores y trabajadoras daba un gran paso en torno a las estrategias de organización, formando a la Central Única de Trabajadores (CUT), la cual proponía la superación de antiguos proyectos unitarios, como fueron la Federación Obrera de Chile (FOCH, 1909-1936) y la Confederación de trabajadores de Chile (CTCH, 1936-1946) (Barría, 1971, p. 17).

Las organizaciones de mujeres también formaron parte de las coordinadoras sociales que irrumpieron en la escena pública durante la década. El Comando Contra la Especulación y las alzas contó con la presencia de muchas, entre ellas, la Asociación de Dueñas de Casa que, por medio del periódico *Hambre* (órgano oficial del comando), hacía un llamado abierto a las mujeres a integrarse a la lucha.

Llamamos a las mujeres a extender su acción combativa en defensa de la alimentación de su familia [...] Invitamos a todas las mujeres y organizaciones interesadas en este problema a incorporarse al Comando Contra las Alzas y Asociación de Dueñas de Casa. (*Hambre*, 12 de enero de 1952)

Es importante señalar que la participación política de las mujeres durante la década no estuvo limitada sólo a organizaciones femeniles, sino también se desarrolló activamente dentro del movimiento obrero y luego dentro del movimiento de pobladores. Pero, como este trabajo remite a la experiencia del movimiento de mujeres y feminista, a continuación expondremos algunas características de su composición or-

ganizacional, presentando las organizaciones estratégicas dentro del movimiento y las particularidades de sus militantes.

LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y LA COMPOSICIÓN DEL MOVIMIENTO FEMINISTA DE LA DÉCADA DE 1950

Durante la década del cincuenta, el movimiento de mujeres y feminista estuvo integrado por organizaciones bastante misceláneas. En los primeros años contó con la participación de organizaciones de gran trayectoria política, como el MEMCH (hasta su disolución el año 1953), y otras más jóvenes, como la Unión de Mujeres de Chile (UMCH), pero de similares características. Al poco tiempo transcurrido, para el año 1954, se comenzó a notar un cambio en la militancia debido al incremento de la participación de *departamentos* o *frentes* de mujeres vinculados a sindicatos u organizaciones de trabajadores, como la CUT. Este proceso de cambio lo llamaremos *popularización de la militancia feminista* y constituye una de las principales características de movimiento feminista en los años cincuenta.

Como ya lo habíamos mencionado, una de las organizaciones que formó parte del movimiento feminista fue la UMCH, que, si bien se constituyó en el año 1947, su período más activo fue durante la década de 1950. Este espacio autónomo de mujeres tuvo la particularidad de lograr articular a diferentes generaciones y clases sociales. Contó con la participación de líderes políticas, como Lía Lafaye y Julieta Campusano, además de importantes *dirigentas* sindicales, como Graciela Trujillo y Teresa Carvajal. Si clasificamos en términos actuales la estructura organizativa de la UMCH, esta sería una coordinadora de organizaciones de mujeres y feministas. En este espacio convergieron organizaciones como diversos frentes sindicales de mujeres, el comité de dueñas de casa Olga Poblete, y comités femeninos de organizaciones de pobladores, entre muchos otros.

Las principales preocupaciones y demandas de la UMCH estuvieron enfocadas en la protección de la familia y la solución de problemas vinculados a la salud, la alimentación y la vivienda, así como también en la profundización de los derechos cívicos de las mujeres y en la masificación de su instrucción educacional, además de la constante preocupación por la situación de las y los niños, que las llevó a impulsar la campaña por una ley de guarderías universal. La UMCH también brindó respaldo político a diferentes organizaciones en lucha, como lo hizo en un momento con las familias de obreros en huelga de las empresas MADECO, MADEMSA (Unión de Mujeres de Chile [UMCH], 1960, pp. 8 y 10).

La Unión de Mujeres organizó una serie de hitos políticos durante la década del cincuenta que marcaron al movimiento feminista.

Lograron organizar más de tres Congresos Nacionales, reuniendo a mujeres de todo el país. Su primer encuentro fue su Congreso Constituyente de 1947; que fue seguido por otros en los años 1953, 1958, 1960 y 1962. Desde este espacio también se coordinó, durante varios años consecutivos, la conmemoración del 8 de marzo Día de la Mujer Trabajadora, fecha icónica para el movimiento feminista. La UMCH fue la coordinadora que facilitó la integración de los frentes sindicales de mujeres al movimiento feminista, lo que permitió la adquisición de una visión más popular sobre las necesidades de las *mujeres* en país. Esto también influyó en que el movimiento feminista se plantease la estrategia de luchar por la integración de las mujeres más populares y precarizadas al feminismo. Si bien no hay una fecha clara sobre la desintegración de la UMCH, su activa participación durante la década de 1950 y gran parte de 1960, nos permite categorizarla como una de las organizaciones feministas más longevas en la historia del movimiento en el país.

Otra organización que nos parece importante destacar es el Frente de Mujeres de la CUT, conocido también como Secretaría de Asuntos Femeninos. A diferencia de la UMCH, el Frente de Mujeres fue una organización que dependía de un espacio mixto, la CUT, que estaba integrada por hombres y mujeres. En ese sentido, proponemos comprender este espacio como un lugar de resistencia de las demandas femininas dentro de organizaciones mixtas. Su activa participación en el movimiento feminista y en el movimiento de trabajadores la configuró como organización bisagra entre ambos. Así también, se convirtió en un modelo para la orgánica sindical, que, debido a las presiones de las trabajadoras, tuvieron que formar frentes de mujeres al interior de sus organizaciones.

El Frente de Mujeres fue uno de los primeros departamentos formados dentro de la CUT. Su período más activo se dio a mediados del año 1955 y se extendió durante la década de 1960 (Equipo Programa Mujer y Trabajo, 1991, pp. 48 y 49). Contó con la participación de destacadas dirigentes sindicales como Teresa Carvajal (presidenta de la Federación Nacional Textil) y Graciela Trujillo (dirigente del rubro textil), ambas desempeñaron un importante rol de conducción del espacio, promoviendo la representación femenina de todos los sindicatos que contaban con trabajadoras. Sobre esta situación la dirigente sindical Graciela Trujillo ha relatado:

Quando formamos el Departamento femenino de la CUT hubo que pedir que nos enviaran una representante mujer en todas las organizaciones donde había mujeres. Así que empiezan a llegar, pero el Cuero y Calzados nos enviaron un hombre. Yo sabía que ahí había mujeres, encargadas fe-

meninas, estaban Rosario Huerta, María Jara [...] finalmente conseguimos que nos mandaran una encargada, la ayuda más grande la tuvimos justamente de la Federación de Cuero y Calzado. (Citado en Equipo Programa Mujer y Trabajo, 1991, p. 36)

Las demandas más frecuentes de este espacio estuvieron enfocadas en la lucha por la mejora de las condiciones laborales de las mujeres a través de la exigencia de leyes laborales. Estas también estuvieron enfocadas en reparar las condiciones de desigualdad a las que estaban expuestas las trabajadoras en el mundo laboral en comparación a los varones. En este sentido, apoyaron e impulsaron proyectos de leyes como igualdad salarial y jubilación para las mujeres a los 50 años (Equipo Programa Mujer y Trabajo 1991, p. 25), además de la demanda por la asignación de beneficios sociales como las cargas familiares. Sobre la trayectoria política de estas demandas asumidas por el Departamento Femenino de la CUT, la dirigente sindical Graciela Trujillo comentó:

Claro que esta lucha que nosotras emprendimos en ese tiempo no fue cosa de nosotras; no fue idea de las que estábamos ahí, no fue cosa que nosotras se nos hubiera iluminado. Era la lucha de las mujeres antes de nosotras. Porque aquí en Chile, por lo que yo tengo entendido, toda la vida la mujer ha trabajado y ha luchado [...] Siempre las mujeres hemos trabajado, siempre hemos estado en uno y otro frente. (Citado en Equipo Programa Mujer y Trabajo, 1991, p. 39)

Otro elemento que podemos rescatar para comprender la composición del movimiento feminista es la caracterización de sus liderazgos. En primera instancia, podemos señalar que las mujeres que desempeñaron liderazgos representaban a diversos espacios políticos, por ejemplo, las dirigentes sindicales y militantes del PC, Mireya Baltra (Frente de Mujeres, CUT) y Julieta Campusano (UMCH), que además de destacarse por desempeñar importantes labores dentro del movimiento, representaban a una importante cantidad de feministas que militaban dentro de partidos políticos de izquierda durante la década. Para Mireya Baltra, sindicalista de origen popular, la participación política y la organización femenina formaban parte de las acciones fundamentales para mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

Había que romper con el velo que se nos había impuesto por medio de la educación, había que liberarnos del peso de la casa y del trabajo a diario [...] Nuestra lucha fue una lucha pesada, tenía mucha carga emocional, pero teníamos que invitar a luchar a las más pobres. (Baltra, 2019)

Hubo también militantes que desarrollaron gran parte de su trayectoria política en espacios autónomos de mujeres, como la diputada por el Partido Femenino Progresista, Lía Lafaye, que también formaba parte activa de la UMCH (Castillo, 2014). Las gestiones realizadas por Lafaye permitieron la ejecución de uno de los hitos políticos más importantes del movimiento feminista de la década, a saber, la realización del Primer Congreso Latinoamericano de Mujeres con sede en Chile, celebrado en noviembre de 1959. Este evento logró reunir a mujeres y feministas de toda la región, quienes se juntaron por varios días con el fin de exponer sobre las condiciones políticas y económicas de las mujeres en el continente (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2019).

El movimiento también contó con la participación de mujeres independientes sin afiliación a partidos políticos, pero adherida a organizaciones, principalmente de carácter popular como, por ejemplo, la dirigente sindical Graciela Trujillo. Como ya hemos señalado, Graciela formó parte activa del Frente de Mujeres de la CUT y de la UMCH, donde compartió espacio con destacadas activistas, como Elena Caffarena y Olga Poblete. El liderazgo de Trujillo estuvo determinado por la necesidad de integrar a la mayor cantidad de mujeres trabajadoras a los espacios organizativos. Sobre su activismo político Graciela Trujillo ha señalado:

Recorrido el tiempo, llegamos al año 53. En ese año formamos el sindicato Profesional del Tejido a punto. Ahí en ese sindicato, naturalmente que, por habladora, llegué a ser dirigente y empezamos a trabajar por superar la discriminación de sueldos y salarios; por las salas cunas que era una ley que no se cumplía, o se cumplía a medias [...] Ahí empecé a saber qué cantidad de mujeres había en los gremios. Nosotras las textiles, el 70% éramos mujeres. El 60% de la salud eran mujeres. El 50% en el cuero y el calzado eran mujeres. El profesorado, 70% mujeres. En varias partes la mayoría eran mujeres. (Citado en Equipo Programa Mujer y Trabajo, 1991, pp. 35 y 37)

A través de este ejercicio expositivo hemos querido dar cuenta de la diversa gama de organizaciones y mujeres que se reunieron en torno al movimiento feminista de la década de 1950. Pese a los esfuerzos, sabemos que este ejercicio aún es limitado y que sólo nos permite una aproximación al complejo entramado organizativo del movimiento. Aun así, podemos señalar que una de las principales características del movimiento feminista de los años cincuenta, desde el enfoque de composición, fue contar con una militancia de origen popular y muy ligada a las luchas sindicales.

PRINCIPALES DEMANDAS Y POLÍTICAS EMANCIPADORAS DEL MOVIMIENTO

En relación con las demandas levantadas por el movimiento feminista, podemos señalar que las feministas continuaron problematizando sobre la expansión de los derechos cívicos, pero también se sumaron otras preocupaciones a la agenda política. El ingreso de mujeres trabajadoras de sectores populares les permitió fijar la mirada en las necesidades de las mujeres más precarizadas. Es por esto que se impulsaron una serie de proyectos sobre leyes, normativas, organismos, servicios y programas de políticas públicas, con el fin de poder dar una solución a las necesidades más sentidas por las mujeres. Pero no debemos olvidar que bajo estas mismas estrategias se agruparon intereses de más largo plazo. Las feministas no trabajaron solo para conseguir algunas reformas, sino también para subvertir las reglas de dominación del poder patriarcal. Las feministas que tenían una formación socialista insistieron en levantar estrategias para acabar con la alianza de explotación patriarcado-capital que asfixiaba a las más precarizadas.

En diálogo con lo anterior, expondremos sobre tres demandas importantes impulsadas por el movimiento feminista durante la década del cincuenta, que, inspiradas en *principios emancipadores*, se proyectaron en lo que hemos llamado *políticas emancipadoras*. En 1958 la Secretaría Femenina de la CUT levantó un proyecto de ley que buscaba adelantar la edad de jubilación de las mujeres a 55 años, que en aquel momento ocurría a los 60 años —al igual que en la actualidad—, además de la demanda por extensión de cobertura de este seguro social para las mujeres que cumplieran con 500 semanas de imposiciones. Este proyecto estuvo impulsado por las dirigentes Graciela Trujillo, Livia Videla y Teresa Carvajal, todas también integrantes de la dirección central de la CUT.

Las dos razones que sostenían la importancia de esta demanda estuvieron, a nuestro juicio, enfocadas en reparar los perjuicios provocados por el sistema capitalista y patriarcal. La primera razón apelaba a recompensar la doble labor realizada por las mujeres. En otras palabras, se buscaba valorar tanto las actividades remuneradas como también los trabajos domésticos y de cuidado realizados por las mujeres y constantemente invisibilizados. Rebajar la edad de jubilación permitía compensar ese tiempo extra trabajado. La segunda razón apelaba al descanso que merecían las trabajadoras luego de la prematura entrada al mundo laboral. Había muchos trabajos donde la edad promedio de ingreso era entre 9 y 13 años, siendo aún niñas (Equipo Programa Mujer y Trabajo, 1991, p. 37). De modo que, cuando las trabajadoras cumplían entre 40 y 50 años, estaban dotadas de una

amplia experiencia laboral, pero para los empleadores esto significaba asumir un costo que se podían ahorrar contratando a personas más jóvenes, muchas de ellas niñas. Esto generaba una situación crítica para las mujeres que sobrepasaban los 50 años, ya que la posibilidad de acceder a nuevos puestos de trabajo en sus últimos años era casi imposible, mucho menos la posibilidad de acceder a su jubilación.

Las acciones realizadas para exigir la rebaja en la edad de jubilación fueron múltiples. Algunas de ellas consistían en manifestaciones callejeras, como las constantes acciones (todos los lunes y viernes) en las afueras del Congreso Nacional con el fin de persuadir a diputados y senadores para que legislaran a favor de esta propuesta (Equipo Programa Mujer y Trabajo, 1991, p. 38). Sobre su experiencia por la lucha de este proyecto de ley, la dirigente Graciela Trujillo afirmó:

Todas estas cosas eran atropellos que se veían. Entonces con mayor razón había que luchar por la jubilación de la mujer trabajadora. Y fue así como nos centramos en la demanda de jubilación de la mujer, con todos estos antecedentes que teníamos. Había compañeras del cuero y calzado que habían empezado a trabajar a los 12, 10 años en la máquina Singer, moviendo los pies, y a la edad de 40 o 45 años, tenían su cuerpo totalmente deformado. Había una compañera que tenía que andar con faja metálica porque en la edad del desarrollo del niño ella estuvo trabajando. Haciendo ese movimiento en la máquina se le habían deformado los huesos. (Equipo Programa Mujer y Trabajo, 1991, p. 39)

Este proyecto no encontró el patrocinio suficiente para ser legislado por el Congreso Nacional, pero sí fueron acogidas algunas medidas propuestas en él. Por ejemplo, la expansión de la cobertura social para aquellas mujeres que habían trabajado (como mínimo) durante 10 años o que lograron reunir 500 semanas de imposiciones. En la actualidad esta normativa sigue vigente, exigiendo para las mujeres registrar 520 semanas de cotizaciones como mínimo, mientras que para los hombres un mínimo de 1.040 semanas de cotizaciones. Ambos deben cumplir con el requisito de edad mínima (60 años para las mujeres y 65 para los hombres) (SERNAC, 2014).

La segunda demanda que identificamos, impulsada por el movimiento de mujeres, fue el proyecto de ley de jardines infantiles. Este fue patrocinado por la dirigente sindical Mireya Baltra, miembro de la directiva de la CUT, a finales de los años cincuenta, y la dirigente poblacional Sara Gajardo. Ambas levantaron esta demanda para presionar a las autoridades y exigirles su responsabilidad en los temas relacionados al cuidado y educación de niños y niñas, asunto que hasta ese momento era de responsabilidad exclusiva de las mujeres sin ninguna asistencia del Estado. La lucha por esta ley de jardines infan-

tiles comenzó a fines de la década de 1950 y se extendió hasta 1970, año que se creó finalmente la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), bajo la administración del gobierno del presidente Salvador Allende.

Como se puede observar la lucha por la creación de servicios nacionales que asistieran a las mujeres en los cuidados, como los jardines infantiles, fue una batalla de largo aliento. Sobre esta experiencia la dirigente Mireya Baltra ha comentado:

Cuando iniciamos la campaña por la ley de jardines infantiles, nos cansamos mucho, tuvimos que enfrentar tanto a hombres, también algunas mujeres, que decían que queríamos esta ley para sacar a las mujeres de sus casas. En eso no se equivocaban, pero queríamos que salieran a crecer; si alguna decidía dejar su casa para siempre sería por otra cosa. (Baltra, 2019)

La Ley de Jardines Infantiles efectivamente buscó garantizar la educación integral a los niños y niñas en la etapa preescolar. Pero también buscó desligar a las mujeres del rol exclusivo de los cuidados, incentivando su participación en los espacios laborales, con el fin de entregarles también la oportunidad de mejorar sus condiciones económicas. Esta demanda, inspirada en principios emancipadores, buscó permitir a las mujeres contar con tiempo libre para participar de los espacios organizativos que más les acomodaran. En ese sentido, la lucha por los jardines infantiles estuvo pensada como una herramienta al servicio de las mujeres. Es por eso que debe ser entendida como una estrategia política del movimiento de mujeres, que buscó dar solución a un problema cotidiano y común apuntando a desestabilizar factores de carácter más estructurales, como la asignación de tareas por roles de género.

Para levantar esta demanda, Mireya Baltra y Sara Gajardo contaron con el apoyo del departamento femenino de la CUT y de otras organizaciones de mujeres como la UMCH. En 1956 esta última organización presentó un proyecto de ley redactado por su departamento de asuntos jurídicos que fue entregado a la cámara de diputados. La engorrosa tramitación legislativa impidió el seguimiento de la discusión del proyecto de jardines infantiles, que a los pocos meses quedó olvidado en la comisión de legislación social y trabajo del Congreso Nacional. Unos años más tarde, la UMCH se volvía a plantear durante su Segundo Congreso Nacional la necesidad de reactivar esta demanda, pues aún seguía siendo de gran importancia para las mujeres (UMCH, 1960).

Estas múltiples insistencias por parte del movimiento de mujeres y de algunas dirigentes sindicales provocaron la creación del Comando Nacional Pro-jardines Infantiles. Este espacio fue integrado por mujeres y hombres que impulsaron la necesidad de crear una red de jardines infantiles disponible para las familias chilenas. La finalidad de este comando fue coordinar múltiples acciones, como llamados a marchas, mítines en las calles y en los lugares de trabajo, además de la realización de varias conferencias donde se exponía sobre los beneficios de la educación preescolar para los niños y las niñas y sus madres. Levantar esta demanda fue una de las experiencias políticas más importantes para Mireya, quien también ha señalado:

La lucha por esta ley fue a mí parecer mi momento más importante, esta ley llegó al corazón de las mujeres. Ahora podrían salir e incorporarse al mundo del trabajo, y salir del molde de la cocina, de la casa, los niños. Fue una cosa bastante importante, porque despertó en las mujeres el interés de salir a trabajar, que ese era el propósito nuestro, que tuvieran ese tiempo para escoger con libertad, integrarse al trabajo, remunerado por supuesto. Yo opino que fue muy importante, porque rompimos un silencio, una costumbre, rompimos la vida cotidiana, llamémoslo así, de las mujeres que estaban relegadas a la cocina, los niños y a su hogar. Fue una gran campaña, una campaña que comenzó con muy pocas cosas, pero se fue sumando gente y conquistamos los jardines infantiles. (Baltra, 2019)

A pesar de la positiva finalidad del proyecto de Ley de Jardines Infantiles, este no quedó exento de tener que enfrentar a grupos reaccionarios, que cuestionaban sus beneficios argumentando que esta ley rompería con la estructura de la familia, base de la sociedad. Como vemos, la estrategia de los sectores conservadores fue apelar a preservar las *condiciones naturales* de la sociedad. Estos argumentos no fueron suficientes para las muchas mujeres que veían en esta demanda una oportunidad de justicia y reivindicación de sus derechos (*El Siglo*, marzo de 1959, p. 6).

Para finalizar, presentamos la última demanda identificada. Las organizaciones feministas se unieron a lo largo de la década de 1950 para exigir cambios en los beneficios sociales asociados a la maternidad, principalmente la extensión del postnatal de seis semanas a seis meses. Estas exigencias estaban en línea con propuestas que hacían organismos internacionales. En 1952, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) creó el convenio para la protección de la maternidad, comprometiendo a los Estados a legislar en favor de políticas públicas que permitieran hacer llevadera la relación maternidad-trabajo, ayudando así a las mujeres a no verse obligadas a abandonar sus puestos.

En diciembre de 1953 el Congreso chileno realizó una reforma al Código del Trabajo en temas relacionados al resguardo de la maternidad (Congreso Nacional de Chile, 1953). En ésta se estableció la extensión del postnatal a un mes y medio, con la posibilidad de extenderlo a través de licencias médicas en el caso de enfermedad del recién nacido o de la madre (Romanic, 2014, p. 14). Sin embargo, pese a que la ley prohibía el despido a través del fuero maternal, los empleadores hacían caso omiso y aprovechaban estas instancias para despedir a las trabajadoras. Otra situación recurrente era la renuncia de las mujeres a sus puestos laborales debido a que muchas no tenían la posibilidad de dejar el cuidado de sus hijos a otras personas, o por la pena inmensa que las invadía al dejarlos a cargo de terceros, siendo tan pequeños. Frente a esto las feministas declaraban que esta reforma era sólo un maquillaje que no tocaba los temas estructurales asociados a la discriminación que vivían las mujeres en el mundo laboral a causa de la maternidad.

Justamente por esta razón, las organizaciones feministas, como la UMCH y el departamento femenino de la CUT, impulsaron la demanda por la extensión del post-natal a seis meses, pues significaba garantizar beneficios concretos para las mujeres, de modo que les entregase la posibilidad de experimentar su maternidad de forma más segura y cuidada, librándolas también de la necesidad de tener que solicitar licencias médicas para poder cuidar a sus pequeños bebés, arriesgando sus puestos de trabajo. En el fondo también existía la preocupación de que las mujeres renunciaran al espacio laboral, porque eso significaba ser nuevamente relegadas al espacio doméstico. En consecuencia, las mujeres se veían obligadas a regresar a sus casas a ejercer labores domésticas no remuneradas, empobreciendo su realidad económica y abandonando el espacio público.

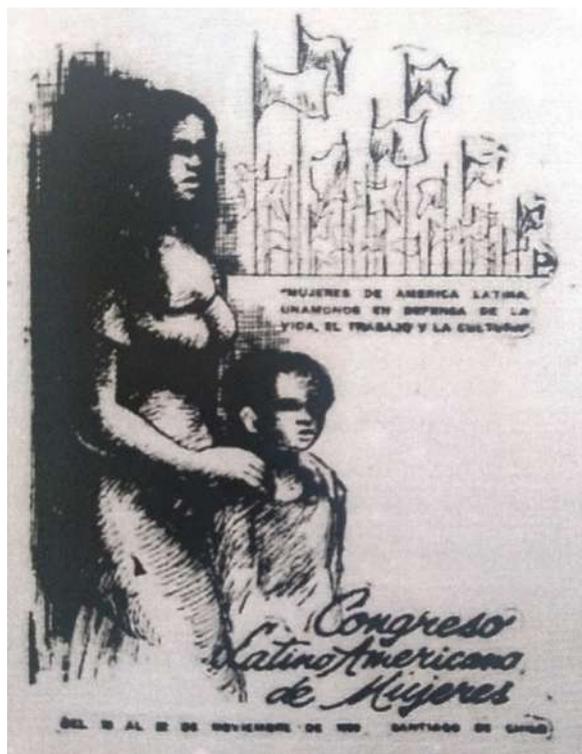
Los ejemplos que hemos observado permiten sacar varias conclusiones en torno a las preocupaciones del movimiento durante la década de 1950. Primero, que las feministas utilizaron estrategias para entregar soluciones a las necesidades básicas de las mujeres, pero con énfasis en la situación laboral producto de la composición propia del movimiento. En segundo lugar, notar que para ellas la política pública era un espacio que les permitía un ámbito de transformación mayor (alcanzaba a más mujeres) y también permitía soluciones más concretas. Por último, hay un interés transversal en cada una de estas propuestas en desestabilizar la construcción patriarcal del orden social y la estructura económica de la época.

PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE MUJERES EN CHILE

Durante la década del cincuenta, el movimiento feminista realizó varios hitos políticos que impactaron en distintos niveles de la sociedad chilena. Estas actividades oscilaron entre conmemoraciones de los 8 de Marzo, marchas y paralizaciones generales, congresos nacionales, etcétera. Pero creemos que, por su impacto mediático en toda la región latinoamericana, uno de los hitos más importantes fue la realización del Primer Congreso Latinoamericano de Mujeres en Chile. En este sentido, creemos que observar este hito nos entrega la posibilidad de entender elementos sustanciales del movimiento feminista, por ejemplo, el nivel de entramado organizacional que permitió la realización del magno evento. También, debido a la naturaleza del congreso, se pueden observar las principales demandas del movimiento de mujeres en la región latinoamericana. Como señalábamos, a través de estos hitos, podemos capturar reflejos de la experiencia político-social del movimiento feminista.

La celebración del Primer Congreso Latinoamericano de Mujeres se realizó durante los días 19, 20 y 21 de noviembre de 1959 en Santiago de Chile. Si bien este fue el primer evento de estas características en el país, en Latinoamérica ya se habían celebrado otros congresos, como el de Río de Janeiro en 1953, donde fue invitada la diputada Lía Lafaye (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2019). Para que el Congreso fuese posible, las organizaciones de mujeres constituyeron una serie de comisiones. Por ejemplo, una de ellas fue la comisión recaudadora de fondos, encargada de recolectar dinero entre las organizaciones que apoyaban la realización de este encuentro. Además del financiamiento entregado por los colectivos feministas, se contó con el apoyo monetario de organizaciones como la CUT, algunos partidos políticos de izquierda, además de sindicatos y organizaciones gremiales. Lo recaudado se destinó para dar soporte a este evento que recibió a mujeres de todo el país y de toda Latinoamérica.

Imagen 1
Afiche del Congreso Latinoamericano de Mujeres



Fuente: Diario *El Siglo*, noviembre de 1959.

Bajo el lema “Mujeres de América Latina, unámonos en defensa de la vida, el trabajo y la cultura” (*El Siglo*, 19 de noviembre de 1959, p. 7), se convocaba a cientos de mujeres y organizaciones generando grandes expectativas. El diario *El Siglo* realizó una extensa cobertura del congreso, publicando desde días previos diversas entrevistas a reconocidas dirigentes y activistas que extendían la invitación para participar del evento. Entre ellas, la destacada feminista Elena Caffarena, quien señalaba: “El país tendrá el honor de recibir a grandes mujeres de todo el mundo, el congreso latinoamericano aportará grandes soluciones nacionales e internacionales” (*El Siglo*, 19 de noviembre de 1959, p. 7).

Llegar a concretar este evento significó superar varios obstáculos, entre ellos la arremetida comunicacional de los sectores políticos conservadores, que no veían con buenos ojos el tenor del encuentro.

Por eso, días previos al evento, comenzaron con una campaña de desprestigio a través de los medios hegemónicos de comunicación *El Mercurio* y *La Nación*, informando de supuestas tensiones y quiebres dentro del comité organizador del congreso y algunas organizaciones: “Frente a la duda sobre las verdaderas intenciones de la celebración del Congreso Latinoamericano de Mujeres, 40 organizaciones han decidido retirar su apoyo económico” (*El Mercurio*, 10 de noviembre de 1959, p. 16).

Por otra parte, el diario *La Nación* aseguraba que una de las organizaciones que había retirado su apoyo económico era la CUT, aseverando que los miembros de la Central Única veían este congreso como un espacio que buscaba generar odiosidades entre hombres y mujeres. Esto suscitó una respuesta inmediata por parte de la directiva de la CUT, que desmentía las aseveraciones del periódico (*El Siglo*, 19 de noviembre de 1959, p. 14). Las organizadoras del congreso también manifestaron su opinión sobre los dichos emitidos por estos medios de comunicación a través de una conferencia de prensa dada por Lía Lafaye, principal vocera del encuentro y presidenta de la UMCH.

El congreso tiene como temario y finalidades defender los derechos de la mujer y la infancia; la paz y la soberanía de los pueblos, quienes no están de acuerdo con el Congreso, quiere decir que no apoyan estas finalidades [...] “El Mercurio” dice que no está de acuerdo con estas finalidades y principios y que esa prensa cree ver fines oscuros en algo tan claro y tan simple. (*El Siglo*, 17 de noviembre de 1959, p. 20)

Los ataques comunicacionales no surtieron los efectos esperados, pues el congreso tuvo un rotundo éxito en cuanto a la cantidad de mujeres asistentes. Otros diarios del periodo daban cuenta de la gran convocatoria generada a nivel nacional, sorprendidos se mostraban los medios ante las grandes distancias recorridas por las mujeres con el fin de llegar al encuentro. “Mujer pampina caminó 63 km hasta Iquique: llegó con su hijo al congreso; explotada por Osvaldo de Castro, lleva tres meses sin salario” (*El Siglo*, 22 de noviembre de 1959).

La gran asistencia de mujeres al Congreso Latinoamericano no fue argumento suficiente para que *El Mercurio* olvidase su campaña de desprestigio. Por el contrario, esta se intensificó una vez llegada la comisión de delegadas cubanas al país. La presencia de Vilma Espín, esposa de Raúl Castro, y de Aleida March, esposa de Ernesto “Che” Guevara, activó los recelos de *El Mercurio*, conocido por ser el medio de comunicación baluarte de la *derecha* chilena. Claro está que cada palabra emitida por este fue contra-argumentada por la delegación

cubana, que no dudó en denunciar las malas prácticas de los periódicos que habían publicado información deliberadamente falsa.

Estimamos pues, que las formas proyectarse en primera plana de “La Nación” y “El Mercurio”, encierran insinuaciones malintencionadas que constituyen sino una injuria, al menos una falta de respeto y caballerosidad hacia las mujeres honestas. Sin embargo, se han llevado ya tan lejos las inexactitudes en las noticias y la malevolencia en los comentarios que la delegación cubana considera indispensable aclarar ciertos extremos. En primer lugar, rechazamos el tono ligero frívolo con que se intenta envolver nuestro Congreso y en especial a la delegación cubana integrada por mujeres de trabajo, de moralidad intachable, consistentes en sus deberes y que participaron con riesgo de sus vidas, en una lucha de nuestro pueblo contra una tiranía que segó 20.000 vidas cubanas.

Fuera de todas las polémicas suscitadas, el Congreso continuó su desarrollo contando también con la participación de las delegaciones de otros países, como Venezuela, Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Uruguay, además de China y la Unión Soviética. Así también, contó con la presencia de representantes de organismos internacionales, como la ONU, UNESCO, CEPAL, UNICEF, FAO, ONU Mujeres y la OIT. En el caso de las delegaciones nacionales, se contó con la participación de algunos gremios, como la Unión de Profesores de Chile y la Unión de Matronas (*El Siglo*, 20 de noviembre de 1959), además de asociaciones de mujeres campesinas y el Frente de Mujeres de la CUT, entre muchas otras.

Como habíamos señalado anteriormente, los hitos políticos, como este encuentro latinoamericano, se configuran como un escenario preciso para la exposición de las principales demandas de las organizaciones. Estos encuentros están precisamente convocados para intentar tomar lineamientos políticos comunes frente a determinadas situaciones. En el caso del Primer Congreso Nacional de Mujeres las demandas presentadas giraban en torno a desafíos nacionales e internacionales. En el plano nacional las principales problemáticas expuestas en el congreso fueron las que el movimiento de mujeres sostuvo a lo largo de la década. En ese sentido, se expuso sobre situaciones como la demanda por jardines infantiles y el libre acceso a ellos, la rebaja en la edad de jubilación para las mujeres y el desarrollo de una ley que protegiera la maternidad y extendiera el postnatal. También hubo intervenciones que hicieron alusión a demandas enfocadas a las condiciones materiales de vida, como la solución a la cuestión habitacional de los barrios más pobres y la extensión de la carga monetaria familiar a todos los trabajadores y trabajadoras.

Por otra parte, los desafíos internacionales estuvieron centrados en superar las tensiones que ponían en peligro la democracia y la paz. En ese sentido, el Congreso de Mujeres declaró completo apoyo a la autodeterminación de los pueblos frente a invasiones externas, brindando así total respaldo a la Revolución Cubana. También se exigió el desarme armamentístico de las grandes potencias y el fin a los gobiernos tiránicos. El asunto de la defensa a las democracias fue recurrente durante todo el congreso, cuestión que tomaba aún más sustancia política frente a los testimonios entregados por algunas representantes cubanas, como Aleida March.

Yo no he hecho ni más ni menos que todas las mujeres patriotas de mi pueblo [...] En Cuba no hay división entre hombres y mujeres para defender la revolución, de ayudar a su realización. Estamos tan dispuestas como los hombres, a tomar un fusil y pelear por ella como ya lo han hecho muchas cubanas. (*El Siglo*, 20 de noviembre de 1959, p. 15)

Cuando señalamos que el Primer Congreso Latinoamericano de Mujeres no sólo constituyó uno de los principales hitos para el movimiento feminista de la década de 1950, es porque también significó un gran aporte a la discusión política del país. Por otra parte, en el contexto latinoamericano, el congreso fue una buena oportunidad para la delegación cubana de mujeres, quienes lograron mostrar otros aspectos de la Revolución y la derrota de Batista. Durante el congreso, un grupo de profesoras cubanas entregaron sus testimonios sobre las violaciones a los derechos humanos sufridas durante el régimen de Fulgencio Batista, provocando un cambio de perspectiva en algunos grupos más conservadores del país, que comenzaron a mirar con buenos ojos su derrota (Valobra, 2014, p. 3).

Es importante concluir señalando que la realización de este gran evento permite cuestionar las posturas hegemónicas sobre la historia del movimiento feminista, que ha invisibilizado la experiencia feminista de la década de 1950. Asumir la ejecución de un encuentro de esta escala solo es posible teniendo una red activa de organizaciones que colaboren en el desarrollo de la actividad; esta acción permite cuestionar toda posibilidad de lo que se ha llamado *silencio feminista*. Creemos que aún queda mucho por estudiar de este evento. Existe todavía bastante material que tiene muchas más reflexiones que entregar, más aún cuando el siguiente evento de similares características se realizó 36 años después, en noviembre de 1996.

CONCLUSIONES

La historia del movimiento feminista en la década de 1950 está lejos de constituir un período de *silencio* político; muy por el contrario, pareciera ser parte de una nueva fase de la experiencia feminista en el país. El análisis en conjunto de los elementos expuestos en este escrito nos permite afirmar que, como en otros periodos de su historia, el movimiento estuvo sostenido por una gran variedad de organizaciones de mujeres donde no todas se declaraban abiertamente feministas. Con respecto a esta paradoja, invitamos a leer el *feminismo* bajo los códigos propuestos por las feministas comunitarias, que lo han definido como “la lucha de cualquier mujer, en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que lucha, se revela y propone ante un patriarcado que la oprime o que pretende oprimirla” (Guzmán, 2015).

En este sentido, estamos ante la presencia de un movimiento tensionado por continuidades y nuevos comienzos. Como elementos de continuidad podemos señalar el interés por aumentar la participación política de las mujeres, así como también seguir con la estrategia de canalizar las demandas en exigencias al Estado (como el feminismo sufragista y el momento de los partidos políticos femeninos). Por otra parte, como “nuevos” comienzos, podemos mostrar el ingreso de una militancia de carácter popular, que generó impacto en las discusiones y demandas levantadas por el movimiento durante el periodo. En ese sentido, habría también que destacar las relaciones estratégicas que se establecieron con organizaciones como la CUT y otras de carácter sindical, unidas en la lucha contra la miseria y el hambre. Estos antecedentes dan una respuesta firme a los trabajos historiográficos que han desconocido las raíces más populares del movimiento feminista, asegurando que después de la obtención del voto femenino el movimiento no logró tener impacto en las mujeres más pobres.

Así también, podemos señalar que la historia de la experiencia feminista de la década del cincuenta nos permite tomar una mirada más internacionalista del movimiento. La realización del Primer Congreso Latinoamericano de Mujeres nos ha permitido dibujar algunas características del movimiento feminista a nivel regional. En este sentido, podemos decir que las organizaciones feministas se mantuvieron afales frente a experiencias políticas como la Revolución cubana y que prestaron apoyo a las luchas por la autodeterminación de los pueblos y la defensa de la democracia. Además, se puede constatar que las experiencias políticas vividas durante los años cincuenta continuaron su curso, de tal forma que en los años siguientes el movimiento se siguió desarrollando en una dinámica bastante similar y muchas de las organizaciones destacadas en esta década continuaron funcionando en las décadas siguientes. Así también, varias de las activistas continuaron

organizándose en los años venideros como, por ejemplo, se destaca la participación de la dirigente de la CUT Mireya Baltra, que llegó a convertirse en Ministra del Trabajo durante el gobierno de la Unidad Popular.

Para concluir, debemos señalar que una de las enseñanzas más valiosas que dejó el desarrollo de este trabajo fue la invitación a mirar el pasado desde una perspectiva donde se reconociera tanto la experiencia política como la teoría que el movimiento feminista elaboró. En ese sentido, hemos tomado la reflexión propuesta por la destacada pensadora Judit Butler, que ha planteado que

la creencia política de que debe haber una base universal para el feminismo, y de que puede fundarse en una identidad que aparentemente existe en todas las culturas, a menudo va unida a la idea de que la opresión de las mujeres posee alguna forma específica y reconocible dentro de la estructura universal o hegemónica del patriarcado. (Butler, 1990, p. 46)

No tener presente esta reflexión ha llevado a muchos a enjuiciar la historia del movimiento feminista desde una historia oficial, lo que ha inhabilitado la visibilidad de muchas memorias. Si bien sabemos que es imposible construir una historia que contenga a todos y cada uno de los relatos de sus protagonistas, las y los historiadores tenemos el desafío de reinterpretar los procesos sociales, relevando las experiencias de lucha popular que hasta ahora han sido omitidas, como es el caso de las mujeres trabajadoras y sus propuestas emancipadoras.

BIBLIOGRAFÍA

- Alfaro, Karen; Inostroza, Gina y Hiner, Hillary (2021). El poder de desafiar el poder: Movimiento de mujeres y feministas en la revolución y contra la dictadura (1950-1990). En Gálvez, Ana (Coord.), *HISTÓRICAS: Movimientos Feministas y de Mujeres en Chile, 1850-2020*. Santiago: LOM.
- Álvarez, Rolando; Gálvez, Ana y Loyola, Manuel (Eds.) (2019). *Mujeres y Política en Chile, siglos XIX y XX*. Santiago: LOM.
- Barría, Jorge (1971). *Historia de la CUT*. Santiago: Ediciones Prensa Latinoamericana S.A.
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2019). *Biografía de Lía Lafaye*. Disponible en: https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/L%C3%ADa_Lafaye_Torres
- Bravo, Viviana (2020). Clase Trabajadora, Izquierda y la protesta urbana en la crisis del desarrollismo chileno (Chile 1960-1962). En Necochea, Gerardo y Pantoja, José (Coords.), *Historias*

- desde la orilla izquierda latinoamericana en el siglo XX*. Buenos Aires: CLACSO.
- Butler, Judith (1990). *El género en disputa*. Buenos Aires: Paidós.
- Chakravorty Spivak, Gayatri y Giraldo, Santiago (2003). ¿Puede hablar el subalterno? *Revista Colombiana de Antropología*, 39, 297-364.
- Correa, Sofía (2001). *Historia del siglo XX chileno*. Santiago: Sudamericana.
- Equipo Programa Mujer y Trabajo (1991). *Testimonios para la historia de la mujer en el movimiento sindical*. Santiago: Ediciones CES.
- Espinosa, Yuderkys (2012). Los desafíos de las prácticas teórico-políticas del feminismo latinoamericano en el contexto actual. En Daz, Mar; Hoetmer, Raphael y Vargas, Virginia (Eds.), *Crisis y movimientos sociales en nuestra América. Cuerpos, territorios e imaginarios en disputa*. Lima: Programa Democracia y Transformación Global (PDTG).
- Fernandois, Joaquín (2005). *Mundo y fin de mundo: Chile en la política mundial 1900-2004*. Santiago: Universidad Católica de Chile.
- Follegati, Luna (2016). El feminismo se ha vuelto una necesidad: movimiento estudiantil y organización feminista (2000-2016). En Niria, Ana y Valdés, Camila (Comps.), *Juventud y espacio en las Américas: I Taller Casa Tomada*. La Habana: Ed. Casa de las Américas.
- Gaviola, Edda et al. (1986). *Queremos votar en las próximas elecciones: Historia del movimiento femenino chileno 1913-1952*. Santiago: La Morada.
- Gaviola, Edda; Largo, Eliana y Palestro, Sandra (1992). Si la mujer no está, la democracia no va. *Proposiciones. Género, Mujer y Sociedad* (Santiago, Ediciones SUR), 21.
- Guzmán, Adriana (2015). Feminismo Comunitario-Bolivia. Un feminismo útil para la lucha de los pueblos. *Revista con la A*, 38. Disponible en: <https://conlaa.com/feminismo-comunitario-bolivia-feminismo-util-para-la-lucha-de-los-pueblos/>
- Kirkwood, Julieta (1990). *Ser política en Chile. Los nudos de la sabiduría feminista*. Santiago: Cuarto Propio.
- Loveman, Brian y Lira, Elizabeth (2000). *Las ardientes cenizas del olvido: Vía chilena de reconciliación política 1932-1994*. Santiago: LOM.

- Morandé, Felipe y Noton, Carlos (2004). *La Conquista de la Inflación en Chile*. Santiago: Estudios Públicos.
- Olivares, Valeria (2019). En defensa de las trabajadoras. Católicas y obreras organizadas en Chile desde fines del siglo XIX hasta 1930. En Ana Gálvez; Manuel Loyola y Rolando Álvarez (Eds.), *Mujeres y Política en Chile, siglos XIX y XX*. Santiago: LOM.
- Orellana, Gilda (2012). *Clotario Blest; Sindicalista, Revolucionario y Político de Clase: Por la Emergencia del Poder Popular, SIGLO XX*. Tesis de Maestría, Universidad de Chile.
- Rojas, Claudia y Jiles, Ximena (2017). *Epistolario emancipador del MEMCH. Catálogo histórico comentado (1935-1949)*. Santiago: Ediciones del Archivo Nacional de Chile.
- Salazar, Gabriel (2006). *La violencia política popular en las "Grandes Alamedas"*. Santiago: LOM.
- Salazar, Gabriel y Pinto, Julio (2002). *Historia contemporánea de Chile IV. Hombría y Feminidad*. Santiago: LOM.
- Scott, Joan (2008). *Género e historia*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Unión de Mujeres de Chile (UMCH) (1960). Boletín II. Congreso Nacional.
- Valobra, Adriana María (2014). Mujeres-sombra y Barbudas: Género y política en el Primer Congreso Latinoamericano de Mujeres, Chile 1959. *Anuario del Instituto de Historia Argentina (Argentina)*, 14.

DE LO JUSTO Y LA INJUSTICIA EN LAS HUELGAS DE LA INSURGENCIA OBRERA EN MÉXICO, 1965-1983

Gerardo Necochea Gracia

LOS AÑOS que corren de 1971 a 1983 reciben el mote de insurgencia sindical debido a las movilizaciones en los sitios de trabajo y en la calle, manifiestos públicos y la difusión de una ideología obrerista. Por supuesto, la faz inconfundible de la insurgencia sindical fue un rostro esculpido por la lluvia de huelgas. Al calor de los sucesos, los conflictos laborales fueron abordados para hacer la crónica inmediata de los sucesos, o para examinar las tácticas empleadas, señalar errores y desprender lecciones útiles a futuro; todavía otros observadores prestaron particular atención a los chanchullos y argucias legales con las cuales patrón y autoridad laboral frustraron las pretensiones obreras (Labastida M. del Campo, 1975; Camacho, 1976; Trejo Delarbre, 1976). Posteriores estudios dirigieron la atención hacia las espectaculares pugnas ocurridas entre los sindicatos electricistas y entre Rafael Galván y Fidel Velázquez, la lucha por democratizar el sindicato ferrocarrilero, y las ideologías y organizaciones de izquierda que intervinieron (Molina, 1987; Pérez-Arce Ibarra, 2012; Escobar Toledo, 2021). Las huelgas en sí y los huelguistas han sido objeto de estudio con menor frecuencia (Alafita Méndez, 1979; Basurto, 1983; Necochea Gracia, 2019). La intención del presente texto es llevar la mirada hacia los trabajadores y preguntar qué nos dicen las huelgas acerca de la clase obrera.

Frecuentemente se aduce como causa de las huelgas la crisis y, en particular, la inflación que caracterizó la economía mexicana en esa década (Trejo Delarbre, 1979, pp. 132-133; Alafita Méndez, 1979, p. 254; Molina, 1987, p. 261). Sin negar el efecto de la economía, mal haríamos en pensar que los trabajadores meramente reaccionaron a ese estímulo externo. La siguiente discusión parte de la idea de que las acciones de los trabajadores no fueron reacción instintiva dictada por el modelo del hombre económico, sino que obedecieron a ideas y sentimientos arraigados acerca de cómo era y cómo les gustaría que fuera el mundo. El quiebre en actividades y relaciones hizo evidentes ideas soterradas que sostenían el diario fluir y en las que rara vez reparamos porque constituyen el sentido común de época (Thompson, 1997 [1977], pp. 60-61). El examen a continuación fija la atención, primero, en la confianza en lograr el necesario progreso material; y, segundo, en aquello que los trabajadores consideraban importante para asegurar ese progreso. En la persecución de esos fines, los obreros revelaron nociones acerca de lo justo y la justicia que legitimaban su actuar, y la experiencia misma muestra cómo el conflicto conformó una visión de clase.

CICLO DE HUELGAS OFENSIVAS Y ORGANIZACIÓN SINDICAL

Los economistas coinciden en que al inicio de los años setenta era evidente el agotamiento del crecimiento fincado en la sustitución de importaciones. La resultante crisis adquirió mayor proporción a través de la década, hasta llegar a la estrepitosa caída de 1983, que inauguró la llamada década perdida de los ochenta debido al nulo, cuando no regresivo, crecimiento económico. El cuadro crítico mexicano estaba, por una parte, inserto en el fin de un largo ciclo de crecimiento económico mundial y la coyuntura de la crisis internacional del petróleo de mediados de los setenta. Por otra parte, la declinación de la economía mexicana revelaba las limitaciones de la estrategia desarrollista implementada en América Latina. Además, la crisis fiscal del Estado mexicano llevó a la contratación de deuda y a la reducción del gasto social, de manera que en las últimas décadas del siglo XX se agudizó la tendencia a la desigualdad en la distribución de la riqueza. En fin, para hacer una historia breve, la economía se fue catastróficamente a pique (Moreno-Brid y Ros Bosch, 2010; Guillen Romo, 1984).

Sin duda, los vaivenes económicos provocaron movilizaciones obreras, especialmente los sucesos de 1973 y 1974. La inflación se había mantenido de un solo dígito durante la década de 1960 y hasta 1972. Repentinamente alcanzó 12% en 1973 y se duplicó al siguiente año (Cuadro 1). La Confederación de Trabajadores de México (CTM) exigió un aumento de emergencia en 1973 y, nuevamente, en 1974;

además, propuso la reducción de la semana laboral a 40 horas sin reducir el ingreso obtenido por 56 horas de trabajo. La beligerancia verbal con que acompañó sus demandas amenazaba con movilizaciones masivas y huelga general. Al principio toparon, por supuesto, con la casi generalizada negativa patronal, y unos y otros fueron gradualmente morigerando su ánimo.

El encabezado de primera plana del 2 de octubre de 1973 de *El Heraldo de Chihuahua* afirmaba que 175 mil obreros se hallaban en huelga. El periódico reportaba que las ciudades de Monterrey y Guadalajara no contaban con transporte y en Puebla no había pan. Las huelgas de jurisdicción federal ocurridas entre septiembre 1973 y agosto de 1974 evidencian un pico que por mucho sobrepasa de los años anteriores y posteriores, tanto en la cantidad de emplazamientos como de huelgas realizadas (Cuadro 2). La demanda inicial enunciada en septiembre de 1973 fue de un aumento de 33%. Un mes después ya había disminuido a 20% y en muchos casos acabó en un cómodo 18%, debido a que ese fue el porcentaje de aumento al salario mínimo (*Punto Crítico*, marzo de 1973, p. 17, y septiembre-octubre de 1973, pp. 6-8; Basurto, 1983, p. 74). En 1974 la demanda inicial fue por 35% de aumento, posteriormente rebajado a 22%. La misma CTM concedió, con el dramatismo y la exageración que los acaudalados jercas consideraron necesaria, que el alza de precios había superado tres veces el aumento salarial (*El Martillo*, 3 de septiembre de 1974, p. 2, y 9 de noviembre de 1974, p. 1).

Cuadro 1

Inflación, salarios y participación de salarios en producto interno bruto, años seleccionados (1951-1983)

Año	1951	1955	1960	1965	1970	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Inflación*	24.0	13.4	4.9	2.0	6.0	5.0	12.0	23.8	15.2	15.8	28.9	17.5	18.2	26.2	28.1	58.9	101.9
Salario real**					100.0	111.8	112.5	119.5	126.0	141.0	136.4	137.9	145.2	144.2	150.2	146.6	107.8
Salario / PIB (%)						36.9	35.9	36.7	38.1	40.3	38.9	37.9	37.7	36.1	37.4	35.8	28.8

* 1951-1970: crecimiento promedio anual en el índice de precios al mayoreo en la Ciudad de México; 1971-1983: Índice de precios al consumidor (promedio anual).

** Salario promedio anual (economía total) deflactado por el índice de precios al consumidor. Índice 1970=100

Fuente: datos tomados de Moreno-Brid y Ros Bosch (2010, apéndice y cuadros A10, A11 y A12).

Cuadro 2
Emplazamientos a huelga y huelgas estalladas de jurisdicción federal

Año (septiembre - agosto)	Emplazamientos	Huelgas
1970-1971 (diciembre - agosto)	1,907	36
1971-1972	1,720	30
1972-1973	2,162	57
1973-1974	10,557	452
1974-1975	2,507	104
1975-1976	3,139	102

Fuente: Basurto (1983, p. 62).

El brinco inflacionario sin duda fue motivo de una escalada de huelgas y demandas de aumentos de emergencia, pero vista la década dentro de un ciclo más amplio, más bien parecería que se reafirmaba la expectativa de una mejora en la condición económica de las familias de la clase obrera. La importancia de los problemas estructurales no necesariamente se dejaba sentir en el día a día. En cambio, la confianza en el avance material había ganado terreno desde años atrás. Después de un largo periodo de caída del salario real, la recuperación inició hacia fines de los años cincuenta; en 1969 los salarios reales alcanzaron el valor que tenían en 1939, y continuaron al alza por los siguientes casi tres lustros (Bortz y Aguila, 2015, p. 26-29). Pasada la emergencia de los años 1973 y 1974, el salario real, de hecho, aumentó por encima de la inflación.

El optimismo despertado por la situación salarial, y no la inflación, es mejor explicación para el largo ciclo de huelgas ofensivas. El avance, no obstante, y desde el punto de vista obrero, era lento y había que acelerarlo. La represión de los ferrocarrileros en 1959 puso la ofensiva en pausa, que se reanimó en la segunda mitad de la década de 1960 y continuó hasta inicios de los años ochenta (Cuadro 3). Al mismo tiempo, entrada la segunda mitad de los setenta, la proporción de los salarios respecto del producto interno bruto tendió a estancarse (Cuadro 1). La percepción, posiblemente, no era de pérdida sino de freno al ritmo del alza salarial. Lo consecuente, entonces, era imprimir impulso propio para realizar la expectativa de mejoría.

El optimismo obrero no estaba mal fundado, a juzgar por el resultado de las huelgas. Un estudio de 99 huelgas ocurridas entre 1971 y 1976 mostró que la mayor parte resultó en victoria para los trabajadores; casi la mitad de esas huelgas tuvieron lugar en las industrias de transformación, y los trabajadores triunfaron en 75% de ellas. Alafita Méndez (1979) registró seis huelgas en la industria automotriz, cuatro

de ellas ganadas por los obreros (pp. 261-262). El Cuadro 4 contiene información de un número limitado de huelgas en industrias y servicios y muestra que los trabajadores obtuvieron todo o una parte de lo que demandaron en 40% de las registradas para 1972-1974 y en casi la mitad para 1977-1978.

Cuadro 3
Huelgas registradas en las juntas locales de conciliación y arbitraje (1966-1989)

	Año	Nº de huelgas
1	1966	91
2	1967	78
3	1968	157
4	1969	144
5	1970	206
6	1971	204
7	1972	—
8	1973	136
9	1974	337
10	1975	236
11	1976	547
12	1977	476
13	1978	758
14	1979	795
15	1980	1339
16	1981	1065
17	1982	1925
18	1983	939
19	1984	457
20	1985	417
21	1986	839
22	1987	949
23	1988	518
24	1989	757

Fuente: Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1966-1989, Secretaría de Programación y Presupuesto, Ciudad de México.

Cuadro 4Total de huelgas, resultado, y tipo de demanda: 1972-1974 y 1977-1978¹

	No.		%	Resultado (%)			Tipo de Demanda (%)			
	huelgas	De-mandas		Vic-toria	Der-rotas	s/i	Recono-cimien-to*	Sala-rios**	Con-trol***	Despot-ismo****
1972-1974	43	114	100	39,5	11,6	51,1	22	50	12	18
1977-1978	122	234	100	48,2	20,4	30,3	12,3	52,13	9,8	26,0

* Incluye organización de nuevo sindicato, elección de comité democrático, demanda de firma de contrato y pugna inter-sindical.

** Incluye demandas de prestaciones (vacaciones, despensa, etc.), servicio médico, vivienda, rebaja de salario, horas e indemnización.

*** Incluye ritmos de trabajo, taylorismo, tiempo y movimiento, introducción de maquinaria, creación de planta para eventuales, condiciones de seguridad y salubridad en el trabajo, y expandir democracia (delegados, comité de fábrica, etc.).

**** Incluye violación de contrato, despido, maltrato, retención salario, conservar fuente de trabajo, contra empleo de no sindicalizados, rechazo a invasión de CTM, CROC, COR, CROM.

Fuente: *Punto Crítico* (1972-1974, 1977-1978) y *El Martillo* (1972-1974 y 1977-1978).

El optimismo también estaba montado sobre las ideas propagadas acerca de la nueva era que se abría ante México. Sin duda, como afirman estudiosos del período, las tres décadas posteriores a la presidencia de Cárdenas atestiguaron la modernización del país. En primer lugar, por la acelerada industrialización y el consecuente desarrollo económico, celebrado como el milagro mexicano; y, en segundo lugar, porque la cultura dejó de ser rural, conservadora y localista para convertirse en urbana, cosmopolita y progresista (Roux, 2005, pp. 210-219; Loeza, 2010). Autores recientes han enfatizado la difusión de ideas y actitudes consonantes con esta visión de la modernidad (Rubenstein, 1998; Bachelor, 2008; Mraz, 2001). Apareció, en consecuencia, una subjetividad centrada en el individualismo y la expectativa de satisfacción más allá de las necesidades básicas: un individualismo

1 La información respecto de las demandas no era uniforme en las dos publicaciones consultadas para elaborar este cuadro. Registré todas las que aparecen y las agrupé en los cuatro rubros mostrados; por supuesto, para cada huelga había más de una demanda, pero las fuentes rara vez incluyen el pliego de peticiones completo, siendo usual reportar la demanda salarial y alguna otra notable, y añadir "otras demandas". El desglose de información en las estadísticas sobre huelgas provista por el INEGI tampoco hace un desglose detallado, y cubre de 1992 en adelante. Las cifras y porcentajes, debido a lo anterior, no pretenden exactitud estadística y son más bien indicativas de tendencias.

adquisitivo plenamente integrado al mercado cuyo horizonte de expectativa estaba definido por el progreso y la modernidad.

Podemos encontrar patrones de conducta en la clase obrera que respondían a estos valores. En primera fila, sin duda, estaban aquellos que después de los años cuarenta convirtieron a las organizaciones obreras en bien aceitadas máquinas políticas para escalar peldaños en el poder y para enriquecerse. Los acompañaron no solo los ocupantes de las estructuras secundarias de la jerarquía laboral sino obreros de base que veían en ello su propio bienestar. Altagracia, obrera textil en la fábrica de Río Blanco, retrató bien esta actitud cuando refirió que le daba escobazos a su ayudante porque le pedía que limpiara el hilo que ella necesitaba para trabajar, y él se lo robaba. “¡Ay, qué chistoso eres! —recriminaba ella—Ya nomás tú me agarras el hilo para trabajar.” A lo cual él respondía: “El chiste es ganar y no trabajar”. Alta remató la anécdota refiriendo que ese hombre ahora era gerente y ya tenía “su gran casa” (Necoechea, 2005, pp. 143-144). Esa era la manera individual de resolver los problemas de clase.

En el otro polo estaba la manera colectiva de enfrentar los problemas derivados de la situación de clase en el trabajo. Herbert Gutman propuso, discuriendo acerca de lo que él llamó la cuestión sartreana, que frente a las presiones de subordinación en las circunstancias de vida que enfrentan los trabajadores siempre existe la posibilidad de seguir el camino individualista o el camino colectivo “para lograr la autonomía” (Gutman, 1987, p. 327). No es una opción mecánica determinada por la posición social sino una tensión constante afectada por la cultura, las condiciones del momento y algo indeterminado que podríamos llamar el ambiente de época. En las décadas de los sesenta y setenta, en México, la decisión más común fue a favor de organizar sindicatos y exigir aumentos salariales, es decir, la acción colectiva.

Los obreros que así actuaron pertenecían a la primera o segunda generación que entraba a laborar en la industria y los servicios urbanos. Los primeros arribos procedentes de pueblos rurales tuvieron mejores oportunidades para establecerse y acomodarse en la economía urbana industrial. Conforme la migración interna creció pasada la medianía del siglo, el caudal humano rebasó la demanda de trabajadores y la oferta de vivienda y servicios urbanos. Para estos trabajadores, en consecuencia, una preocupación principal era conseguir empleo, seguida por asegurar permanencia y buen salario. Para lograr esto último, sin embargo, era necesaria la organización que hiciera viable las exigencias de más salario y más plazas de planta.

Por esa razón las huelgas por reconocimiento sindical fueron frecuentes. Igualmente frecuente fue que una vez que los trabajadores empezaban a movilizarse, se enteraran de que ya existía un sindicato

en su fábrica que tenía la titularidad del contrato colectivo. Por esa razón, gran número de luchas tuvieron el carácter de pugna inter-sindical o de enfrentamiento entre viejos y nuevos cuadros de dirección sindical.

En el puerto de Progreso, Yucatán, los fileteadores y empacadores de Pescados Mexicanos comenzaron a organizarse en los últimos meses de 1973. El núcleo original creció con la incorporación de trabajadores de otras empresas, de manera que fundaron el Sindicato Industrial de Trabajadores de la Industria Pesquera, Similares y Conexos Emiliano Zapata. La idea de un sindicato de industria probablemente fue de su asesor, Efraín Calderón Lara, que lo mismo aconsejó a zapateros y otros trabajadores de la zona. La Junta de Conciliación y Arbitraje local negó el registro al Emiliano Zapata argumentando que había trabajadores empleados en zona federal y salían de su jurisdicción; el sindicato solicitó y obtuvo el registro federal por parte de la Secretaría del Trabajo. Gracias a ello firmó contrato con la empresa paraestatal Productos Pesqueros Mexicanos.

Pescados Mexicanos y otras empacadoras privadas rechazaron al sindicato. Los trabajadores recurrieron a la huelga, el 12 de septiembre de 1974. Al siguiente día, el local de los sindicatos independientes en Mérida fue allanado, y dos líderes fueron detenidos por varias horas. Ya antes, en marzo de ese año, el asesor Calderón Lara había sido asesinado. A diez días de iniciada la huelga, la policía desalojó violentamente a los trabajadores de Pescados Mexicanos, y después procedió a descargar dos barcos. La empresa, a continuación, presentó un contrato colectivo supuestamente firmado con anterioridad con un sindicato de empresa. En consecuencia, la huelga fue declarada inexistente por las autoridades laborales. No hubo firma de contrato colectivo y, en cambio, más de 70 trabajadores fueron despedidos. Maniobras similares fueron llevadas a cabo por otras empacadoras privadas (*Punto Crítico*, octubre de 1974, p. 26; Fernández Sousa, 2014, pp. 160-161).

Al otro extremo del país, en Chihuahua, los trabajadores de la fábrica de artículos de limpieza La Nacional vivieron una historia similar en 1972. Un grupo de obreros organizó el sindicato independiente, bautizado Sindicato 2 de Julio en honor a la fecha de fundación, y exigió reconocimiento y firma de contrato colectivo. La CTM, por su parte, reclamó tener la titularidad del contrato. En agosto hubo una votación para conocer si los obreros apoyaban al sindicato independiente o a la CTM. La Confederación ganó la votación, debido a que el día de la elección metió a trabajar a muchos esquirols, según denunció el Sindicato 2 de Julio. El sindicato independiente contaba con el apoyo del Comité de Defensa Popular, que organizó marchas y mítines

callejeros para protestar la agresión de la CTM y demandar la titularidad del contrato, la reinstalación de despedidos y mejores condiciones de trabajo (*El Martillo*, 12 de agosto de 1972, p. 1, 9 de septiembre de 1972, p. 6, y 23 de septiembre de 1972, p. 2). Los independientes consideraron que habían perdido una batalla, pero expresaron su determinación a seguir en pie de lucha.

Las centrales obreras y los sindicatos nacionales existentes ya desde años antes habían abandonado representar los intereses de los trabajadores. La izquierda fue expulsada de la CTM y los líderes honestos y combativos fueron reemplazados por líderes espurios dispuestos a seguir el camino trazado por el ejecutivo federal, animados por la marea contrarrevolucionaria que siguió al gobierno de Cárdenas, en particular durante la presidencia de Miguel Alemán. Por eso, en el contexto mexicano de los años sesenta y setenta fue común enfrentar la oposición de patrones y direcciones sindicales a reconocer un nuevo comité ejecutivo electo democráticamente y que empujaba por la renegociación del contrato existente. Ese fue el caso de la sección 97 de los electricistas en Monterrey, que pararon por cinco horas y media en octubre de 1972, por el reconocimiento de su nuevo comité ejecutivo local democrático y respeto al escalafón (*Punto Crítico*, noviembre de 1972, p. 11). También en Monterrey, el reconocimiento del nuevo liderazgo fue una de las causas del conflicto en Medalla de Oro durante 1972 (*Punto Crítico*, diciembre de 1972, pp. 9-10), y del Sindicato de la Compañía Industrial del Norte y la Compañía Industrial Fundidora (CINSA-CIFUNSA) en Saltillo en 1974 (*Punto Crítico*, mayo de 1974, p. 5; *El Martillo*, 1 mayo de 1974, p. 5). En Parral, los trabajadores de Duraplay tomaron la fábrica en diciembre de 1973 para lograr el reconocimiento del comité ejecutivo democrático (*El Martillo*, 15 de diciembre de 1973, p. 5). Diez años antes, trabajadores de General Motors en la Ciudad de México organizaron el Grupo Democrático y ganaron la elección sindical en agosto de 1963, desbancando al secretario general que había ocupado ese puesto por años. El nuevo liderazgo rechazó las componendas a puerta cerrada y demandó el derecho del sindicato a decidir sobre cuestiones relacionadas a la organización de la producción, cargas de trabajo, cuotas de producción y el porcentaje de trabajadores empleados en las diferentes categorías salariales. En julio de 1965 los trabajadores de Chrysler también votaron a favor de un grupo insurgente que abogaba por “democracia sindical y justicia social” (Bachelor, 2008, posición en Kindle 3711). Estos ejemplos de la industria de automóviles son además interesantes porque muestran que el empuje combativo y democrático no se perdió después de la derrota de los ferrocarrileros en 1959.

Los ejemplos de hecho muestran que el largo ciclo de huelgas ofensivas siempre incluyó ganar independencia y democracia sindi-

cal. Muestran, asimismo, la oposición de patrones y confederaciones sindicales existentes, apoyadas por las instancias gubernamentales responsables de las relaciones laborales. Los trabajadores en la producción de automóviles tenían una mejor posición de fuerza que los obreros de pequeñas empresas, lo que les confirió una ventaja relativa en las relaciones laborales; aun así, los trabajadores de Chrysler fueron brutalmente reprimidos en 1969. En otras palabras, la burocracia de los sindicatos corporativos, el autoritarismo gubernamental y la determinación patronal de no ceder espacio probaron ser formidables enemigos.

Sin embargo, los trabajadores avanzaron. En 1960, había 9.675 agrupaciones y 1.298.025 agremiados; durante los siguientes cinco años surgieron más de 3 mil nuevas organizaciones, que agregaron cerca de medio millón de miembros (Zapata, 1976, p. 125). El crecimiento gradual se aceleró después de 1968, de manera que para 1972 había 17 mil organizaciones con 2.150.000 miembros (Trejo Delarbre, 1979, pp. 123-124). Tres años después, el número de afiliados a sindicatos incorporados a las confederaciones nacionales oficiales y a seis importantes sindicatos nacionales rebasó los tres millones y medio de trabajadores (Zapata, 1976, p. 124). Las cifras no son del todo fiables, pero sí muestran crecimiento a través de la década de 1960, que se intensificó en los primeros años de la siguiente década.

En los siguientes años decayó el impulso organizativo. Acorde a Alafita Méndez (1979, p. 268), la creación de nuevos sindicatos se interrumpió en 1975, aunque quizás lo que se interrumpió fue su éxito y los intentos de organización siguieron. Algunos esfuerzos fructificaron (Cuadro 4). Los poco más de 100 obreros empleados en Fundiciones y Talleres Rice, en Mazatlán, ganaron el reconocimiento de su sindicato independiente después de un mes de huelga en abril de 1978 (*Punto Crítico*, mayo de 1978, p. 14). Los trabajadores de tierra de la línea aérea El Al, en el aeropuerto de la capital del país, también obtuvieron el reconocimiento de su sindicato y la firma de un contrato colectivo (*Punto Crítico*, septiembre de 1978, 14-15). Pero la tónica se inclinó hacia el endurecimiento de la negativa patronal a reconocer el derecho a la organización. El rechazo podía limitarse a una mera decisión burocrática, como sucedió a los metalúrgicos de Protherm, en la Ciudad de México, cuando manifestaron su deseo de unirse al Frente Auténtico del Trabajo y la huelga fue declarada inexistente (*Punto Crítico*, septiembre de 1978, 14-15). En otros casos, el desenlace fue violento. La Liga de Soldadores presionó para que las compañías constructoras empleadas en obras comisionadas por Pemex cumplieran acuerdos y reconocieran la organización sindical de los obreros de construcción. El 20 de junio en Cactus, Chiapas, y el 21 de junio

en Salinas Cruz, Oaxaca y San Martín Texmelucan, Puebla, estallaron huelgas que duraron horas y fueron terminadas por la intervención violenta de policía y ejército (*Punto Crítico*, julio de 1977, p. 21).

Organizar un sindicato era una labor ardua y cuesta arriba, cuyo resultado era incierto. La necesidad y el optimismo hacia las posibilidades en el presente podían incentivar, pero quizás no proveer la determinación para sostener la tarea a través de lo duro y lo tupido. Hacía falta un propósito que proviniera de un sentimiento de agravio que requería de resarcimiento. Lo justo había sido trasgredido y, por ende, era necesario romper con las cosas como son, con la moral heterónoma que rige la subalternidad (Pérez Álvarez, 2021, p. 5). Aunque el salario real había crecido, también lo había hecho la distancia entre las familias de más bajos y de más altos ingresos; las primeras sumaban el cincuenta y las segundas el veinte por ciento (Tello, 1971). Los de abajo, o bien ganaban terreno muy lentamente o bien lo perdían, por lo que tocaba a la distribución del ingreso. Ello rompía el pacto que había facilitado la construcción del Estado posrevolucionario, que con Cárdenas había puesto el acento en favorecer el bienestar de las clases populares (Roux, 2005, pp. 205-220). La decisión de organizar sindicatos y luchar por salarios, una decisión sin duda a contracorriente, hay que situarla en este contexto de transformación de la sociedad mexicana.

SALARIOS Y LO JUSTO

La decisión de sindicalizarse y exigir aumentos es tomada sin más como aquello que deben hacer los obreros. Situar la decisión en un campo de tensión entre estrategias individualistas y colectivas nos obliga a reexaminar lo que parece natural, e intentar comprender las razones detrás de esas acciones. Las huelgas de este largo ciclo ofensivo revelan mucho acerca de los obreros mexicanos en esos años: las ideas, prácticas y tensiones alrededor de la solidaridad, las fracturas introducidas por diferencias generacionales y de género, las adaptaciones de viejos moldes culturales a nuevas situaciones y prácticas, las nociones de democracia obrera, por mencionar unos cuantos aspectos. Límite el interés aquí a examinar demandas en torno a la cuestión económica y destacar las ideas acerca de lo justo y de la justicia social que subyacían a dichas exigencias.

Estudiosos y observadores de las cuestiones obreras nunca dejan de mencionar la motivación económica de las huelgas, sin ir más allá de constatar su existencia. Las organizaciones de izquierda que entonces se movían entre la base obrera unas veces desesperaban y otras aconsejaban prudentemente contra el economicismo inherente en esas luchas. *El Martillo* denunciaba que el sindicalismo mexicano se

había convertido en “un simple apéndice del sindicalismo economista norteamericano” (1 julio de 1973, p. 3), y congratuló a los obreros de Rivetex cuando consideró que usaron la huelga “como arma política de la clase proletaria, rebasando las demandas puramente económicas” (9 de septiembre de 1972, p. 2). Javier, minero y miembro de Línea Proletaria, afirmaba que, por supuesto los trabajadores requerían y deseaban un ingreso mayor; y que tuvieron que hacer un trabajo de mucha discusión para introducir “la teoría marxista-leninista [que] nos decía que no vamos por reivindicaciones económicas, porque eso es economicismo, que vamos por cuestiones políticas-ideológicas para al final de cuentas derribar el régimen opresor y burgués” (Molina, J., entrevista, 10 de abril de 2015).

Sin duda, el motivo salarial ha sido preocupación constante de quienes dependen del salario y encuentran que es insuficiente. Así lo consideraron los trabajadores de Celanese, empresa que producía fibras sintéticas en Zacapu, Michoacán. En 1971 eligieron una dirección democrática, que trabajó por unificar a la base y enfrentar a la empresa, lo cual hicieron al año siguiente cuando estalló la huelga en demanda de 30% de aumento. La empresa ofreció 10% y alegó que no podía conceder más debido a que el rayón ya no era un producto costeable. Un mes después negociaron un aumento de 13.3%, menor a lo demandado pero superior a la inflación en ese año (*Punto Crítico*, noviembre de 1972, p. 6; *La Verdad de Michoacán*, 1 de diciembre de 1972, p. 1).

La de Celanese fue una historia repetida con variaciones a través del periodo. En 1973 los obreros de Celulosa de Chihuahua estallaron la huelga por 30% y un mes después obtuvieron 22% (*El Martillo*, 29 de octubre de 1973, pp. 1-2, y diciembre de 1973, p. 6; *Punto Crítico*, diciembre de 1973, p. 8). Muy similar fue la huelga de los trabajadores de IACSA, una empresa de partes para automóviles: en septiembre de 1974 demandaron 35% de aumento y, poco después de un mes de huelga, obtuvieron 22% de aumento (*Punto Crítico*, enero de 1975, p. 12). Ese mismo año los obreros de autos Nissan exigieron un 80% de aumento y terminaron con un acuerdo de 22% (*Punto Crítico*, mayo de 1974, p. 10). Esas huelgas respondieron al llamado de la CTM a exigir un aumento de emergencia, y siguieron un patrón común: los trabajadores exigieron un aumento que los pondría por encima de la inflación y los patrones concedieron aumentos por debajo. Fue en 1973 y 1974 que los obreros apenas lograron sostener el crecimiento de su ingreso al parejo del alza en los precios, de manera que la percepción de un freno a la tendencia a mejorar el nivel de vida fue más aguda.

La inflación se redujo en los siguientes años, no así la exigencia obrera de mayores incrementos a su ingreso (Cuadro 1). Los mineros

de Santa Bárbara, en 1975, exigieron 35% de aumento y obtuvieron 30% después de un mes de huelga. La demanda salarial fue más frecuente en la segunda mitad de la década. Es importante notar que, en el segundo periodo, en el año 1977, el gobierno impuso un tope temporal de 10% a los aumentos, en un momento en que la inflación ya empezaba a mermar de hecho los salarios, de manera que las demandas salariales adquirieron cada vez más un carácter defensivo, es decir, evitar la reducción de su participación en la riqueza social.

Ese año fue común que la contra-oferta empresarial a las pretensiones salariales de los trabajadores fuera menor al aumento en el costo de vida. Los trabajadores de DINA, en Ciudad Sahagún, salieron a huelga en marzo de 1977 por 30% de aumento; la empresa en cambio ofreció una opción entre aceptar una reducción de salario o el despido de trabajadores. Al final negociaron un aumento de una cifra absoluta, de \$654 (*Punto Crítico*, febrero de 1977, p. 15). La empresa Camesa, productora de alambre, concedió un aumento de 12% frente a la demanda de 25% de sus trabajadores, que estuvieron en huelga durante 3 días en febrero de 1977 (*Punto Crítico*, marzo de 1971, p. 18). Los metalúrgicos de Altos Hornos, en Monclova, fueron por 50% de aumento en marzo de ese año y al octavo día de huelga aceptaron el 10% ofrecido por la patronal (*Punto Crítico*, abril de 1977, p. 13). Los trabajadores de General Motors demandaron 30% y obtuvieron un 10% (*Punto Crítico*, mayo de 1977, p. 16); los de Fundidora Monterrey obtuvieron lo mismo, aun cuando demandaban un comparativamente moderado 16% de aumento (*Punto Crítico*, junio de 1977, p. 10). En octubre de 1977 una huelga decretada por el sindicato nacional de trabajadores textiles afectó a 500 empresas, demandaron 65% de aumento y obtuvieron 10% (*Punto Crítico*, noviembre de 1977, pp. 16-17).

Las grandes compañías optaron por ceñirse al tope impuesto por el gobierno. Las pequeñas empresas, en cambio, prefirieron negar el aumento. La fábrica de calzado Cananea, en Yucatán, dejó transcurrir la huelga por meses, amenazó con cerrar y ofreció la maquinaria para pagar indemnizaciones (*Punto Crítico*, febrero de 1977, p. 19). La farmacéutica La Campana no concedió nada a sus trabajadores, a pesar de tres meses de huelga (*Punto Crítico*, marzo de 1977, p. 12). La intransigencia fue acompañada en ocasiones de despidos y represión. En la empresa papelera Peña Pobre, los trabajadores estallaron la huelga el 14 de julio de 1978 y al día siguiente la fábrica fue tomada por la policía (*Punto Crítico*, junio de 1978, p. 13). Las instituciones públicas podían ser igualmente intolerantes: la Universidad Nacional, en la Ciudad de México, respondió al paro por aumento y reconocimiento sindical con la ocupación del campus por la policía y más de quinientos huelguistas arrestados (*Punto Crítico*, febrero de 1978, pp.

20-25). En los primeros meses de 1978, la Comisión Federal de Electricidad puso fin a su conflicto con los electricistas en la presa de La Boquilla, Chihuahua, por medio de la represión, el desalojo violento y el cierre de la planta (*El Martillo*, 4 marzo de 1978, p. 1). El ejemplo de la represión seguramente pesó en el ánimo de los trabajadores. Hubo quienes prefirieron terminar la huelga —como las telefonistas en abril de 1978 (*Punto Crítico*, mayo de 1978, p. 10)— antes que enfrentar despido, cárcel y golpiza. En esas condiciones, la decisión de ir a la huelga por un aumento era difícil.

Pero también lo fue años antes. Los trabajadores de Celanese, en los primeros días de octubre de 1972, rogaban por una solución que evitara el paro, “porque ni ellos ni nadie está preparado para la huelga.” Muchos temían que la empresa decidiera cerrar porque el rayón ya no era negocio, “y se acaba todo prontito” (*Hechos*, 8 de octubre de 1972, p. 1). En Santa Bárbara, en 1975, las esposas de los mineros comentaban que la huelga obligaba a comer a medias y a experimentar “muchas privaciones, comida, zapatos, enfermedades, y los que no tienen casa se les están acumulando las rentas”. Pero coincidían en señalar que “si empezamos juntos, juntos tendremos que terminar”, de manera que afirmaban su “disposición a sostenernos” (*La Cachumba*, 2 de junio de 1975, p. 5).

En ambos casos, la decisión fue tomada porque consideraban que peleaban por lo que en justicia les pertenecía. Los mineros de Santa Bárbara protestaron en 1975 porque el reparto de utilidades anunciado por la empresa era inadecuado. Consideraron que la empresa empleaba argucias legales para deliberadamente no repartir “lo que justamente nos pertenece de acuerdo con la ley y que constituye o viene a formar parte del patrimonio de nuestras familias” (*La Cachumba*, 21 de mayo de 1975, p. 3). En Zacapu, uno de los oradores que intervino durante un mitin afirmó el carácter justo de las demandas y por eso, añadió, “estamos dispuestos a ir a la huelga y afrontar cualquier sacrificio que sea necesario” (*Hechos*, 15 de octubre de 1972, p. 10). Al mismo tiempo, los trabajadores expresaban que los patrones trasgredían esa idea de lo justo. Un minero pensaba que generalmente la empresa robaba al trabajador pues repartía menos utilidades de las que correspondían, y en 1975 el sentimiento se generalizó: “Entonces la raza se encabrona y dice ¿por qué? ¡Nos están robando!” (Barraza, E., entrevista, 9 de abril de 2015). En el transcurso de un mitin, un orador ofreció una imagen vívida de la injusticia: mientras los hijos de los mineros no pueden estrenar zapatos, los hijos de los patrones estrenan automóvil (*La Cachumba*, 5 mayo de 1975, p. 2-3). El secretario general del sindicato de Celanese explicó que exigían “un convenio para que los que vayan a participar como obreros, tengan un salario que

les convenga por el contrato vigente y no que los trabajadores estén como la empresa lo decida” (*Punto Crítico*, noviembre de 1972, p. 6).

En Saltillo, los metalúrgicos de CINSA-CIFUNSA pararon en abril de 1974. Antes de eso, rechazaron el aumento de 12.5% pactado con la empresa y destituyeron al comité ejecutivo que lo había negociado. Acto seguido, eligieron una dirección democrática y notificaron a la empresa que debían nuevamente negociar la demanda de 35% de aumento. El anterior aumento era signo de que “el patrón nos quiere matar de hambre”, y el recién electo secretario general declaró: “Exigimos un sueldo justo para no morirnos de hambre y porque no comulgamos con las ideas de los empresarios...Lo que pedimos es justo y legal. Queremos mejorar nuestras condiciones de vida” (*El Heraldo de Saltillo*, 15 de abril de 1974, p. 1). La negativa a negociar del Grupo Industrial Saltillo, al que pertenecían ambas compañías, incitó la invitación a que el Estado expropiara las empresas “para que personas más conscientes y ubicadas socialmente, puedan darle el servicio a la comunidad que se requiere” (Archivo General de la Nación [AGN], 1974, pp. 8-9). La misma idea fue expresada en una pancarta exhibida el 13 de mayo: “Solución o expropiación de empresas queremos justicia” (AGN, 1974, p. 87). El robo y la irresponsabilidad de los patrones constituían el agravio que animó la decisión obrera de romper la cotidianidad y correr los riesgos implicados en la huelga.

La idea de lo justo tenía, además, otra dimensión igualmente importante. Los trabajadores de CINSA-CIFUNSA explicaron que rechazaron el aumento no solo por ser insuficiente sino porque el 12.5% fue concedido a los trabajadores que ganaban más del mínimo y, añadía su comunicado del 7 de mayo, “una gran parte de los trabajadores gana solo el mínimo y por ello no se le aumentó al salario en ninguna cantidad” (AGN, 1974, pp. 7-10). Por esa razón también demandaron un aumento absoluto para los obreros de salario mínimo, y no el aumento porcentual que no habría alcanzado el mismo monto. Los trabajadores de empresas dedicadas a la producción de llantas demandaron 40% de aumento para quienes estaban en el sistema de destajo, y 60% para quienes recibían un salario fijo (*Punto Crítico*, febrero de 1978, pp. 20-25). Los obreros de la empresa Keramos, productora de ladrillos refractarios, después de once días de huelga ganaron aumentos de 14% para la categoría más baja, 13% para la siguiente y 12% para la más alta (*Punto Crítico*, mayo de 1978, p. 14). La diferencia salarial introducida por la administración empresarial para distanciar a unos obreros de otros, rara vez aparece en los informes de las huelgas. Puede ser que los trabajadores no la señalaban o de hecho no la consideraban cuando acordaban exigir un determinado porcentaje de aumento. Como sea, los ejemplos citados muestran la disposición

de quienes tenían salarios más altos a emprender una lucha que beneficiara a todos los niveles salariales, que era a su vez una manera de expresar la opción colectiva por encima de la individual.

Otra demanda relacionada a la nivelación salarial concernía exigir que los trabajadores eventuales pasaran a ser de planta. Un estudio basado en cifras del censo de 1970, concluyó que de las tres cuartas partes de la población económicamente activa que recibía menos de \$1500 mensuales, la mayoría percibía un salario inferior al mínimo de ochocientos pesos (Zapata, 1976, pp. 113-14). Probablemente el mayor número de estos trabajadores laboraba en el campo, en negocios de familia o en empresas muy pequeñas y sin presencia sindical (Bizberg, 1990, pp. 84-97). En empresas más grandes, los eventuales serían quienes recibían ese bajo ingreso, de manera que pasar a tener plaza de planta significaba un aumento en sus percepciones.

Las demandas salariales eran diversas y más complejas que la exclusiva petición de aumento. El paquete de exigencias en torno al salario muestra, claro, el deseo de mayor ingreso, pero también muestra la idea de los trabajadores respecto de lo que era justo. En primer lugar, y esta es una obviedad que en ocasiones se olvida, en relación a la repartición nacional del ingreso. El ciclo de huelgas demuestra que los trabajadores no creían que existiera una repartición justa, y que consideraban era ya tiempo de convertir en presente la bonanza prometida a futuro, puesto que habían llevado la carga mayor de sacrificio bajo la consigna de la unidad nacional para el progreso. En segundo lugar, las demandas muestran que tenían una noción colectiva de lo que debía ser justo y, por tanto, consideraban necesario que continuara la disminución de la brecha salarial gracias al aumento del salario industrial promedio (Bortz y Aguila, 2015, pp. 29-30). En tercer lugar, en defensa de sus demandas los obreros expresaron un sentimiento de agravio frente a la actitud patronal que les robaba lo que en justicia les correspondía. La constatación de la repetición de estas experiencias y sentimientos constituía no solo un poderoso empuje a la acción sino un reconocimiento de la diferente perspectiva de clase respecto de la cuestión social.

EDUCACIÓN Y JUSTICIA SOCIAL

La primera negociación contractual también incluía obtener las prestaciones establecidas por ley. Las prestaciones constituían un paquete que extendía las percepciones económicas: vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades, horas extras y otras. Invariablemente los patrones omitían o regateaban en estos rubros, y con frecuencia incumplían los contratos firmados. La ley también mandaba ciertos beneficios que no eran exclusivamente económicos. Uno de ellos era la obligación de los

empresarios a “establecer y sostener” escuelas públicas para sus trabajadores, llamadas Artículo 123 Constitucional (Título cuarto, Cap. I, apartado XII de la Ley Federal del Trabajo). Ese artículo en la constitución de 1917 reconocía los derechos colectivos de los trabajadores y fue clave para la inclusión de la clase obrera en la conformación del Estado corporativo mexicano (Roux, 2005).

Los trabajadores de Celanese, para regresar a sus demandas de 1972, exigieron que la empresa construyera una escuela Artículo 123 (*Punto Crítico*, noviembre de 1972, p. 6; *Hechos*, 15 de octubre de 1972, p. 10). La fábrica estaba localizada en Zacapu, localidad rural en el estado principalmente agrícola de Michoacán. En las áreas rurales el acceso a la educación básica pública era limitado, al contrario de lo que sucedía en las ciudades, y por eso los trabajadores urgían a la empresa a cumplir esta obligación. La demanda, aunque parte del paquete económico, rebasaba este objetivo de redistribución de recursos materiales porque apelaba a una obligación moral de invertir en mejorar la comunidad y el bienestar futuro de los trabajadores que empleaba.

La ley federal que reglamentó el artículo 123 constitucional fue promulgada en 1931. Hasta entonces, las escuelas fundadas por los patrones fueron de jurisdicción estatal, y lo siguieron siendo hasta 1934. La Secretaría de Educación Pública (SEP) obtuvo entonces jurisdicción sobre estas escuelas, debido a que la educación básica era obligatoria y las instalaciones patronales eran deficientes. Los patrones resistieron el empuje de la SEP por fundar escuelas Artículo 123, aduciendo el problema de los costos, aunque de manera más importante su oposición se debía a que perderían el control y discrecionalidad con la que hasta entonces habían cumplido con la obligación constitucional; condenaban tener que pagar el sueldo de un maestro que era contratado por la SEP y que difundiría una ideología adversa a ellos. La oposición fue tenaz, en particular durante el breve periodo en que la educación pública fue socialista, y persistió a través del resto del siglo (Medina Esquivel, 2015). Así, cuando los obreros de Celanese demandaron la escuela, de facto se insertaron en una disputa política acerca del carácter y control de la educación. La empresa concedió en parte: ofreció aportar \$250 mil para “una obra de servicio social”, a la que también contribuirían el gobierno estatal y el sindicato (*La Verdad de Michoacán*, 1 de diciembre de 1972, p. 1).

En Zacapu había ya intervenido un tercero en esta disputa por la educación. Cuando iniciaron las obras de construcción, a fines de los años cuarenta, un sacerdote organizó una primaria con el propósito de ofrecer instrucción básica a los pueblerinos y así aumentar sus posibilidades de contratación en la nueva empresa. El sacerdote Ro-

dolfo Escamilla, uno de los fundadores del Secretariado Social Mexicano, también ocupó tiempo para instruir a los futuros obreros en sus derechos como trabajadores, y de ahí salió el primer impulso para sindicalizar Celanese (Domínguez Castro, 1998, pp. 58-61). En otras zonas del país, el tercero interesado en la educación fue la izquierda. En el sur de Chihuahua, para la década de 1970 ya existían escuelas Artículo 123 en casi todas las poblaciones mineras, y eran físicamente hermosas y de alto nivel académico, acorde a la memoria de alumnas que cursaron ahí la primaria (Olivo, I., entrevista, 15 de agosto de 2016; Aguirre, S., entrevista, 4 de noviembre de 2016). Escaseaban, en cambio, escuelas de nivel superior que aún no era obligatorio. En Santa Bárbara, maestros normalistas y jóvenes de izquierda colaboraron para abrir una secundaria nocturna para trabajadores (Yáñez, R., entrevista, 7 de noviembre de 2016; Barraza, E., entrevista, 9 de abril de 2015). En los recuerdos de estos mineros de los años setenta resuena el eco de lo dicho por un minero de Cananea respecto del maestro comunista que en la década de 1930 les “empezó a abrir los ojos” (Besserer, Díaz y Santana, 1980, p. 1343). En la ciudad de Saltillo, la universidad estatal tenía una preparatoria nocturna para obreros. La presencia de otros interesados en la educación, incluyendo a la izquierda, ensanchó la disputa que Medina identifica entre el Estado y las empresas por el control de la educación (Medina Esquivel, 2018).

La disputa quedó definida en dos documentos de 1975. Uno fue la Declaración de Guadalajara, mediante la cual la Tendencia Democrática de los trabajadores electricistas convocaba a todos los trabajadores del país a luchar por ciertos principios básicos y forzar el retorno del Estado al camino trazado por la revolución popular y nacionalista de 1910. Uno de esos principios concernía a la educación, a la que la Declaración calificaba de popular y revolucionaria, y le encomendaba el objetivo de ayudar “a entender los problemas del país y del mundo y la forma de resolverlos”. Para ello, era necesario pelear por el “acceso de las masas a la educación en todos los niveles”. El otro documento fue la Declaración de Principios del Consejo Coordinador Empresarial que, en primer lugar, reservaba para los padres de familia “el derecho y la obligación de educar a sus hijos”. A continuación, especificaba que el objetivo de la educación era “la dignificación y el perfeccionamiento personales”, además de ser “factor esencial para el progreso económico” a través de formar “técnicos, profesionales y mano de obra capacitada”. Finalmente, atribuía al Estado la obligación de “propiciar un clima de libertad que facilite la participación del sector privado en la programación y realización de las tareas educativas” (Saldívar 1989, pp. 138 y 149).

Los trabajadores se insertaron en esta disputa porque habían ya interiorizado la importancia de la educación, particularmente los nacidos hacia mediados del siglo XX. El discurso liberal decimonónico y posrevolucionario se había sedimentado: la educación era vista como una manera natural de incorporarse a la sociedad moderna y recibir sus beneficios. Claudio explicó las razones que tenían los obreros, es decir, él y sus compañeros, para asistir a la preparatoria nocturna en Saltillo: “Entonces en la educación tú ves una alternativa, porque no, no todos —algunos a lo mejor sí llegaron ahí queriendo hacer la revolución, ¿verdad?— pero no, la mayoría llegamos ahí porque queríamos superarnos más que nada, y una manera de superarte es estudiando” (Montoya, C., entrevista, 9 de julio de 2019). Dado que el Estado prometía el progreso y ponía en las manos de los jóvenes el futuro, ellos tenían el derecho a estudiar. Este era un elemento de la ideología que, proviniendo de las elites, se había naturalizado popular.

La escuela podía extender y multiplicar el horizonte de expectativas. Al mismo tiempo, y en tanto era un terreno en disputa, la educación brindaba herramientas para reinterpretar la experiencia y crear una realidad diferente. En palabras de Everardo, el grupo de mineros jóvenes que estudiaban la secundaria se reconocieron entre sí porque pensaban diferente:

[Nosotros] habíamos tenido oportunidad de estudiar un poco más que los otros, y por lo tanto, pos más conscientes, aparte de que nos había tocado la bronca de los sesenta, sesenta y ocho, todo eso... Llegaban los ecos, pero también llegaba la gente y nos dábamos cuenta de todo. Entonces desde ahí empezaron a ver que pos todo lo que se decía abiertamente pos tenía mucho de mentira, porque la realidad la estábamos sintiendo... (Barraza, E., entrevista, 9 de abril de 2015)

Everardo y algunos compañeros y maestros de la secundaria nocturna fundaron un periódico crítico y constituyeron un núcleo importante de oposición clasista a la dirección del sindicato minero. En el caso de los estudiantes de la prepa nocturna, entre otras acciones, fue ahí que quienes eran trabajadores de CINSA-CIFUNSA iniciaron el examen crítico del sindicato y las condiciones de trabajo que, posteriormente, resultó en la victoria de una dirección democrática y la huelga de 1974 (Montoya, C., entrevista, 9 de julio de 2019). La educación proveía ideas nuevas y horizontes más amplios, y la escuela era un espacio autónomo de encuentro y crítica que posibilitaba transformar las ideas recibidas a la luz de las experiencias vividas.

En muchos casos los trabajadores no requerían o no podían aprovechar esta disposición legal. La Liga de Soldadores, por ejemplo, que trabajaban en construcción y no tenían una base territorial, demandó

una cláusula contractual que asegurara becas para los hijos de sus miembros (*Punto Crítico*, octubre de 1974, pp. 17-18). Los trabajadores de Nissan, vecinos de Cuernavaca, capital estatal que contaba con escuelas públicas, demandaron y obtuvieron financiamiento para construir un centro cultural sindical (*Punto Crítico*, mayo de 1974, p. 10). Los trabajadores consideraban que las empresas que los empleaban debían cumplir de una u otra manera con la responsabilidad de contribuir al desarrollo cultural del trabajador e invertir en el bienestar común futuro mediante la provisión de educación para los hijos.

Otra demanda con implicaciones similares fue la de vivienda. La ley mandaba a los empleadores proveer vivienda para sus trabajadores, y como en el caso de las escuelas, esta era una práctica que venía del siglo XIX. En ese entonces, particularmente entre las fábricas textiles, había sido usual construir vivienda alrededor de la fábrica con el objeto de fijar a la población trabajadora. La ley de 1931 generalizaba esta obligación, y la nueva versión de la ley en 1970 la mantenía (Capítulo III, Habitación para trabajadores, arts. 136-153). Desde el punto de vista obrero, la vivienda era una necesidad y tenían derecho a satisfacerla, aunque su idea no era que la obtuvieran de manera gratuita. Las empresas demoraban o se excusaban por la dificultad de hacerlo, particularmente en las ciudades. Los trabajadores de General Motors en la Ciudad de México vivían hacinados en el viejo barrio de Santa Julia; exigieron que la empresa proveyera vivienda pero ante la expectativa de una larga espera, organizaron una cooperativa, compraron tierras y construyeron su propia colonia al norte de la ciudad (Bachelor, 2001, pp. 310-312). En cambio, entre trabajadores de reciente migración aún en empleos inestables y de baja remuneración, la estrategia fue invadir terrenos. Obedecían a la idea de que era “humanamente posible dar cabida a todos” pero que la vivienda existente era excesivamente cara (Alonso, 1980, p. 307). Consideraban que era un derecho natural y estaban dispuestos a pagar, pero no lo que el mercado fijara sino lo que era justo en consideración de los bajos ingresos. En espacios donde era posible lograr la demanda, los obreros insistieron en ello. Los metalúrgicos de Altos Hornos, en Monclova, demandaron vivienda y obtuvieron 150 casas (*Punto Crítico*, 15 abril de 1977, p. 13); los de Fundidora Monterrey, además de casas, obtuvieron financiamiento para construcción (*Punto Crítico*, 15 de junio de 1977, p. 10); y los de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, en Michoacán, obtuvieron también financiamiento y lotes para construcción de vivienda (*Punto Crítico*, septiembre de 1977, p. 15).

Hubo otras demandas que igualmente ponían la responsabilidad social del patrón por encima del mercado. Los casi 5 mil trabajadores de General Motors exigieron en 1977 una tienda en la que pudieran ad-

quirir lo necesario a módicos precios (*Punto Crítico*, febrero de 1977, p. 15). Los metalúrgicos de la planta peletizadora Peña Colorada, en Colima, exigieron una cooperativa de consumo y obtuvieron un millón y medio de pesos para iniciarla, al igual que el terreno para construirla (*Punto Crítico*, mayo de 1978, p. 11). Aunque recibieron menos atención que las espectaculares demandas salariales, los trabajadores de manera sistemática trajeron a la mesa de negociación y dentro del paquete de reivindicaciones económicas, el cumplimiento de estos deberes que obedecían a una visión moral más que económica.

El lugar central que ocupó este tipo de demandas fue evidente. Generalmente, después de organizar un nuevo sindicato, los trabajadores demandaban reconocimiento de su organización seguido de firma de un contrato colectivo que otorgara todas las prestaciones establecidas por la ley. Es poco probable que los trabajadores conocieran el alcance de la ley, particularmente aquellos que eran primera generación de inmigrantes rurales o que, por primera vez, participaban en un sindicato. Pero aún los más sazonados en lides obreras seguramente se perdían en la extremadamente codificada relación laboral mexicana. Ello explica esa curiosa característica del sindicalismo mexicano en la segunda mitad del siglo XX, en el que eran más prominentes los abogados laborales que los organizadores sindicales, y comúnmente una y otra figura se fusionaban en una sola persona. Efectivamente, era necesario ese conocimiento especializado para navegar los vericuetos de la Ley Federal del Trabajo y obtener beneficios para los obreros, especialmente después de que una nueva ley fue promulgada en 1970. Seguramente eso es lo que tenía en mente Lombardo Toledano cuando en 1961 escribió que todavía había mucho por obtener de la legislación laboral emanada del artículo 123 constitucional (113).

CONCLUSIÓN

La ley consignaba lo que los trabajadores de por sí consideraban un derecho. En el siglo XIX fue parte de nociones aseveradas por las elites ilustradas acerca del bien común, que a su vez se sedimentaron en la cultura popular (Necoechea, 1996; Illades, 2014, pp. 17-38). Esa ley fue resultado de la modificación que el empuje popular armado impuso al proyecto liberal de la república posrevolucionaria. Restablecer el orden después de tres décadas de movilización popular iniciada en 1910 requirió un nuevo pacto estatal generado durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940), que concedía tierra a los campesinos y derechos colectivos a los trabajadores. Esos derechos fueron erosionados una vez que la contrarrevolución arreció en los años posteriores a Cárdenas, opacados por la propaganda acerca de alcanzar progreso y modernidad mediante la unidad nacional. El discurso de unidad

nacional a su vez perdió brillo en los años sesenta, porque los trabajadores constataban que eran conminados a postergar el bienestar posible mientras los patrones obtenían ganancias desproporcionales en el presente. Por eso, la idea de que el salario no era justo y los patrones robaban al trabajador. Al mismo tiempo, la idea de un bien común que subyacía a ese pacto estatal que significó el cardenismo, era traicionada porque los patrones se negaban a contribuir su parte. Fue esta percepción de agravio respecto de lo justo y la justicia social la que impulsó mucho de las protestas. Surgía, acompañando esa percepción, un sentimiento de clase que disputaba la hegemonía cultural ejercida por nociones de unidad nacional y bien común; los trabajadores reinterpretaban lo que vivían a partir de constatar la convergencia de experiencias comunes de explotación y trato injusto.

Las demandas obreras por una mayor porción de la riqueza fueron criticadas por los empresarios por ser egoístas y no considerar que la exigencia ponía en riesgo la empresa y futuras inversiones. En el extremo opuesto, la izquierda consideró que estas demandas no trascendían una conciencia *tradeunionista* —como dijera Lenin— y eran luchas preocupadas por tortilla y manteca, pero no por la transformación social. Investigaciones de las huelgas con frecuencia solo mencionan el carácter económico de la mayoría de ellas y pasan a examinar aquellas que en opinión de los investigadores revistieron importancia política. La breve revisión acometida en este artículo sobre las demandas económicas tiene el objetivo de indagar acerca de las ideas y valores de la clase obrera, y en consecuencia abre la dimensión cultural en torno a nociones de lo justo y la justicia social implicada en estas luchas.

El argumento en torno a las huelgas es que descubren el sentido común respecto al derecho a mejorar condiciones materiales y culturales de vida, y que dicha mejoría dependía del ingreso adecuado y de acceso a servicios básicos como educación y vivienda. Las huelgas muestran, además, la modificación de ese sentido común por sentimientos emergentes en una nueva generación obrera, en particular, el optimismo y la combatividad expresados en esa época. Ese ambiente de época no es otra cosa que la estructura de sentimiento propuesta por Williams: esos sentimientos que una generación nueva tiene, que alteran la comprensión del sentido común y de la ideología hegemónica, que son suficientemente fluidos para parecer que emergen de ningún lugar específico y lo suficientemente fuertes como para establecer una base firme desde la que se reinterpreta la experiencia de vida (Williams, 2011 [1961], p. 69). Javier lo expresó claramente cuando refiere que durante una conversación con su padre acerca de sus motivos para el activismo político, explicó que por tres generaciones

habían sido mineros: “¿Qué hemos tenido? ¡Pos pura pinche pobreza! Entonces pues ser pobre... pues de perdida pobre pero luchar” (Barraza, E., entrevista, 9 de abril de 2015; y Molina, J., entrevista, 10 de abril de 2015). A ello añadimos la percepción de agravio, de que se ha cometido una injusticia en su contra que impele a la rebelión (Pérez Álvarez, 2021, pp. 5-7). Sentimientos similares se repitieron y expresaron en esos años a través de todo el país, para explicar los motivos de las luchas obreras y la finalidad de “mejorar las condiciones de vida de nuestras familias”. Las ideas de justicia de los trabajadores chocaban con las ideas patronales, y esa era una poderosa razón para emprender huelgas, marchas, mítines; la convergencia y repetición de esas experiencias constituyeron una visión de clase desde la que se reinterpretaba la sociedad mexicana.

BIBLIOGRAFÍA

- Alafita Méndez, Leopoldo (1979). 1970-1976: Lucha política y sindicalismo independiente en México. *Anuario II* (Centro de Investigaciones Históricas, Universidad Veracruzana, Jalapa).
- Alonso, Jorge (Ed.) (1980). *Lucha urbana y acumulación de capital*. México: Ediciones de la Casa Chata.
- Archivo General de la Nación (AGN) (1974). Fondo Secretaría de Gobernación s. XX. Sección Investigaciones Políticas y Sociales, caja 1045, Exp. 1 (367 fojas).
- Bachelor, Steven J. (2001). Toiling for the “new invaders”: Autoworkers, transnational corporations, and working-class culture in Mexico City, 1955-1968. En Joseph Gilbert, Anne Rubinstein y Eric Zolov (Eds.), *Fragments of a golden age: The politics of culture in Mexico since 1940*. Durham: Duke University Press.
- Bachelor, Steven J. (2008). Miracle on Ice: Industrial Workers and the Promise of Americanization in Cold War Mexico. En Gilbert M., Joseph y Spenser, Daniela (Eds.), *In from the cold: Latin America's new encounter with the Cold War*. Durham: Duke University Press.
- Basurto, Jorge (1983). *La Clase Obrera en la historia de México. En el régimen de Echeverría: rebelión e independencia. Vol. 14*. México: Siglo XXI.
- Besserer, Federico; Díaz, José y Santana, Raúl (1980). Formación y consolidación del sindicalismo minero en Cananea. *Revista Mexicana de Sociología* (Ciudad de México), 52(4).
- Bizberg, Ilán (1990). *Estado y sindicalismo en México*. México: El Colegio de México.

- Bortz, Jeffrey y Águila, Marcos (2015). Ganarse la vida día a día: una historia de los estudios sobre el salario real en México durante el siglo XX. En *México y el mundo del trabajo: ensayos sobre trabajadores, líderes y gánsteres*. México: CONACULTA.
- Camacho, Manuel (1976). Control sobre el movimiento obrero en México. *Foro Internacional* (Ciudad de México), 16(4).
- Domínguez Castro, José Luis (1998). *Identidad obrera y cambio social. Zacapu: un proceso de industrialización en un contexto rural*. Tesis de Maestría, Zamora.
- Escobar Toledo, Saúl (2021). *El camino obrero. Historia del sindicalismo mexicano, 1907-2017*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Fernández Sousa, Jorge (2014). Yucatán, 1973-1974. En Arcadio Sabido Méndez y Pedro Quijano Uc (Coords.), *Efraín Calderón Lara Charras, movimiento popular 1973-1974 en Yucatán*. Mérida: Maldonado Editores del Mayab.
- González Casanova, Pablo (1966). *La democracia en México*. México: Era.
- Guillén Romo, Héctor (1984). *Orígenes de la crisis en México, 1940-1982*. México: Era.
- Illades, Carlos (2014). *De La Social a Morena*. México: Jus.
- Labastida M. del Campo, Julio (1975). Tula: una experiencia proletaria. *Cuadernos Políticos* (Ciudad de México), 5.
- Loaeza, Soledad (2010). Modernización autoritaria a la sombra de la superpotencia, 1944-1968. En AAVV, *Nueva Historia General de México*. México: El Colegio de México.
- Lombardo Toledano, Vicente (1961). *Teoría y práctica del movimiento sindical mexicano*. México: Editorial del Magisterio.
- Medina Esquivel, René (2015). Las escuelas Artículo 123 ¿Un dolor de cabeza para la SEP? Disputas jurídicas entre el Estado mexicano y el poder patronal, 1932-1942. *Secuencia* (Ciudad de México), (91).
- Medina Esquivel, René (2018). “Los forjadores de hombres”: Disputas por el control de las escuelas y el espacio público en comunidades mineras mexicanas, 1917-1978. *Cadernos de História da Educação* (Uberlândia), 17(3).
- Molina, Daniel (1987). Las luchas mineras en el periodo 1970-1982. En Javier Aguilar García (Coord.), *Los sindicatos nacionales en el México contemporáneo: minero-metalúrgicos. Vol. 2*. México: GV Editores.

- Moreno-Brid, Juan Carlos y Ros Bosch, Jaime (2010). *Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana: una perspectiva histórica*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Mraz, John (2001). Today, tomorrow and always: The golden age of illustrated magazines in Mexico, 1937-1960. En Gilbert, Joseph; Rubinstein, Anne y Zolov, Eric (Eds.), *Fragments of a golden age: The politics of culture in Mexico since 1940*. Durham: Duke University Press.
- Necoechea Gracia, Gerardo (1996). La idea de trabajo y su secularización, 1780-1910. *Historias* (Ciudad de México), (36).
- Necoechea Gracia, Gerardo (2005). *Después de vivir un siglo*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Necoechea Gracia, Gerardo (2019). Huelga y solidaridad en el pueblo minero de Santa Bárbara. *Signos Históricos* (Ciudad de México), 21(41).
- Pérez Álvarez, Gonzalo (2021). *Las causas de la rebelión según los testimonios de trabajadorxs de la Patagonia argentina*. Ponencia presentada en el XIV Encuentro Nacional y VIII Congreso Internacional de Historia Oral, Rosario, Argentina.
- Pérez-Arce Ibarra, Francisco (2012). *El principio 1968-1988: años de rebeldía*. México, Partido de la Revolución Democrática, Para Leer en Libertad.
- Roux, Rhina (2005). *El Príncipe mexicano: subalternidad, historia y Estado*. México: Era.
- Rubenstein, Anne (1998). *Bad language, naked ladies, and other threats to the nation: a political history of comic books in Mexico*. Durham: Duke University Press.
- Saldívar, Américo (1989). *Fin de siglo. México un pueblo en la historia. Vol. 7*. México: Alianza Editorial Mexicana.
- Tello, Carlos (1971). Notas para el análisis de la distribución personal del ingreso en México. *El Trimestre Económico* (Ciudad de México), 38(150).
- Thompson, E. P. (1997 [1977]). Folclor, antropología e historia social. En *Historia social y antropología*. México: Instituto Mora.
- Trejo Delarbre, Raúl (1976). Lucha sindical y política: el movimiento en Spicer. *Cuadernos Políticos* (Ciudad de México), (8).
- Trejo Delarbre, Raúl (1979). El movimiento obrero: situación y perspectivas. En González Casanova, Pablo y Florescano, Enrique (Coords.), *México hoy*. México: Siglo XXI.
- Williams, Raymond (2011 [1961]). *The long revolution*. Wales: Parthian.

Zapata, Francisco (1976). Afiliación y organización sindical en México. En José Luis Reyna et al., *Tres estudios sobre el movimiento obrero en México*. México: Colegio de México.

ENTREVISTAS REALIZADAS POR GERARDO NECOECHEA G.

Aguirre, Silvia (2016). Chihuahua, 4 de noviembre.

Barraza, Everardo (2015). Chihuahua, 9 de abril.

Molina, Javier (2015). Chihuahua, 10 de abril.

Montoya, Claudio (2019). Saltillo, 9 de julio.

Olivo, Irma (2016). Ciudad de México, 15 de agosto.

Yáñez, Rodrigo (2016). Chihuahua, 7 de noviembre.

ENTRE ACORDOS DE CÚPULAS E A CLASSE TRABALHADORA

**SOCIALDEMOCRACIA, TRABALHISTAS, TROTSKISTAS E
CRISTÃOS NA REORGANIZAÇÃO DAS FORÇAS DE ESQUERDA
NO BRASIL (1974-1985)**

**Reinaldo Lindolfo Lohn, Victor Emmanuel Farias
Gomes e Geovanni Rocha Junior**

INTRODUÇÃO

Quando os trabalhadores da Saab-Scania de São Bernardo do Campo, em 12 de maio de 1978, cruzaram os braços, iniciaram uma onda de greves que se espalhou por outras categorias e cidades. Era um ato de coragem e afirmação de um novo campo da luta dos trabalhadores no Brasil, conhecido como o “Novo Sindicalismo”, que tinha na região do ABC paulista e no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, então presidido por Luís Inácio “Lula” da Silva, seu centro de atuação. As organizações sindicais da região já tinham papel importante na oposição à ditadura, como no caso das críticas à política salarial do regime. No ano anterior os sindicalistas foram informados que o governo havia alterado os índices de inflação do período entre 1973 e 1974, o que implicava em reajustes mais baixos dos salários. Além do papel das greves na organização do movimento operário e na participação efetiva na contestação ao regime, o “Novo Sindicalismo” também deu impulso decisivo para que novos atores participassem da reorganização partidária das esquerdas no Brasil.

Este processo de reativação de forças políticas no Brasil envolveu ainda outros personagens e relações, especialmente políticos e partidos cujas trajetórias haviam sido interrompidas ou modificadas pelo golpe civil-militar de 1964. Um episódio que pode ser conside-

rado marcante neste processo de reativação política das esquerdas ocorreu em 1976, no mês de maio, quando a capital da Venezuela, Caracas, foi sede de um encontro que reuniu dirigentes políticos da Europa e da América. Apesar de não ser formalmente um evento da Internacional Socialista, o dirigente desta entidade, Willy Brandt, foi um dos protagonistas da ocasião. Brandt era a figura de proa de uma organização que reivindicava ser uma remanescente da Segunda Internacional Socialista e Operária, fundada em 1889. A entidade europeia, segundo Michael Löwy (1981), passara a se interessar pela América Latina como fonte potencial de insumos energéticos aos países industrializados. No contato com os latinoamericanos, o alemão Brandt tinha como fiel escudeiro o primeiro-ministro português Mário Soares, liderança política beneficiária do esgotamento revolucionário da chamada Revolução dos Cravos no país ibérico, além de outras figuras influentes, como Felipe Gonzalez, dirigente socialista espanhol. Além dos venezuelanos, estiveram presentes dirigentes argentinos, uruguaios, chilenos e mexicanos, dentre outras nacionalidades. O Brasil não foi representado por qualquer organização partidária formal no evento. Mas, viajaram a Caracas o senador Marcos de Barros Freire, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido da oposição consentida à ditadura militar, e o empresário e editor paulista, Fernando Gasparian. Ambos estariam envolvidos nas discussões para a criação de um partido socialista aos moldes da social-democracia europeia.

Paralelamente, ao longo daqueles anos e adentrando a década de 1980, outras expressões das lutas em torno da transição política no Brasil marcaram presença, neste caso, oriundos das bases de novos movimentos que tinham pouca visibilidade nos encontros das cúpulas partidárias e se organizavam por meio de outras formas e canais. Em outubro de 1982, o Centro de Informações do Exército elaborou um relatório que buscava avaliar a presença do chamado clero progressista na organização de movimentos populares em diferentes regiões do país. O documento, assinado pelo General Mário Orlando Ribeiro Sampaio, então chefe do CIE, traz algumas inquietações do regime militar em relação ao processo de abertura política, destacando principalmente os conflitos que poderiam emergir no tecido social em função dos desajustes econômicos da primeira metade da década de 1980, o que colocaria em risco o desfecho de uma transição “lenta, gradual e segura”. O relatório permite observar as articulações políticas constituídas pelo clero progressista, assim como a circulação de uma retórica social que foi mobilizada por meio das Comunidades Eclesiais de Base e que consistia em politizar os problemas materiais do cotidiano, como o elevado preço dos alimentos, a fome, o acesso à

moradia, o direito à terra e o combate ao desemprego. Essa retórica social, possivelmente, sofreu influência e, ao mesmo tempo, influenciou as experiências de setores populares e das classes trabalhadoras, confirmando a relevância que teve o cristianismo da libertação no processo de reorganização das esquerdas e de interação com a classe trabalhadora.

Neste texto, procuramos refletir como essas três frentes sociais e políticas estiveram presentes no processo de transição ocorrido no Brasil entre as décadas de 1970 e 1980. As relações e debates entre socialdemocratas, socialistas, cristãos de esquerda e trotskistas envolviam diferentes concepções da transição política brasileira e da interação da esquerda com o novo movimento operário que então despontava. Por outro lado, partimos da compreensão de que os processos políticos que marcam a sociedade brasileira recentemente, especialmente aqueles que dizem respeito às forças partidárias e agentes que atuam em seu interior, passam pelo conhecimento mais aprofundado da transição que envolveu a formação da chamada Nova República, com as tratativas para a montagem de um sistema político representativo e formalmente democrático. Por meio de diferentes documentos, sejam os registros coletados em veículos de imprensa, textos de organizações políticas ou ainda os relatórios produzidos por órgãos do aparato repressivo do regime autoritário sob a coordenação do Serviço Nacional de Informações (SNI), é possível abordar as formas como foram organizados os contatos e disputas em torno da transição política e a inserção das esquerdas nas então novas configurações do campo político brasileiro. As relações entre o movimento sindical, as organizações populares articuladas em torno das perspectivas de um socialismo de inspiração cristã, bem como as conexões internacionais de agrupamentos socialdemocratas e trabalhistas, bem como de socialistas ainda inspirados por perspectivas insurrecionais, permitem abordar de maneira mais complexa uma temática ainda hoje muitas vezes circunscrita à descrição de negociações parlamentares e institucionais.

ENTRE SOCIALDEMOCRATAS E TRABALHISTAS

No início de 1978 um político brasileiro dos mais conhecidos e que permanecia no exílio desde o golpe que derrubara, 18 anos antes, o presidente João Goulart, chegou a Lisboa. Leonel Brizola havia sido expulso do Uruguai em setembro do ano anterior, provavelmente por pressão dos militares brasileiros (Leite, 2019). Em princípio, considerando a política externa do então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, favorável à difusão de um discurso internacional em defesa dos direitos humanos, o que gerava constrangimentos à ditadu-

ra brasileira, Brizola procurou a embaixada norte-americana, tendo recebido autorização para viajar àquele país. Posteriormente, depois de alguns meses de contatos internacionais, a chegada em Lisboa parecia confirmar que um Brizola, a princípio sem planos políticos específicos, finalmente reentraria no debate público sobre o Brasil e sua abertura política.

Sua chegada à capital portuguesa configurava a consecução de um processo político mais amplo e que extrapolava suas iniciativas pessoais. Brizola passou a situar-se no âmbito de conexões internacionais iniciadas, pelo menos, dois anos antes, na referida reunião de Caracas, a qual fez parte de frequentes contatos com a Internacional Socialista que se seguiram e que interessavam a determinadas personalidades das forças oposicionistas do Brasil. A Internacional Socialista configurava-se como uma entre outras oportunidades para a construção de uma espécie de fórum de discussões internacionais sobre a transição brasileira, o que tinha ao menos a possibilidade de gerar desgastes à ditadura brasileira por meio das denúncias às violações a direitos humanos cometidas pelo aparato repressor. Em Portugal, Brizola contava com Mario Soares para viabilizar seu ingresso em um círculo de conversações de cúpula delineado pela social-democracia europeia. Tal iniciativa teria, inclusive, levado a um alargamento das perspectivas de ação do político brasileiro, sob a influência de novos repertórios para a ação coletiva que situavam a questão democrática brasileira em perspectiva internacional (Marques; Gonçalves, 2016).

Como mencionado anteriormente, as movimentações de Brizola em Portugal haviam sido antecedidas por relações estabelecidas por personalidades como Fernando Gasparian, que participara da reunião de Caracas em 1976. O evento foi anunciado como um encontro para a “Solidariedade Democrática Internacional”, sob os auspícios de Carlos Andrés Perez, presidente da Venezuela, contando ainda com o aporte do Partido Social-Democrata da então Alemanha Ocidental (SPD), sob a liderança de Willy Brandt. Foram discutidas novas relações internacionais entre os países e condenadas as violações aos direitos humanos cometidas pelas ditaduras que então dominavam diferentes países do subcontinente latinoamericano. Ao mesmo tempo em que circulava por tais meios internacionais da socialdemocracia, Gasparian mantinha contatos com redes de intelectuais progressistas da Universidade de São Paulo, acompanhado desde cedo por Fernando Henrique Cardoso, e também com lideranças do Partido Democrata Cristão (PDC), como Franco Montoro e Plínio de Arruda Sampaio, além de Rubens Paiva, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Havia sido ainda um integrante do Partido Socialista Brasileiro, quando desenvolvera proximidades com Antônio Cândido e Cláudio Abramo.

Na época, Gasparian ainda era um dos que seguiam sendo influenciados pelas interpretações acerca do subdesenvolvimento latino-americano desenvolvidas na Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL). Após o golpe de 1964, passou a colaborar com o MDB e desenvolveu atividades empresariais no campo editorial, o que o levaria a fundar, em 1972, o influente semanário *Opinião* (Candido, 2018, pp. 47-63). A publicação reuniu boa parte de uma elite intelectual com impacto nas relações políticas brasileiras de então, envolvendo nomes como o referido Fernando Henrique Cardoso, além de Celso Furtado, Paulo Emílio Salles Gomes, Luciano Martins, Francisco de Oliveira, Paul Singer e Francisco Weffort. Entre estes nomes quais encontravam-se alguns dos que estavam ligados ao Centro Brasileiro de Pesquisa e Planejamento (CEBRAP), criado em 1969, um importante centro de investigações que formularia políticas e estratégias de ação para a oposição institucional à ditadura e se tornaria um *think tank*.

Na condição de articulador de conexões internacionais com o Brasil e parte da oposição consentida pela ditadura, Fernando Gasparian fez uso de *Opinião* como instrumento para estreitar vínculos com lideranças da Internacional Socialista. Seus contatos com integrantes da entidade europeia foram aprofundados após a reunião de Caracas e, desde então, encontrara-se em algumas oportunidades com políticos europeus. No próprio ano de 1976 estivera em Lisboa, onde manteve conversações com Mário Soares, em uma iniciativa que foi recoberta por um caráter que seria apenas de interesse jornalístico. Contudo, os contatos estabelecidos tinham interesse mais amplo, o que chamou a atenção dos representantes da ditadura brasileira situados em Portugal. A embaixada brasileira em Lisboa, na qual havia um dos braços mais atuantes do Centro de Informações do Exterior (CIEX), órgão do SNI, acompanhou de perto os passos de Gasparian (CIEX. 361/1976. Arquivo Nacional: BR. AN, BSB. IE). A ditadura brasileira preocupava-se com as iniciativas do editor de *Opinião* com vistas à criação de um Partido Socialista patrocinado pelos socialdemocratas europeus. Fernando Gasparian seria um dos líderes da possível reorganização dos socialistas brasileiros, desta vez orientados diretamente pela perspectiva socialdemocrata europeia, a qual tinha grande prestígio internacional em um contexto em que vários dos integrantes da Internacional Socialista eram também chefes de governos em seus respectivos países.

Tais iniciativas não deixaram de repercutir nos meios oposicionistas brasileiros, especialmente no exterior, onde boa parte dos ativistas estavam exilados. As perseguições e banimentos levaram muitos oposicionistas brasileiros a buscar abrigo em diferentes países, o que envolveu em certos casos a que muitos dos que tinham posições

mais combativas no espectro das oposições brasileiras convivessem ou ao menos fossem obrigados a dialogar, dada a condição comum de exilados, com aqueles que buscavam a moderação. Isso significava um debate frequente sobre a situação brasileira por meio dos canais possíveis em âmbito internacional, especialmente em países em que houvesse interesse na imprensa pela situação brasileira. Este era o caso particular de Portugal, país em que, graças ao idioma comum, além do contexto de construção democrática ampla que se seguiu à Revolução dos Cravos, a imprensa foi frequentemente procurada para externar pontos de vista de personalidades brasileiras sobre os possíveis passos de uma transição política no Brasil.

No que diz respeito à iniciativa de aproximação da oposição brasileira com a Internacional Socialista, cabe destacar a posição de Luiz Carlos Prestes, então ainda à frente do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Em um evento a que fora convidado pelos comunistas portugueses no mesmo período em que ocorria a reunião socialdemocrata de Caracas, acentuou que “nenhum movimento capitalista pode resolver os graves problemas do nosso povo”, quando propugnou uma “revolução nacional e democrática” (*O Diário*, 1976). Prestes rejeitava tanto conversações que dissessem respeito a uma aproximação com o que então era chamado em Portugal de “socialismo democrático” quanto com os chamados eurocomunistas, movimento que empolgava alguns de seus partidários alinhados às posições dos comunistas italianos ou espanhóis (Napolitano, 2014).

Por outro lado, representando os setores nacionalistas que se abrigavam no MDB, Miguel Arraes também discordava da aproximação com a Internacional Socialista. Por ocasião dos debates que estavam em andamento nesse sentido, afirmou: “a socialdemocracia europeia não pode ser transplantada para o Brasil”. Sugeriu ainda cautela em relação às “boas intenções” de Jimmy Carter quanto aos direitos humanos e às críticas às ditaduras militares latinoamericanas. Especialmente, considerava que não poderiam ser transplantados “partidos ou formulações ideológicas” para a América Latina como haviam feito suas elites no século XIX (*A Capital*, 1977). Para Arraes, as lutas pela independência nacional e a defesa dos interesses do chamado Terceiro Mundo não poderiam estar sob o patrocínio dos europeus.

Em meio a tais conversações e contatos, ocorreu a morte do ex-presidente João Goulart, em 06 de dezembro de 1976. Goulart também resistia, segundo Jorge Ferreira (2011, pp. 643-645), ao assédio da Internacional Socialista, por temer que o nacionalismo do antigo Partido Trabalhista Brasileiro fosse tomado por ideias “estrangeiristas”. Lembrava aos que defendiam a ideia da filiação à Internacional que esta nada respondia aos atentados que vitimavam antigos mem-

bros do governo de Salvador Allende. Jango insistia que o ingresso de seu partido na Internacional Socialista tenderia a reforçar a retórica da ditadura contra os opositoristas. O caráter eurocêntrico e seu alinhamento quase automático às políticas norte-americanas geravam fortes desconfianças em relação à Internacional Socialista entre as esquerdas da América Latina (Pedrosa, 2013). Contudo, segundo registros da imprensa portuguesa, em de setembro de 1976, o expresidente viajara até Lisboa, onde estabeleceu contato “na órbita da Internacional Socialista, com Mário Soares a servir de padrinho junto dos alemães” (*Expresso*, 1976).

É neste ambiente e no interior de tais pautas políticas que Leonel Brizola desembarcou em Lisboa, na ocasião como líder incontestado do trabalhismo brasileiro, após a morte de João Goulart. O ex-governador do Rio Grande do Sul, lembrado por suas iniciativas nacionalistas e pelos embates da década de 1960, juntou-se a diferentes lideranças políticas brasileiras na Europa. Seja atuando na oposição consentida ou na condição de exilados, no país ibérico diferentes ativistas políticos brasileiros encontraram um ponto de apoio para aproximações com a perspectiva socialdemocrata europeia. Tais conexões ocorriam no âmbito do que seria a longa transição brasileira para um regime formalmente democrático, a qual teve como marcos definidores certas delimitações estabelecidas pelo próprio regime e que foram tacitamente aceitas pelos que participaram, direta ou indiretamente, das negociações que redundariam no fim do regime autoritário.

De certo modo, as iniciativas com vistas a operar em um âmbito fortemente institucionalizado, bem como em um círculo de forças políticas enquadradas no cenário dos países centrais, significavam uma busca por aceitação nas mesas de negociação das cúpulas políticas brasileiras. Desse modo, a transição e o processo de redemocratização estavam sendo projetados tendo por base exclusivamente as disputas eleitorais e os mecanismos institucionais derivados dos acordos conduzidos entre o governo e a oposição legalizada, sob uma “hegemonia liberal no processo imediato de transição, o que foi plenamente atingido” (Napolitano, 2002: 150-155). Isso resultou, entre outras medidas, na adoção de uma lei de anistia apresentada pelo próprio regime que condicionou a libertação de presos políticos e a restauração de direitos de líderes da oposição à impunidade dos chefes da ditadura e agentes da repressão (Fico, 2010). Em paralelo, também no âmbito das esquerdas, boa parte dos oponentes à ditadura brasileira passou por uma transformação fundamental, quando uma lógica revolucionária seria paulatinamente substituída por uma tomada de posição em favor da democracia como “valor universal” (Coutinho, 1979). Conforme Florestan Fernandes (1986, p. 19), o que se seguiu foi uma

“transição sem ousadias e sem turbulências”, significando que “a ditadura não seria desmantelada e que ela serviria de guia a uma democratização sui generis que sairia das entranhas do regime”.

Nos marcos de tais limites e contatos internacionais, Brizola organizou em Lisboa uma reunião com diferentes ativistas, políticos e intelectuais, a qual teve como ponto marcante a formulação de um documento chamado “Carta de Lisboa”. Esta seria um programa mínimo para a reorganização do Partido Trabalhista Brasileiro, posteriormente denominado Partido Democrático Trabalhista (PDT). Esta “adaptação do trabalhismo aos novos tempos” (Marques; Gonçalves, 2016) implicou em uma série de desdobramentos para as esquerdas no Brasil. Uma delas, a mais evidente, foi a incorporação de retóricas e repertórios de uma socialdemocracia transnacional por movimentos políticos originários do varguismo e que haviam estruturado suas linhas de ação desde o final da ditadura do Estado Novo (1937-1945), bem como do nacionalismo das décadas de 1950 e 1960. Brizola aproveitou e reorientou os contatos que haviam sido estabelecidos anteriormente por Fernando Gasparian e outras personalidades brasileiras, apresentando-se como um inusitado articulador capaz de juntar o repertório socialdemocrata aos nacionalistas inspirados por Getúlio Vargas. Esta reorganização de tais forças políticas ensejou ainda debates que tensionavam as formas possíveis para compreender as lutas sociais em um momento em que ressurgiam nas ruas e bairros novos tipos de movimentos populares, questionando as negociações pelo alto.

O ENCONTRO DE TROTSKISTAS COM OS TRABALHADORES E O TRABALHISMO

Dos muitos interessados no processo de reconstrução das organizações de esquerda no país ao final da década de 1970, estavam dois intelectuais e militantes que traziam a experiência do fim de outra ditadura, a do Estado Novo. Mário Pedrosa e Edmundo Moniz estiveram juntos, na década de 1930, nas organizações trotskistas e, posteriormente, após romperem com as teses de Leon Trotsky sobre a União Soviética, continuaram em luta contra a ditadura de Getúlio Vargas, sobretudo em seus meses finais, quando fundaram a União Socialista Popular (USP). Também levaram ao público o jornal *Vanguarda Socialista*, um divulgador de textos clássicos do marxismo e de artigos sobre a conjuntura nacional. O projeto de transformar a União Socialista Popular em um partido político acabou fracassando e Pedrosa seguiu, em 1947, para o recém-fundado Partido Socialista Brasileiro (PSB). Edmundo Moniz, que não concordou com o movi-

mento, manteve sua atuação política e profissional através de seus textos no jornal *Correio da Manhã*.

Em 1978, os dois tinham interesses em comum, pois defendiam a criação de um partido socialista, mas seguirão, entretanto, caminhos diferentes. No mesmo ano, mais precisamente em agosto de 1978, Mário Pedrosa divulgou uma carta aberta a Luiz Inácio Lula da Silva, o mais importante líder operário de então e que despontava com uma liderança política fundamental daqueles anos da transição brasileira. Lula acabara de participar, ao lado de outras lideranças do movimento sindical, do V Congresso Nacional dos Trabalhadores da Indústria. O encontro foi marcado por um conflito entre a direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI), representada em seu presidente, Ari Campista, e o grupo de sindicalistas que propuseram um regimento alternativo ao apresentado pela organização do congresso. O problema não era uma mera formalidade, mas expressava a ascensão de uma nova plataforma de reivindicações do sindicalismo, materializada, naquele Congresso, em uma “Carta de Princípios” (Alves, 1989).

A mensagem que Pedrosa enviou a Lula, em agosto daquele ano, foi diretamente influenciada pelo ato de rebeldia dos sindicalistas no Congresso. O “ex-trotskista” via naquele setor da oposição à ditadura o principal elemento das forças políticas em movimento.

CARTA ABERTA A UM LÍDER OPERÁRIO

Lula:

Tenho acompanhado com o mais vivo interesse sua atuação no movimento operário e, mais recentemente, no Congresso dos Trabalhadores na Indústria realizado nesta Capital. Por isso, valho-me desta carta para lhe testemunhar minha alegria de velho militante socialista pela firmeza, lucidez e combatividade que você demonstrou no transcurso dos trabalhos. Sei que você, cuja liderança vem tomando vulto de norte a sul do país, no movimento da classe operária brasileira, não gosta muito de manifestações de intelectuais na vida sindical. Compreendo e respeito sua ojeriza nesse sentido, pois a história desse movimento operário, principalmente no Brasil, está recheada de exemplos de salamaléques, tapinhas nas costas e outros tipos de engodo, com que certos “intelectuais”, mormente em vésperas de eleições, procuram bajular os trabalhadores. Felizmente, desses trejeitos nunca sofri, muito menos, hoje, nessa idade em que não se é mais candidato a nada, a não ser continuar fiel às idéias da mocidade. Esta fidelidade às idéias é o que me faz escrever-lhe esta carta e precisamente na qualidade de intelectual. Para que? Dar-lhe conselhos? Positivamente não. Um jovem militante de sua têmpera, de sua inteligência, de seu devotamento, não é produto feliz do caso. E um produto necessário da classe operária emergente da nova sociedade brasileira. (...) Esse é o movimento histórico mais importante e fecundo da hora brasileira. (Pedrosa, 1980, pp. 11-12)

No movimento dos trabalhadores do qual Lula era importante referência, Pedrosa reconhecia o elemento que considerava que faltara à outra redemocratização da qual participou como membro ativo da militância de esquerda, pois “a hora da emergência da nova classe operária e da emergência de um Brasil novo, liberto afinal da opressão” (Pedrosa, 1980, p. 12), enfim se encontravam. Em 1945, a União Socialista Popular, da qual Pedrosa fazia parte, apresentou um programa mínimo (*Correio da Manhã*, 1945) ao então candidato à Presidência da República, o brigadeiro Eduardo Gomes, que concorreria pela União Democrática Nacional, no qual um dos pontos defendia a autonomia sindical e o direito de greve. Era um posicionamento da organização contra a legislação sindical criada durante os quinze anos nos quais Getúlio Vargas esteve à frente do Executivo Federal. As intenções de Pedrosa e dos demais integrantes da USP malograram entre 1945 e a nova Constituição de 1946, que consagrou a força do Estado diante dos sindicatos, movimento apoiado por muitos que compuseram, na primeira hora ou tardiamente, a oposição ao Estado Novo (Almino, 1980). Dessa forma, o Ministério do Trabalho continuava com o poder de reconhecer os sindicatos, intervir em suas direções, criar entidades e controlar suas finanças através do “imposto sindical”.

A importância que a autonomia das organizações sindicais possuía no programa defendido em 1945 por Mário Pedrosa, reapareceu na carta escrita para Lula. O intelectual apresentava a questão como a continuação das disputas perdidas anteriormente:

Quais são as forças motrizes da nova situação, capazes de convocar o povo, mobilizá-lo, guiá-lo pacificamente para uma Assembléia Nacional Constituinte, eleita soberanamente pelo povo? Esta classe operária que você se empenha, com seus companheiros de trabalho, em organizar em sindicatos livres da tutela do Estado, com plena autonomia, direito de greve, contratos coletivos de trabalho e uma luta intransigente contra o peleguismo. A Emenda à Constituição que Fernando Henrique Cardoso, candidato ao Senado Federal pelo MDB, acaba de enviar à Presidência do MDB para que seu Partido leve ao plenário do Congresso Nacional é a iniciativa mais radical e profunda de quantas a Oposição ao atual regime já apresentou. Com ela o Professor Fernando Henrique Cardoso marcou a diferença entre 1945-46 e 1978, isto é, entre a crise do fim da Segunda Guerra e do Estado Novo e a atual, em que se assistem os primeiros signos da agonia do sistema burocrático-militar que nos governa desde 1964. Em 1945-46, os democratas, liberais e socialistas chegaram a impor ao candidato anti-Estado Novo que levantasse a bandeira da democracia em sua totalidade, pois na luta pelas liberdades democráticas ali estavam também o direito de greve e a liberdade e autonomia sindical em face do Estado que, como se sabe, na legislação fascista do Estado Novo eram proibidas e davam cadeia aos que a preconizassem. (Pedrosa, 1980, pp. 13-14)

Dessa vez, Pedrosa via que o desmantelamento da legislação sindical encontrava, no “Novo Sindicalismo”, sua genuína representação política. O documento terminava com a sugestão de uma via pela qual a luta dos trabalhadores poderia trilhar. Para ele, a demolição da legislação sindical proporcionaria a oportunidade do surgimento de

um movimento operário realmente profundo, livre, nitidamente trabalhista dentro do qual todas as forças populares legítimas se vão unir para um só ramal, o socialismo: Movimento dos Trabalhadores pelo Socialismo. Cunha-se assim com a naturalidade das coisas elementares o partido que a consciência proletária de que você e seus companheiros estão imbuídos. (Pedrosa, 1980: 14-15)

O intelectual, portanto, foi um dos primeiros a falar do setor dos trabalhadores brasileiros representado pelos operários do ABC paulista como o embrião de um partido político que disputaria o poder, como a tradição marxista — com a qual Pedrosa continuava vinculado — esperava. Não se tratava de uma voz isolada ou de um ato pioneiro, mas de apoio a tendências já expressas. Lincoln Secco (2011: 40), por exemplo, em *História do PT*, citou declaração feita por Lula em julho de 1978, na qual ele afirmava que “a organização da classe operária num partido era só questão de tempo”.

No ano seguinte, a ideia tomou forma nas movimentações para a criação do Partido dos Trabalhadores (PT), que ganhava documentos fundadores e tinha os primeiros encontros para sua formação. Mário Pedrosa, com 79 anos de idade, acompanhava os passos do Partido dos Trabalhadores e dedicou alguns artigos às questões que rodeavam a organização, publicados no efêmero *Jornal da República*.¹ Ao todo, foram cinco textos escritos entre agosto e janeiro de 1979: “O futuro do povo”; “Sindicato ou partido”; “A missão do PT”; “Contra o veto do João”; “O PT e o Estado”; todos discutindo o papel do Partido dos Trabalhadores na luta política de então. Mas havia tempo ainda para uma outra contribuição de Pedrosa ao PT: a reunião de alguns intelectuais de sua geração em apoio ao partido. Quem registrou o papel de Mário Pedrosa foi Antônio Candido:

Em 1979 ele me procurou mais de uma vez para falar do partido que os metalúrgicos do ABC estavam formando e para o qual queriam que eu entrasse. Tivemos conversas longas, uma delas partilhada por Plínio Mello, e estivemos juntos em sessões preparatórias no Sindicato dos Jornalistas.

¹ O *Jornal da República* circulou entre agosto de 1979 e janeiro de 1980. Tinha Raymundo Faoro como Diretor e Mino Carta como Editor-Chefe. As dificuldades financeiras abreviaram a existência do jornal.

Eu resisti um pouco, pois tinha a intenção de nunca mais ser membro de organizações partidárias, devido às minhas lacunas como militante. Mas Mario insistiu e eu compreendi a sua insistência, pois o projeto era feito para nos interessar por mais de uma razão. Por exemplo: era a primeira vez que no Brasil os próprios operários assumiam esse tipo de iniciativa, com um senso de autonomia que os fazia desconfiar da adesão eventual de intelectuais e estudantes, atitude que Mario levou-os a modificar, e essa foi uma das suas grandes contribuições. Além disso, o projeto correspondia ao que tínhamos querido fazer no passado e só conseguimos em escala muito limitada, quase simbólica, isto é, um partido decididamente de esquerda, com base operária, afastado das disputas do socialismo tradicional e procurando estabelecer critérios adequados à nossa realidade. (Candido, 2001, pp. 16-17)

Antônio Candido também participara da luta contra o Estado Novo e militou com Pedrosa no Partido Socialista Brasileiro, do qual se afastou na década seguinte. Crítico literário consagrado, atribuiu a Pedrosa e Febus Gikovate, outro ex-trotskista e companheiro de PSB, a sua presença no encontro fundacional do Partido dos Trabalhadores, realizado no Colégio Sion, no dia 10 de fevereiro de 1980. Na reunião, Mário Pedrosa foi o primeiro dos intelectuais a assinar a ficha de filiação, ato que simbolizava a sua importância no debate em defesa da criação do PT.

Mas nem todos os antigos companheiros foram convencidos pelas palavras e o exemplo de Mário Pedrosa, embora os interesses não parecessem, de imediato, divergentes. Edmundo Moniz, que retornara do exílio em 1976, também estava debatendo, em 1978, a reorganização das esquerdas no Brasil. Até o golpe de 1964, Moniz havia sido um ferrenho crítico dos trabalhistas, mas, com a ditadura instalada no poder, colaborou com iniciativas com características de “frentes” políticas. Assim, se aproximou dos trabalhistas durante as articulações para a formação da Frente Ampla e, durante o exílio iniciado em 1968, foi um dos interlocutores de João Goulart no Uruguai, chegando a participar das discussões para a formação de um novo partido trabalhista ao redor do ex-presidente. Portanto, sua atenção estava voltada, antes de tudo, aos gestos e intenções da principal liderança dos trabalhistas, Leonel Brizola.

Como mencionado anteriormente, a aproximação do ex-governador do Rio Grande do Sul da socialdemocracia europeia assegurava uma roupagem moderna para quem apostava em uma postura moderada na retomada de sua trajetória no Brasil. Moniz não simpatizava com o diálogo junto à Internacional Socialista e divergia das posições de Brizola acerca da refundação do Partido Trabalhista Brasileiro. Após retornar do exílio, sua atuação foi bastante discreta, já que a sua

principal tribuna de atuação, a grande imprensa, não era mais o seu local de trabalho de articulação política. Entretanto, a discrição não significava afastamento da luta política. Em 1978, Moniz foi um dos entrevistados pelo jornal *Versus*, publicação da imprensa alternativa que se aproximou das posições dos trotskistas da Convergência Socialista e, portanto, fazia uma campanha pela criação de um partido socialista no Brasil. Sendo assim, sobretudo durante o ano de 1978, *Versus* realizou várias matérias com intelectuais e líderes de esquerda, de diferentes tendências, acerca das ideias para a reconstrução do sistema partidário.

No seu depoimento, Moniz criticou a construção de organizações partidárias a partir de “gabinetes”, como se o momento ainda exigisse o método conspiratório de antes, que dava a poucos líderes a tarefa de criar uma sigla. Dessa forma, o nome Partido Trabalhista Brasileiro não parecia ser o principal entrave, mas o programa, que Moniz defendia ser socializante e o método de sua formação. Diante das notícias sobre a reconstrução do PTB, ato que se assemelhava a um acordo entre lideranças, a crítica de Edmundo Moniz acerca dos “gabinetes” parece ter endereço certo (*Versus*, 1978).

A refundação do PTB, por iniciativa de Leonel Brizola, reuniu, em junho de 1979, na sede do Partido Socialista de Portugal, militantes de variadas correntes políticas, não se restringindo aos trabalhistas, sendo que muitos dos que compareceram à capital portuguesa não se vinculariam ao futuro Partido Democrático Trabalhista. Após a sessão de abertura, que contou com as saudações habituais, o discurso de Brizola — que teve três horas de duração — e a constituição de comissões para elaborar propostas sobre pontos definidos, foi feita uma rodada de informes. Destes, o que encabeça uma lista elaborada pelos agentes da ditadura brasileira a serviço do SNI partia do escritor Luiz Alberto Moniz Bandeira, que levava consigo uma mensagem de seu tio, Edmundo Moniz, para ser entregue a Brizola.

É possível dizer com segurança que a mensagem era uma carta e que uma versão do texto se encontra hoje no Centro de Documentação e Memória, da Universidade Estadual Paulista. Entre as cartas reunidas pelos pesquisadores que fundaram o Centro de Documentação do Movimento Operário Mário Pedrosa, está um documento sem assinatura, mas com data de 12 de junho de 1979. Trata-se de um rascunho com correções feitas à mão, cujo destinatário era Brizola. A repetição exata de termos e ideias entre a entrevista, um artigo para *Versus* e a carta abrigada no CEMAP, bem como alguns fatos relatados, como os oito anos de exílio não deixam dúvidas que o autor é Edmundo Moniz.

Essa outra “Carta de Lisboa” apresentava duas justificativas para a ausência de Moniz no encontro realizado em Portugal. A primeira fazia referência ao lugar da democracia em um novo partido:

Não posso aceitar — e creio que falo em nome de numerosos companheiros — a formulação de que no PTB só serão admitidos os marxistas que façam a profissão de fé democrática. Esta formulação assemelha-se a da ditadura militar que combate os marxistas porque eles não são democratas. Ora, a democracia, hoje em dia, é mais necessária ao movimento trabalhador do que às classes dominantes. (...) A democracia, na realidade, não é uma finalidade ideológica e histórica e sim o campus onde deve travar-se a grande luta pela emancipação da classe trabalhadora. (Moniz, 1979)

A segunda justificativa retomava a crítica ao método da reorganização, onde Moniz insiste no esforço de criar um partido de esquerda que fosse capaz de aglutinar setores diversos das lutas sociais.

O programa partidário; a aliança com as “novas” lideranças sindicais; a união das forças e das organizações de massa, sem discriminação, sejam comunistas ou pertencentes à Igreja Católica, respeitando a independência ideológica dos aliados; a luta pela reforma agrária, tão grata a João Goulart: tudo isto é muito mais importante do que a luta por uma sigla. Esta luta só pode originar conflitos pessoais que devem ser contidos e superados. O processo político se encarregará de fazer a seleção dos militantes do novo partido. (Idem)

A movimentação de Brizola buscava aglutinar o maior número possível de apoiadores e em certa medida o Partido Democrático Trabalhista conseguiu renovar o legado do trabalhismo brasileiro e incorporou bandeiras e pautas à sua atuação política. Entretanto, quando Brizola anunciava publicamente, no mínimo, a partir de 1977, que atuaria para refundar o PTB, mobilizava, obrigatoriamente, uma tradição política que, pelo peso e significado na história, demarcava diretamente um setor hegemônico na nova organização. Moniz continuou distante das articulações de Brizola, pelo menos até maio de 1980, quando o Supremo Tribunal Eleitoral, acerca dos direitos sobre a sigla PTB, proferiu decisão favorável ao grupo da então deputada federal Ivete Vargas. No mesmo mês, a organização ganharia outra nomenclatura, Partido Democrático Brasileiro (PDT), mas o nome de Edmundo Moniz não consta em nenhuma das matérias que descrevem as reuniões dos dias 17, 18 e 26 de maio. A adesão, no entanto, veio logo depois.

Mesmo se filiando ao PDT de Brizola, Moniz não esteve alheio às reflexões de Mário Pedrosa sobre o Partido dos Trabalhadores e teve de se justificar mais de uma vez sobre a escolha que fez. Em 1987,

seis anos após a morte de seu amigo, em seu livro *A originalidade das revoluções*, argumentou que as transformações sociais no Brasil não seriam obra de um único partido e que a sua divergência com Mário Pedrosa era “tática e não de princípios, sem que isto afetasse as relações ideológicas e pessoais” (Moniz, 1987, p. 251). O intelectual, que fizera implacável oposição a Vargas e fora crítico à passagem de João Goulart pelo Ministério do Trabalho, realizava um tipo de autocrítica à visão que nutriu acerca de políticos trabalhistas que tinham certa influência de massas, assim, pôs suas divergências com Brizola em segundo plano diante da expectativa de construir um partido socialista que tivesse capacidade de disputar o poder. Enquanto Mário Pedrosa viu na redemocratização a oportunidade de ver realizadas as suas esperanças de tempos anteriores, Edmundo Moniz se adaptou para evitar ficar distante da mobilização de massas que esperava vir dos herdeiros da tradição getulista. Caminhos diferentes escolhidos por dois camaradas de longa trajetória.

MOVIMENTOS DE BASE E HUMANISMO CRISTÃO NA TRANSIÇÃO POLÍTICA BRASILEIRA

Além das articulações que ocorreram no âmbito internacional e dos debates que foram travados por intelectuais em torno da configuração partidária que começava a ganhar forma com a ascensão do movimento sindical, a transição política brasileira também ficou marcada pela participação do clero progressista e sua interlocução junto aos setores populares. De acordo com um relatório do Centro de Informações do Exército (CIE), mais um dos órgãos repressivos da ditadura militar, a partir de 1975, em vários municípios do Brasil, “começaram a surgir inúmeras associações, todas com finalidades reivindicativas, pleiteando melhorias específicas para os bairros”. Consta no documento que “a ação da igreja católica” foi fundamental para a “disseminação, aglutinação e dinâmica dessas sociedades”. Entre as décadas de 1970 e 1980, “as associações de moradores passaram a conviver, nos mesmos bairros, com entidades de cunho religioso, Comunidades Eclesiais de Base, Centros de Formação de Líderes e Pastorais Operária ou da Terra” (SNI. Arquivo Nacional: ACT ACE 4645/1984).

Três fatores causavam certa apreensão na comunidade de informações da ditadura militar brasileira, o que certamente justificava a produção do relatório. Em primeiro lugar, havia o receio de que pudesse se repetir em alguma região do país os acontecimentos ocorridos na Nicarágua, em 1979, e em El Salvador, em 1980. No parecer redigido pelos agentes de informação, argumentava-se que a “organização dos moradores, particularmente na periferia das grandes cidades, teve expressão significativa nos processos revolucionários” dos dois países

da América Central, onde os “bairros populares forneceram o apoio político e o apoio logístico, além de pessoal para completar os quadros dos guerrilheiros” (Idem). Em segundo lugar, o relatório tratou de mapear as redes controladas pela “Igreja progressista” que estavam à disposição das organizações de base, dificultando a ação dos mecanismos de repressão da ditadura. A relação entre o clero progressista e as camadas populares não se limitava ao eixo Rio-São Paulo, pois, conforme o reconhecimento do próprio Centro de Informações do Exército, em capitais como “Fortaleza, Belém, Belo Horizonte e Curitiba, desde o final da década de 1970, foi intensa a participação do clero progressista nas atividades das associações de moradores”, sobretudo através do “trabalho desenvolvido pelos adeptos da Pastoral das Favelas” (Idem). Por último, o relatório alertava que “a deterioração da qualidade de vida, os baixos salários, a inflação e o desemprego” impulsionariam manifestações “contra aumentos de transporte ou de gêneros de primeira necessidade” (Idem). Fica evidente, portanto, o temor de que atos repentinos adquirissem consistência e desencadeassem mobilizações de maior amplitude, desfigurando as etapas finais de uma transição política conduzida estritamente pelo alto.

A investigação realizada nos documentos da comunidade de informações, neste caso no fundo do SNI, tem revelado que, entre 1970 e 1985, o regime militar brasileiro acompanhou de perto a atuação da chamada esquerda cristã e os vínculos que foram construídos com segmentos da classe trabalhadora organizada e com setores populares. Do ponto de vista dos militares, vigiar as práticas e as ideias que circulavam por meio do clero progressista configurava uma estratégia básica para garantir o clima de ordem e, assim, antecipar possíveis contestações direcionadas ao regime a fim de evitá-las.

A partir de 1974, o ritmo de crescimento econômico do “milagre brasileiro” sofreu os impactos do contexto internacional puxado pela crise do petróleo. A vitória da oposição nas eleições daquele ano e a abertura “lenta, gradual e segura” do governo Geisel alteraram as peças no tabuleiro. Na segunda metade da década de 1970, o governo ditatorial não conseguiu mais esconder do debate público os dilemas de um país sustentado pelo descaso com a pobreza. Em discurso proferido no ano de 1975, Geisel incorporou ao princípio de abertura política a chamada “distensão social”, pois “os objetivos do governo, de institucionalizar o poder em bases democráticas, seriam impossíveis de alcançar caso se agravassem as tensões sociais”. A “linguagem utilizada no governo Médici para demonstrar o desenvolvimento do país (PIB, PNB, indicadores econômicos, renda per capita etc.) não surtia mais efeito”, já que “as filas do INPS, a deterioração salarial, os

problemas urbanos” falavam “mais alto” (“Distensão social, a grande cartada”, *Folha de São Paulo*, 08 jan. 1976, p. 4).

As tensões sociais decorrentes da pobreza, da miséria e da fome abriram espaços que foram habilmente ocupados por setores de oposição ao regime militar, sobretudo pelo chamado clero progressista, que se posicionava de maneira contundente contra as violações dos direitos humanos no Brasil desde o início da década de 1970. É preciso reconhecer que um frutífero debate sobre os aspectos intrínsecos às desigualdades sociais brasileiras já se fazia presente nos círculos intelectuais durante as décadas de 1950 e 1960, principalmente nas abordagens que adquiriram forma por meio da chave analítica do subdesenvolvimento e de seus desdobramentos nos países do “Terceiro mundo”. Porém, na conjuntura da segunda metade da década de 1970, todo um repertório discursivo proveniente de ritmos temporais anteriores foi readequado e atualizado ao tempo da transição política, obedecendo, de igual modo, aos desafios de uma sociedade que se tornava mais complexa à medida que passava por profundas mudanças demográficas. Levando em consideração os arranjos do governo Geisel, a “distensão social” tornava-se um artefato necessário para manter a “paz social” e “garantir a institucionalização de um poder político voltado para moderar a participação popular” (Carvalho, 2005, p. 139).

Os militares estiveram atentos à dinâmica social que poderia colocar em xeque os anseios autoritários. De maneira muito consciente, o regime procurou controlar os ritmos temporais que transcorriam em paralelo às projeções de distensão política. Na verdade, o regime tinha a real dimensão que não seria possível concluir a distensão política sem promover a distensão social, ou seja, controlar as insatisfações populares e esvaziar as demandas reivindicativas por melhoria das condições de vida. Isso incluía estar atento às movimentações que aconteciam no âmbito sindical e nos bairros. Neste sentido, a comunidade de informações registrou os passos que foram dados a partir do cristianismo da libertação na tentativa de politizar as demandas do cotidiano ligadas às desigualdades. De acordo com Michael Löwy (2007, p. 306), o cristianismo da libertação compõe um “conjunto de reflexões e práticas que questionam a injustiça social, e se traduzem no compromisso de cristãos com a luta pela emancipação dos pobres”, envolvendo membros do clero, leigos, comunidades eclesiais de base, pastorais populares e movimentos de educação de base. No Brasil, em particular, os sujeitos que atuaram por meio da esquerda cristã tiveram um papel importante na formação de novas relações políticas, especialmente durante a década de 1970.

Em maio de 1973, a agência do SNI de São Paulo preparou um extenso relatório com foco na atuação da Pastoral Operária na cidade. Segundo o levantamento realizado pelos agentes, o objetivo da Pastoral consistia em formar “líderes sindicais cristãos aptos e motivados a exercerem papéis relevantes na propagação e na defesa da doutrina social da Igreja” (SNI. Arquivo Nacional: AC ACE 62573/1973). Para tanto, a Pastoral Operária tinha à sua disposição os canais de divulgação da Cúria Metropolitana, entre os quais destacavam-se o jornal *O São Paulo*, a Rádio 9 de julho e o Boletim da CIEC. Mas a formação de quadros para a inserção no meio sindical envolvia outros componentes, como as reuniões da Pastoral Litúrgica, a organização de semanas de estudo, a integração de militantes cristãos no interior do ambiente fabril, a reprodução de obras cinematográficas e a realização de peças teatrais que representavam as condições materiais das classes operárias. Também estava acordado com a Arquidiocese “a liberação de um padre para cada região da cidade a fim de se dedicarem exclusivamente à Pastoral Operária”, pois era exigido que os “sacerdotes se identificassem com os operários (Idem), caracterizando a ação prática, um dos pontos centrais da Teologia da Libertação e sua opção preferencial pelos pobres. Em termos metodológicos, a teologia popular era “trabalhada por teólogos bem próximos ao povo e na própria linguagem popular ou pelas mesmas comunidades em folhas mimeografadas ou pequenas brochuras”, contendo “reflexões da fé sobre o cotidiano e sobre as pequenas lutas, de novenas, de vias-sacras e de celebrações litúrgicas” (Libânio e Antoniazzi, 1994, p. 32).

É certo, porém, que a agência do SNI de São Paulo acreditava na efetiva “doutrinação social” que pretensamente estava sendo levada adiante por meio das atividades desenvolvidas por padres e leigos. Tal constatação visava mostrar o risco que o governo autoritário corria, uma vez que a linha progressista da Igreja Católica, segundo a interpretação presente no relatório, adornada por um tom de dramaticidade, oferecia aos cristãos “a possibilidade de abrigar seu compromisso político sem romper com a Igreja” (Idem). O fato era que as articulações entre ordens religiosas, leigos e trabalhadores dificultavam o monitoramento “dos órgãos de segurança e informações” (Idem), seja pelo acesso restrito às redes que foram utilizadas pelos membros do clero progressista ou então pelo simples motivo que qualquer tipo de atrito com a Igreja poderia gerar ruídos que deveriam ser muito bem calculados. Ainda segundo o relatório, desde 1971 “a Coordenação Arquidiocesana da Pastoral Operária” agia “junto aos sindicatos da área no sentido de integrá-los ao movimento católico operário” (Idem). Embora, naquele momento, a agência tenha alegado não ser factível analisar mais detidamente os êxitos e os limites que definiam a apro-

ximação entre a Arquidiocese de São Paulo e os trabalhadores, dois episódios foram destacados. Em março de 1973, ao menos 23 entidades sindicais saudaram a promoção de Dom Paulo Evaristo Arns ao cardinalato. Aproveitando a oportunidade, os sindicatos denunciaram a “política trabalhista vigente” e solicitaram “a ajuda do Cardeal em prol da causa operária” (Idem). Em abril de 1973, o representante do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Cimento Cal e Gesso emitiu um ofício para Dom Paulo Evaristo Arns no qual solicitava o envio de “gêneros alimentícios para atender os empregados” da corporação J. J. Abdalla, que não recebiam pagamentos “há mais de 60 dias” (Idem). O pedido foi prontamente atendido pelo Cardeal, ganhando repercussão no espaço público.

Duas dimensões podem ser exploradas a partir da interpretação do relatório sobre as atividades da Pastoral Operária em São Paulo. Se, por um lado, a Igreja Católica desejava expandir a sua zona de influência junto às camadas populares, por outro, os trabalhadores não se comportaram como atores decorativos, na figura de seus representantes sindicais, eles perceberam a importância de angariar apoio da Igreja em um contexto de repressão política. Entre a greve de Contagem, deflagrada em 1968, e as greves do ABC paulista, iniciadas em 1978, a margem de manobra que os trabalhadores tinham à disposição para reivindicar melhores condições de trabalho era completamente restrita. Desse modo, as redes controladas pelo clero progressista foram constantemente operacionalizadas para a preparação de estratégias políticas, assim como para a constituição de espaços de sociabilidades e de solidariedade. Compreender os contatos tecidos entre o cristianismo da libertação e os trabalhadores nos permite avaliar as práticas e as retóricas sociais cujo horizonte de expectativa estava direcionado à ampliação de direitos por meio de conflitos e de disputas cotidianas (Koselleck, 2006, pp. 305-327).

Por fim, a conclusão do relatório da agência do SNI de São Paulo sinaliza que a comunidade de informações intensificaria, nos meses seguintes, o mapeamento dos padres progressistas, pois os agentes consideravam subversiva a “ocorrência de proselitismo político visando não somente a divulgação dos direitos humanos, mas também para contradizer a política trabalhista vigente”. Tornava-se urgente, portanto, o “acompanhamento sistematizado do desenvolvimento e aplicação da Pastoral Operária, bem como a identificação de todos os dirigentes envolvidos ou daqueles que” viessem “a aderir ao movimento” (Idem). Efetivamente, uma amostra incluindo 215 dossiês, que foram selecionados no acervo do SNI, indica que a partir de 1974 houve um aumento considerável de documentos produzidos pelas agências e

enviados ao órgão de espionagem e controle, reportando as atividades conduzidas pela esquerda cristã em diferentes regiões do país.

Em julho de 1980, por exemplo, a agência do SNI de Belo Horizonte mostrava-se preocupada com a atuação dos líderes de favelas em conjunto com a União dos Trabalhadores de Belo Horizonte, com a Comissão Pastoral dos Direitos Humanos, com a Pastoral de Favelas da Arquidiocese de Belo Horizonte, com a Ação Católica Operária e com o PCB. De acordo com o relatório, “as atividades desenvolvidas por entidades e elementos ligados aos ‘trabalhos de bairro’ estavam obtendo considerável êxito, uma vez que as bandeiras de luta por eles abraçadas” encontravam respaldo “das populações menos favorecidas” (SNI. Arquivo Nacional: ABH ACE 895/1980). A “aliança entre os líderes dos movimentos populares com elementos militantes do clero progressista” era o “fator preponderante para o sucesso das atividades” (Idem). Para fundamentar o texto redigido, os agentes reuniram alguns documentos que provavelmente foram recolhidos durante a etapa de investigação. Um dos documentos era o Boletim da Comissão de Pastoral Operária, datado de janeiro a abril de 1980. O conteúdo do Boletim informava que, entre os dias 26 e 27 de janeiro daquele ano, a Ação Católica Operária promoveu um Seminário Nacional sobre as experiências nos bairros. Aproximadamente 47 pessoas participaram do encontro, onde compartilharam relatos e engajamentos. No mesmo período, o Centro de Ação Comunitária organizou duas conferências com objetivos semelhantes, uma em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e outra em Fortaleza, no Ceará. Os temas debatidos nos encontros servem para ilustrar elementos da utopia cristã que foram evocados pelos integrantes do cristianismo da libertação.

O bairro, dentro de tal perspectiva, constituía-se como “lugar privilegiado para organização e luta dos trabalhadores”, espaço que reunia “a massa operária e as famílias de todas as categorias”, seja de trabalhadores qualificados, informais ou autônomos. Além disso, o cristianismo da libertação projetava uma nova sociedade em que os pobres ficariam encarregados de germinar as mudanças históricas. Competia, no entanto, às associações de moradores o papel de conscientizar e sistematizar as disputas do bairro, fomentando os conflitos políticos do cotidiano. Diante de “diretorias ‘pelegas’ e politiqueiros”, era recomendado a formação de “chapas de oposição para tomar as diretorias” das associações e “colocá-las a serviço das necessidades e interesses dos moradores”. Os grupos de base e as chapas de oposição precisavam atuar no sentido de “pressionar para que a sede da associação, com todos os recursos”, fosse “colocada a serviço de todos” (Idem).

É legítimo questionar até que ponto as camadas populares aderiram à utopia cristã e a forma como se apropriaram dela. As evidências empíricas, porém, apontam para a circulação de ideias e práticas sociais oriundas do cristianismo da libertação em diferentes contextos socioculturais. Trata-se da formação de novas retóricas sociais que definiram agências políticas durante o processo de redemocratização brasileiro. Segundo Freire (2019, pp. 212-239), nas décadas de 1970 e 1980, correntes cristãs que compactuavam com os princípios do cristianismo da libertação tiveram um papel decisivo no “*aggiornamento* das esquerdas brasileiras” e “na elaboração e divulgação de um novo discurso político, que teve como pedra de toque o mergulho direto nas bases, no mundo popular”.

Os departamentos regionais do SNI capturaram folhetos, boletins, jornais, entre outros registros para supervisionar as interlocuções do cristianismo da libertação. Mas as técnicas de espionagem também estavam voltadas às celebrações religiosas e aos protestos populares. O domingo de Páscoa, em 1981, no município mineiro de Teófilo Otoni, foi celebrado na Praça Tiradentes e agrupou cerca de cinco mil pessoas. De todo modo, não foi uma concentração religiosa qualquer. Um observador dos acontecimentos avistou nos cantos da praça cartazes do tipo: “Acorda povo, busca força na união, libertação nasce da união” (SNI. Arquivo Nacional: ABH ACE 5204/1981). Os representantes dos movimentos de bairro da cidade, juntamente com os grupos de jovens, também portavam dizeres como: “Saúde é: comida, casa, justo salário, trabalho e descanso”, “Ressurreição é vitória, vitória é luta”, “Libertação nasce da união”. A estrutura de um palco foi montada para a realização da cerimônia litúrgica, mas o padre “fez subir alguns presentes, pessoas pobres, a fim de que elas declinassem, ali, as suas mazelas” (Idem). Dona Carmelita, moradora do bairro São Cristóvão, fez uso da palavra e falou “em nome dos jovens e sobre os patrões” que assinavam “um salário na carteira e” pagavam “outro bem abaixo daquele”. Morador do bairro Nossa Senhora de Fátima, Valdomiro denunciou a “desapropriação e os baixos salários, além de atacar os fazendeiros”. Por sua vez, Durval, morador do Morro do Eucalipto, “defendeu o trabalhador não qualificado” (Idem). As falas demonstram a politização do cotidiano por meio dos problemas enfrentados por uma parcela considerável de trabalhadores não especializados.

Na mesma cidade, o Ministério do Exército interceptou uma carta pastoral que foi distribuída aos fiéis as vésperas do pleito eleitoral de 1982, intitulada “*Opção pelos pobres também nas eleições*”. As referências recolhidas colocaram em destaque a ligação entre padres e demais membros religiosos de Teófilo Otoni com o Partido dos Tra-

balhadores. O “grande número de CEBs implantadas na diocese” levava a crer que a Igreja influenciaria “a captação de eleitores para o PT, particularmente no meio da classe baixa” (Idem). Em que medida a distensão social fugiu do controle dos militares e quais foram os impactos concretos de tal fator para o desfecho da transição política que ocorreu no Brasil, são questões que permanecem em aberto. Podemos afirmar, no entanto, que as articulações que giraram em torno do cristianismo da libertação contribuíram para a definição de novas relações políticas a partir da inserção direta de setores da esquerda nas bases da sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este texto pretendemos apresentar uma contribuição para as discussões que dizem respeito às práticas sociais e às relações encetadas por setores de esquerda no Brasil durante a transição política que envolveu o final da ditadura militar. O regime procurava institucionalizar o projeto autoritário que foi imposto ao país com o golpe de 1964 e controlar a chamada abertura política, inclusive com a concessão de uma autoanistia aos perpetradores de violações aos direitos humanos. De sua parte, no âmbito das oposições, destacou-se a atuação política de lideranças vinculadas ao trabalhismo e à socialdemocracia, bem como de intelectuais e movimentos de base, com apoio do “clero progressista” ligados à Igreja Católica e partidos de esquerda em formação. Em meio aos limites da abertura política, tais conexões e debates foram fundamentais nas disputas em torno das noções de democracia que então circulavam e as lutas por direitos sociais.

Os diferentes grupos ligados à esquerda discutiram a necessidade reconstruir vínculos com o mundo do trabalho e o movimento operário, explorando a bandeira de defesa dos direitos humanos e denunciando a concentração de renda e o arrocho salarial que afetava as classes trabalhadoras, propondo caminhos alternativos diante da corrosão do regime. Ao mesmo tempo, não faltaram interações que extrapolavam as fronteiras nacionais, na perspectiva de incluir o país no âmbito dos processos de redemocratização que, inspirados pelo exemplo ibérico, passaram a ser tomados como possíveis modelos para a América Latina. Compreendendo a relevância desse período para a composição de uma história do tempo presente no Brasil, procuramos abordar os difíceis e sinuosos diálogos entre as forças de esquerda e um projeto político que incluísse a classe trabalhadora e pusesse em causa uma transição que seria negociada pelo alto, o que envolveu diferentes concepções de organização social e partidária, bem como retóricas e repertórios.

REFERÊNCIAS

- A Capital (1977, 11 de janeiro). Miguel Arraes fala a “A Capital”, *A Capital*, p. 12, Lisboa.
- Almino, João (1980). *Os democratas autoritários: liberdades individuais, de associação política e sindical na Constituinte de 1964* (São Paulo: Brasiliense).
- Alves, Maria Helena Moreira (1989). *Estado e Oposição no Brasil (1964-1984)*. Petrópolis: Vozes.
- Candido, Antônio (2001). “Um socialista singular” em Marques Neto, José Castilho (Comp.), *Mário Pedrosa e o Brasil*. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo.
- Candido, Jeferson João (2018). *Para além da frente ampla: Fernando Gasparian e a educação das elites*. Tese de doutorado, Florianópolis.
- Carvalho, Aloysio (2005). Geisel, Figueiredo e a liberalização do regime autoritário (1974-1980), *Dados*, 48(1), Rio de Janeiro.
- Correio da Manhã (1945, 13 de junho). As esquerdas independentes com Eduardo Gomes, *Correio da Manhã*, p. 1, Rio de Janeiro.
- Coutinho, Carlos Nelson (1979). A democracia como valor universal. *Encontros com a Civilização Brasileira*, 9, Rio de Janeiro.
- Expresso (1976, 10 de dezembro). João Goulart esteve em Lisboa com o Expresso, *Expresso*, p. 12, Lisboa.
- Fernandes, Florestan (1986). *Nova República?* Rio de Janeiro: Zahar.
- Ferreira, Jorge (2011). *João Goulart: uma biografia*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- Fico, Carlos (2010). A negociação parlamentar da anistia de 1979 e o chamado “perdão aos torturadores”. *Revista Anistia Política e Justiça de Transição*, 4, Brasília.
- Freire, Américo (2019). Grupo Emaús: esteio da Teologia da Libertação no Brasil (1970-1980), *Tempo e Argumento*, 11(28), Florianópolis.
- Koselleck, Reinhart (2006). *Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos*. Rio de Janeiro: Contraponto.
- Leite, Maria Cláudia Moraes (2019). Leonel Brizola e os últimos anos de exílio, *Tempo e Argumento*, 11(26), Florianópolis.
- Libânio, João Batista e Antoniazzi, Alberto (1994). *Vinte Anos de Teologia na América Latina e no Brasil*. Petrópolis: Vozes.
- Löwy, Michael (1981). Trayectoria de la Internacional Socialista en América Latina. *Cuadernos Políticos*, 29, Cidade do México.
- Löwy, Michael (2007). As esquerdas na ditadura militar: o cristianismo da libertação. Ferreira, Jorge e Reis, Daniel Aarão

- (Comps.), *Revolução e democracia*, Vol. 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- Marques, Teresa Cristina Schneider e Gonçalves, Leandro Pereira (2016). A fundação do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no exílio em Civitas. *Revista de Ciências Sociais*, 16(3), Porto Alegre.
- Moniz, Edmundo (1979, 12 de junho). Carta, CEMAP.
- Moniz, Edmundo (1987). *A originalidade das revoluções: uma visão abrangente do socialismo no século XX*. Rio de Janeiro: Espaço e tempo.
- Napolitano, Marcos (2002). *Cultura e poder no Brasil contemporâneo*. Curitiba: Juruá.
- Napolitano, Marcos (2014). No exílio, contra o isolamento: intelectuais comunistas, frentismo e questão democrática nos anos 1970. *Estudos Avançados*, 28(80), São Paulo.
- O Diário (1976, 18 de maio). A ditadura brasileira é uma ameaça à paz e à segurança dos povos da América Latina, *O Diário*, pp. 8-10, Lisboa.
- Pedrosa, Fernando (2013). Redes transnacionais y partidos políticos. La Internacional Socialista en América Latina (1951-1991), *Iberoamericana, América Latina-España-Portugal*, 13(49), Berlim.
- Pedrosa, Mário (1980). *Sobre o PT*. São Paulo: CHED.
- Secco, Lincoln (2011). *História do PT*. Cotia, SP: Ateliê Editorial.
- Versus (1978, fevereiro). Um partido não nasce dos gabinetes. Edmundo Moniz sobre o PS. *Versus*, pp. 12-13, São Paulo.

BASES DE SUSTENTACIÓN, DESARROLLO Y CRISIS DEL “SINDICALISMO REVOLUCIONARIO” MINERO BOLIVIANO Y CARACTERÍSTICAS DE SU RELACIONAMIENTO CON LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA

Magdalena Cajías de la Vega

INTRODUCCIÓN

El movimiento minero boliviano fue durante décadas reconocido como la vanguardia del movimiento obrero y popular boliviano, característica emergida desde mediados de la década del cuarenta del siglo XX, consolidada por su central participación en la revolución de 1952, ampliada en la creación de la Asamblea Popular de 1971, e irradiada en la lucha contra las dictaduras militares y por el retorno de la democracia.

El papel central del movimiento minero en las luchas sociales fue reconocido por ellos mismos como parte de su identidad positiva, pero también por el resto de la sociedad, incluso por sus adversarios políticos y de clase, y allende las fronteras nacionales. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y los sindicatos locales que la constituyeron fueron, por otra parte, la columna vertebral de la Central Obrera Boliviana (COB), entidad sindical unitaria que aglutinó desde 1952 al conjunto de las organizaciones sociales obreras, de clase media y del sector campesino-indígena.

Desde la aprobación de la “Tesis de Pulacayo” en 1946, el discurso predominante del movimiento minero aglutinado en la FSTMB, y desde 1952 como sector hegemónico de la COB, esgrimió al socialismo como su proyecto de clase. Esto fue ratificado con mayor fuerza

aún en 1970 con la llamada “Tesis socialista”, la que fue aprobada por ambas instituciones gremiales en un contexto que derivaría en la creación de la Asamblea Popular de 1971 que se constituyó en una especie de “Parlamento Obrero”.

Si bien en el proceso de la “Revolución Nacional” (1952-1964) los mineros se adhirieron al “nacionalismo revolucionario”, lo hicieron desde la facción de izquierda del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), conducida por el líder obrero Juan Lechín Oquendo; y aunque fue también muy importante la influencia del “anarcosindicalismo”, principalmente en sus principios organizativos, la penetración de la ideología marxista fue amplia y los partidos políticos que la representaban buscaron permanentemente influir en las decisiones y orientaciones políticas de los trabajadores.

La izquierda boliviana, tanto a través de la facción izquierdista del nacionalismo revolucionario, como desde los partidos marxistas —Partido Comunista de Bolivia (PCB), Partido Comunista Marxista Leninista (PCML, pro-chino), Partido Obrero Revolucionario (POR) y, desde la década del setenta, Movimiento Revolucionario de Izquierda (MIR), Partido Socialista (PS) y otros más pequeños— se disputó la conducción de este movimiento consciente de su fortaleza y capacidad de movilización y presión en busca de transformaciones de la sociedad boliviana.

Sin embargo, tanto en la FSTMB como en la COB, el llamado por ellos mismos “sindicalismo revolucionario”, que expresó una cierta tradición “anarcosindicalista”, limitó a dichos partidos en sus intenciones hegemónicas, pues principios como los de “independencia de clase” o la subordinación de las dirigencias a las bases, fueron sustentados en pos de evitar la pérdida de su autonomía frente a las organizaciones políticas, así como para practicar una democracia plural interna bastante amplia —llamada por ellos mismos “democracia sindical”— que fue clave en el mantenimiento de la unidad sindical obrera por décadas y en la supremacía del sindicato sobre el partido.

La capacidad de las bases obreras de evitar la burocratización de las dirigencias, así como de poner límites a la injerencia de los partidos políticos en su seno, pudo deberse esencialmente a que el proletariado minero constituía una “colectividad de clase” orgullosa de sí misma y construida sobre sus propias experiencias históricas. Esto no sólo tuvo que ver con el hecho de que desde muy temprano enfrentó autónomamente sus luchas sociales y reivindicativas contra las empresas mineras y el Estado, sino porque la mina fue un espacio de socialización y desarrollo de la pertenencia a un grupo común altamente cohesionado.

A pesar de que el sindicato estuvo generalmente por encima del partido —lo que quedó más ampliamente demostrado cuando se constituyó la Asamblea Popular en 1971—, no se puede negar que los partidos de izquierda jugaron un rol importante en la FSTMB y en la COB, centrales sindicales donde la radicalización del discurso y la irradiación del socialismo como proyecto de clase tuvo mucho que ver con la influencia de las diversas tendencias de los partidos de izquierda en su seno.

Por otra parte, el proletariado minero fue también consciente de su lugar central en la economía boliviana, ya que la minería —principalmente estañífera, pero no exclusivamente— representaba, de lejos, el principal ingreso del país. Esto hizo que, pese a su reducido número, el impacto proporcional de sus acciones huelguísticas, e incluso insurreccionalistas, fuese mucho mayor que el de cualquier otro sector subalterno. Todo ello marcó en ellos sentimientos de poseer o ser portadores de alguna forma de poder.

Su lucha no fue solamente sindical reivindicativa, sino que casi siempre alcanzó una dimensión política, principalmente porque en varios momentos llegó a constituirse en un “poder dual”, tuvo “vocación de poder”, llevó a la práctica la consigna de “acción directa de masas” para desafiar constantemente al poder constituido, y tuvo gran capacidad de irradiar algunas de sus luchas al conjunto del movimiento obrero a través de la COB, las clases medias y los partidos de izquierda. Su rol de “vanguardia” fue constantemente reconocido por los otros sectores populares y por los propios partidos de izquierda, que aceptaron incluso que la FSTMB y la COB dirijan en los hechos luchas de carácter nacional, como las desplegadas contra las dictaduras militares y por el retorno a la democracia.

Pero también es cierto, como salió más a la luz cuando en la década del ochenta del siglo pasado estalló su más profunda crisis, que el movimiento minero boliviano no pudo nunca tomar el poder para sí aun cuando estuviese varias veces cerca de poder hacerlo. Para algunos, eso se debió a su “obrerismo”, a su “maximalismo”, a la ausencia en su seno de un partido político “revolucionario” como conductor hegemónico y, como algo fundamental, por no haber comprendido un asunto de vital importancia: la construcción de una alianza horizontal con el movimiento campesino-indígena.

En relación a esto último, es verdad que en un momento decisivo para el despliegue de las experiencias políticas de los sectores subalternos, como fue el proceso abierto por la revolución de 1952, el movimiento campesino fue casi un aliado incondicional del MNR, que les había entregado la tierra a través de la Reforma Agraria de 1953. Pero cuando los campesinos indígenas agrupados en organizaciones

“naturales” y sindicales fueron alcanzando su independencia frente a los gobiernos de turno —lo que ocurrió a partir de mediados de la década del setenta— y fueron estructurando su propio proyecto de carácter étnico-cultural, el conjunto del movimiento obrero y popular no comprendió cabalmente ese proceso.

En la lucha por el retorno a la democracia, la recientemente creada Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB -1979), que había iniciado un profundo proceso de autodeterminación, se unió a la COB constituyéndose en un actor central del triunfo de la apertura democrática que Bolivia vive hasta el presente. Sin embargo, el “obrerismo” optó por seguir relegando su representación proporcional en el seno de la COB y por mantener la hegemonía minera al interior de la dicha central sindical.

La izquierda marxista tampoco comprendió ese significativo hecho histórico para los objetivos de los sectores subalternos bolivianos, es decir, la emergencia del movimiento campesino indígena y las características de sus propuestas de transformación del país. Cuando la crisis del movimiento minero arrastró a la COB en sus derrotas, así como a la izquierda, estas limitaciones afloraron.

De todas maneras, la lucha popular contra el modelo neoliberal implantado en Bolivia a mediados de la década del ochenta, y principalmente a lo largo de la del noventa, generó históricas articulaciones entre diferentes sectores subalternos (incluidos los mineros) que se movilizaban contra situaciones como el cierre de minas y fábricas, la precarización laboral, la mercantilización de las tierras, las políticas dictadas en torno a la seguridad social, la nueva reforma educativa, la desnacionalización de las empresas estatales a través de la llamada “capitalización”, el avasallamiento de las tierras de los pueblos indígenas de tierras bajas, y la desocupación creciente, entre otras.

Sin embargo, aunque es posible señalar que en esos años se constituyó un “bloque popular” antineoliberal, es más difícil constatar que éste estuviese dirigido por algún sector específico. Más bien, se podría plantear la hipótesis de que ni la clase obrera en crisis, ni el movimiento campesino indígena emergente (de diferentes regiones y con problemáticas no siempre coincidentes) cumplieron un papel vanguardista o con pretensión hegemónica a nivel social. Más bien, esas articulaciones se fueron dando de manera espontánea y “desde abajo”. En ese proceso, los partidos de izquierda, fuertemente debilitados desde mediados de los ochenta, solo jugaron un cierto rol de acompañamiento en ese proceso, más allá de que algunos de ellos se arroguen esa conducción.

Y, cuando ese nuevo bloque social logró grandes avances e incluso ganar las elecciones a través del Movimiento al Socialismo (MAS), un

partido fuertemente representativo del emergente movimiento indígena y que tuvo como su líder y primer presidente de Bolivia a Evo Morales Ayma, la clase obrera ya se había transformado profundamente. Aun así, siguió siendo un factor importante, por ejemplo, para la derrota de los gobiernos neoliberales. En ello jugó un papel central la utilización de su memoria que, acumulada en décadas, se expresó tanto en los lugares a los que se trasladaron después de abandonar las minas que se cerraron, como en los pocos que aún permanecieron como mineros.

LA CONSTITUCIÓN DE LA COLECTIVIDAD MINERA

Como punto de partida para la comprensión de la fortaleza alcanzada por el movimiento minero boliviano como sector de “vanguardia” de los grupos subalternos en Bolivia, es necesario señalar cuáles fueron las bases objetivas y subjetivas de sustentación de la “colectividad minera”, así como las principales características que adquirió la conflictividad social del proletariado minero con sus “adversarios de clase”. Además, analizar cómo desde la fase formativa del movimiento minero, que históricamente puede situarse en las primeras décadas del siglo XX, emergieron importantes elementos que se constituyeron en fundantes del desarrollo de su conciencia de clase y se convirtieron en “tradicionales” dentro del accionar social y político de este sector durante décadas y hasta el estallido de su crisis a mediados de la década del ochenta.

Veamos, en primer lugar, cómo se produjo la constitución, proyección y consolidación de la “colectividad minera”¹, que emergió tanto de realidades objetivas y subjetivas que permitieron que en los campamentos y pueblos mineros se vayan afianzando fuertes sentimientos de pertenencia a una comunidad propia. Históricamente, la “colectividad minera” en Bolivia no sólo se refirió a su condición de clase subalterna y explotada, sino a elementos de orden cultural trasladados desde el mundo rural compuesto por pueblos indígenas de origen étnico quechua y aimara. Junto a ello, fueron las vivencias y experiencias acumuladas al interior de esa nueva comunidad-colectividad, propias de su nueva condición de trabajadores asalariados, las que afianzaron la manera particular de la construcción del “nosotros”.

Así, en su condición de clase obrera, los mineros bolivianos desarrollaron desde bastante temprano sus rasgos distintivos a partir, en

1 El término de “colectividad minera” no ha sido usado frecuentemente para identificar al proletariado minero en la amplia bibliografía que existe sobre este sector. Sin embargo, considero que es adecuado en al menos dos sentidos: 1) porque expresa el sentimiento de pertenencia al nosotros de manera amplia, solidaria y comprometida; y 2) porque se diferencia de la “comunidad indígena” en varios aspectos.

primer lugar, de las formas de socialización interna, tanto dentro del trabajo como fuera de él. El campamento minero, por su aislamiento de los centros urbanos y su carácter cerrado, fue el espacio fundamental para desplegar el intenso y diario relacionamiento como una fraternidad de iguales.

En cuanto a su nueva condición laboral, pese a que los migrantes que llegaban a la mina se iban “estratificando” por su mayor o menor especialización en las faenas, las diferencias entre unas y otras categorías laborales nunca fueron lo suficientemente grandes en cuanto a salarios o condiciones de vida y de trabajo, como para dejarse de percibir como un grupo igualitario. Esto cambiaba radicalmente en relación a los administradores y los dueños de las minas, como veremos cuando abordemos cómo identificaron a sus adversarios de clase.

En relación a su pasado rural, el traslado de creencias y prácticas culturales desde éste a las minas tuvo la característica de que aquellas fueron adaptadas al mundo minero desde las nuevas realidades sociales a las que se enfrentaron. Por ejemplo, si en el mundo rural se rendía culto a la Madre Tierra o “Pachamama”, en el mundo minero se lo hará al “dios de la mina” o “tío de la mina”, que representaba la figura del diablo.²

Al respecto, un autor señala lo siguiente:

[...] migrantes rurales han llevado al campamento minero un mundo minuciosamente estructurado de ideas sobre la vida subterránea que les ayuda a situarse al interior de la tierra y hacer comprensibles las nuevas condiciones en que se encuentran, a la vez que este mundo recibe una ampliación profunda a través de su entronque con el culto minero al diablo. La participación en este culto debe considerarse, pues, como un verdadero rito de pasaje [...] que permite la transformación del migrante en minero sin sacarlo del mundo cultural en el que fue originalmente socializado. [...] La adquisición imprevista de un contenido reivindicativo por el culto al diablo, nos sugiere que debería considerarse no solamente como un puente analítico entre la religiosidad rural de los campesinos migrantes y la conciencia clasista de los obreros, sino también como un sustento duradero de la solidaridad de clase en los mismos parajes del trabajo. (Platt, 1983, pp. 48-49)

Esa solidaridad interna era también muy importante al momento del “picijcheo” de la coca, práctica colectiva en ambos espacios territoria-

2 El Tío de la mina representa la figura del diablo, cuyo órgano sexual es de gran tamaño. Se encuentra situado en el interior de la mina y los trabajadores, al ingresar en ella, realizan diferente tipo de ritos para pedirle su protección. Su origen puede provenir desde el periodo colonial.

les que, sin embargo, se desenvolvía en los dos mundos de acuerdo a sus realidades diferenciadas.³

Por otra parte, las características de los campamentos mineros se diferenciaban en muchos sentidos de las comunidades y pueblos indígenas de los que normalmente provenían. En los primeros, se desarrollaba una vida febril y animada, en una mezcla de modernidad y tradición, y contaban con una particular distribución y organización del espacio.⁴ Esto contribuía a la socialización, especialmente de la familia minera, y separaba nítidamente a los trabajadores de los administradores y dueños de las minas.

En general, las minas productoras de estaño estaban desvinculadas y aisladas de las ciudades más importantes. Distritos mineros como Catavi, Siglo XX, Huanuni, Ánimas, Chorolque o Corocoro, se encontraban incrustados en la zona alta de la región andina a los cuáles era difícil acceder por la falta de caminos y las grandes distancias que había que recorrer. Y, aunque el aislamiento era similar en relación a las comunidades indígenas y las haciendas donde trabajaban miles de “pongos” que habían perdido sus tierras, a diferencia de éstas últimas, las minas se vinculaban con el mundo urbano a través del ferrocarril. Este, entre otras cosas, hacía posible la llegada a las minas de productos propios de la modernización urbana que impactaron de una u otra manera en sus mentalidades y su cultura.

Si dentro de la mina la socialización de los trabajadores que realizaban sus labores en “cuadrilas” (grupos conformados por entre cuatro a cinco trabajadores) fue intensa, como distintas novelas y ensayos de la época lo han retratado, fuera de las horas de trabajo esto seguía siendo así. Dentro de la mina, compartían el riesgo a los constantes accidentes, la posibilidad de adquirir el “mal de mina”, el trabajo rudo y sacrificado por largas horas, los momentos de descanso o de *ch’alla*;⁵ fuera de ella, como cuenta un antiguo dirigente minero ya fallecido,⁶ un espacio cen-

3 El pijicheo o mascado de la coca al interior de la mina y durante toda la jornada laboral se practicó desde tiempos coloniales y es una de las tradiciones más arraigadas del mundo minero. El momento de descanso al interior de la mina reúne a grupos de trabajadores en torno a esta práctica, que se constituye en otra forma de socialización tradicionalmente entendida como colectiva.

4 Los campamentos mineros son hileras de casas que se construyen unas frente a otras con un estrecho espacio al centro que sirve para la socialización entre los niños y el encuentro entre las mujeres.

5 Realizadas normalmente los martes y viernes. En ellas se masca coca, se fuma cigarrillos, se realizan libaciones en las que se pide al tío de la mina protección para el trabajo y vetas abundantes.

6 Las chicherías “consistían en galpones abiertos donde se apiñaban mesas labradas de madera inservible que bota la empresa y asientos largos para ocupación

tral de socialización fueron las chicherías, que existían en gran cantidad en todos los centros mineros y se convirtieron en un lugar frecuente de reunión y esparcimiento, donde también se hablaba de las angustias de su situación laboral y se organizaba la manera de mejorar sus condiciones. También la plaza central, que se construyó en casi todos los campamentos mineros, fue un lugar permanente de reunión o de intercambio de opiniones entre los obreros. Más adelante, será el local sindical un lugar privilegiado para encuentros cotidianos entre ellos.

Asimismo, la práctica del fútbol, ampliamente popular en este sector, aglutinaba a los trabajadores los fines de semana. También es destacable la actividad cultural, que involucraba a toda la familia minera. Al respecto, constituidos los sindicatos, estos se encargaban de organizar veladas literarias, actuaciones teatrales o musicales, exhibición de películas, presentación de zarzuelas y otros. Fundamental fue la creación de radios que pertenecían a los sindicatos desde la década del cuarenta del siglo pasado, cuya historia es realmente excepcional.⁷

Esos fueron algunos de los elementos que dieron lugar al nacimiento de una colectividad minera que desarrolló una cultura propia como expresión de su compleja identidad,⁸ ya que esta no sólo incorporó aspectos propios de su condición de proletarios y la adaptación de sus creencias culturales previas a ese nuevo mundo, sino también procesos de relativa mestización u “occidentalización”. Estos nuevos rasgos se expresaban en sus aspiraciones de movilidad social, de participar de una u otra manera de los procesos de modernización urbana, y por la adopción de cierta distancia frente a su origen indígena, entre otros.

Es muy importante señalar también que la cultura minera se irradió desde los trabajadores al conjunto de la familia minera, donde las mujeres fueron centrales en su participación. Asimismo, a los pueblos mineros cercanos a los campamentos o a las ciudades donde éstos se incrustaban, como es el caso de Oruro y Potosí. Y, nos animamos a decir, que también se irradió con fuerza a otros espacios urbanos, como

colectiva donde se vendía abundante alcohol servido en jarras de lata o cristalería barata y se mascaba coca” (Escóbar, 1986, p. 4).

7 Las radios mineras jugaron durante décadas un importante rol en las minas, no sólo porque transmitían la voz de los sindicatos, actuaban como organizadoras de la protesta social, la resistencia a las arremetidas militares contra los campamentos obreros y contribuían a su politización, sino porque expresaron nítidamente la cultura minera de la que hablamos en el texto.

8 Decimos compleja, pues si bien en el desarrollo de su identidad son muy importantes, la conciencia de clase y la conciencia andina, también vivieron procesos de mestización muy particulares, que incluso provocaron que rechacen de una u otra manera su condición de “indígenas”.

Cochabamba y La Paz, principalmente cuando el movimiento minero fue protagonista de primera línea de las luchas sociales y políticas a nivel nacional.

Finalmente, en los dos emblemáticos textos escritos por June Nash (1970, 1993) sobre la realidad interna en las minas bolivianas y las luchas sociales del movimiento minero en la década del setenta,⁹ ella llamó la atención sobre la articulación de las concepciones y prácticas culturales de los trabajadores, con algunas de las formas características de su accionar de clase, su combatividad y su constante carácter contestatario a través del sindicalismo revolucionario. Además, llama también la atención sobre el hecho de que esas bases culturales contribuyeron a que la identidad minera fuese lo suficientemente sólida como para mantenerse sin cambios importantes por varias décadas.

CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y DESARROLLO DEL SINDICALISMO MINERO

La conflictividad social en las minas comenzó a tener sus manifestaciones iniciales en las primeras décadas del siglo XX, cuando ya se había producido la concentración de la producción de estaño y otros minerales en manos de tres grandes empresarios, Simón I. Patiño, Avelino Aramayo y Mauricio Hochschild.¹⁰ Como señaló Gustavo Rodríguez Ostría (1991), los conflictos se desataron sobre todo contra el disciplinamiento laboral que incluyó la prohibición de realizar fiestas y ritos tradicionales, los altos precios de las pulperías y las largas jornadas de trabajo. Indicó también, tomando como ejemplo algunos conflictos desarrollados entre 1919 y 1920, que en un inicio las características de los mismos se asemejaban más a los levantamientos indígenas que a las pautas de comportamiento de la condición de proletarios.

Fue justamente la paulatina proletarización de la mayoría de los trabajadores trasladados a las minas, la que fue provocando cambios tanto en los motivos de la protesta como en las formas de lucha, a lo que contribuyó de manera importante la presencia de artesanos

9 June Nash realizó trabajo de campo principalmente con los mineros de San José en la ciudad de Oruro.

10 A diferencia de otros países latinoamericanos donde las minas fueron explotadas por empresas extranjeras, en Bolivia dos de los tres grandes consorcios mineros fueron conducidos por familias bolivianas (Patiño y Aramayo), mientras que el tercero en importancia, Mauricio Hochschild, de origen judío-alemán, creó solo su empresa cuando llegó a Bolivia en la década del veinte. Hubo algunas empresas extranjeras consideradas como "minería mediana", que no alcanzaron a tener la importancia de las bolivianas, salvo la "Empresa Minera Llallagua" de capitales chilenos (hasta 1924).

anarquistas en ellas, así como de trabajadores chilenos.¹¹ Para 1923, esto contribuyó a que se desate en las minas del norte de Potosí un primer conflicto que tuvo como demanda el derecho a la organización sindical y que derivó en lo que se conoce como la primera masacre minera (Uncía).

Para entonces, la corta fase en que el relacionamiento entre los patrones y los trabajadores había tenido algunas características paternalistas ya se había transformado en una en la que las prácticas empresariales se caracterizaron por una intensa explotación capitalista de su fuerza laboral. Esto no solo se reflejó en el trato despectivo y humillante sobre quienes nunca dejaron de considerar como “indios ignorantes”, en las obligaciones impuestas a través de la disciplina laboral que contempló además la idea de civilizar a los obreros, sino en actitudes intransigentes frente a las demandas, la utilización cada vez más frecuente de la fuerza represiva y el desconocimiento de las incipientes leyes laborales.¹²

Por otra parte, los obreros asimilaron muy rápidamente las diferencias de clase que se mostraban nítidamente en los campamentos mineros, ya que ellos estaban fuertemente estratificados. Si los técnicos de las empresas ganaban en dólares, gozaban de cómodos chalets dotados de todos los servicios necesarios, comodidades como calefacción, contaban con lujosos clubes sociales, canchas de tenis y de golf y sus viviendas estaban ubicadas en los espacios más favorecidos climáticamente, los campamentos obreros se apiñaban en hileras de casas de una o dos habitaciones donde reinaba el hacinamiento, no contaban con baños higiénicos particulares ni alcantarillado, y los niños jugaban en calles llenas de tierra e incluso inmundicias.

Además, la acaudalada burguesía minera, representada desde la década del treinta por sus administradores, ya que los principales dueños de minas habían emigrado del país, contaba con el respaldo incondicional de la mayoría de los funcionarios gubernamentales, desde los corregidores instalados en los municipios donde estaban implantadas las minas, hasta ministros y presidentes, aunque, por supuesto, había algunas excepciones.¹³

11 Empresarios chilenos constituyeron en las primeras décadas del siglo XX empresas mineras en Bolivia. La más importante de ellas fue la “Empresa Minera Llallagua”, que colindaba con “La Salvadora” de Patiño, hasta que éste la compró en 1924. Hay evidencias de que los obreros chilenos que trabajaban allí trajeron a Bolivia experiencias de organización sindical, así como ideas anarquistas y socialistas.

12 Las primeras leyes laborales fueron dictadas en Bolivia por el presidente Bautista Saavedra entre 1923 y 1924.

13 Algunos prefectos y corregidores escribían informes a los ministros y presidentes señalando las terribles condiciones de vida en las minas y demandaban que se corrija

Todo ello permitió que los mineros percibieran a los empleadores como a un “otro” que gozaba de privilegios gracias a su trabajo y hacía caso omiso a sus demandas, y al Estado, representado por los “gobiernos oligárquicos” de turno, como servil al poder económico de los empresarios. Así, la experiencia directa acumulada, o lo que Rudé (1981) llama la “ideología inherente”, ya se había afianzado en las autopercepciones y la formación de la identidad de los obreros, lo que quedó reflejado en distinto tipo de documentos.

Después de la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay (1932-1935), que tuvo un gran impacto en Bolivia,¹⁴ comenzó un periodo en que tanto los gobiernos del “socialismo militar” como los recientemente creados partidos de izquierda empezaron a relacionarse con los trabajadores de las minas mostrando sensibilidad por sus duras condiciones laborales. Paralelamente, se desarrolló en medios intelectuales y artísticos la preocupación por la “cuestión social”, lo que también alcanzó a la realidad rural.¹⁵

Los gobiernos del “socialismo militar” (1936-1939), que fueron en Bolivia la primera expresión de propuestas populistas y nacionalistas, desarrollaron algunas políticas sociales de relevancia. En 1936 se dictó la “ley de sindicalización obligatoria” que impulsó el desarrollo del sindicalismo minero de manera inmediata. Poco después, se aprobó un Código Laboral (constitucionalizado en 1939), que incorporó significativos aspectos acordes con las demandas obreras, como la jornada de ocho horas de trabajo, indemnizaciones por accidentes, derecho a la sindicalización, jubilaciones y otros. Esas medidas comenzaron a cambiar la percepción de los obreros sobre los gobiernos y el Estado, y si antes veían a estos como enemigos, ahora ocurría lo contrario. Aunque los socialistas militares fueron reemplazados por otro gobierno oligárquico, el legado del papel interventor del Estado jugado por estos permanecerá vivo.

Justamente fue en el nuevo gobierno pro-oligárquico cuando se produjo la “Masacre de Catavi”, el 21 de diciembre de 1942. Pero los tiempos eran otros y, esta vez, los jóvenes de la “generación del Chaco” se pusieron radicalmente del lado de los obreros, como ocurrió

esa situación. En ocasiones también abogaron por la construcción de escuelas y hospitales para trabajadores en las minas.

14 Es común considerar en Bolivia a la guerra del Chaco como un momento del despertar de la conciencia antioligárquica, de relacionamiento entre distintos sectores sociales en las trincheras, y del surgimiento y difusión de ideas nacionalistas y de izquierda.

15 Fue un periodo en el que la llamada “generación del Chaco” contó con numerosos intelectuales, literatos y artistas que expresaron esas preocupaciones y se solidarizaron con las luchas sociales en las minas, las ciudades y el campo.

con Víctor Paz Estenssoro.¹⁶ Los hechos sangrientos que provocaron numerosas muertes de trabajadores, mujeres y niños impactaron profundamente en el conjunto de la sociedad boliviana.

Para los trabajadores, la masacre marcó un hito fundamental en el paso de sus luchas de un carácter defensivo a uno más ofensivo, lo que quedó demostrado cuando se instaló un nuevo gobierno de corte nacionalista-populista entre 1943 y 1946. El joven oficial Gualberto Villarroel, que lo presidió apoyado por una organización secreta militar llamada Razón de Patria (RADEPA) y por el MNR, se mostró dispuesto a retomar los pasos del “socialismo militar”, los que en realidad profundizó ganándose la enemistad de la popularmente llamada “rosca minero feudal”, es decir, de los sectores dominantes. Entre sus principales políticas estuvo el impulso a la creación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), en junio de 1944, que aglutinó a todos los sindicatos mineros del país.

La oligarquía no se quedó quieta y conspiró hasta lograr que una turba enardecida proceda a asesinar, humillar y colgar al presidente Villarroel en julio de 1946. Los trabajadores mineros fueron el único sector popular que quiso defenderlo, pero el presidente ya había muerto.¹⁷ Pocos meses después se reunieron en un Congreso Extraordinario que marcó un hito decisivo pues los delegados aprobaron la emblemática “Tesis de Pulacayo”¹⁸. Y si el MNR había apoyado de manera importante la creación de la FSTMB y había comenzado a contar en sus filas con militantes mineros, fue el POR, de orientación

16 Víctor Paz Estenssoro, que había ganado un curul en el Parlamento y era el jefe del recientemente creado Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), enjuició al gobierno de Peñaranda por la masacre junto al Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR), que también contaba con parlamentarios y había nacido en 1940 como la expresión del comunismo pro-soviético. Los discursos de Paz se transmitieron por radio y eso le ganó enorme popularidad.

17 Muchos mineros dejaron sus centros de trabajo y se dirigieron a la ciudad de Oruro, desde donde pretendieron marchar a La Paz. Allí conocieron la noticia de la muerte del presidente y cuando retornaron entristecidos a sus campamentos manifestaron que continuarían la lucha hasta derrotar a la “oligarquía minero-feudal”. Los campesinos indígenas, que también fueron favorecidos por algunas políticas en el gobierno de Villarroel, como la convocatoria al Primer Congreso Indígena, aunque pronto lo convirtieron en un referente positivo, no se movilizaron en el momento de su caída.

18 La “tesis de Pulacayo” se convirtió en el documento más significativo de la clase obrera minera boliviana, que la volvió a aprobar una y otra vez y la introyó como propia, más allá de que el trotskismo nunca tuvo una representación hegemónica en el sindicalismo minero, aunque sí contó con líderes de primera talla. Esta tesis también fue la base para la aprobación del segundo documento más importante del sector: la “Tesis Socialista” aprobada en 1970.

trotskista, el que tuvo una influencia más eficaz al lograr que el documento escrito por su líder —Guillermo Lora— fuese aprobado por el conjunto de los trabajadores.

Lo más significativo de todo ello es que si la tesis reflejaba ya una clara conciencia de clase proletaria, estableciendo que los mineros eran la vanguardia que conduciría el derrocamiento de la oligarquía y señalando al socialismo como el proyecto a ser alcanzado, eso no era pura retórica. El gran logro del trotskismo fue justamente condensar las experiencias de lucha y las autorrepresentaciones previas de los mineros y darles a éstas un sustento teórico y programático.

Así, uno de los párrafos de la tesis, señala que: “El proletariado, aun en Bolivia, constituye la clase social por excelencia. Los trabajadores de las minas, el sector más avanzado y combativo del proletariado nacional, definen el sentido de la lucha de la FSTMB” (Tesis de Pulacayo, 1946, p. 23). Ese mismo año, un documento del sindicato de Siglo XX, expresa claramente la manera en que las bases percibían el papel de su matriz sindical, de sus dirigentes y de las bases sindicales:

La FSTMB ha podido convertirse en la vanguardia revolucionaria del proletariado boliviano gracias a que sus dirigentes, en vez de frenar al movimiento de masas, [...] ocupan los primeros puestos de combate, hecho que dignifica a los líderes mineros. [...] Son los cuadros de base los que determinan la conducta de la FSTMB y de sus dirigentes. (Archivo Personal de Sinfonso Cabrera [APSC], Siglo XX, noviembre de 1946)

Dos años más tarde, cuando ya la confrontación con los gobiernos oligárquicos se había intensificado exponencialmente, un volante repartido en la marcha del primero de mayo señala: “La FSTMB levanta el puño de los oprimidos para mostrar a la rosca opresora que el proletariado boliviano ha comprendido cuál es su misión histórica, política y social” (Archivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia [SIDIS], 1 de mayo de 1948). Y, en otro, se dice: “Unidad para vencer. Compañeros mineros, unidos debemos estar para triunfar. Buscamos vencer a la rosca y al Estado que está a su servicio. Para eso hace falta una indestructible unidad de la clase explotada” (*La Patria*, 15 de mayo de 1948).

Como lo señalaba la tesis de Pulacayo, para entonces los mineros ya tenían amplia conciencia de producir la riqueza más importante de Bolivia, la única que generaba un importante flujo de divisas —entre el 60 y 90%—, la que servía para sostener las finanzas internas y enriquecía a sus poseedores, lo que contribuyó decisivamente a la autovaloración de su trabajo, como expresan en el siguiente documento:

Sean ustedes, si es que no están suficientemente convencidos todavía, que el minero es quien extrae de las entrañas de los cerros, a fuerza de paciencia y sufrimiento, el mineral que ha sostenido y sostiene a la Patria. El minero obtiene con sus rudas y callosas manos la tierra preciosa que beneficiada por sus hermanos que sufren y laboran como él, se convierten en el sustento de todos, hasta de los que los calumnian y los odian [...]. Quien combate al minero, combate a Bolivia. (APSC, Cerro Rico de Potosí, 1 de noviembre de 1946)

Otro sindicato manifestaba con otras palabras lo mismo:

Nosotros, que constituimos la verdadera plataforma económica, política y social de la nacionalidad; cubiertos de andrajos y miserias que constituyen los andrajos de la Patria misma [...] creemos que ha llegado el momento de ser o no ser, porque somos parte de la nacionalidad, porque constituimos una fuerza viva, consciente y organizada, porque somos el sostén mismo de esta Bolivia que la deseamos grande, digna y respetada por propios y extraños. (APSC, Sindicato de Siglo XX, Catavi y Llallagua, 27 de julio de 1946)

El llamado “sexenio” (1946-1952), o para otros autores definido como el “periodo prerrevolucionario”, significó la consolidación del vanguardismo y la combatividad del ya constituido movimiento minero. Esos años, varias de las consignas de la tesis del 46 fueron llevadas a la práctica, como la ocupación de minas cuando los patrones practicaban el boicot como arma para frenar las huelgas laborales, el armamento obrero frente al constante uso del ejército contra sus movilizaciones, la exigencia del salario mínimo vital con escala móvil, la acción directa de masas, que adquirió connotaciones insurreccionalistas,¹⁹ y otras.

Aunque los partidos de izquierda y el MNR contaron con militantes en el seno de la clase obrera minera, no cabe duda que la planificación y desarrollo de sus luchas fue dirigida por la FSTMB y los sindicatos locales. La consigna de “independencia sindical” nunca dejó de enarbolarse.

LA EXPERIENCIA DE LA REVOLUCIÓN NACIONAL Y EL DETERIORO DE LA ALIANZA ENTRE EL MOVIMIENTO MINERO Y EL MNR

La revolución boliviana del 9 de abril de 1952 estalló primero como un golpe preparado por el MNR, pero pronto se convirtió en una in-

19 En mayo de 1949 hubo un levantamiento insurreccional en la mina de Siglo XX del empresario Patiño, considerado el más radical de todos, en el que dos rehenes norteamericanos tomados por los mineros fueron asesinados. El ejército ingresó al campamento y se produjo una de las más sangrientas masacres contra el sector.

surrección popular de vastas proporciones.²⁰ En los tres días de enfrentamientos armados entre el pueblo y el ejército que defendía al régimen oligárquico, ocurridos principalmente en la sede de gobierno, diversos sectores sociales combatieron denodadamente y demostraron hasta qué punto habían acumulado experiencia en sus luchas pasadas, en su capacidad de organización y en su desprendimiento y heroísmo. Fue sin duda una lucha épica que quedaría marcada en la memoria histórica de sus protagonistas. El 12 de abril de 1952, en el periódico *El Diario*, se describió a la insurrección como una "brava lucha sin precedentes en la historia revolucionaria de Bolivia".

Los trabajadores de las minas tuvieron un papel central en el derrocamiento del gobierno, el desbande del ejército y el triunfo revolucionario. Fue ese su papel el que marcaría un momento fundador en la convicción de poseer poder político y social, e incluso militar. Poder político, porque sin su concurso no habría sido posible el triunfo de la revolución; poder social, porque ellos habían vanguardizado a los sectores populares; y militar, pues tras el desbande del ejército organizaron rápidamente milicias armadas que reemplazaron al aparato represivo del Estado anterior y se constituyeron en guardianes de la consolidación del proceso abierto con la insurrección popular.²¹

Juan Lechín Oquendo,²² en su calidad de secretario ejecutivo de la FSTMB, fue un claro protagonista de la lucha revolucionaria como conductor del proletariado minero que arribó a la ciudad de La Paz en un momento decisivo y para reforzar la lucha de carabineros, fa-

20 El MNR, principal partido opositor a la oligarquía preparó un golpe de Estado con algunos militares afines, pero éste mostró fuertes debilidades a las pocas horas de haberse proclamado. La salida del pueblo a las calles a combatir al ejército fue lo que permitió el triunfo popular, en el que, de todos modos, importantes líderes movimientistas buscaron conducir a los insurrectos.

21 La intervención de los trabajadores del subsuelo arribados a La Paz desde la mina de Milluni, fue calificada por la prensa como decisiva en el desbande del ejército. Efectivamente, la derrota final de las fuerzas militares leales al gobierno y conducidas por el jefe del Estado Mayor, Humberto Torrez Ortíz, se produjo en El Alto cuando las milicias mineras combatieron contra él. Y, en Oruro, los mineros de varias minas adyacentes a esa ciudad habían impedido paralelamente el paso de refuerzos militares que se enviaban a La Paz (*El Diario*, 11 de abril de 1952).

22 Juan Lechín Oquendo fue elegido secretario general de la FSTMB en su primer congreso y como secretario ejecutivo en 1945. Desde entonces dirigió a esa organización sindical hasta la década de los ochenta. Como secretario ejecutivo de la COB permaneció hasta 1987. Pese a pertenecer al MNR, no dejó de practicar las tradiciones mineras de defensa de la independencia sindical, al menos o, sobre todo, desde que se produjo el alejamiento de los mineros del régimen movimientista. Para los obreros, fue visto como un factor fundamental de la unidad obrera, por lo que lo eligieron una y otra vez, aun cuando no se libró de fuertes críticas y cuestionamientos a lo largo de su carrera dirigencial.

briles y otros sectores populares. Su figura, que ya había crecido en el sexenio, se consolidó como el principal y más reconocido líder obrero. Esto se selló al ser unánimemente elegido como secretario ejecutivo de la COB, que fue creada el 17 de abril de ese mismo año.

Por las características de la revolución, que había contado con la participación tanto de actores sociales como políticos, se planteó el problema de la estructuración del nuevo poder.

La “disponibilidad del poder” abierta por la revolución, se disputó entonces entre el MNR, ya instalado en el Palacio de Gobierno, y el movimiento obrero, que a través de la COB aglutinó a todos los demás sectores populares como nunca había ocurrido antes, ya que se adscribieron a ella prácticamente todas las organizaciones sindicales existentes, sectores de las clases medias y campesinos. En la nueva central sindical se determinó desde un principio la supremacía de la clase obrera, tanto a nivel de la representación proporcional, como en la conducción política e ideológica de los demás grupos.

Para varios estudiosos de la Revolución de 1952, el tira y afloja permanente entre la COB y el MNR sobre el curso que debía tomar la revolución y las medidas concretas que debían ser aplicadas, significó la emergencia de un “poder dual” entre el conductor político y el actor sindical, fuertemente marcado por las posiciones mineras. Para el MNR, estaba claro que la clase obrera era lo suficientemente fuerte como para no ser tomada en cuenta, por lo que tuvo que aceptar la implantación del co-gobierno MNR-COB en el primer gobierno dirigido por Víctor Paz Estenssoro, así como el control obrero con derecho a veto en las minas nacionalizadas.²³

En cuanto a las milicias obreras, las primeras de estas se organizaron espontáneamente mientras se desarrollaban las jornadas de abril de 1952, momento en que muchos trabajadores lograron apoderarse de armamento, el que se sumó al que tenían acumulado desde el sexenio. En los siguientes meses, aumentó el caudal de armas en sus manos por los envíos realizados a los centros mineros a través de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Sobre esa base, la COB y la FSTMB organizaron cuerpos de milicianos compuestos por unos 50 a 200 hombres, los que dependían de la Secretaría de Milicias del sindicato local, la FSTMB y la COB.

23 Para lograr que la nacionalización de las minas sea efectuada a los pocos meses del triunfo de la insurrección, y frente ciertas vacilaciones del MNR ante ello, movilizaron a sus milicias a la sede de gobierno y no se movieron de allí hasta que Paz fijó una fecha. La nacionalización de los tres grandes propietarios de minas se dictó el 31 de octubre de 1952, constituyéndose en una de las medidas más emblemáticas del nuevo gobierno.

La insurrección popular de 1952 quedó arraigada en el movimiento minero con base en la idea de que repitiendo lo que el pueblo había hecho en esa oportunidad era posible que los obreros derrumbaran una y otra vez al poder si lo consideraban un adversario. Por ello, cuando a consecuencia de políticas entendidas como “antipopulares”, dictadas en el segundo gobierno del MNR conducido por Hernán Siles Zuazo,²⁴ se fue produciendo el deterioro de la alianza, la conflictividad entre el movimiento obrero y el partido de gobierno se agravó.

La reconstrucción del ejército iniciada en 1953 y el hecho de que los campesinos estaban al lado del MNR inclinó la correlación de fuerzas a favor del MNR. Pero la radicalización del movimiento minero contó con la adhesión de las fuerzas de izquierda, como del POR y del PCB, que aumentaron su presencia entre las bases y las dirigencias sindicales. Mientras el movimientismo se iba inclinando cada vez más hacia posiciones que hacían retroceder las conquistas de los primeros años de la revolución, la COB, la FSTMB y los sindicatos de base se afianzaban en las posiciones de izquierda. Esto significó que se los acuse de comunistas, concepto que los funcionarios norteamericanos vinculados con Bolivia se encargaron de usar para convencer al gobierno en el camino de la represión (Field, 2016).²⁵

Así, para uno de los principales estudiosos del papel del proletariado minero en esos años, quien lo definió como “una clase más eficaz, penetrante y organizada que cualquiera otra”,

[...] la historia de los obreros del MNR será la historia de su creciente diferenciación con el propio movimiento democrático en general; la lucha por conservar su identidad dentro del lugar de su alianza con las otras clases será a la vez lo que configure la constitución de su independencia de la clase. (Zavaleta Mercado, [1972] 1987, p. 526)

Y respecto a cómo los propios trabajadores se identificaban a sí mismos unos años después de producida la Revolución del 52, el siguiente

24 Frente a una galopante inflación, la puesta en marcha de las políticas derivadas de la “estabilización monetaria”, que atacó varios derechos de los trabajadores, derivaron en el deterioro de la alianza MNR-COB, primero, y en la radical confrontación de los sindicatos mineros aglutinados en la FSTMB con el gobierno de Siles Zuazo, después. Asimismo, marcó la profunda división del partido de gobierno en fracciones contrapuestas, lo que también alcanzó al movimiento campesino y a distintas regiones del país.

25 El importante y reciente trabajo de Thomas Field se ocupa de las relaciones entre Estados Unidos y el último gobierno del MNR. Utiliza abundantes fuentes del Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) y otras, para demostrar la gran injerencia norteamericana en Bolivia durante todo este período

te documento refleja lo señalado en muchos otros, así como lo que los trabajadores de base manifestaban en sus asambleas, ampliados y congresos de la época:

El proletariado minero es la vanguardia de la revolución no sólo porque ocupa un puesto clave en el proceso de la producción nacional sino, y esto es trascendental, porque su evolución política ha alcanzado un alto nivel. [...] los trabajadores, como la carne misma de este país, somos la clase nacional más profundamente nacional, patriótica y revolucionaria. (SIDIS, Congreso de Colquiri, 11 de julio de 1958)

En el tercer gobierno de la Revolución Nacional,²⁶ otra vez dirigido por Víctor Paz Estenssoro, las posiciones del movimiento minero se radicalizaron por la aplicación del “Plan Triangular” en las minas nacionalizadas,²⁷ el que fue financiado por Alemania Federal, Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este se constituyó en el primer modelo del tipo de “apoyo” condicionado brindado por el FMI en América Latina. Continuando la orientación de la estabilización monetaria, exigió la supresión del control obrero, la racionalización de la mano de obra minera, la extirpación de la injerencia de los obreros en las políticas nacionales, la anulación del fuero sindical y la persecución a los dirigentes, siempre calificados de “comunistas”.

Los trabajadores se opusieron tenazmente a la aplicación de dicho plan desde 1961 con la declaración de numerosas huelgas, manifestaciones y todo tipo de movilizaciones, siendo constantemente reprimidos. Reunidos en un nuevo congreso nacional señalaron:

El gobierno anti-obrero tiende a resolver todos los conflictos sociales mediante la despótica intervención de las Fuerzas Armadas. [...] Los mineros sólo podemos tener una respuesta concreta: armarnos y disciplinarnos a nuestro turno para rechazar la violencia. Emplazados a luchar contra un régimen antisindical y entreguista, empujados a tener que medir nuestras fuerzas con el ejército, no tenemos más remedio que colocar en primer

26 En las elecciones nacionales de 1960 el principal líder movimientista Víctor Paz Estenssoro volvió a ser elegido por amplia mayoría. Juan Lechín acompañó la fórmula como vicepresidente, tras la idea equivocada de que la clase obrera y el MNR de izquierda podrían definir desde dentro del gobierno la reconducción de la revolución. Cuando se dieron cuenta de que Paz Estenssoro tenía su propia agenda, Lechín comandó una nueva división del partido opositora al *pazestenssorismo*.

27 El Plan Triangular, destinado a sacar a la minería nacionalizada (COMIBOL) de su crisis, se enmarcó en la Alianza para el Progreso en un contexto de fluidas e importantes relaciones entre Kennedy y Paz Estenssoro. La ayuda económica y militar de Estados Unidos a Bolivia llegó a ser la segunda más importante en América Latina.

plano la acción directa de masas. Todas las otras formas de lucha deben subordinársele. (SIDIS, Tesis Política, Congreso de Colquiri, 1963)

Nada de ello quedó en palabras y el movimiento minero contribuyó en gran medida a la caída del MNR del poder en noviembre de 1964, pero, como un efecto “perverso” de ello, fue un militar quien finalmente se hizo cargo del gobierno. Con Barrientos Ortuño se iniciaba en Bolivia la serie de golpes militares que se sucedieron hasta 1982.²⁸

ASAMBLEA POPULAR, RELACIÓN DEL MOVIMIENTO MINERO CON LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA Y BASES DE SUSTENTACIÓN DEL “SINDICALISMO REVOLUCIONARIO”

El general Barrientos Ortuño²⁹ aprovechó hábilmente la acción popular destinada a hacer caer al gobierno de Paz Estenssoro, logrando tomar el poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas cuando ya el gobierno movimientista se había derrumbado. Aunque en un principio prometió “retomar las banderas del 52”, pronto inició una escalada represiva apoyándose en la Doctrina de Seguridad Nacional, en el respaldo incondicional del gobierno norteamericano, del campesinado oficialista y de algunos grupos de clases medias. Como la clase obrera criticó desde un principio sus políticas, que buscaban terminar por fin con las conquistas del 52 ya avasalladas por el propio MNR en pasados años, los mineros se convirtieron en el principal flanco de la represión militar y sufrieron dos masacres en el curso de 1965 (mayo y septiembre) y, una tercera, en 1967 (junio).³⁰

Durante su gobierno, estalló en Bolivia la guerrilla comandada por Ernesto Che Guevara, que concluyó con su aniquilación y la

28 Para noviembre de 1964, el deterioro del MNR era tal que todos los sectores sociales (menos los campesinos), así como los partidos de izquierda y de derecha, se unieron para derrocarlo.

29 Barrientos Ortuño, ligado desde bastante tiempo atrás con los norteamericanos, apoyó la candidatura de Paz Estenssoro en 1964 y se hizo elegir como su vicepresidente. Pero cuando entendió que la tercera reelección del líder movimientista, a todas luces anticonstitucional, había provocado la reacción generalizada en Bolivia, apoyó secretamente la conspiración y terminó saliendo ganador al tomar el poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas bolivianas.

30 Uno de los objetivos de Barrientos en la represión a los mineros fue arrebatarles sus armas. El ejército entró a las minas con ese objetivo y pese a la heroica resistencia de los trabajadores varios de ellos fueron asesinados, entre ellos, emblemáticos dirigentes del sector. Otros fueron apresados, residenciados o expulsados del país. El 24 de junio, la “Masacre de San Juan”, que se cobró la vida de decenas de trabajadores, mujeres y niños, se produjo aduciendo el pretexto de que los mineros se habían solidarizado con la guerrilla del Che Guevara, lo que fue cierto, aunque también estaban luchando contra las políticas antiobreras de Barrientos.

muerte del comandante argentino-cubano. Pero la derrota militar de ésta no implicó que dejase de tener un gran impacto en Bolivia. Entre otros aspectos, provocó la división del ejército en dos corrientes, la radicalización de las clases medias, el fortalecimiento de las expresiones de la izquierda y, como algo muy significativo, la consolidación de la clase obrera como vanguardia de los sectores subalternos debido a su combatividad y su tenaz oposición al gobierno militar.

En 1970, cuando ya Barrientos había muerto en un cuestionable accidente aéreo y se encontraba en el poder otro militar, Alfredo Ovando Candía, el contexto nacional se estaba transformando profundamente. Y, cuando militares de derecha quisieron deshacerse de Ovando por el desarrollo de ciertas políticas que causaban malestar en la facción de derecha,³¹ la clase obrera comandada por la COB definió la pulseada entre los militares al determinar una huelga general e indefinida de contenido político y gran alcance.

El 8 de octubre de 1970 la presión popular en las calles posibilitó que se hiciera cargo del poder el general Juan José Torres, quien se adecuaba mucho más a las posiciones mayoritariamente radicalizadas que se expresaban en Bolivia desde hacía meses. Aunque Torres tomó medidas de carácter nacional popular, como nacionalizaciones de empresas mineras extranjeras, expulsión de los Cuerpos de Paz, reposición de salarios a los trabajadores mineros, acercamiento al movimiento campesino independiente, apertura de relaciones diplomáticas con la URSS y otras, el nuevo presidente no quiso definirse como socialista. Más bien, planteó una alianza entre obreros, campesinos, Fuerzas Armadas e intelectuales bajo una orientación nacionalista de tinte progresista.

Pero el movimiento obrero y popular quería ir más lejos. Apelando a la “Tesis Socialista” aprobada por la COB en los primeros meses de 1970,³² el Comando Político de la central sindical decidió la creación de la “Asamblea Popular”. Así, en enero de 1971, la FSTMB definió en un documento que ese órgano popular no podía ser “una variante del

31 En el gobierno de Ovando se tomó una medida que causó gran malestar en el gobierno norteamericano: la nacionalización de la empresa estatal de petróleo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), controlada en ese momento por la Gulf Oil Co. Pero Ovando tuvo posiciones altamente contradictorias en varias acciones, y reprimió con extrema dureza la guerrilla de Teoponte que pretendió ser la continuidad de la Ñancahuazú y fue derrotada a pocos meses de su instalación. Todo ello significó la pérdida de su inicial popularidad.

32 La “Tesis Socialista” fue aprobada en el primer semestre de 1970 primero por la FSTMB, luego por la COB y seguidamente por los congresos sectoriales de la prensa, los universitarios y otras organizaciones sindicales y de las clases medias. Su base ideológica fue la Tesis de Pulacayo, a la que nos referimos más arriba. Propugnó la toma del poder por parte de la clase obrera y la alianza con todos los demás sectores que apoyaban la instalación del socialismo en Bolivia.

parlamento burgués, tanto en su contenido como en sus funciones”, y que debía tener, entre otras, las siguientes características:

1. Constituirse como órgano del Comando Político de los trabajadores y del Pueblo, surgido por decisión popular en las jornadas del 7 de octubre de 1970; 2. Tomar en sus manos la solución de los problemas nacionales populares y obreros. La A.P. como órgano de poder tiene entre otras atribuciones la de iniciativa y fiscalización de los actos del Ejecutivo; 3. La A.P. es un órgano de poder de masas, especialmente de los trabajadores. (*Presencia*, 22 de enero de 1971, p. 1)

La organización para su instalación fue asumida por el Comando Político de la COB presidido por Juan Lechín Oquendo y que contaba con representantes de todos los partidos de izquierda, mientras que en la población fue generalizándose la percepción de que la Asamblea Popular iba a convertirse en el instrumento para la instauración del socialismo en Bolivia. En sus estatutos,³³ presentados el 21 de abril de 1971, se planteó:

La A.P. se constituye como dirección y Centro Unificador del movimiento antimperialista y su fin fundamental consiste en lograr la liberación nacional de la opresión imperialista y la instauración del socialismo. [...] La A.P. reconoce como su dirección política al proletariado y declara que su programa es la tesis del IV Congreso. Todas las resoluciones de la A.P. tienen carácter ejecutivo. (*Presencia*, 21 de abril de 1971, p. 1)

Finalmente, en el documento “Bases de Constitución de la Asamblea Popular” se dice: “Si logra [la A.P.] ser un poder real es a través de que expresa la fuerza de las masas y el hecho de que dichas masas constituyan la dualidad de poder” (*Presencia*, 20 de junio de 1971, p. 1).

Así, el 1 de mayo de ese año, tras una “apoteósica” manifestación en conmemoración del Día del Trabajador, la Asamblea Popular se instaló en el Palacio Legislativo en un ambiente festivo y en medio de carteles de líderes políticos mundiales como Mao Tse-Tung, Che Guevara, Lenin y Marx, vivas a la clase obrera, a la revolución socialista y puños en alto. En una de las primeras sesiones se planteó la discusión sobre el papel a jugar por los partidos políticos.³⁴ Fie-

33 En esos mismos estatutos se definió que los delegados de la clase obrera iban a representar indefectiblemente el 60% del total de la AP, y que se organizarían, con esa misma proporcionalidad, asambleas populares departamentales. La conformación de la APO quedó así: 221 delegados proletarios, 24 campesinos, 53 de organizaciones de clase media y 13 de los partidos revolucionarios.

34 Fueron aceptados como partidos de izquierda con representación en la AP el PCB, el PCML, el POR, Grupo Espartaco, los recientemente creados Movimiento de

les a sus tradiciones se determinó aceptar su participación siempre y cuando se subordinasen a las decisiones de la clase obrera. Sin embargo, éstos no dejaron de influir de manera importante en las decisiones que se tomaron.

Llegados a este punto, será importante plantear las bases de sustentación del denominado por los propios trabajadores como “sindicalismo revolucionario”, ya que fue justamente en el momento de constitución de la Asamblea Popular cuando estas se consolidaron.

El sindicalismo expresa a la colectividad minera: El sindicato era concebido como una institución que no permitía ni daba lugar a las exclusiones, para lo cual siempre se ejerció un fuerte control social. Desde que se creó la FSTMB, en 1944, y sobre todo desde la experiencia fundamental vivida en la Revolución Boliviana de 1952, prevaleció ese sentido universalista de la afiliación sindical. Además, esta y los sindicatos locales no se limitaron a conducir las luchas sindicales, sino que cumplieron roles más amplios y complejos como organizar la vida dentro del campamento, distribuir trabajos, impulsar las prácticas culturales y deportivas, organizar las tareas educativas y otras.

El principio de “democracia sindical”: Este concepto aludió a distintos elementos. En primer lugar, privilegiar la amplia participación de las bases en la toma de decisiones, que se tradujo en la práctica generalizada —mayormente posible en periodos de menor represión— del asambleísmo. También implicó el derecho a esa participación por parte de todas las corrientes ideológico-políticas presentes en el seno del movimiento minero. Finalmente, la subordinación de los dirigentes a las bases.

La búsqueda del consenso: A pesar de ser conscientes de la necesidad de aceptar el pluralismo (político y sindical) en el seno de sus organizaciones sindicales, los trabajadores mineros practicaron permanentemente la búsqueda del consenso en la toma de decisiones, tanto en el nivel local como nacional. Para ello utilizaron ampliamente mecanismos de consulta, deliberación y participación democráticas, generalmente de carácter directo (asambleas), aunque también representativo (ampliados, congresos).

La independencia de clase: Se refirió básicamente a la necesidad de preservar la autonomía de sus organizaciones frente a los partidos políticos, a los gobiernos y al aparato estatal. Esto no quiere decir que se practicara el “apoliticismo” ni que los partidos políticos no tuviesen gran influencia en la vida sindical. Se trató, ante todo, de no convertir ninguna expresión político-partidaria en la conductora exclusiva del

Izquierda Revolucionaria (MIR) y Partido Socialista (PS) de Marcelo Quiroga Santa Cruz, y algunos más pequeños.

movimiento sindical y que la lógica sindical autónoma prevalezca sobre la lógica político-partidaria.

La inclusión de las mujeres en la lucha sindical: Las mujeres de las minas, tanto como trabajadoras (aunque no eran muchas), ejerciendo una serie de oficios en los campamentos mineros, o como esposas y familiares de los trabajadores, se involucraron desde muy temprano en las luchas del proletariado minero. Sin embargo, solo desde la década del sesenta lo hicieron de manera orgánica, a través de los llamados “Comités de Amas de Casa”, que fueron reconocidos por los sindicatos locales y la FSTMB, aunque sólo en los ochenta en sus estatutos. Mediante esas organizaciones, las mujeres mineras contribuyeron eficazmente en la lucha de los trabajadores.

El traslado de los principios sindicales del movimiento minero a la COB: Desde su creación en 1952, la COB asumió los principios sustentados por el movimiento minero, a pesar de que sus otros componentes (en realidad, la COB era policlasista) portaban lógicas propias de comportamiento y diferentes visiones sobre su lugar en la sociedad, los cambios que se buscaban, etcétera, que muchas veces generaron contradicciones internas. De todos modos, los mineros lograron irradiar e imponer a los otros sectores sus orientaciones globales, con la notoria excepción de los campesinos, con quienes la relación siempre fue más difícil, principalmente hasta finales de la década del setenta.

La conciencia de ser “vanguardia” de los sectores populares y oprimidos: En la medida en que las características de sus luchas se tiñeron de heroísmo, valentía, combatividad y capacidad de presión, el movimiento minero fue reconocido por la sociedad en su conjunto y sus adversarios de clase como capaz de liderar a otros grupos. Aunque, en realidad, muchas veces eso no ocurrió puesto que en ocasiones debieron enfrentar situaciones de aislamiento y soledad, además no lograron “comandar” efectivamente al movimiento campesino-indígena; la autoconciencia de ser “vanguardia” se plasmó predominantemente en la posibilidad que los mineros tuvieron de imponer su hegemonía al interior de la COB y, en algunos momentos, de lograr aglutinar tras de sí a vastos sectores de la clase media, a otros sectores obreros e incluso a algunas organizaciones campesinas. Esta imagen se proyectó también fuera de nuestras fronteras nacionales.

La conciencia de ser portadores de un proyecto de transformación: El movimiento minero luchó permanentemente por demandas que tenían como objetivos principales, mayor justicia social, libertades “democráticas” (sobre todo, derecho a la organización sindical), oportunidades de mejora económica, social y cultural, control del aparato productivo minero (no necesariamente de manera total), participación en la toma de decisiones del Estado, participación en el desarro-

llo nacional y otros. Esas reivindicaciones siempre fueron politizadas, ya que detrás de ellas se asimiló un concepto englobante que dio un sentido más amplio y complejo a sus luchas y que pudo irradiarse a otros sectores de la sociedad: el concepto de “revolución”. Este se articuló, principalmente, a partir de la década del sesenta, con el proyecto socialista sustentado por distintas corrientes de izquierda que ganaron una gran influencia en el sector. Fieles en este sentido a los principios marxistas, los mineros consideraron que a ellos les correspondía la conducción de la revolución.

La voluntad de poder: Las luchas reivindicativas del proletariado minero estuvieron casi siempre teñidas de un desafío abierto al poder y acompañadas de una manifiesta voluntad de poder. Sin embargo, no se trató exactamente de la voluntad de poder de clase que se expone en los manuales marxistas, pues el poder que se buscó, que se creyó sustentar, que se peleó palmo a palmo, fue concebido como un poder que no implicaba necesariamente el control del gobierno o del “aparato estatal” (ni mucho menos el establecimiento de la “dictadura del proletariado”), sino que se circunscribía o se ejercía en la sociedad y contra el Estado. Fue, entonces, un imaginario de poder más cercano al anarquismo o a formas de “autodeterminación”, que al poder proletario que la visión de la izquierda marxista pretendió siempre inculcarles.

En resumen, el “sindicalismo revolucionario” sintetizó la acumulación de las experiencias históricas (memoria), las concepciones globales sobre sí mismos (colectividad minera total) y el proyecto social de clase (bajo orientaciones ideológicas y políticas “inherentes” y “derivadas”), y permitió que el movimiento minero afianzase su identidad y conciencia de clase positivas. El golpe de Estado del 21 de agosto de 1971 comandado por Hugo Banzer fue dado fundamentalmente para acabar con la experiencia de la Asamblea Popular. Apoyado por la dictadura militar de Brasil, Estados Unidos, los partidos de derecha (MNR *pazestensoristas* y FSB) y los sectores empresariales, implantó una dictadura sangrienta y siete años de conculcación de derechos sociales, políticos y violación sostenida de los derechos humanos. La resistencia minera no cesó en ningún momento bajo los principios del sindicalismo revolucionario, pero los costos también fueron altos.

PALABRAS FINALES: CRISIS DEL MOVIMIENTO MINERO EN EL CONTEXTO DE EMERGENCIA DEL NEOLIBERALISMO Y SUS EFECTOS SOBRE LA IZQUIERDA

Después de la caída de la dictadura banzerista en 1978, Bolivia vivió tres procesos electorales y tres golpes de Estado, para finalmente conquistar la democracia que goza hasta nuestros días el 10 de octubre

de 1982. La renuncia de Banzer al poder fue producto de un profundo desgaste en el que contribuyó la resistencia permanente a su gobierno por diversos sectores sociales, aunque en el momento decisivo fue la masiva huelga de hambre de carácter nacional —iniciada en diciembre de 1977 por cuatro mujeres mineras—³⁵, la que lo obligó a decretar una amnistía general e irrestricta y convocar a elecciones nacionales.

En los procesos electorales de 1978, 1979 y 1980, el triunfo fue obtenido por un frente político denominado Unidad Democrática y Popular (UDP) de centro-izquierda y compuesto por el MNRI, el MIR y el PCB. La fórmula ganadora fue establecida con Hernán Siles Zuazo (MNRI), como Presidente, y Jaime Paz Zamora (MIR), como vicepresidente. El ejército se negó a aceptar esos triunfos. En 1978, el candidato oficialista, general Juan Pereda, quien organizó un escandaloso fraude que sin embargo no pudo ocultar el triunfo udepista, dio un golpe de Estado. No pudo sostenerse mucho tiempo en el poder, pero cuando otras elecciones fueron ganadas por la UDP en 1979, se produjo un golpe sangriento comandado por Natusch Busch que apenas pudo mantenerse 15 días en el poder por la resistencia popular. Finalmente, luego de la tercera elección y del tercer triunfo de la izquierda en 1980, se produjo el golpe de García Mesa, el más duradero y sangriento de los tres.³⁶

Cuando al fin la UDP logró instalarse en el palacio de gobierno en octubre de 1982, otra vez por la acción popular en las calles, se encontró con un país en ruinas. En pocos meses la inflación alcanzaba cifras insospechadas y, para 1984, ya era del 2 mil por ciento. Pero no sólo fue la realidad heredada de las dictaduras militares lo que hundió a la UDP, sino las malas políticas asumidas, la falta de coherencia entre los partidos que conformaban el frente con sus peleas internas permanentes, las presiones externas por el retraso del pago de la deuda boliviana, y el hecho inesperado de que la COB y el movimiento obrero y popular se pusieron en su contra.

35 A los pocos días de instalada ésta en la ciudad de La Paz, miles de bolivianos abrieron otros piquetes de huelga que masificaron el movimiento pacífico. Los mineros decretaron una huelga general indefinida, seguida por similar decisión de la COB. El gobierno intervino con fuerzas represivas todos los piquetes tres semanas después, pero el movimiento logró triunfar arrinconando al régimen desde varios flancos, lo que ocurrió el 18 de enero de 1978.

36 García Meza, apoyado por militares argentinos, ejerció una brutal represión ante la resistencia popular e ingresó con el ejército a varios centros mineros que resistían cuando en las ciudades ya se había doblegado al movimiento popular movilizado contra el golpe. Su gobierno fue calificado como “narco-dictadura” por la represión sin parangón y sus estrechos vínculos con el narcotráfico. Fue el gobierno boliviano más nefasto del siglo XX.

La crisis social se desencadenó casi inevitablemente, ya que los problemas de escasez de alimentos, atrasos en pagos de salarios, caída cotidiana de la capacidad adquisitiva de los mismos, crisis de las empresas estatales por falta de capital, y otras situaciones de desastre nacional, no fueron resueltos. La COB y la FSTMB se estrellaron contra el gobierno con huelgas y movilizaciones cotidianas que llegaron a tener al país prácticamente paralizado para 1985. La situación obligó a Siles Zuazo a adelantar su mandato por un año y llamar a nuevas elecciones para 1985.

En cuanto a los mineros, la crisis en las minas de COMIBOL llegó a su punto más alto, tras años de ser arrastrada sin soluciones adecuadas. En marzo de 1985, 10 mil mineros se trasladaron a la sede de gobierno. Pedían el abastecimiento de sus pulperías, el pago de salarios a tiempo, el freno a la inflación y otras medidas, pero pronto derivaron en el pedido de renuncia inmediata del presidente. Mostraron su fuerza por última vez en manifestaciones donde hacían tronar sus dinamitas y desfilaban orgullosos. La solidaridad conseguida de los pobladores paceños asustó al gobierno que sacó al ejército para dispersarlos. Vencidos salieron gritando “los mineros volveremos” subidos en sus camiones. En realidad, se estaba viviendo el principio del fin de su fuerza de clase.³⁷

A mediados de 1985, realizadas las elecciones nacionales, los partidos de derecha consiguieron la mayor votación. Los principales entre ellos eran el MNR (“histórico”), de Paz Estenssoro, y la Acción Democrática Nacionalista (ADN), creada muy poco antes por Banzer que hábilmente quiso aparecer ahora como demócrata. Mientras, los partidos de la UDP recibieron el “voto castigo” de la población por la mala administración udepista. Aliados en el Parlamento, los partidos de derecha apoyaron la subida al poder de Paz Estenssoro, en su cuarta presidencia, pese a haber salido segundo en la votación. Más importante que eso fue que ambos partidos, que firmaron un “Pacto por la Democracia”, coincidieron plenamente en aplicar un modelo de corte neoliberal, que entró en vigencia muy poco después a través de un histórico decreto supremo³⁸ y que fue justificado como necesario para superar la profunda crisis económica.

37 La solidaridad con ellos no impidió que otra parte de la población se mostrase cansada de los conflictos sociales, así como temor por la posibilidad de que se desatara hechos violentos. En todo caso, la imagen de los mineros vencidos, luego de que en esos días incluso se llegara a hablar de que iban a tomar el poder, marcó un cambio importante en las percepciones sobre ellos de que eran invencibles.

38 El D.S. 21060 que implementó la “Nueva Política Económica” pasó a la historia como un momento de ruptura con el “modelo del 52” y una transformación profunda de diferentes elementos de las tradiciones estatistas que incluso las dictaduras mili-

Queda solamente decir aquí que su implementación significó el cierre de la mayoría de las minas nacionalizadas, el cierre de fábricas, de las emblemáticas empresas estatales que pertenecían a la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) —creada en 1942 y fortalecida desde 1952—, la apertura a capitales extranjeros para explotación de minas y de hidrocarburos y gas, la implementación de la flexibilización laboral, la aparición de un amplio sector informal, la ampliación de la pobreza y el achicamiento del Estado.

En agosto de 1985, cuando ya se había determinado el despido de miles de trabajadores de las minas bajo el eufemismo de “relocalización” se organizó la “Marcha por la Vida”. Miles de mineros y sus familias se lanzaron a la carretera que los conduciría a la sede de gobierno. Esta vez no llevaban dinamitas y claramente actuaban defensivamente. La Paz se preparó para recibirlos y miles de campesinos se solidarizaron con ellos. Al fin de cuentas, se trataba de los mineros, pero a medio camino fueron interceptados por el ejército. Las bases quisieron enfrentarse a él; los dirigentes pactaron su retiro. La derrota fue no sólo militar sino simbólica. La crisis del movimiento minero tocó fondo.

A partir de ese momento, miles de obreros abandonaron las minas teniendo que aceptar la política de “relocalización” o despido forzoso impuesta por la Nueva Política Económica, y la FSTMB pasó de tener algo más de 27 mil afiliados a apenas unos pocos miles.³⁹

La FSTMB, pasó de ser el referente de los sectores obreros populares a una organización marginal que batalló durante los siguientes años en solitario para evitar los últimos cierres de minas, los nuevos despidos de trabajadores y la conculcación de derechos sociales y laborales de los pocos trabajadores que aún se mantenían en producción, como fue el caso de la emblemática mina de Huanuni. Así, Jorge Lazarte (1986) identificó la crisis minera como resultado de la pérdida de centralidad económica, pues la minería había dejado de ser el rubro más importante para la economía nacional, así como de centralidad política, pues los mineros habían dejado de ser el eje o la vanguardia de las luchas sociales.

Por su parte, la COB impulsó medidas de resistencia contra políticas que desde el Ejecutivo y el Parlamento se fueron implementando bajo las nuevas orientaciones ideológicas compartidas por los

tares no habían podido eliminar. La COB determinó contra el “paquete neoliberal” huelga nacional, pero esta fracasó y sus dirigentes fueron apresados.

39 En 1987 el número total de relocalizados alcanzó a 21.156 trabajadores y al final del proceso llegó a 23.124; es decir, a aproximadamente un 70% de la fuerza laboral existente hasta 1985.

partidos que se sucedieron en el poder durante dos décadas, como la nueva Ley de Pensiones, la Ley de Capitalización, la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Reforma Educativa y otras, pero sus acciones tuvieron muy poco éxito pese a que las huelgas y movilizaciones convocadas no dejaron de ser en ocasiones masivas y contundentes.

Esa central sindical sintió el impacto de la desestructuración de su columna vertebral, el movimiento minero sindicalizado, sufrió constantes divisiones, perdió credibilidad y se resistió a transformar sus estructuras internas pese a la constante exigencia para que esto se produzca por parte del movimiento campesino. Al mismo tiempo, mantuvo un discurso incapaz de reflejar las nuevas realidades sociales y, por lo tanto, de expresar expectativas y articular demandas de actores emergentes —como el movimiento cocalero— que aún la veían como la organización llamada a defender sus intereses particulares.

Así, los principios y las bases de sustentación fundamentales del “sindicalismo revolucionario” comenzaron a desmoronarse. Entre los síntomas más significativos de ese desmoronamiento estuvieron: 1) la pérdida de irradiación al conjunto de la sociedad boliviana del proyecto de poder obrero; 2) el desgaste de los métodos obreros, principalmente la huelga; 3) el debilitamiento de la democracia sindical y de la independencia de clase, lo que se debió a la creciente influencia de las lógicas partidarias sectorias en su seno; 4) la pérdida de la “centralidad económica” del sector minero por la debacle de COMIBOL; 5) la percepción cada vez más generalizada de que el “obrerismo” de la COB le habría impedido contar con aliados horizontales; 6) la cada vez mayor distancia entre el discurso “maximalista” de la realidad; y 7) la creciente despolitización de las dirigencias y las bases sindicales “tradicionales”.

Sin embargo, un fenómeno subyacente estaba contribuyendo al fortalecimiento de otros actores sociales: la diáspora minera. Al respecto, es importante señalar que en el accionar, la identidad y las autorepresentaciones del movimiento minero en particular y de la COB, en general, la memoria colectiva había jugado un rol de cohesión social muy importante en el pasado y volvería a ser importante. Así, muchos de aquellos que iniciaron la “diáspora minera” en esos años del neoliberalismo, en los que los viejos sueños revolucionarios también parecían disolverse, se trasladaron a diferentes lugares del país. Y aunque no siempre se lo reconoce, la memoria organizativa y combativa de los mineros fue recreada y proyectada en esos otros espacios, ayudando a fortalecer movimientos sociales emergentes, como el

de los campesinos cocaleros del Trópico cochabambino, o el del joven movimiento vecinal y sindical de la ciudad de El Alto de La Paz.⁴⁰

Justamente, fue en gran medida la memoria histórica lo que les permitió a los “vencidos” mineros de inicios de la década del ochenta, que salían expulsados de las minas y se dirigían a otros espacios del país, y después de un primer momento de desbande y desorganización, trasladar colectivamente a estos nuevos espacios sus acumulaciones y experiencias históricas, sus formas organizativas, sus características contestatarias, y adaptarlas a las nuevas circunstancias y las nuevas realidades históricas.

Baste citar al respecto, que el principal líder cocalero, Evo Morales, tuvo desde prácticamente los inicios de su actividad sindical la influencia directa de un viejo y hábil ex-dirigente minero, Filemón Escóbar, y que varios de los primeros dirigentes del sector provenían de las minas. O que, en la ciudad de El Alto, las Juntas Vecinales levantadas en los barrios construidos por “relocalizados” fueron ejemplo a seguir e inspiración para estas organizaciones barriales. Paralelamente, y más allá de las profundas transformaciones ocurridas, los que permanecieron como mineros, como es el caso de Huanuni, sustentaron también sus luchas en la memoria colectiva.

Para el inicio del nuevo siglo, el movimiento campesino indígena ganaba protagonismo. En 2005, el primer presidente indígena de Bolivia llegó al poder.

BIBLIOGRAFÍA

- Cajías, Magdalena (2007). *El Poder de la Memoria*. La Paz: Plural.
- Escóbar, Filemón (1986). La mina vista desde el guardatojo. *Cuadernos de Investigación CIPCA* (La Paz), (25).
- Lazarte, Jorge (1986). *Los mineros de ayer y de hoy. Crisis de identidad y centralidad minera* (La Paz). Informe Especial, CEDOIN.
- Lechín Oquendo, Juan (2000). *Memorias*. La Paz: Litexsa Boliviana SRL.
- Nash, June (1970). *I spent my life in the mines. The history of Juan Rojas, Bolivian Tin Miner*. Nueva York: Columbia University Press.
- Nash, June (1993). *We eat the mines and the mines eat us: Dependency and exploitation in Bolivian tin mines*. Nueva York: Columbia University Press.

40 Al respecto ver Cajías (2007).

- Platt, Tristan (1983). *Conciencia Andina y Conciencia Proletaria*.
HISLA Revista Latinoamericana de Historia Económica y Social,
II(2).
- Rodríguez Ostría, Gustavo (1991). *El Socavón y el Sindicato. Ensayos
históricos sobre los trabajadores mineros, Siglos XIX y XX*. La Paz:
ILDIS.
- Rudé, George (1981). *Revuelta popular y conciencia de clase*.
Barcelona: Crítica.
- Strengers, Jeroen (1991). *La Asamblea Popular*. La Paz: SIDIS,
Ediciones Gráficas.
- Zavaleta Mercado, René (1978). El proletariado minero en Bolivia.
Revista Mexicana de sociología (Instituto de Investigaciones
Sociales, UNAM), 40(2).
- Zavaleta Mercado, René (1987 [1972]). *El Poder Dual*. La Paz: Los
Amigos del Libro.

SOBRE LAS AUTORAS Y LOS AUTORES

VIVIANA BRAVO VARGAS

Coordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO “Izquierdas: praxis y transformación social”. Doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con estudios postdoctorales en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la misma casa de estudios (2013-2015). Actualmente es profesora-investigadora en la Carrera de Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en Santiago de Chile y forma parte de CLASE, Centro de Estudios Históricos de la Izquierda y la Clase Trabajadora. En su campo de investigación, desarrolla el proyecto FONDECYT Iniciación N°11180315 “Clase trabajadora y protesta urbana en el marco del agotamiento y crisis del desarrollismo. Santiago y Valparaíso 1947-1964”. Ha concentrado su trabajo en los estudios de la protesta popular urbana, la clase trabajadora y el Partido Comunista de Chile. Entre sus últimas publicaciones se encuentra el libro *Piedras, barricadas y cacerolas: Las Jornadas Nacionales de Protesta (Chile 1983-1987)* y los artículos “[Clase trabajadora, izquierda y protesta urbana en la crisis del desarrollismo \(Chile 1960-1962\)](#)”; “[Las vidas de Ramona Parra: Militancia, conflicto político y memoria en Chile \(1946—2018\)](#)”; “Etnografía histórica de la protesta

urbana. Santiago de Chile, 1983-1986”; y “Chile no va hoy a la fábrica: Protesta obrera y represión política en el verano de 1946”.

MARIANA MASTRÁNGELO

Coordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO “Izquierdas: praxis y transformación social”. Es profesora y licenciada en historia (Universidad Nacional de Córdoba, 2002/2005), doctora en historia (Universidad de Buenos Aires, 2010) y ha realizado un posdoctorado en la Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil, 2011). Es profesora asociada regular por la Universidad Nacional de Chilecito (Undec) y profesora de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha participado en calidad de ponente y/o coordinadora de distintos congresos nacionales e internacionales. Ha publicado libros entre los que destacan *Rojos en la Córdoba obrera, 1930-1940* (Buenos Aires, Imago Mundi, 2011); *Desde las profundidades de la Historia Oral. Argentina, Brasil, Uruguay* (coedición con Robson Laverdi, Buenos Aires, Imago Mundi, RELAHO, 2012); y *Anatomía de un Imperio* (coedición con Valeria Carbone, Valencia, PUV, 2019). Ha publicado artículos con referato, nacionales e internacionales (Brasil, Canadá, México y Argentina). Es investigadora de CLACSO, del Programa de Historia Oral de la UBA, del Instituto de Estudios de América Latina (INDEAL) de la UBA, y de Ciencia y Técnica de la UBA. Participa de proyectos de Ubacyt, de extensión (UBANEX) y de la Undec, donde dirige proyectos de investigación. Fue becaria de la UBA. Sus líneas de investigación son: Historia Social, Movimiento Obrero, Memoria y Cultura.

ALEJANDRA PISANI

Licenciada en sociología por la Universidad de Buenos Aires y docente en esa universidad. Es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina y participa del Grupo de Trabajo de CLACSO “Izquierdas: praxis y transformación social”. Ha publicado varios artículos sobre cultura obrera e izquierda argentina.

ANA JEMIO

Socióloga y doctora en ciencias sociales por la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires). Becaria posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Es investigadora en el Centro de Estudios sobre Genocidio (Universidad Nacional de Tres de Febrero, UNTREF) y el Observatorio de Crímenes de Estado (OCE). Es docente de grado en la Carrera de Sociología (FSOC-UBA) y de posgrado en la Maestría en Diversidad Cultural (UNTREF). Ha publicado el libro *Tras las huellas del terror. El*

Operativo Independencia y el comienzo del genocidio (Prometeo, 2021). Es editora de la Revista de Estudios sobre Genocidio.

CARIDAD MASSÓN SENA

Profesora de historia (1978) y licenciada en filosofía (1981) del Instituto Superior Pedagógico Enrique J. Varona. Actualmente trabaja en el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, donde se desempeña como investigadora titular y doctora en ciencias históricas desde 2003. Sus principales temas de investigación son: la historia del movimiento obrero y comunista cubano y latinoamericano, del pensamiento socialista cubano, del municipio de Caimito, de las políticas culturales cubanas y de las relaciones entre el Estado y las Iglesias Evangélicas en la Isla. Ha impartido cursos de posgrado como profesora adjunta en el ISP Varona e ISP Villena, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Universidad de Brasilia. Ha tutorado numerosas tesis de grado y participado en decenas de jornadas científicas en Cuba y en el extranjero. Entre sus publicaciones destacan los libros *El Curita* (2000); *Tras las huellas cubanas de Gabriela Mistral* (2005); *Rubén: desde el recuerdo y la esperanza* (2006); y *La Revolución Cubana en la vida de pastores y creyentes evangélicos* (2006). Además, ha coordinado los libros: *Comunismo, socialismo y nacionalismo en Cuba (1920-1958)* (2013); *Las izquierdas Latinoamericanas. Multiplicidad y Experiencias durante el Siglo XX* (2017); y *Cultura: Debate y Reflexión* (La Habana, ICIC Juan Marinello, 2017).

EMERSON CESAR DE CAMPOS

Professor Titular do Departamento e Programa de Pós Graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC e do Mestrado Profissional em Ensino de História. Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (1995), Graduação em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC (1997), Mestrado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (1999) e Doutorado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (2003). Atua junto aos temas: História do Tempo Presente; Culturas Políticas, Cidades; Migrações; Estados Unidos; História em Quadrinhos; História e Humor; História e Literatura.

GEOVANNI ROCHA JUNIOR

Professor com graduação em História. Seu mestrado foi concluído no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina (Brasil), onde atualmente desenvolve sua tese dou-

toral sobre a participação da esquerda cristã no processo de redemocratização brasileiro.

GERARDO NECOECHEA GRACIA

Doctor en historia social. Investigador titular de la Dirección de Estudios Históricos, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Profesor titular del Posgrado en Historia desde 1984, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cuenta con varias publicaciones sobre historia de Estados Unidos, de México y de historia oral: entre ellas *Santa Bárbara rebelde: insurgencia obrera en un pueblo minero, 1970-1981* (próxima publicación); *Clase, comunidad y parentesco: Mexicanos en Chicago, 1916-1950* (2015); *Después de vivir un siglo: ensayos de historia oral* (2005); y coordinador, junto con José Pantoja, de *La rebeldía en palabras y hechos: historias desde la orilla izquierda latinoamericana en el siglo XX* (CLACSO-ENAH, 2021). Ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Historia Oral (1995-1996), vicepresidente de la *International Oral History Association* (2002-2006) y director de *Words and Silences / Palabras y Silencios*, revista bilingüe de la Asociación Internacional de Historia Oral (2002-2011). Ha sido Miembro del Grupo de Trabajo de CLACSO desde 2010.

KIMBERLY SEGUEL VILLAGRÁN

Licenciada en historia por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y estudiante de Magíster en Historia en la Universidad de Santiago de Chile. Integrante del Grupo de Trabajo de CLACSO “Izquierdas: praxis y transformación social” (2019-2022). Ha investigado la historia del Movimiento Feminista en Chile y la popularización de su militancia durante la segunda mitad del siglo XX. Así también, ha trabajado desde el activismo por la denuncia de la Violencia Político Sexual y en defensa de los derechos humanos de las mujeres desde su participación en el Colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes.

MAGDALENA CAJÍAS DE LA VEGA

Doctora en ciencias sociales del Colegio de Michoacán (COLMICH) de México (2011), maestra en historia andina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Quito-Ecuador (1987). Licenciada en historia por la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz-Bolivia (1984). Es catedrática emérita, con una antigüedad de la Carrera de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés. Investigadora titular del Instituto de Estudios Bolivianos (IEB) de la Facultad de Humanidades (1994-2013). Es miembro de número de la Academia Boliviana, de la “Coordinadora de Historia: investigadores asociados” e integrante del Grupo de Trabajo de

CLACSO “Izquierdas: praxis y transformación social”. Fue ministra de Educación y Culturas, y Cónsul General de Bolivia en Chile; además, fue consultora durante varios años del Convenio Andrés Bello y la Organización de Estados Iberoamericanos. Ha escrito numerosos artículos sobre la historia del movimiento minero boliviano, los movimientos sociales de las últimas décadas en Bolivia, la revolución de 1952, las dictaduras militares de la década del setenta y la historia de la ciudad de La Paz, entre otras temáticas. Asimismo, ha escrito libros y artículos sobre la problemática educativa.

PABLO POZZI

PhD en historia (SUNY at Stony Brook, 1989) y profesor titular regular plenario de la Cátedra de Historia de los Estados Unidos de América, en el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires, Argentina). Asimismo, ha dictado el Seminario Anual de Tesis sobre la Historia del Movimiento Obrero Argentino. Su especialidad es la historia social contemporánea y, particularmente, la historia de la clase obrera post-1945, tanto en Estados Unidos como en la Argentina. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre historia y la sociedad norteamericana y argentina. Entre sus obras se destacan *La oposición obrera a la dictadura (1976-1982)* (Editorial Contrapunto, 1988); *Los setentistas. Izquierda y clase obrera, 1969-1976* (Eudeba, 2000); y *Por las sendas argentinas. El PRT-ERP, la guerrilla marxista* (Eudeba, 2001).

REINALDO LINDOLFO LOHN

Doutor em História e professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina (Brasil). Desde seu estágio pós-doutoral, em 2018, na Universidade Nova de Lisboa, investiga as conexões internacionais da transição política brasileira ao final da última ditadura militar.

VICTOR EMMANUEL FARIAS GOMES

Graduado em história pela Universidade Regional do Cariri, onde também atuou como professor. Possui mestrado pela Universidade Federal do Ceará e atualmente desenvolve sua tese doutoral no Programa de Pós-graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina (Brasil), na qual investiga a trajetória política do intelectual trotskista Edmundo Moniz.

COLECCIÓN GRUPOS DE TRABAJO

El presente libro es el resultado del trabajo colectivo del Grupo de Trabajo de CLACSO “Izquierdas: Praxis y Transformación Social”, coordinado por Viviana Bravo Vargas y Mariana Mastrángelo.

Dos temas son los protagonistas de este trabajo: la clase trabajadora, por un lado, y por el otro, su vínculo con la izquierda. El contexto es América Latina en los siglos XX y XXI. La temática refiere a los distintos momentos que hemos atravesado como grupo de trabajo (desde sus inicios en el año 2013) y que han tenido como eje central la discusión en torno a “qué es ser de izquierda en Latinoamérica”, qué relaciones se establecen entre ésta y la clase obrera, los movimientos sociales y políticos.

De la Introducción

Patrocinado por



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais